

Bilingual edition

MEXICO

ANTICORRUPTION

DESIGN

Ricardo Zamora Mesinas

DISEÑO

ANTICORRUPCIÓN

PARA MÉXICO

Prólogo/Prologue
Natalia Téllez
Torres Orozco
Epílogo/Epilogue
Vania Pérez
Morales

No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información, ni transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado -electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.-, sin el permiso previo de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

Primera edición: Noviembre de 2025

Registro de obra ISBN: 978-607-69957-4-7

Diseño de portada e interiores: Esmeralda Sánchez Álvarez

Revisora de estilo: Yuridiana Rodríguez Ramírez

Publicaciones COPEIN, todos los derechos reservados

Impreso en México /Printed in México

Imágenes: @ Editorial COPEIN

Nota: Las opiniones que se incluyen en los trabajos, son responsabilidad del autor (es) del mismo, por lo que no se representan necesariamente la forma de pensar de la casa editorial o de las universidades de adscripción a que pertenecen los autores (as).

ÍNDICE

PRÓLOGO	7
INTRODUCCIÓN	10
¿QUÉ ES LA CORRUPCIÓN?.....	15
EL COSTO DE LA CORRUPCIÓN.....	18
ALGUNAS CAUSAS DE LA CORRUPCIÓN	23
CORRUPCIÓN Y ELECCIONES.....	32
CORRUPCIÓN Y MONOPOLIOS.....	42
PRÁCTICAS DE CLASE MUNDIAL	54
CORRUPCIÓN Y LA LEY	61
CORRUPCIÓN Y EL FUTURO DE MÉXICO.....	68
UN DISEÑO ANTI CORRUPCIÓN PARA MÉXICO.....	74
ALGUNAS CONCLUSIONES	83

INDEX

PROLOGUE.....	105
INTRODUCTION	108
WHAT IS CORRUPTION?	112
THE COST OF CORRUPTION	116
SOME CAUSES OF CORRUPTION	121
CORRUPTION AND ELECTIONS	130
CORRUPTION & MONOPOLIES.....	140
WORLD CLASS PRACTICES	152
CORRUPTION AND THE LAW	160
CORRUPTION AND MEXICO'S FUTURE	167
AN ANTICORRUPTION DESIGN FOR MEXICO	173
SOME CONCLUSIONS.....	182



Fig. 1 México que se levanta. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).

PRÓLOGO

Tenemos que reconocerlo, la corrupción no se terminó...

Decir que la corrupción se terminó, o no mencionarla, no hace que desaparezca. La corrupción no obedece a declaraciones: es un sistema que se adapta, se disfraza, aprende a usar los huecos de la ley, la falta de profesionalización en la administración y las zonas grises de la política. Por eso, la corrupción no se terminó. Y precisamente por no haber terminado, hoy se puede empezar, por fin a desmantelarse en serio.

No se trata de negar avances ni de sembrar desánimo. Nos toca asumir que el problema es más profundo que un titular o una buena intención. La gente que hace fila en un hospital, la empresaria que compite por un contrato, la joven que presenta un examen de ingreso, el policía honesto que reporta un soborno... todos distinguen entre propaganda y resultados. A ellos les debemos verdades, no consuelos.

Las verdades incómodas tienen que mencionarse a la luz del texto que nos convoca:

1. La impunidad continúa. Mientras los procedimientos sancionadores y penales tardan años, los incentivos para corromper siguen intactos. Según el Atlas of Impunity 2024, México enfrenta un panorama sombrío en materia de impunidad desde hace más de una década, con puntuaciones altas que reflejan severas brechas en justicia, gobernabilidad y derechos humanos. La percepción de la ciudadanía y los datos de organismos independientes refuerzan esta realidad: la impunidad sigue erosionando el Estado de derecho; esto es responsabilidad de todos los niveles de gobierno y los tres poderes.
2. La contratación pública sigue teniendo sombras. Donde hay urgencia, suele haber excepción; donde hay excepción, suele haber riesgo. Si los datos no son completos, oportunos y comparables, el escrutinio es una ilusión. Una visión de gobierno abierto no puede ser solo discurso, en verdad tenemos que rendir cuentas, tener transparencia y colaboración constante entre ciudadanía e instituciones para buscar soluciones juntas para mejoras de la vida pública.
3. La obra pública es especialmente vulnerable. Anticipos, “precios extraordinarios”, convenios modificatorios, supervisiones complacientes y auditorías tardías: un viejo guión que se repite con nombres nuevos. Según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2024 se documentó que la mayoría de las dependencias en el ámbito federal y estatal incumple la Ley de Obras Públicas al tener obras sin proyecto ejecutivo, lo que ha provocado sobrecostos significativos, en ocasiones superiores al 284% de lo presupuestado.
4. Las personas alertadoras están desprotegidas. Sin canales seguros, garantías de confidencialidad y reparación frente a represalias; el mensaje parece ser “es mejor no denunciar”. No hay que olvidar que los grandes casos de corrupción (Panama Papers, Odebrecht) que generaron cambios políticos y jurídicos en el mundo,



proviene de alertadores. México no cuenta con una ley nacional independiente y adecuada para proteger a denunciantes y alertadores (whistleblowers), dependiendo aún de disposiciones dispersas y protocolos internos del gobierno federal, que en muchas ocasiones no protege fuera del ámbito gubernamental. Las normativas existentes, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), contemplan mecanismos limitados para que funcionarios reporten irregularidades, pero no garantizan una protección efectiva ni seguro contra represalias.

5. La inteligencia patrimonial sigue siendo frágil. Las declaraciones de patrimonio de las personas servidoras públicas, los registros de intereses, los beneficiarios finales, así como la información sobre compras, obras, padrones y sentencias aún no son datos abiertos ni interoperables. Mientras los cargos públicos se conciben como botín y las instituciones como patrimonios personales, se pierde la posibilidad de que sirvan a la finalidad para la que fueron creadas. Allí donde el Estado no cruza información ni genera alertas tempranas que permitan sancionar y establecer controles, la corrupción encuentra un refugio perfecto.

El costo de no actuar

La corrupción no solo ha debilitado la capacidad del Estado mexicano: nos ha robado tiempo de vida, confianza y futuro. Es el insumo más competitivo porque siempre gana: cierra clínicas, encarece medicinas, expulsa talento, deforma mercados, rompe la promesa de movilidad social y convierte la ley en una subasta para quien pueda pagar más. Cuando la ciudadanía asegura que, junto con la inseguridad, la corrupción sigue estando entre los dos principales problemas del país, la vida pública se pierde y la democracia se va diluyendo.

La corrupción no se terminó. Pero puede empezar a terminarse hoy si decidimos mover los engranes correctos, como aquellos que menciona Ricardo Zamora en este texto. No pedimos milagros, solo reglas que no dependan de la buena voluntad, instituciones que funcionen, que sobrevivan a los sexenios, y resultados que se puedan verificar por cualquier persona.

Porque a final de cuentas, el mensaje más poderoso contra la corrupción es uno solo: cuentas claras, sanciones ciertas y puertas abiertas a la ciudadanía. Hablar de corrupción en el mundo es hablar de una herida abierta que atraviesa lo político, lo social y lo económico. Durante décadas se ha pensado que este mal es inevitable, que forma parte de la historia y de la cultura de muchos países. Sin embargo, la obra que el lector tiene en sus manos desmonta esa narrativa y plantea con claridad que la corrupción no es un destino inevitable, sino un problema estructural que puede resolverse con conocimiento, voluntad y diseño institucional.

Ricardo Zamora Mesinas aborda el fenómeno con un rigor poco común: explica en términos sencillos qué es la corrupción, cuánto cuesta, cuáles son sus causas, y sobre todo, qué mecanismos probados pueden aplicarse en contextos nacionales. Lo hace sin recurrir a ejemplos coyunturales ni a señalamientos personales, lo cual le da al texto un tono objetivo y universal. Este enfoque permite que cada capítulo sea una herramienta de análisis, y al mismo tiempo, una invitación a la acción ciudadana.



El valor de este aporte radica en que no se queda en la denuncia. Su propuesta es eminentemente práctica: ofrece un diseño anticorrupción realista para México, adaptado a nuestras circunstancias políticas, sociales y culturales, pero nutrido de experiencias internacionales y de estudios científicos sobre la naturaleza humana. El autor nos recuerda que la corrupción puede combatirse y que otros países, en condiciones incluso más adversas, lo han conseguido.

Que este libro sea, entonces, un punto de partida. Un recordatorio de que la corrupción no nos define, y de que México puede aspirar a un futuro más justo, más transparente y digno para todas, para todos.

Natalia Téllez Torres Orozco y Vania Pérez Morales
Ciudad de México, Verano del 2025.



Fig. 2 Luz sobre México Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).

INTRODUCCIÓN

Prácticamente todos los mexicanos están, estamos, hartos de la corrupción. Es tema de conversación frecuente en los círculos sociales, profesionales y familiares. A veces, inclusive, sin siquiera mencionar la palabra “corrupción”, la gente se queja o critica tantas cosas que no funcionan, que salen mal, en la vida diaria en el país.

Sin embargo, muy poca gente sabe qué es la corrupción, qué estragos causa la corrupción, y cómo se resuelve la corrupción. Frecuentemente se asocian las muchas cosas que salen mal en la vida diaria a la mala suerte, a la providencia, a la gente mala en general. Pocas personas visualizan la liga que hay entre la corrupción, y numerosas adversidades que les ocurren en la vida diaria.

Cuando una sociedad, como la mexicana, está tan afectada por la corrupción, es preocupante que este tema no se resuelva de forma radical, cuanto antes. Con la corrupción, en términos laxos, “nada sale como debe”. Es decir, con la corrupción, las cosas no salen como deberían lógicamente. Y si las cosas no salen como deberían lógicamente, muy probablemente la causa raíz es la corrupción.

Problemas de todo tipo pueden trazarse en su origen a la corrupción en México. Sin citar todos, se podrían citar problemas de muy distintas naturalezas que encuentran su fuente en la corrupción: laborales, ambientales, fiscales, de seguridad, de salud, de la educación, de los combustibles, de injusticia, de pobreza extrema, de tráfico, de falta de electricidad, de falta de agua potable, de la migración hacia el norte, de los combustibles caros, ¡de... tantas cosas más!

¿Cómo puede resolverse la corrupción? Lo primero que hay que saber es que la corrupción en México sí puede resolverse. Otros países que estaban en peores condiciones de corrupción lo han logrado, con la debida voluntad popular y política.

El presente escrito pretende arrojar una primera luz sobre este grave problema social que aflige a gran parte del mundo, pero que es particularmente preocupante para México, nuestro país. Cada individuo en México puede tener su propia perspectiva sobre porqué ocurre la corrupción. Y cada uno tiene su propia opinión sobre si la corrupción en México es poca, o mucha, según le afecte, o le beneficie desafortunadamente, en lo personal.

Para comenzar a resolver este grave problema, tenemos que comprender qué causa la corrupción, y cómo se ha atacado exitosamente en otros países, a la vez sin olvidar que lo que funciona en otras partes, no necesariamente funcionará en México. Esto exige que las herramientas contra la corrupción se adapten realísticamente al contexto presente mexicano y a nuestra cultura. Frecuentemente se escuchan ideas erróneas sobre este problema y su solución, esto de hecho beneficia frecuentemente y en gran medida a unos muy pocos que no quieren que la corrupción pare, porque de ella se benefician grandemente. Circulan muchas ideas erróneas que muchas veces emanan precisamente de aquéllos que se benefician de la corrupción y que por ende argumentan que no se puede

evitar, que es “cultural” derivada de nuestra particular historia, que “somos diferentes”, etcétera. Por supuesto que la educación para todos es un importante componente en la lucha contra la corrupción. Pero no es suficiente. Otros principios de aplicabilidad general son indispensables y complementan la educación, si se quiere realmente abatir la corrupción en nuestra sociedad.

En este mundo material, y con la conducta económica humana que es común a toda nuestra especie, se han descubierto científicamente reglas generales estímulo-respuesta que aplican tanto en México como en el resto del mundo. Y estos modelos causa-efecto, bien conocidos desde hace tiempo en los países con muy poca o nula corrupción, y por ende con mucho mayor bienestar para la mayoría de sus ciudadanos, han resultado muy positivos al ser aplicados. La corrupción se ha logrado prácticamente extinguir en muy distintos países del orbe, sin distinción de “culturas e historias” particulares.

Cuantas más personas hagan conciencia de la corrupción, sus causas, su gravedad, y sus soluciones factibles en la realidad mexicana actual, se esperaría que más fuerte sea el clamor, la exigencia popular, de que el Estado haga su trabajo para realmente abatir, si no es que llegue hasta a extinguir, esta terrible enfermedad social en México, antes de que sea demasiado tarde. Sería de esperarse que sea el pueblo, y no el gobierno, el que presione con respeto y de forma legal y legítima, a que éste último realmente actúe para eliminar todas las causas posibles generadoras de la corrupción. Este escrito se enfocará en aquéllas que tienen el mayor efecto con el menor esfuerzo de cambio, y que son factibles de aplicar en nuestro país actualmente, sin requerir cambios tan drásticos que se vuelvan imposibles de implantar en un corto plazo de uno a dos años para comenzar a ver los buenos resultados cuanto antes. Un acercamiento práctico, más que teórico al problema.

Este breve estudio no pretende constituirse en un estudio exhaustivo de cada evento o situación de corrupción documentado en la literatura. Pero sí tiene como fin ofrecer al/la lector(a) una visión clara y sencilla del problema y qué puede hacerse. Una gran parte de las ideas y planteamientos, así como de los hechos empíricos descritos aquí son ideas e información provista por otros muchos estudiosos de la corrupción en el mundo. El que escribe se ha enfocado simplemente en hilar diversas ideas y conceptos ya probados para enmarcarlos en el contexto mexicano con una perspectiva práctica: cómo podrían implantarse en nuestro país.

Entre más mexicanos levanten la voz para exigir la erradicación de la corrupción citando los mecanismos correctos para lograrlo, más probable será que este mal disminuya sustantivamente, o desaparezca en nuestra sociedad, con el consiguiente efecto positivo en la justicia, el bienestar, la economía y la calidad de vida de toda la población. Ojalá que el lector pueda y quiera comunicar lo más ampliamente y frecuentemente posible a todo mundo a su alrededor sobre qué es la corrupción, cómo se combate, y que proponga incorporar a más ciudadanos a un movimiento ciudadano cívico para generar la presión pública, popular, legal y legítima, para que el Estado mexicano escuche, y actúe conforme a la voluntad ciudadana, pronto.

El texto evita en todo momento ejemplificar con nombres específicos los hechos y estragos de la corrupción. No se trata de generalizar, ni de confrontarse con nadie, pues en todo ámbito hay generalmente muchos buenos y muy pocos malos. Pero los muy pocos malos causan un gran daño a los muchísimos buenos.

Tampoco se trata de exacerbar el enfrentamiento entre grupos sociales, políticos o económicos de la sociedad mexicana. Al contrario. Se trata de que, con respeto, y con una base científica, el ciudadano promedio en México pueda impulsar desde su trinchera y apoyado en soluciones simples que se sabe funcionarán, para que la parte corrupta del Estado Mexicano, y del sector privado, y todo posible individuo corrupto en México, se porten mucho menos que, o nada, corruptamente a partir de ahora, sobre todo como resultado de que las reglas de la vida pública mexicana contengan un incentivo equitativo, legal y democrático para comportarse menos corruptamente de aquí en adelante.

Realmente, cualquier sistema político y casi podría decirse que cualquier sistema económico, sin corrupción, con apego completo a las normas establecidas por el pueblo sin distorsiones generadas porque el interés económico de algunos pocos promueva la desobediencia de las normas generales, puede funcionar muy bien. El enfoque debería ser erradicar la corrupción, más que generar pugnas sobre qué bando político o qué grupo económico domina en México en determinado momento. La corrupción no respeta colores políticos ni económicos, y la ausencia de corrupción hace infinito bien a cualquier línea política o económica, sin duda.

Se espera que este texto resulte ligero en su lectura, informativo, y que genere muchas bocas abiertas con un “Ah!”, de exclamación positiva al descubrir el lector conocimientos interesantes y prácticos sobre la corrupción. Más importante aún, es que el lector contribuya a combatir la corrupción diseminando estas ideas, publicitándolas, repitiéndolas, exigiendo en su esfera de vida y de influencia que ciertas reglas básicas cambien en la vida pública del país, incluyendo en ello importantemente reglas que rigen la relación entre el sector público y el privado. E igualmente, que varias de esas reglas básicas cambien de forma definitiva la perspectiva sobre cómo debe conducirse el sector público mexicano en su totalidad.

Lo que hay que recordar siempre es que, si bien una muy grande proporción de ciudadanos mexicanos, tanto del sector público como del sector privado, son honestos y nada corruptos, es esa pequeña proporción de seres humanos propensos a la corrupción, como se verá en cierto momento en este escrito, la que causa un gran daño a una inmensa mayoría de la población mexicana. Y eso, simplemente no es justo.

Es claro para el autor, y se espera que para todos(as) los(as) lectores(as), que el hombre y la mujer son enteramente iguales en toda dimensión, siempre. Por economía gramatical, se ha escrito este texto omitiendo frecuentemente la diferenciación él/ella, sin que por ello se deba interpretar por el/la lector(a) que esto implica diferencia alguna entre los géneros masculino y femenino, pues no la hay. Para todo lo dicho aquí, el género es indistinto, y el autor agradece la comprensión del lector ante ello.

Ricardo Zamora Mesinas

Febrero 2025



Fig. 3 El despertar de la conciencia. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).



Fig. 4 "El espejo roto" (para ilustrar la brecha ética entre lo ideal y lo real). Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).

¿QUÉ ES LA CORRUPCIÓN?

En términos generales, se entiende que la corrupción está definida como “el abuso del poder público, para beneficio privado¹”. La corrupción, filosóficamente, es que la gente no haga lo que se supone que debe hacer, porque no haciéndolo se beneficia materialmente. La corrupción es generar una brecha entre “lo que debe ser” y “lo que es”, porque derivado de dicha brecha, alguien se beneficia materialmente. En sentido práctico, la corrupción es un problema social, además de constituir un crimen, porque adquiere relevancia como elemento de grave daño a la población, al siempre involucrar a un servidor público, y a un individuo privado, al menos. Puede existir corrupción en el sector privado exclusivamente, pero ésta es materia de interés para los dueños de las empresas en las que ocurra, mientras que la corrupción como materia de interés para todos, es la que ocurre entre un servidor público, y un individuo del sector privado, como particular meramente, o como parte de una empresa privada que puede ser la beneficiada.

Entonces el interés general es por la corrupción del sector público, no por la corrupción entre partes del sector privado exclusivamente, como sería el comprador de una cadena comercial que pide soborno a sus proveedores.

La corrupción adquiere matices muy variados en la vida diaria. Puede materializarse como una infinitud de conductas, por ejemplo:

- El policía que acepta dinero a cambio de no aplicar la ley, abriendo paso a la inseguridad
- El trabajador médico que pide una dádiva o regalo para dar atención a un paciente, o para entregar una medicina a un enfermo en la farmacia del hospital
- La dirección de la escuela que espera algo a cambio de inscribir al niño, o pasarlo de grado
- El empleado distribuidor de alimentos a los pobres que raciona lo ofrecido porque prefiere entregar el mejor producto en la cantidad idónea sólo a cambio de dinero
- El agente del ministerio público que rehúsa tomar nota de un delito si no recibe un sobre con dinero antes, o bien el agente del ministerio público que por un sobre de billetes promueve la acusación de un inocente por supuesto delito realmente no cometido
 - El juez que absuelve al culpable, o el juez que condena al inocente, cuando se le ha entregado previamente algo de valor para lograr el “arreglo”
 - El legislador, o grupo de ellos, que escribe o aprueba una ley, o rechaza otra, de tal forma que la ley proteja a un grupo particular, ataque a otro en particular, dañe a la población general, o no proteja a la población general.
 - La compañía cara y no experimentada que gana el concurso de una obra, una concesión o un suministro cuando otras empresas ofrecen mejor producto o servicio, en mejores condiciones de precio y cuentan con mejor capacidad para cumplir su contrato
 - La repartición selectiva por servidores públicos, de materiales gratuitos de emergencia para repartir a la población en un desastre climático, a cambio de dinero

- 
- El desarrollador inmobiliario que ofrece al inspector ambiental dinero, o acciones de la empresa desarrolladora, o una casa o terreno dentro del desarrollo, a cambio de que asegure el permiso ambiental, o el permiso para perforar un pozo para sacar agua potable ilimitada para consumo sólo por el desarrollo
 - El servidor público que mete en el servicio público a su familiar o amigo, o a su empresa (nepotismo), o que pide a cambio de hacer el favor a su contraparte en el sector privado lo mismo para dicho familiar o amigo o empresa
 - Etcétera

Una vez que se hace conciencia de en qué consiste la corrupción, uno empieza a detectar sus perniciosos efectos por doquier. A veces a primera vista es difícil percatarse, pero con un poco de análisis tomando en cuenta la definición de corrupción, se logra concluir que si algo está mal, muy probablemente la corrupción está detrás del problema. Más sutiles pueden ser, por ejemplo: Carreteras peligrosas porque no se construyeron los 4 aros del trébol, sino sólo 2, para que se incorporen y salgan los vehículos. Parques públicos con geometrías no rectangulares convertidos a partir de espacios otrora usados como aeropuertos locales sí de formas rectangulares, para dejar un pedazo sustancial de tierra en manos del político que hizo la conversión de dicho espacio a parque público. De forma aún más velada, se puede pensar incluso en formas tan burdas de corrupción como la vulgar desaprobación de una ley que limitara la venta de comida chatarra en todas las escuelas a niños en pleno crecimiento, por parte de una mayoría de legisladores, para no dañar las ventas de las empresas que venden comida chatarra.

No hay límite a las formas, unas sutiles y otras evidentes y grotescas, en que la corrupción puede expresarse ante la ciudadanía, todos los días, por todos lados, causándole a todo ciudadano daños en términos de mal servicio, costo, tiempo perdido, malas experiencias, resultados no óptimos, riesgo de vida o libertad, etcétera. En general, la corrupción involucra actos que incumplen alguna ley, en que están involucrados un individuo privado o empresa privada, coordinado con un o unos servidores públicos que facilitan el incumplimiento de dicha ley o norma. El incumplimiento genera algún beneficio al individuo o empresa privada que forma parte del dueto corrupto. Y el o los servidores públicos corruptos derivan algún beneficio material del individuo o empresa privada a cambio de que no se cumpla la ley. En otros casos puede ser igual situación, pero se trata de que se escriba de cierta forma una nueva ley, o se derogue otra ley, o que alguna ley se interprete en un juicio de forma no lógica para favorecer el acto corrupto. Y en general, la corrupción afecta al bien público, a los bienes públicos, a los bienes de todos, a veces de forma evidente, a veces de formas sutiles. Muchas veces, la corrupción implica una “confusión” entre bienes públicos, y bienes privados, a beneficio de algún privado. Por ejemplo, cuando un terreno antes público pasa a ser ilegalmente propiedad de un privado, mediando en ello corrupción.

Cuando algo está mal en el ámbito público, en las calles, o en servicios y productos de los gobiernos, e inclusive en la disponibilidad, precio o calidad de servicios o bienes que venden empresas privadas, están concretándose en general los perniciosos efectos de la corrupción. Es cuestión de que uno piense: ¿Qué arreglo corrupto pueden haber hecho un servidor público, y una persona o empresa privada, como para que esto o aquello no funcione como debe?

La respuesta con un análisis a veces sencillo y a veces no, se constituye generalmente en una explicación de cómo operó ahí la corrupción: Cómo un servidor público desobedeció las normas, su deber, junto con un privado, para el beneficio de ambos, en perjuicio de la sociedad, toda.



La corrupción, entonces, es que las cosas no funcionen como deberían, que las normas no se cumplan como tienen que cumplirse, porque en dicho incumplimiento y en dicha disfuncionalidad, hay una fuente de beneficio material para las dos partes, el servidor público y el individuo o empresa privada que se pusieron de acuerdo en secreto, para no observar las normas escritas que dictan cómo debe conducirse el servidor público.

Genéricamente, ¿Qué puede representar un beneficio para un servidor público a cambio de que éste no cumpla con sus obligaciones para beneficiar a un privado? Las formas más comunes de compensar a un servidor público por el voluntario incumplimiento de sus obligaciones son: entregarle dinero en efectivo, hacerle depósitos, regalarle materiales o servicios que produce la contraparte privada en el acto de corrupción, obsequiarle cosas como viajes, comidas, boletos para eventos, favores sexuales, e inclusive otorgarle acciones nominativas de empresas y hasta escriturarle propiedades bienes raíces². Estas ilegales compensaciones pueden ser dadas generalmente al servidor público mismo, o bien a su familia cercana: hijos, padres o cónyuges, y a veces a algún “amigo-aliado”.

En formas más sofisticadas, las compensaciones pueden ser recibidas por dichos individuos “amigos-aliados”, aparentemente no relacionados con el servidor público, comúnmente conocidos como “presta nombres”, en cuyo caso el hilo de la investigación de corrupción se debe basar generalmente en que la indebida recepción de un beneficio material o económico del prestanombres no tiene explicación lógica dada la ocupación de éste, o su falta de experiencia o la mera ilógica razón de ser, en general, de dicho beneficio repentino y riqueza resultante sin lógica explicación, a favor de ese individuo.

Afortunadamente, en una gran mayoría de los eventos de corrupción en que el beneficio se aporta a un prestanombres, éste tiende, por el endeble o inexistente vínculo legal que forzosamente prevalece entre el beneficiario corrupto (servidor público) y el prestanombres, a no cumplirle al servidor público en la entrega de la dádiva o el obsequio producto de la corrupción: El prestanombres puede de plano no entregarle al que ejecutó el acto corrupto el producto de dicho acto, o le entrega incompleto, o tarde. Esta observación empírica sugiere que al menos en un primer paso, toda lucha contra la corrupción no se concentre primordialmente en los casos de prestanombres, sino en aquéllos en que el corrupto receptor, o su familia cercana, han sido beneficiados por el acto corrupto, sin prestanombres ajenos a la familia.

Por último, debe quedar claro, que en la corrupción, hay dos partes criminales. Es culpable, y merece castigo, tanto el servidor público que pide o acepta el beneficio económico o material del acto de corrupción, como el individuo o ente privado que ofrece, o acepta entregar, por sí mismo o inclusive a través de intermediario, el beneficio producto del acto corrupto al servidor público. La corrupción es un acto antisocial, dañino a toda la sociedad, que tiene la desafortunada característica de volverse contagiosa y aumentar de intensidad y variedad en la sociedad cuando se tolera. Es un acto que requiere la participación de al menos dos partes, donde siempre está una parte del sector público, y otra del sector privado, incluidos los individuos particulares y las empresas privadas por igual.

EL COSTO DE LA CORRUPCIÓN

Hay diversos estudios sociales que intentan estimar el costo económico y la frecuencia de ocurrencia de la corrupción para una diversidad de países, incluido México. Por ejemplo, el Grupo del Banco Mundial reporta que entre el pago de sobornos y lo que se roba a través de la corrupción en el mundo, en 2020 se suman 3.6 millones de millones de dólares, que representan aproximadamente el 5% del PIB, Producto Interno Bruto, de todas las economías del planeta³. Con referencia al costo económico de la corrupción a nivel mundial, se reporta que éste equivale aproximadamente al 5% del PIB del planeta, anualmente⁴.

Entonces, en lo puramente económico, el costo de la corrupción a los mexicanos es casi el doble del promedio mundial. Porque para el caso de México en particular, la empresa de consultores Deloitte publica que el costo de la corrupción en nuestro país asciende aproximadamente a 9% del Producto Interno Bruto, según estimaciones del Banco Mundial, reporta Deloitte⁵. Por otro lado, el mismo INEGI informa en 2024 que durante 2023, la prevalencia de corrupción en México cuando alguien realiza un procedimiento ante las autoridades es de 13,966 tales actos por cada cien mil habitantes cada año. Es decir, aproximadamente 1 de cada 7.16 interacciones de la ciudadanía con una autoridad gubernamental involucra algún acto de corrupción en el país⁶.

La implicación de algunas de las estadísticas mostradas arriba, hay muchas más de distintas fuentes y para distintos parámetros cuantitativos que reflejan corrupción, es que para México que es un país cuyo PIB en dólares del 2020 es de aproximadamente 1.073 millones de millones de dólares americanos (de poder adquisitivo del 2020)⁷, aproximadamente 90 mil millones de dólares se “pierden” anualmente en actos de corrupción. Es como si en cada litro de leche que se produjera cada mañana en la ordeña de vacas en un rancho, se tiraran o perdieran 90 mililitros, es decir, el 9% de la lecha se pierde como merma. Y aún así, la producción interna de México, su PIB, ha crecido, a veces muy débilmente, pero ha crecido a lo largo de los años. Un logro nada despreciable, bajo las circunstancias.

Se antoja imaginar qué pasaría si la ciudadanía produjera al mismo ritmo que hasta ahora, pero la corrupción se eliminara del país: una gran mejora material podría resultar para todos los mexicanos, en la medida en que la corrupción no “consumiera” tan alto porcentaje del PIB. Se dice aquí “consumir”, porque en general las partes involucradas en recibir el producto de actos corruptos, por inferencia no se piensa que estarían aplicándolo en gran medida a producción adicional, sino a consumo adicional para sí mismos.

Sin embargo, el costo de la corrupción no sólo es económico. El costo más alto en un país con tanta pobreza es social y multidimensional. El GIACC cita: “La corrupción es uno de los más grandes obstáculos para aliviar la pobreza, y el desarrollo adecuado de alimentos seguros, agua, salud, educación e infraestructura. La corrupción MATA!”⁸.

Si también se toman en cuenta las altas tasas de criminalidad en México actualmente, y se conecta inferencialmente la corrupción como causa sustancial del insuficiente desempeño de muchas de las autoridades relacionadas con la seguridad pública nacional, efectivamente, la corrupción mata⁹.

Partiendo de la perspectiva de que, como resultado de la corrupción, los servidores públicos no hacen lo que deberían hacer, no cumplen las normas que deberían cumplir, las cosas en la vida pública de México pueden no salir bien. Obviamente, si las cosas no se hacen bien o no salen bien, los resultados generalmente son adversos: no se produce lo suficiente, lo producido falla, no se cuidan las cosas, no se actúa a tiempo, etcétera. Al decir aquí producir, la referencia es a producir bienes, pero aplica obviamente también a producir servicios.

Lo anterior implica que la corrupción realmente ha costado hasta vidas, además de costar infinitud de horas-persona, además de dinero, a la población mexicana en general.

Desafortunadamente es fácil inferir de todo lo anterior, correctamente, que los más afectados por la corrupción son los más pobres, los menos educados, los más desprotegidos. La corrupción es un castigo no merecido que flagela peor a los menos preparados para escapar de ella, que a los más fuertes. Inclusive en lo económico, un soborno de determinado tamaño siempre representa una mayor fracción del ingreso de un pobre, que de un rico: los pobres pagan por su vivir diario más caro, que los ricos con la corrupción.

Una vez que se tiene en la mente el concepto de que la corrupción es que los servidores públicos no hacen lo que deben, porque a cambio de no hacerlo reciben ellos en lo personal un beneficio material para sí, directa o indirectamente, de inmediato o a veces con rezago de tiempo más o menos largo, se pueden hacer las conexiones sobre una gran cantidad de situaciones que se viven en México, y cómo es que la corrupción puede haber sido realmente la causante de esas

situaciones. En términos prácticos, la corrupción en México, puede tocar toda la actividad pública y social del país, desafortunadamente¹⁰, siendo México en términos estadísticos comparados con otros países del mundo, un país con una muy alta percepción de corrupción.

Tómense varios ejemplos hipotéticos, que seguro han podido ocurrir alguna vez sin llegar a específicos, y otros posiblemente muy reales que toda la ciudadanía podría corroborar:

- Apoyos a los pobres que no les llegan, porque se los quedan los servidores públicos



Fig. 5. El precio del silencio. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).



- Leche, por ejemplo, contaminada que aceptare comprar en el extranjero un servidor público a cambio de un soborno, que mata a la gente o la enferma
- Desvío de recursos que se emplearían para hacer obras de tubos y canales, por ejemplo, tanto para llevar agua potable a la gente, como para drenar aguas residuales y/o aguas de lluvias torrenciales de forma efectiva y suficiente, para evitar inundaciones y ahogados
- Medicinas que no son ya efectivas por su fecha de caducidad, o medicinas que realmente no contienen las moléculas activas que curan la enfermedad, aceptadas por servidores públicos que distorsionaran alguna licitación para favorecer a quien les haya dado dinero para ganar el contrato, sin importar si enfermos mueren
- Fertilizantes que no llegan a las manos de los más pobres agricultores, porque los servidores públicos los venden a otros agricultores más prósperos, exacerbando el hambre y muerte por desnutrición
- Carreteras insuficientes, y/o mal hechas, que acaban siendo caras, que resultan peligrosas, por no aplicar todo el dinero a su construcción. Igual para escuelas, hospitales, plantas generadoras de energía, juzgados, cuarteles, rieles, y mucha infraestructura más
- Criminales que andan sueltos porque hay policías insuficientes que ni equipo adecuado ni salario digno tienen, ministerios públicos no diligentes y jueces que dictan sentencias sin sentido, dando rienda suelta a la criminalidad
- Energía eléctrica que, aunque no fuere cara, es insuficiente, o presenta suspensión en el servicio más frecuente que lo debido
- Agua insuficiente, contaminada, o salobre, y agua que se reparte en camiones tanque de emergencia a los más necesitados, pero a cambio de pagos informales
- Tasas de interés altísimas en préstamos imposibles de saldar porque no hay leyes de garantías de repago a los prestamistas y surgen los agiotistas usureros, en vez de que haya préstamos a tasas razonables que cubran el riesgo del acreedor sin abusar del deudor. Los deudores recompensan a los jueces para prolongar por años sin dictar sentencias de lanzamiento a favor de los prestadores
- El médico imprevisto, el contador inexperto, el abogado incapaz, el ingeniero ignorante, el maestro ausentista, todos ellos producto de formaciones incompletas, en escuelas insuficientes, con profesores desactualizados cuyos puestos han sido comprados, y por la compra de cédulas profesionales
- La mujer asesinada por razón de género, cuya muerte no es castigada, y el hombre inocente, que entra a prisión siendo inocente por acusaciones falsas de una mujer sin escrúpulos
- Etcétera

¡La corrupción, mata!

La corrupción genera soluciones que son escasas, y que llegan muy tarde a la población. La corrupción siempre resulta en mal servicio, largos tiempos de espera, escasez, inseguridad, mala calidad, peligro. La corrupción permite que los más fuertes aumenten su fuerza co-optando a los servidores públicos para que las leyes se escriban a su favor, se administren a su favor, se juzguen a su favor, sin importar el consumidor ni la ausencia de competidores en su sector comercial.



Todo esto adverso que trae la corrupción, conlleva también a la población a un nivel de estrés diario que se vuelve insostenible, y a una decepción generalizada que desestimula al cambio positivo social, porque la población en masa pierde esperanza de que las cosas cambien. La corrupción crea zozobra en toda la ciudadanía, nadie sabe qué desenlace esperar en muchas situaciones en las que interviene el gobierno. La corrupción hace que los resultados lógicos y predecibles de algo no se cumplan, y eso pasma la actividad de la población. La corrupción es un riesgo adicional, por encima de todos los riesgos del vivir diario, por la incertidumbre que genera en toda la vida en sociedad: es un “meta-riesgo”.

La corrupción no puede cambiar si muchos de los servidores públicos líderes, que serían los moralmente responsables de eliminarla, no lo hacen por no tener incentivo para ello, en un círculo vicioso. Es necesario que la población general conozca qué es la corrupción en sus diversas expresiones, e identifique plenamente sus efectos dañinos sobre cada ciudadano. Sólo así puede la población crear entonces la masa crítica de voces ciudadanas que generen la fuerza política suficiente y bien orientada a resolver la corrupción de raíz.

En conclusión, la corrupción es muy costosa, tanto en lo macroeconómico, afectando el PIB, como desde el punto de vista del bienestar de la ciudadanía. La corrupción es muy costosa en formas distintas a la meramente económica, para cada individuo en su vida personal, diariamente. Es clave lograr que la ciudadanía general incorpore todo el tiempo en su mente que la corrupción hace que las cosas no funcionen como deben. Que la corrupción opera como la no observancia de las normas por los servidores públicos para beneficio de algún privado. Y como resultado de la corrupción muchas cosas entonces no funcionan en las comunidades en general. Que la corrupción es el resultado de que alguien, sin revelarse públicamente, le da algún beneficio personal a algún servidor público para que éste no cumpla con sus obligaciones. Con corrupción, las cosas no salen como deben salir, como se espera que salgan. Y eso es muy costoso para todos, todo el tiempo.

Sólo con la creación generalizada de esta conciencia ciudadana permanente sobre la corrupción como la causa más probable de los problemas diarios en nuestra sociedad, se ayudará a que crezca la suficiente fuerza política popular que pueda exigir el ataque concreto y tangible a la corrupción, para evitar que ésta siga causando estragos a todos, todo el tiempo, antes de que sea demasiado tarde.



Fig. 6. Luz entre muros . Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).



Fig. 7 Dos caminos. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: OpenAI (2025)

ALGUNAS CAUSAS DE LA CORRUPCIÓN

El origen de la corrupción como conducta antisocial en la humanidad tiene bases psicológicas, sociológicas y económicas. No hay una sola causa que tenga como resultado que determinado individuo se comporte de forma corrupta. Es una combinación de factores la que contribuye a que la conducta corrupta surja y se exprese concretamente con sus efectos adversos a la sociedad. Los factores más relevantes que contribuyen al surgimiento de la corrupción son cuatro. El primero, es que no todos los seres humanos son iguales, los hay altruistas, muy generosos, egoístas, y francamente sicopáticos/sociopáticos y en estos últimos, aquéllos que ejercen actos criminales graves, como la “gran” corrupción. El segundo es una conducta que ocurre ampliamente en la población humana, de naturaleza económica, llamada “riesgo moral”. Una tercera causa es la existencia de “asimetrías de información” entre distintas personas que participan en determinado hecho, lo que abre la puerta a que unos potencialmente abusen sobre otros. Finalmente, la existencia o ausencia de grandes empresas que tengan exclusividad, o no, sobre la venta de determinado producto o servicio para una determinada comunidad o geografía, puede tener una contribución nada despreciable sobre la intensidad de la actividad corrupta en toda sociedad.

Las siguientes secciones describirán estas causas que contribuyen a la existencia de la corrupción con mayor detalle. Siempre tomándose en cuenta que ninguna de ellas es la causa única que da lugar a la corrupción, sino la conjunción de todas ellas. Esa conjunción resulta en una gran prevalencia de corrupción, si las normas e instituciones adecuadas para el control de la corrupción no se implantan y aplican en la sociedad.

Altruismo, egoísmo y criminalidad

Todos los seres humanos nacen y forman su personalidad con distintos grados de altruismo, o de generosidad, o de egoísmo, o hasta de propensión a la conducta criminal. Altruismo es sinónimo de generosidad, pero en un grado máximo, que significa que el ser humano ofrezca de sí hacia los otros sin esperar nada a cambio. Egoísmo es lo contrario del altruismo y de la generosidad, es la tendencia del ser humano a pensar y actuar sólo para beneficio de sí mismo, sin importarle el perjuicio que pueda causarle a otros seres humanos, en mayor o menor grado. Y la conducta criminal se refiere al comportamiento dañoso del ser humano hacia sus congéneres, sin remordimiento ni conciencia del mal realizado, que siempre está asociado con la sicopatía, o enfermedad mental, congénita o adquirida.

El altruismo ocurre naturalmente en aproximadamente 40% de la población¹¹, desde el grado máximo de, por ejemplo, aquéllos que voluntariamente donan un riñón a un desconocido porque consideran que es lo correcto. Datos disponibles para los Estados Unidos

sugieren que el altruismo en dicho país ocurre en aproximadamente el 0.007% de la población¹² (1 entre cada 14,300 aproximadamente), considerando a los que donan órganos a extraños, y quizás un poco más si se consideran a aquéllos que sistemáticamente donan a caridades, o iglesias o a los mendigos. No tendría por qué suponerse que esta proporción estimada fuere distinta de aquélla prevaleciente entre la población mexicana.

La diferencia entre altruismo, egoísmo y criminalidad es de grado de conducta. No hay fronteras definitivas sino tonos graduales, desde el extremo altruista, hasta la conducta criminal, con un gran grueso de la población exhibiendo moderados niveles de altruismo o de egoísmo. El espectro conductual fluctúa desde el extremo del donador voluntario de órganos, hasta el criminal que comete delitos graves como son el homicidio doloso (intencional), los delitos sexuales, el fraude.... Y la gran corrupción. Más allá del 40% de la población que se estima esté dentro del bloque que se pudiera considerar como altruista o generosa, la sociedad humana también cuenta con sujetos que, gradualmente, son en mayor o menor medida egoístas, pero sin llegar a comportarse criminalmente.

En el extremo de la conducta ya francamente sicopática/sociopática, por ende propensa a conducirse criminalmente, las estadísticas son variables, pero sugieren que entre 3.9% y 1.0% de la población comete crímenes violentos en la sociedad. Un estudio sueco¹³ que cubrió todos los ciudadanos nacidos entre 1958 y 1980, revisando todas las condenas criminales entre los años 1973 y 2004 menciona que precisamente este 3.9% de todos los ciudadanos suecos habían tenido al menos una sentencia por crimen violento, pero que 1% de la población sueca era responsable por el 63.2% de todos los crímenes violentos en el país.

Hay que considerar que Suecia es un país que reporta niveles muy altos de felicidad año con año¹⁴. Suecia ocupa en 2024 el cuarto lugar en el mundo en términos de su índice de felicidad. Es un país que tiene un estado de bienestar, auspiciado por su estado-gobierno, que ofrece a toda la población educación de calidad, oportunidades de trabajo si éste faltare en el sector privado, así como alojamiento y alimento prácticamente garantizados para los más desprotegidos, desde la cuna hasta la tumba. Si en un país tan feliz, con una red social tan robusta para aquéllos menos afortunados, existe ese porcentaje de población que comete crímenes violentos, esa proporción debe ser una cota conservadora de la población humana propensa a conducirse ya no de forma meramente egoísta, sino criminal.



Fig. 8. El espectro humano. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).

ALTRUISMO, GENEROSIDAD, EGOÍSMO Y CONDUCTA CRIMINAL EN LA HUMANIDAD - CONCEPCIÓN ILUSTRATIVA

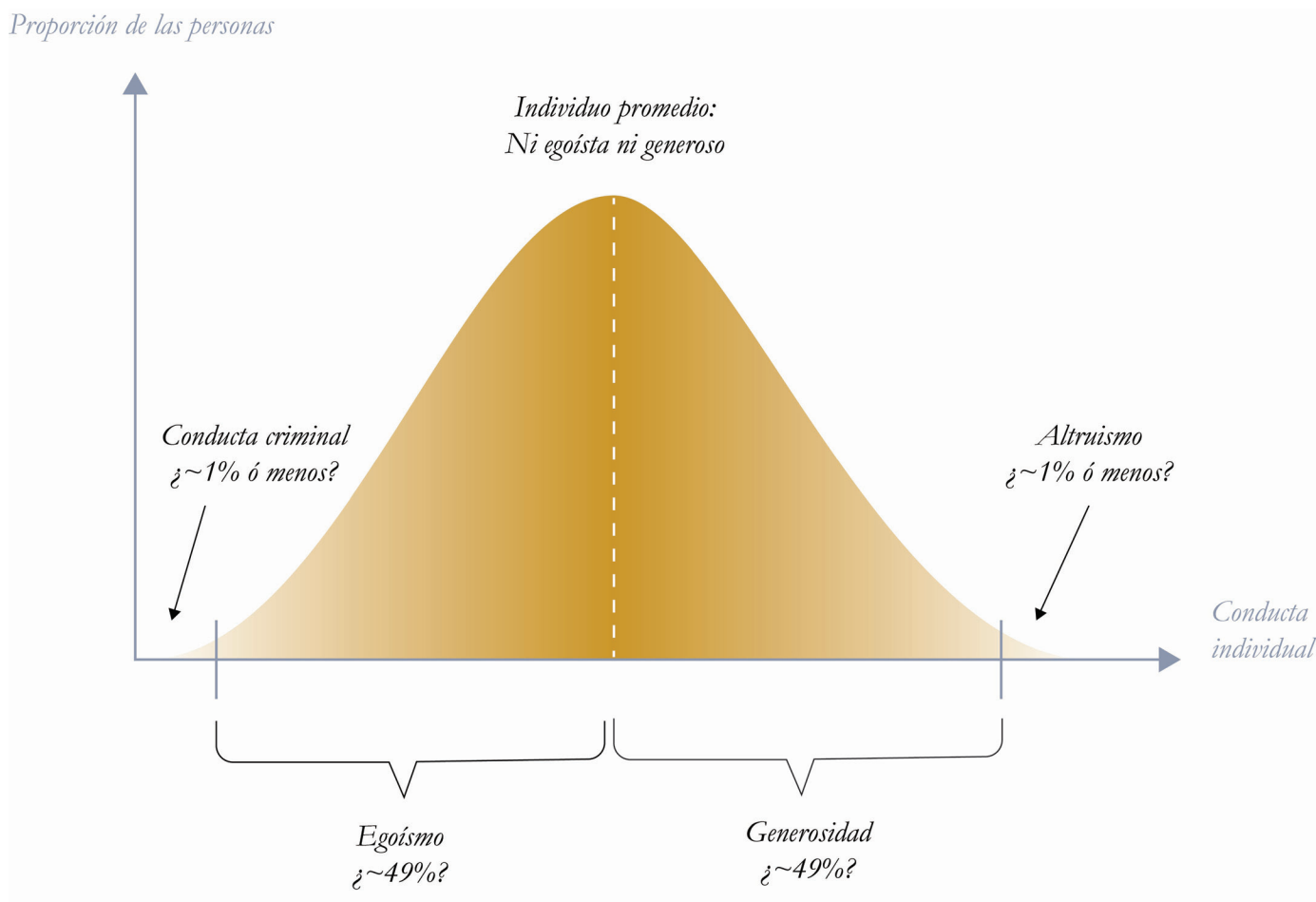


Tabla. 1 Altruismo, generosidad, egoísmo y conducta criminal en la Humanidad - concepción ilustrativa Fuente: Falk et al. (2014)

De lo anterior, se puede formar una visión más clara sobre la conducta humana en la sociedad actual: una pequeñísima proporción es altruista, aproximadamente la mitad son generosos, aproximadamente la otra mitad son algo egoístas, y entre 1% y casi 4% de la población puede ser propensa a cometer crímenes graves, donde el 1% con conducta criminal más extrema, comete dos terceras partes de todos los crímenes graves.

De estas estadísticas aproximadas, podría estimarse la proporción de seres humanos que podrían ser propensos a cometer actos corruptos. Cualquier cifra entre 1% y 4% es igual de útil para fines de la discusión sobre la corrupción. El punto importante, es que muy pocos humanos cometen la gran mayoría de los actos antisociales en el mundo. Por extensión, muy pocos seres humanos se involucran en actos de corrupción, en detrimento de la gran mayoría de la población en cada nación.

Aún otra referencia aproximada es que los Estados Unidos tiene actualmente casi dos millones de personas tras las rejas en 2024¹⁵, con una población total del orden de 345 millones de personas¹⁶, aproximadamente. Esto es, en Estados Unidos, aproximadamente 0.6% de la población está prisionera actualmente, una cifra que parece ser consistente con el 1% reportado por los investigadores suecos.



Fig. 9 Camuflaje social. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).

En relación con la corrupción, lo anterior quiere decir que una muy pequeña fracción de la población possería atributos mentales propensos a conductas antisociales consistentes con el atrevimiento para cometer actos graves de corrupción. Graves aquí se entendería en el sentido de la magnitud económica del acto corrupto, como un indicador indirecto de su gravedad. Es nuevamente importante pensar en la “gran corrupción”, y la “pequeña corrupción” ya mencionadas. Resulta evidente que la “gran corrupción” debería ser el foco de atención más urgente para México. De hecho, atacando la “gran corrupción” primero, la “pequeña corrupción” gradualmente iría desapareciendo en paralelo con la de gran escala, por el efecto sociológico que tendría el atacar crímenes de gran corrupción y castigar a quienes los cometen, con gran resonancia mediática, para amedrentar a aquéllos involucrados en pequeña corrupción. “El pescado se comienza a pudrir por la cabeza”¹⁷ .

El principio de Pareto¹⁸ habla de “los vitales pocos y los triviales muchos”. Para el caso de la corrupción, podría inferirse al menos de forma aproximada, que “como un 2%, más o menos, de la población causa el 98% del problema de la corrupción”. ¡Muy pocos ciudadanos, embarcados en el crimen de la corrupción, cuestan muchísimo a la sociedad en general!

No se pretende determinar la causa de la distribución aproximada arriba citada entre los altruistas, los generosos, los egoístas y los sicópatas¹⁹ . Donde se estima que éstos últimos constituyen como el 1% de la población masculina, y hasta el 0.7% de las mujeres, de los cuales los casos extremos realizan los crímenes más violentos. La causa de esta distribución conductual podría ser genética, o cultural-familiar, y muy probablemente una mezcla de ambos factores en distintas proporciones para cada caso. Si bien la parte cultural-familiar puede y debe resolverse en lo posible mediante mecanismos adecuados de apoyo a los más necesitados por parte del Estado mexicano, el caso sueco parece demostrar que, a pesar de una red de bienestar y seguridad material tan robusta como la de ese país, la conducta antisocial prevalece en proporciones tercamente constantes en la especie humana. El Estado mexicano puede y debe contribuir, por ejemplo, a la preservación de hábitos familiares que faciliten el inculcar buenos principios en el infante y el adolescente, que éstos practiquen deporte, que haya cobertura de las necesidades materiales más básicas a los más pobres, que haya fuentes de empleo con una mínima dignidad para los adultos y la juventud más pobre del país, etcétera. Sin embargo, Suecia demuestra que, aún en las sociedades que ofrecen el marco de Estado de Bienestar más robusto en el mundo hay crimen, y como uno de esos rubros criminales, puede surgir la corrupción si así se le permite, a pesar de todo lo que se haga para proveer a los más necesitados. Tanto la creación del Estado de Bienestar en México, como un ataque bien diseñado a la gran corrupción en el país, deben ser implantados, sin menoscabo uno del otro.

Ahora bien, debe esperarse que aquélla (muy pequeña) minoría de ciudadanos corruptos que ocurre en toda sociedad y país, no quiera nunca exponerse a ser vista por la ciudadanía en general. Los corruptos tienden a esconderse, mezclarse, camuflajearse, entre los demás ciudadanos con diversos grados de generosidad o egoísmo, para no ser detectados. Se esconden los corruptos entre grupos tanto del sector privado, como infiltrados en el sector público, con la finalidad de obtener ganancias privadas, personales, a costa de lo público, del bien público, como ya se ha descrito en capítulos anteriores.



Riesgo moral

Si se acepta la base científica que estima las proporciones aproximadas de seres humanos que se conducen con altruismo, generosidad, egoísmo, y conducta criminal, la pregunta natural respecto del último grupo, los que se conducen criminalmente, es: ¿Cómo pueden operar causando el daño social que causan?

Los economistas y la sicología aportan un par de conceptos que contribuyen a describir más completamente las características individuales de conducta dentro de la sociedad humana.

La sicología, desde tiempos de Abraham Maslow²⁰ en la primera mitad del siglo XX plantea que las necesidades más básicas de todo ser humano que deben cubrirse son el cobijo, el alimento, el descanso, entre otras. Más recientemente, desde una perspectiva evolutiva, se vinculan las necesidades básicas humanas también con la capacidad de reproducción. Es decir, los seres humanos al nivel más básico, son movidos por sus necesidades de alimento, territorio (cobijo), y reproducción. Las necesidades más básicas del ser humano son materiales, para su supervivencia, y para la continuidad de la especie. Esto debe tomarse en cuenta toda vez que los actos de corrupción generan, si resultan impunes, siempre en beneficios materiales para el que los comete.

A la vez la ciencia económica, que estudia la distribución de bienes escasos, reafirma que los recursos materiales satisfactores de las necesidades humanas son, precisamente, escasos. Y esos recursos tienen que terminar siendo asignados a todas las personas de una sociedad de alguna forma. La economía también ha definido una conducta prácticamente universal en la especie humana, llamada “riesgo moral”. Una de varias definiciones del riesgo moral es: “una situación en donde un individuo puede tomar ventaja de un trato o situación, sabiendo que todos los riesgos y consecuencias recaerán sobre otra persona²¹”.

Sin ser necesariamente una definición, la siguiente fraseología del exitoso y filantrópico Ray Dalio²² es una buena aproximación al riesgo moral, o conducta moralmente riesgosa: “No supongas que la gente está operando a favor de tus intereses, en vez de a favor de los suyos propios. Una mucho mayor proporción de la población que la que tú imaginas haría trampa si surge la oportunidad. Cuando a la gente se les ofrece la oportunidad de ser justos con uno, o de que tomen más para sí mismos, la mayoría de la gente tomará más para sí mismos.”

Así, el concepto de riesgo moral planteado arriba, comienza a conectarse con el fenómeno de la corrupción. Tanto desde el punto de vista conductual o psicológico, como desde el punto de vista económico, o material. La corrupción requiere el elemento sociopático, en el que la capacidad de decisión sobre lo que está bien y está mal, es deficiente en el individuo. También requiere el elemento económico, implicando que, si la oportunidad surge, el individuo actuará para beneficio de sí mismo, aún cuando ello sea en detrimento de los demás.



Asimetrías de información

Agregando la noción de “asimetría de información²³”, que también es un concepto económico, se puede completar la anatomía procedimental sobre cómo surge, como ocurre, un acto corrupto. Asimetría de información es cuando en un trato o situación “una parte cuenta con más o mejor información que la otra parte”. La asimetría de información puede tener “casi fraudulentas consecuencias”, para aquéllos que cuentan con menor información respecto a un determinado trato o arreglo. La asimetría de información le da ventaja al que sabe más sobre una determinada situación, y desventaja al que sabe menos sobre ella. Irónicamente, la ventaja que le da la asimetría de información al que sabe más sobre una situación, promueve que más gente quiera participar en tratos en los que la asimetría de información prevalece, porque derivado de ésta, el individuo toma ventaja económica de la situación sin tener que pagar sus consecuencias, que pagan aquéllos que tienen menos información sobre la situación. Como ejemplo, se puede imaginar un fumador que no revela a la aseguradora que lo es, y contrata un seguro de salud. Si esa asimetría de información prevalece, el costo de fumar no recaerá sobre el fumador, sino sobre la aseguradora y sus demás asegurados. Peor aún, si esta asimetría no se remedia, habrá “selección adversa”, es decir, más fumadores contratarán seguros empeorando el costo para la aseguradora, sin daño económico para dichos fumadores.

Combinando todos los conceptos anteriores, se puede ir explicando de una forma científica en qué consiste, y por qué surge, la corrupción. Surge cuando unos pocos, que no revelan su naturaleza delincuente, se internan en el seno del sector público y del sector privado, y aprovechan la dificultad para identificarlos e identificar los resultados de sus acciones para beneficiarse ellos mismos, perjudicando en el proceso a los demás individuos de la sociedad. La corrupción cuesta a la ciudadanía, a los pagadores de impuestos, a todos, porque tiene generalmente consecuencias adversas, daña o se aprovecha de los bienes de todos, los bienes públicos, las cosas públicas, que son materia del Estado. Así, una minoría criminal, con asimetría de información a su favor, en ausencia de transparencia, actúa dañosamente generando un costo a toda la sociedad. Y la existencia continuada de un marco informativo deficiente se aprovecha por los que ya operan en corrupción, y atrae además a otros delincuentes, por selección adversa. ¡Un círculo vicioso de corrupción!

Existencia de monopolios y oligopolios

La ciencia política muestra que pueden haber cuatro tipos de batallas políticas en la sociedad²⁴:

- a. Batallas con los costos dispersos entre muchos, y beneficios concentrados entre pocos
- b. Batallas con costos dispersos entre muchos, y beneficios dispersos entre muchos
- c. Batallas con los costos concentrados entre pocos, y beneficios concentrados entre pocos
- d. Batallas con los costos concentrados entre pocos, y beneficios dispersos entre muchos

Las batallas en las que los costos están dispersos entre muchos, y los beneficios están concentrados en pocos, al igual que aquéllas en las que los costos están concentrados entre pocos, y los beneficios están dispersos entre muchos, tienden a ser ganadas por los pocos, a expensas de los muchos. Hay mucho que perder, o ganar, para un grupo



pequeño, mientras que lo que los muchos pueden ganar, o perder, es relativamente pequeño para cada uno. Los pocos enfocarán su atención en ganar la batalla, mientras que los muchos no pondrán tanta atención a la batalla, pues lo que ganan, o pierden, es poco si ganan, o pierden.

Un monopolio es, por definición, que una sola empresa sea la que venda un producto o servicio a una comunidad, sin competidores, ni sustitutos prácticos al producto o servicio vendido. Todos los compradores, los consumidores, están obligados a comprarle al monopolista. Algo parecido es un oligopolio. Un oligopolio es un mercado en el cual unos pocos vendedores o proveedores dominan la venta del producto o servicio, y/o sus sustitutos²⁵. La regla práctica es que un oligopolio existe cuando las cinco empresas más grandes en un determinado mercado geográfico acaparan 60% o más de las ventas de determinado producto o servicio. Los pocos, monopolistas u oligopolistas, tienen mucho que ganar de continuar como tales, o mucho que perder si ya no lo son por entrada de más competidores, por lo que para ellos es muy importante ganar toda batalla para preservar su posición monopólica u oligopólica.

Los oligopolios, y en grado máximo los monopolios, ofrecen escaso producto²⁶ (o servicio), a un precio alto, con mal servicio o atención al público, mala calidad y excesivos tiempos de espera para recibir el producto o servicio. Los monopolios y/u oligopolios no innovan y son ineficientes. Pero todos ellos ganan utilidades más altas que las razonables, a costa de sus consumidores, que son obligados a comprarles.

La situación de los monopolios y los oligopolios es una de unos pocos con intereses muy concentrados, ante muchos cuyo interés es más bien difuso. Estos últimos son los consumidores obligados a comprarles a los monopolios u oligopolios. Debido a su tamaño, e ineficiencia²⁷, monopolios y oligopolios pueden crear y en general crean una relación privilegiada con las autoridades y con el gobierno. Se puede fácilmente generar una relación promiscua entre ciertos empleados gubernamentales, y los dueños de los monopolios u oligopolios, o de éstos a través de sus directores. Con intereses tan concentrados, el beneficio económico extraordinario que está en juego, y tomando en cuenta el riesgo moral, hacen fácil que personalidades sicopáticas, algunos actores empresariales escondidos dentro de organizaciones monopólicas u oligopólicas, y sus contrapartes similares en el sector público, encuentren y establezcan relaciones mutuamente benéficas empresa-gobierno, mediante corrupción.

La corrupción permite que algunos actores del sector público no establezcan medidas para promover mayor competencia, y así se logra evitar que se promueva que un mayor número de empresas sirva una determinada geografía con determinado producto o servicio. Y así el monopolio o las empresas oligopólicas pueden continuar teniendo ganancias extraordinarias extraídas de sus clientes o consumidores, forzados a comprarles. La presencia extendida de monopolios y oligopolios, favorece la corrupción en un país, y viceversa: la corrupción permite y promueve la existencia y permanencia continuada de monopolios y oligopolios²⁸ en el país.

La regla empírica es que un mercado determinado es oligopolístico cuando las cinco más grandes empresas que ofrecen su producto o servicio en dicho mercado, venden al menos un 60% de dicho producto o servicio a esos consumidores²⁹. Cuando en muchos distintos sectores productivos de un país o localidad hay varios oligopolios que tocan diversos productos y servicios que son esenciales para la vida diaria humana en esa geografía, el intenso interés de los oligopolios por conservar su privilegio para ganar utilidades extraordinarias y la extensión de la economía que dichas empresas tocan, sugiere que la corrupción puede ser particularmente intensa ahí. Y si la corrupción es algo



conspicuo ahí en relación con los oligopolios reinantes, sería natural que en otras actividades donde el sector público forzosamente debe participar, también puedan ser víctimas de la infiltración de individuos corruptos que busquen su beneficio personal en el quehacer público del gobierno de esa comunidad, región, o nación.

Así, la existencia de monopolios u oligopolios en México, debe considerarse como un factor que puede contribuir a, a la vez que ser un resultado de, actividad corrupta en el sector público de nuestro país, así como por parte de algunos individuos entre las filas directivas de diversas empresas de gran escala que operen en la economía nacional. Como causa potencial de corrupción, todo monopolio u oligopolio debería ser combatido y convertido, por medio de las políticas públicas idóneas, en un mercado competitivo, para bien de los consumidores. Los precios más altos, la escasez, la mala calidad, y el tiempo para surtir su producto o servicio a los consumidores de los monopolios y oligopolios son un costo adicional, escondido, de la corrupción sobre toda la población de un país, que no siempre se incluye en los cálculos de cuánto cuesta la corrupción. Sin corrupción, es muy probable que los monopolios y oligopolios no existirían, o estarían en proceso de transformación comercial con el paso del tiempo y arribo de competidores, con el derecho que así establecen las leyes aplicables³⁰.

Empíricamente se ha determinado que la existencia de al menos ocho empresas, casi todas del mismo tamaño, en cada sector de la economía³¹ y en toda geografía del territorio nacional disminuye grandemente los daños de los oligopolios que afectan a los consumidores. Y a la vez esto permitiría inferir que la ventaja de cualquiera de las empresas participantes en ese mercado derivada de acuerdos corruptos con servidores públicos, debería ya ser muy limitada.

Ligado a los monopolios y/u oligopolios, está la posible colusión de empresas en las licitaciones públicas para contratos de obras y/o servicios para el Estado. Parte del problema inclusive emana de los textos de los contratos modelo para asignar ganador, que muchas veces están “hechos a la medida de alguien”. No sólo puede haber sobornos en la fase de licitación y contratación, sino también con los “extras” que se piden al contratista o proveedor una vez que éste ya está cumpliendo su contrato. En este rubro hay dos elementos que ayudan a disminuir la corrupción. Uno es el uso de modelos de contratos de carácter internacional para cada tipo de licitación (por ejemplo, los de “FIDIC” y “NEC contracts³²”, adaptables a cada caso, en español), y para evitar “extras” no procedentes, está la simetría de información que resulta de que todo “extra” (aditivas o deductivas o cambios respecto del contrato) pase por un gran “comité consultivo” formado por funcionarios de la entidad gubernamental, pero también de observadores independientes y de las agencias fiscalizadoras independientes del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, que depende de la Legislatura.

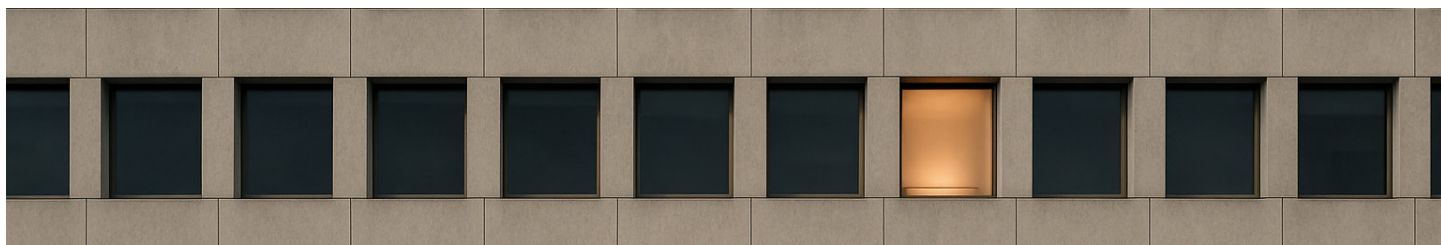


Fig. 10. El patrón roto . Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).

CORRUPCIÓN Y ELECCIONES

La Democracia y el voto

“La base de un gobierno democrático es que éste respete el deseo del Pueblo conforme éste se expresa en las urnas³³”. Esto aplica para las democracias liberales, que ejercen el mandato del Pueblo por medio de la representación. Una democracia es liberal cuando sus elecciones son libres, su prensa es libre, y los votos se cuentan con transparencia. Sin intermediarios, países como Suiza operan como democracias directas, no democracias por representación, donde cada ciudadano ejerce su voto sobre decisiones ejecutivas y financieras sin la intervención de un parlamento o legislatura. “Suiza con su democracia directa nos demuestra repetidamente su robustez y madurez política. Suiza está acostumbrada a planear en términos de décadas, sus metas no son para hasta la siguiente elección, sino para la estabilidad³⁴”. “La cuestión [para una sociedad próspera] es una gobernanza (gobierno) responsable y las instituciones políticas que la refuercen, más que el apoyarse en una u otra teoría económica...”³⁵ La Democracia no es perfecta, pero es el menos imperfecto de los sistemas políticos. La Democracia es la forma de gobierno que mayor libertad otorga a la más grande mayoría de los ciudadanos³⁶.

De lo anterior, debería ser claro que la verdadera Democracia liberal sólo puede operar sin corrupción. Sin corrupción, lo que se dice, lo que se ve, y lo que se hace, son lo mismo. Sin corrupción la voluntad del Pueblo se refleja en toda acción de los servidores públicos, que así atienden mejor los intereses de la mayoría ciudadana. Entre más directa sea la conexión entre la decisión por parte de la ciudadanía y la acción por parte del gobierno, mejor será el resultado del gobierno del estado nacional en todos sus niveles. Democracia es el gobierno al que se le deposita la confianza del Pueblo por medio de su elección, con cambios periódicos de aquéllos que gobiernan.

Suiza cuenta con apenas casi 9 millones de habitantes hoy, lo que permite que su democracia se ejerza directamente por sus ciudadanos por voto directo de las decisiones clave que requieren sus cantones (distritos) y su gobierno federal. México con más de 130 millones de habitantes, requiere por eficiencia operativa de su democracia trabajar por medio del poder legislativo, como representante de los intereses del Pueblo, que los elige: México es una democracia indirecta, así establecida desde 1917, al menos³⁷.

Entendiendo entonces que México opera bajo un sistema de elecciones que ha ido afinándose especialmente desde los finales de los años noventa, cuando nace el entonces Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral (INE), y reconociendo que formalmente la posibilidad de que distintos partidos logran ser elegidos para ocupar el poder ejecutivo sólo comenzó en el año 2000, se puede decir que México es una democracia naciente, aún en proceso de consolidación y maduración, con muchos aspectos de gobierno democrático que aún están en una etapa de afine, muchas veces por ensayo y error.

Si las virtudes de la Democracia liberal son reconocidas en todo el mundo, con amplias pruebas del beneficio que este régimen de gobierno otorga a la gran mayoría de su población, es de esperarse que el mecanismo táctico de implementación de las democracias, el voto, esté libre de corrupción. Y así debería ser si se quiere que la democracia sea exitosa en México para bien de la gran mayoría de su población. Desafortunadamente, no se podría asegurar que éste ha sido el caso de México a lo largo de su historia.

Financiamiento de elecciones.

La naciente democracia mexicana ha sido muy cara para su ciudadanía en los lustros recientes. La cifra última es del orden de once mil millones de pesos repartidos a todos los partidos políticos y candidatos independientes, algo así como quinientos millones de dólares aproximadamente, que el Estado mexicano inyectó al proceso electoral 2023-2024, conducente a las elecciones de 2024 del Ejecutivo y del Legislativo³⁸ y de gobiernos de varios estados de la República. Dado que la Constitución misma en su artículo 41, fracción II, exige que se garantice que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado, podría decirse de forma figurada que la democracia mexicana, de alguna forma, ha sobrevivido con el oxígeno financiero que el estado mexicano aporta a los partidos políticos y candidatos hasta ahora.

Entre los avances de la democracia mexicana, se puede contar con que la libertad individual del elector para plasmar su decisión en la papeleta, el mecanismo de conteo del voto, y la ejecución del escrutinio mismo en la gran mayoría de los distritos del territorio nacional, y para los mexicanos en el extranjero, son procesos ya bastante confiables respecto de su transparencia como actualmente operan. Se antoja más difícil hoy que antes el que a nivel de las urnas, y del conteo mismo por el INE, ocurra fraude, pero esto aún no podría descartarse por completo.

Sin embargo, es el efecto de las aportaciones ilegales u ocultas de diversas entidades privadas o personas físicas a determinado partido o candidato lo que puede meter mucha corrupción a la democracia mexicana. Quien aporta grandes cantidades de dinero a un candidato, espera que éste le favorezca una vez gane. Y las elecciones se ganan, sí, con mensajes o plataformas políticas bien comunicadas y que sean del agrado de las mayorías. Plataformas que representen el “centro de gravedad” a donde se localiza la opinión favorable de la mayoría de los electores, por supuesto. Y la comunicación masiva, cuesta mucho. No gana aquél candidato que toma posturas extremas (“estaré a favor de la portación de armas”, por ejemplo, en el contexto cultural mexicano), sino aquél que reafirma a su electorado potencial que, si gana, ejecutará políticas públicas con las que la mayoría de los votantes están de acuerdo (“continuarán los programas de apoyo al campo y a la pesca”, en un país con un gran número de electores campesinos y pescadores, por ejemplo).

Así, el otro factor indispensable del éxito de una campaña política radica en la disponibilidad de fondos para poder hacer precisamente que el mensaje sea bien diseñado, bien escuchado, bien repetido ampliamente en el territorio, para que sea bien y claramente escuchado por todo el electorado a la hora de ir a las urnas. Porque eso cuesta dinero.

Existen severas restricciones en otros países para delimitar la posibilidad de que donaciones a partidos o candidatos sean de gran monto y/o que permanezcan ocultos de la ciudadanía general. Si la ciudadanía sabe quién le dio dinero a qué candidato, sabrá también a favor de qué agenda política, o económica, el candidato, si ganare, estará, para bien de los más grandes patrocinadores del candidato. Y esa información simétrica, en que el pueblo se entera sobre quién ha financiado la campaña de quién, reorienta el voto de los ciudadanos libres para reflejar mejor qué prefiere

la mayoría. Eso es mucho mejor a que el anonimato de las donaciones resultara en que el pueblo ignorase qué empresa o persona, o grupo, le dio dinero a qué candidato.

La Federal Election Commission³⁹ (FEC) de los Estados Unidos limita en términos absolutos a no más de USD 123,900 la contribución anual que cualquier persona, física o moral (ésta, en forma de PAC, llamada “Political Action Committee”, por ejemplo), pueda hacer a determinado candidato para cualquier puesto. Pero además, y aquí está lo más importante, la FEC establece que las contribuciones en efectivo no pueden ser mayores a USD 100 (cien dólares) por persona física o moral, y que las contribuciones anónimas no pueden ser mayores a USD 50 (cincuenta dólares). Las contribuciones están además desglosadas y visibles por toda la población, para que el electorado pueda conjeturar quién va a ser visto, potencialmente, de forma favorable por qué candidato, en caso de que éste ganare⁴⁰. En Canadá, las reglas para el financiamiento de campañas y candidatos, es similar⁴¹.

Legislación pertinente en México, hoy

En contraste, en México hoy no existe una legislación clara sobre el requerimiento de que el electorado pueda saber quién dona a qué candidato o partido para las campañas. Un donador anónimo puede teóricamente “invertir” decenas de millones de pesos no en

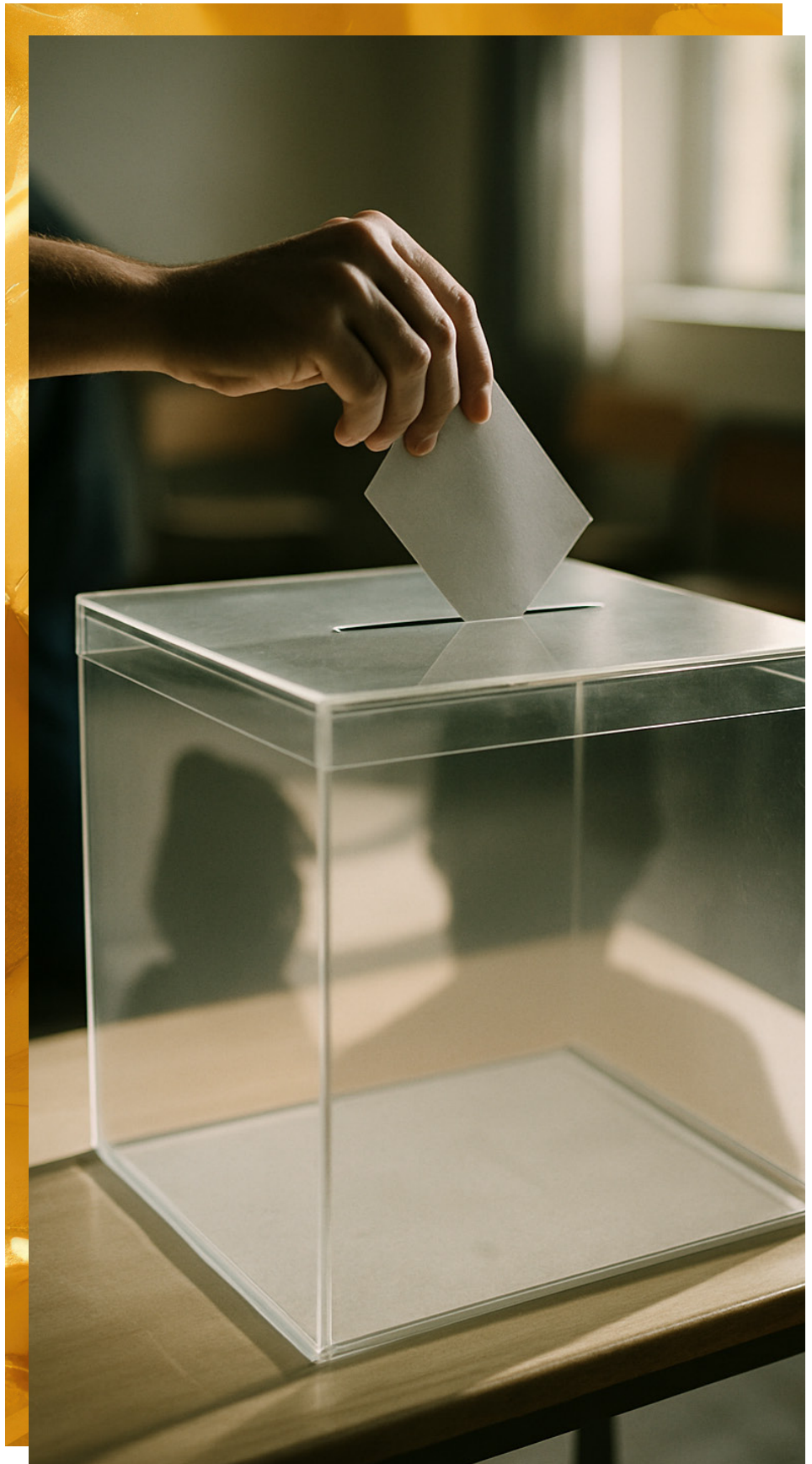


Fig. 11. La sombra del voto. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).

uno, sino inclusive en dos o más candidatos al mismo puesto, para “cubrir sus riesgos”, logrando el favor de todos, por si acaso cualquiera de ellos ganare la elección. La asimetría de información es un problema grave en México, pues el electorado no puede fácilmente saber qué candidatos tienen el apoyo de qué individuos o empresas del sector privado, mismos que potencialmente serían favorecidos durante la gestión política del candidato que gane habiendo recibido dichos apoyos, una vez ocupe el puesto.

Incipientemente, hoy, se plantea de forma relativamente general, no detallada, una reforma a la Constitución, en materia electoral, que alude a la necesidad de que se identifiquen las fuentes de los fondos privados que aportan distintas personas físicas o morales a diversos candidatos durante las campañas⁴². En esta propuesta de reforma, para el artículo 41 constitucional, fracción II, se plantea como segundo párrafo: “El financiamiento de las candidaturas independientes tendrá como objeto exclusivamente sus campañas electorales y provendrá de recursos públicos y de aportaciones de personas físicas mexicanas, observando lo que dispone esta base”.

Y en el mismo artículo, en su inciso (a) plantea: “a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y tres por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”. Mientras que se deroga el inciso (c) actual, pero se agrega en ese rubro texto en el cual se lee: “... En la obtención de recursos privados, tanto para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, como para sufragar los gastos de campaña durante los procesos electorales, los partidos políticos se sujetarán a lo siguiente: 1. La fuente de todo recurso obtenido será identificable y reportada en su contabilidad, con reglas previas a la revisión del ejercicio; ...”

Analizando los textos anteriores propuestos para la reforma constitucional del tema electoral que se propone votar en la legislatura en febrero de 2025, se concluye que el estado mexicano plantea reducir el financiamiento a los partidos y candidatos independientes a aproximadamente la mitad de lo que hoy reciben, que implica una menor dependencia de la democracia mexicana en los fondos públicos, y por ende reduce el incentivo para formar partidos para ser acreedores a recibir fondos públicos, y a la vez fomenta que los partidos políticos y candidatos independientes busquen fuentes de financiamiento privadas entre la ciudadanía misma, y con mayor transparencia.

Además, en el inciso (c) que se propone en la reforma constitucional, ya se alude a la responsabilidad de que partidos políticos y candidatos independientes informen con una identificación clara quiénes son las fuentes de todo recurso obtenido, pero no establece el nivel de detalle, ni cómo identificarlas, ni cuándo debe conocerlas toda la población, que debería ser preferiblemente antes de la elección, en tiempo real. Estos parecen ser los pasos necesarios, pero no suficientes, en la dirección correcta: menor dependencia en fondos públicos, y por ende menor costo a los contribuyentes, aún cuando los fondos públicos deban seguir siendo prevaletentes sobre los de origen privado. En el extremo, 50% del total monetario, menos un peso, de financiamiento privado cumple con el requisito de prevalencia (mayoría) de fondos públicos.

Y por otro lado al ya plantearse el requisito justo mencionado en la reforma inminente, parece ser que habrá de alguna forma una mayor transparencia, una mejor simetría de información a favor del electorado (la ciudadanía), sobre quién financia a quién en las campañas políticas, pero no se puede predecir qué tan efectiva será esta reforma. Será importante ver en el futuro cercano, si y cuando se aprobare esta reforma constitucional, cómo estos principios



rectores se implementan a nivel operativo táctico directo en las leyes secundarias pertinentes que aplican al INE, sobre todo para asegurar que la información sobre quién financia a quién, cuándo, y con cuánto, se sepa ampliamente por el electorado, rápidamente.

La existencia de múltiples partidos

En México ha llegado a suceder que la creación de un partido político puede ser un buen negocio económico. La Constitución vigente determina el financiamiento público que se distribuye anualmente de forma igualitaria a todos los partidos políticos, sin importar su tamaño, además de la distribución de más fondos públicos de acuerdo con el porcentaje de votos que cada partido hubiere obtenido en la elección de diputados inmediata anterior⁴³.

Por otro lado, la ley general de partidos políticos vigente en México establece que para formar un nuevo partido de alcance nacional, se necesitan prácticamente sólo 60,000 firmas, ya sean 3,000 en al menos 20 estados, o 300 en al menos 200 distritos⁴⁴, más alguna otra documentación que se debe presentar, nada difícil de crear o reunir. Lo mismo para un partido de alcance local, a nivel estatal, en proporcionalmente menor escala de requerimientos.

El resultado de estas dos reglas, planteadas a nivel constitucional y luego a nivel de ley secundaria, es que con relativamente poco esfuerzo se puede fundar un nuevo partido y éste, aunque gane pocos votos, recibirá dinero sustancial en la misma proporción que los partidos más grandes en existencia, por la parte de distribución igualitaria entre todos los partidos que el artículo constitucional pertinente establece. ¡Los partidos políticos pequeños pueden ser un buen negocio para sus fundadores!

Esto ha generado una proliferación de partidos políticos, algunos de muy pequeña talla y corta vida, pero que por el financiamiento público y la manera de distribuirlo, pueden llegar a ser buen negocio para sus fundadores.

Los legisladores plurinominales

Hoy en día, México cuenta en su poder legislativo federal con 300 diputados elegidos popularmente y 200 diputados que no han sido elegidos por ciudadanos mediante su voto directo (Art. 52, CPEUM), llamados genéricamente “plurinominales”. En el senado del país se cuenta con 128 senadores de los cuales 64 son elegidos popularmente, y la otra mitad no son elegidos por el pueblo, sino asignados mediante cierta fórmula distribuyéndose entre todos los partidos registrados (Art. 56, CPEUM). Como punto de comparación, y teniendo en mente que cada puesto tiene un significativo costo anual para la ciudadanía, hay que saber que los Estados Unidos, con aproximadamente 335 millones de habitantes, versus aproximadamente 130 millones de mexicanos, cuenta con 100 senadores, 2 por cada uno de 50 estados, y con 435 diputados⁴⁵, todos ellos elegidos por su pueblo mediante voto directo.

La finalidad de los legisladores plurinominales es, teóricamente, que las muy pequeñas minorías tengan el derecho a ser escuchadas⁴⁶. La asignación de plurinominales es un mecanismo matemático complejo y difícil de comprender por la población, que pretende que al menos un legislador de cada partido activo pueda ocupar una silla en el poder



legislativo. Sin perjuicio de que los partidos políticos que más legislaturas ganaron, también agregaron una cantidad considerable de legisladores a las cámaras, lo que nuevamente diluiría la voz de las más extremas minorías cuya voz se supone que debe ser audible mediante la existencia y manutención de los plurinominales.

Más allá de la posibilidad de que los puestos legislativos plurinominales pudieran ser posiciones políticas que, sin el esfuerzo que representa ganar una elección por méritos del planteamiento político de cada legislador, constituyeran estas sillas un “premio” a aliados de los grupos de poder en México, vale la pena preguntar: ¿Qué intereses de las más pequeñas minorías merecen ser escuchados en la legislatura para el bien de la totalidad de la ciudadanía? A esta pregunta, una respuesta plausible es que solamente si los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, minoría o no, fuere violado, ello merecería escucharse no sólo por la legislatura, sino también por el poder judicial y por el ejecutivo, y atenderse de inmediato. Se debería escucharlo y atender la situación por las vías jurisdiccionales y administrativas para remediar la situación de esa muy pequeña minoría lo más rápidamente posible.

Y, ¿Si hay derechos de una muy pequeña minoría que no están siendo respetados, no hay otros foros donde esto tiene que ser atendido? Si no son derechos fundamentales (derechos humanos tutelados por la Constitución y tratados internacionales firmados por México) violentados, sino intereses a promover una muy pequeña minoría, entonces porqué esos intereses le atañen solamente a un grupo tan pequeño de la sociedad y no se adicionan más ciudadanos a promover dicho interés? O bien: ¿A lo largo del tiempo, si esos intereses de una muy pequeña minoría no adicionan adeptos a sus filas, no será que dichos intereses son demasiado particulares como para ser materia de Estado, toda vez que esos intereses y preocupaciones no son materia de violación a derecho fundamental alguno?

Con los cuestionamientos anteriores, se pretende plantear que la existencia de los plurinominales en México es cara, no se le entiende bien sus propósitos, y puede de hecho implicar que sus propósitos, el representar intereses particulares de una muy pequeña minoría, no deben ser materia de atención legislativa sino hasta cuando se vuelven intereses de un grupo mayor de la sociedad. En cuyo caso éstos serían foco de atención de los demás legisladores que se encuentran posicionados más en el centro de los intereses políticos de la población general. Lo que querría decir que esos intereses ya en ese momento sí merecen ser atendidos por la prioridad creciente que han adquirido con el tiempo entre la población.

Aparte de, evidentemente, la hipótesis de que los puestos plurinominales podrían ser otro esquema de corrupción, una fuente de ingresos para personas favorecidas políticamente, y/o que surgen como producto y justificación de la proliferación de pequeños partidos políticos que son atraídos por la disponibilidad de recursos federales a los que se hacen acreedores una vez cada pequeñísimo partido nace formalmente.

La proliferación de partidos políticos y la elección por mayoría

También relacionado con el fenómeno del relativamente fácil nacimiento de partidos políticos en México, pero en la dimensión rigurosa de que la Democracia requiere que el pueblo no sólo elija a sus gobernantes, sino que además, los que son elegidos realmente por mayoría sean quienes gobiernen, surge el cuestionamiento de si la mecánica de elecciones mexicana no estaría ya resultando rígida, restrictiva, y anticuada para cumplir con estos requisitos democráticos hoy en día.



En el pasado reciente, han sido elegidos presidentes de la República candidatos que ganan no solamente con porcentajes de votos del orden del cincuenta por ciento. ¡Ha llegado a haber algún presidente en México que hubo ganado con menos del cincuenta por ciento!

Democracia es el gobierno elegido por las mayorías. ¿No es una contradicción que el mecanismo electoral de México no promueva que el/la ganador(a) cuente con al menos la mayoría simple del electorado apoyándole durante su gobierno?

Francia, la democracia más antigua del mundo moderno, recurre a un método de segunda vuelta para elegir no sólo a su presidente, sino también a varios otros puestos de elección popular⁴⁷. En los Estados Unidos sólo existen fundamentalmente dos partidos, el Demócrata y el Republicano, más algunos candidatos independientes en algunos años, que generalmente han logrado obtener un porcentaje muy pequeño del voto para el Ejecutivo federal. Sin embargo, en Estados Unidos nueve estados⁴⁸ usan el mecanismo de segunda vuelta, tanto para elecciones de gobernadores, como elecciones legislativas, cuando en una primera ronda para cualquier puesto de elección popular no hay un claro ganador con más del 50% más uno, del voto.

Con la tecnología digital para el voto en computadora, que facilita inclusive el escrutinio (conteo y verificación de cada voto anónimo), con la presencia de más de dos partidos políticos, fácilmente se puede resolver la rigidez anticuada del mecanismo de elección popular en México para que el Ejecutivo federal y los locales, así como los legisladores, puedan y deban ser elegidos mediante el mecanismo de segunda vuelta, a un costo de elecciones razonable.

El voto popular en un ámbito de segunda vuelta no asegura que el/la candidata(a) ganador sea simultáneamente la primera elección de todos aquellos electores que le impulsaron a tener al menos 50% más un voto en el escrutinio, pero sí ofrece al electorado la oportunidad de que todos los electores tengan la oportunidad de emitir su preferencia primera, o segunda, para que el ganador incuestionablemente haya obtenido la preferencia de al menos 50% más un ciudadano en el escrutinio.

La segunda vuelta permite inclusive que el electorado vote estratégicamente en la primera vuelta, con el fin de que, bajo las circunstancias y el planteamiento o plataforma política de los más de dos distintos candidatos, la población pueda si así lo determina en cantidades sustancialmente grandes “eliminar” a uno de varios de esos candidatos en definitiva⁴⁹. Esto favorece que los dos candidatos de la segunda vuelta, si ésta fuere necesaria, tengan posiciones o plataformas políticas más alineadas con el grueso de la ciudadanía. “No ganó mi primera preferencia, pero yo en conciencia, escogí de ambos finalistas de la segunda vuelta, el que a mí me pareció mejor”. “Al que elegí en primera vuelta no era mi primera preferencia, pero para asegurarme de que no gane determinado candidato para mí indeseable, favorezco a este otro candidato”.

Acumulando un número sustancial de votos bajo este tipo de estrategias individuales de voto, se reduce la posibilidad de que alguien realmente indeseable para la sociedad, termine ganando con un porcentaje minoritario del electorado a su favor. En un país en el que el crimen violento puede llegar a ser rampante, esta salvaguarda puede ser útil e importante para la seguridad nacional y la preservación del Estado en condiciones de gobernabilidad.



Con el sistema de segunda vuelta, cada elector no queda completamente complacido del elegido pero en lo agregado, todos los electores están complacidos de que el proceso les dio la oportunidad en esa segunda vuelta a elegir lo mejor que cada uno consideró, bajo la circunstancia de que eran ya solamente esas dos las opciones disponibles, eliminándose así la percepción de arbitrariedad⁵⁰. Esta postura genera mayor gobernabilidad, adiciona legitimidad al ganador, y reduce la posibilidad de cuestionamientos sobre la honestidad de la elección.

En el mercado político, el asegurarse de que el candidato ganador sea elegido por mayoría, aunque sea simple a través de una segunda vuelta cuando sea necesario, reduce la posibilidad de que un monopolio u oligopolio del poder político, una minoría como lo sería un monopolio u oligopolio en el mercado económico de bienes y servicios, capture una posición que le otorgue poder sobre recursos públicos frente a la población, quienes en su mayoría no lo querían en dicho puesto.

Contribuyendo a resolver la corrupción en el ámbito electoral

Cuidar la Democracia y sus procesos de elección es clave para minimizar la corrupción. Sin democracia, con la competencia política que crea, los gobernantes no están incentivados a hacer lo que deben, sino lo que les conviene, aún en detrimento de la población.

La Democracia no puede vivir a costa de los contribuyentes, debe poder sostenerse por la convicción de la ciudadanía en ella, reflejada a través de la diversidad de posibles aportaciones que el sector privado desee realizar para promover la competencia política al apoyar cada quien a su preferido para una elección. En la transición para reducir la dependencia de la democracia mexicana en el financiamiento público, deben reafirmarse las normas exigibles que promueven la transparencia en el financiamiento de partidos y candidatos por personas físicas y morales privadas. El que todos se enteren fácilmente quién financia a quién, cuándo, y con cuánto antes de que ocurra la elección, le permite a la totalidad de la ciudadanía decidir quién pueda ser mejor servidor público, si resulta elegido democráticamente. Hay avances normativos en este rubro que están por concretarse mediante reformas, pero aún habrá oportunidad para que las normas electorales exijan aún mayor simetría de información entre los candidatos y los electores, en particular sobre el financiamiento privado de los candidatos y partidos.

La proliferación de partidos en México ha sido posiblemente derivada en parte por la corrupción, al ser éstos una posible fuente de dinero para grupos minoritarios que los crean. De la misma forma, la existencia de legisladores plurinominales parece ser inútil no sólo para representar los intereses de los grupos más pequeños de la ciudadanía, sino también confunde con su supuesto propósito en un país en el que el cuidado de los derechos fundamentales por las vías constitucional, convencional y legal⁵¹ ha tomado gran relevancia pública y por ende ha generado una gran atención por diversas organizaciones públicas y no gubernamentales, como para que el rubro debiera sólo ser atendido a nivel legislativo, mediante la voz de los plurinominales.

El combate a la corrupción, y la refinación del proceso de elecciones democráticas en México, son un círculo vicioso, que debe volverse un círculo virtuoso. Como en el proverbial dicho sobre “el huevo y la gallina”, conforme disminuya la corrupción mejorará la democracia mexicana, pero también conforme la democracia mexicana mejore, se reducirá la corrupción. Porque es al nivel más alto de los funcionarios electos que se establece el patrón de atacar la corrupción, o

promoverla. Mientras existan numerosos partidos políticos, y/o numerosos candidatos independientes a cada puesto de elección popular, será menester tener a mano la herramienta de la segunda vuelta como el mecanismo idóneo para asignar posiciones públicas con mayor sentido de legitimidad entre los votantes. La actual época digital hace este proceso factible de ser implementado con el alcance necesario y a un costo conmensurado que debe ser más que ameritado, si contribuye a la democracia, y a la extinción de la corrupción en el país.



Fig. 12. Después del voto. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).



Fig. 13 El poder concentrado. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).

CORRUPCIÓN Y MONOPOLIOS

¿Qué son los monopolios y oligopolios?

Un monopolio es la presencia de solamente un proveedor y/o productor en un determinado mercado o geografía⁵². Un oligopolio es un mercado en el cual unas pocas grandes empresas dominan, poniendo barreras a la entrada⁵³ de otros proveedores y/o productores, y existen pocos o nulos sustitutos para lo que dichas empresas ofrecen a los consumidores⁵⁴. Se puede decir que el extremo crítico de un oligopolio es un monopolio, y en el otro extremo de un oligopolio, está el mercado “perfecto”. El mercado “perfecto” consistiría típicamente en la presencia de al menos unas ocho empresas (más estrictamente que el principio del 60% del mercado que se mencionó antes), todas ellas de aproximadamente el mismo tamaño, que ofrecen el mismo producto o sustitutos similares a un determinado mercado o geografía. Todo monopolio tiene una vida finita, que a veces puede durar varias décadas, pues si bien el monopolio puede hacerse de barreras para evitar la competencia en su mercado, tarde o temprano arriban competidores que le quitan una porción del mercado. En cambio, el oligopolio generalmente puede tener una vida muy larga, en detrimento de los consumidores, porque su base es precisamente el que varias empresas se ponen de acuerdo sobre el precio y la cantidad de producto o servicio que van a ofrecer a un determinado mercado o geografía donde están sus consumidores “cautivos”. El grado de afectación por los monopolios u oligopolios se denomina “dominancia” del mercado, y a las empresas monopolísticas u oligopolísticas se les llama eufemísticamente empresas “dominantes”.

El monopolio tiene “prisioneros” a sus consumidores, de tal forma que puede poner el precio, y ofrecer la cantidad a vender por mes o por año, que maximice sus utilidades, a costa del consumidor cautivo. Además, los monopolios generalmente dan mal servicio, pueden cumplir con largos tiempos de espera, u ofrecer poca calidad. Además, generalmente innovan poco o nada su producto o servicio, y como regla venden a precios más altos que cuando hay un mercado perfecto, o competitivo. Todas las desventajas de un monopolio, en grado decreciente conforme sube el número de productores/proveedores oligopolistas, también son parte de las desventajas del oligopolio. Cuando se llega a esa cifra “crítica”, empíricamente observada, que es del orden de ocho o más productores/proveedores más o menos iguales en tamaño, vendiendo el producto o servicio en determinado mercado o geografía, el poder monopolístico/oligopólico prácticamente se desvanece, porque uno o más de los oligopolistas puede tender a hacer trampa a los demás productores/proveedores, bajando su precio, o mejorando su tiempo de entrega, o mejorando su calidad, etcétera, lo que genera la descoordinación del antes oligopolio, en beneficio de los consumidores.

Del lado de la producción, no de la venta, los monopolios, y los oligopolios en menor medida, también tienden a ser ineficientes en sus procesos, porque pueden cargar precios más altos que los competitivos a su mercado, y además pueden forzar a sus proveedores a venderles su materia prima a precios más bajos y con condiciones contractuales complicadas para éstos últimos, mientras que también pueden hacer lo mismo con los puestos de trabajo a sus empleados ofreciendo salarios menos que competitivos. Todo ello se puede concretar, porque los monopolios y oligopolios tienen fuerza de negociación tanto con sus clientes, como con sus empleados y proveedores: ¿Si no van todos éstos con el monopolio u oligopolio, con quién más hacen su negocio? Además, los monopolios, y también los oligopolios, teniendo en general una demanda relativamente segura por sus productos o servicios, y habitualmente contando con barreras a la competencia, adquieren muchas veces tallas bastante grandes debido a su crecimiento en ventas, y esa gran talla les dota de “economías de escala”. Economías de escala son aquellos costos de producción y/o distribución, y de compra de insumos, que son más bajos para empresas grandes, que para empresas chicas. Las economías de escala pueden derivarse de descuentos por volumen, fuerza de negociación con sus proveedores y empleados, automatización, y costos operativos periódicos bajos para operaciones que pueden crecer sin que dichos costos operativos periódicos tengan que subir, por ejemplo: el costo mensual de oficinas centrales, el costo mensual de los sistemas computacionales de procesamiento de datos, no se duplican generalmente cuando el volumen de ventas se duplica. Este margen económico adicional por escala de las operaciones puede dotar a los monopolios y oligopolios tanto de un margen económico de seguridad para cubrir sus ineficiencias operativas derivadas de la falta de necesidad de competir por precio en sus mercados, pero también evidentemente les puede otorgar a los accionistas de los oligopolios o monopolios utilidades mayores que los que se obtendrían si esas empresas enfrentaran competencia perfecta. Todo ello generalmente resulta a costa de los consumidores forzados a consumirle solamente a esos monopolios u oligopolios.

Monopolios y oligopolios en México

Parecería que México cuenta con la presencia de muchos oligopolios en diversas industrias. Los monopolios privados prácticamente no existen en México, afortunadamente, y el monopolio de la energía (electricidad e hidrocarburos) es, al menos, manejado por el estado mexicano, lo que ofrece la posibilidad de imponer cierta disciplina para la fijación de precios al consumidor, para limitar alzas no razonables en esos precios, cuando el país se gobierna con un régimen democrático, en el cual si el monopolio de energía abusase, los gobernantes en turno tendrían el riesgo de ser desplazados en la siguiente elección por otros que ofrezcan a los electores limitar las alzas en dichos precios. A veces es difícil detectar los oligopolios que operan en la nación, inclusive en algunas ocasiones algunos de ellos operan distintos nombres de marca, aún cuando su producto o servicio proviene todo de la misma empresa. La operación oligopólica, o cuasi-oligopólica en México podría corresponder, entre otras, a las siguientes industrias: de comunicaciones, el cemento, la cerveza, las empresas de tiendas departamentales y de supermercados, las televisoras, cadenas de restaurantes de franquicias, los hospitales privados, los bancos comerciales, etcétera. Algunos oligopolios inclusive parecería que se disfrazan como empresas aparentemente competitivas, sin serlo. Por ejemplo, las agencias de autos de distintas manufacturas europeas, americanas, asiáticas, pueden operar en una ciudad toda propiedad de un solo dueño, lo que ciertamente es dañino para el consumidor. De forma similar ocurre con las agencias que rentan autos en los aeropuertos, donde las diversas “marcas” arrendadoras, todas pueden ser operadas por un mismo dueño. Los taxis fuera de los aeropuertos parecen también ser oligopolios.

Los monopolios y oligopolios, y la corrupción

Existe una clara correlación entre el grado de corrupción de un país, y la prevalencia o dominancia del mercado por monopolios y/u oligopolios. Las estadísticas sugieren que, a mayor corrupción, mayor prevalencia de monopolios u oligopolios, y viceversa. Tanto el World Economic Forum (WEF) como Transparencia Internacional (TI) desarrollan periódicamente clasificaciones de una gran mayoría de los países del orbe, en términos de su situación de dominancia del mercado, y de grado de corrupción, respectivamente⁵⁵. Basta con observar la tendencia de los puntos en la gráfica que aparece en la siguiente página para corroborar este hecho: la ciencia estadística indica que aproximadamente un 39% del grado de dominancia del mercado que prevalece en cualquier país, es explicada por el grado de corrupción que prevalece en dicho país. Pero si de forma parecida las estadísticas sugieren una correlación entre el grado de corrupción de un país y la confiabilidad en la administración de la justicia (jueces y cortes), pues entonces como a su vez la administración de la justicia y la dominancia de mercado muestran una correlación estadística similar a la anteriormente descrita, por el lado de administración de la justicia con referencia a la corrupción, ésta última por traslación o transitividad agrega aún más correlación estadística a la existencia y permanencia de monopolios u oligopolios en un determinado país. Cada punto en la gráfica mostrada abajo representa un país del orbe, y son 115 países los que configuran la “nube” de puntos, junto con la línea que cruza esa nube de la mejor manera estadística (regresión) para visualizar con más claridad cómo a mayor corrupción, mayor dominancia del mercado en un país, y viceversa.

El huevo y la gallina en la dupla corrupción – monopolios/oligopolios

¿Por qué está la dominancia del mercado tan relacionada con la corrupción? ¿Qué ocurre primero, la corrupción, o la dominancia del mercado de un país? Estas dos preguntas están interconectadas. Los monopolios u oligopolios surgen y preservan su existencia principalmente gracias a corrupción. Esas empresas requieren de protección por parte del gobierno para que no tengan que enfrentar competidores. Limitaciones a la importación convertidas en leyes, por ejemplo. La definición de un “estándar” del producto que “únicamente” cierta o ciertas pocas empresas cumplen, estándar estipulado por el gobierno, son ejemplos de posibles barreras sutiles y no tan sutiles a la competencia. La corrupción puede permitir el arreglo entre ciertas empresas y ciertos servidores públicos para que: a) las leyes se escriban a favor de las empresas en el poder legislativo, b) las leyes se apliquen administrativamente a favor de las empresas por el poder ejecutivo, y c) las leyes se interpreten a favor de las empresas por el poder judicial.

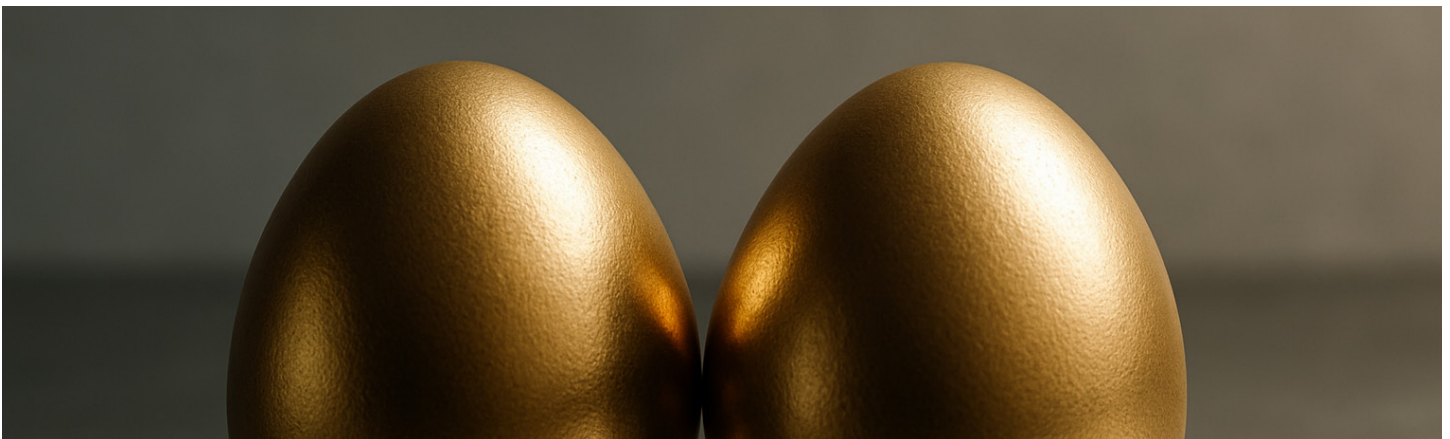


Fig. 14. El ciclo del poder. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).

MONOPOLIOS VS CORRUPCIÓN - 115 PAÍSES, 2019

Score dominio del mercado (WEF)

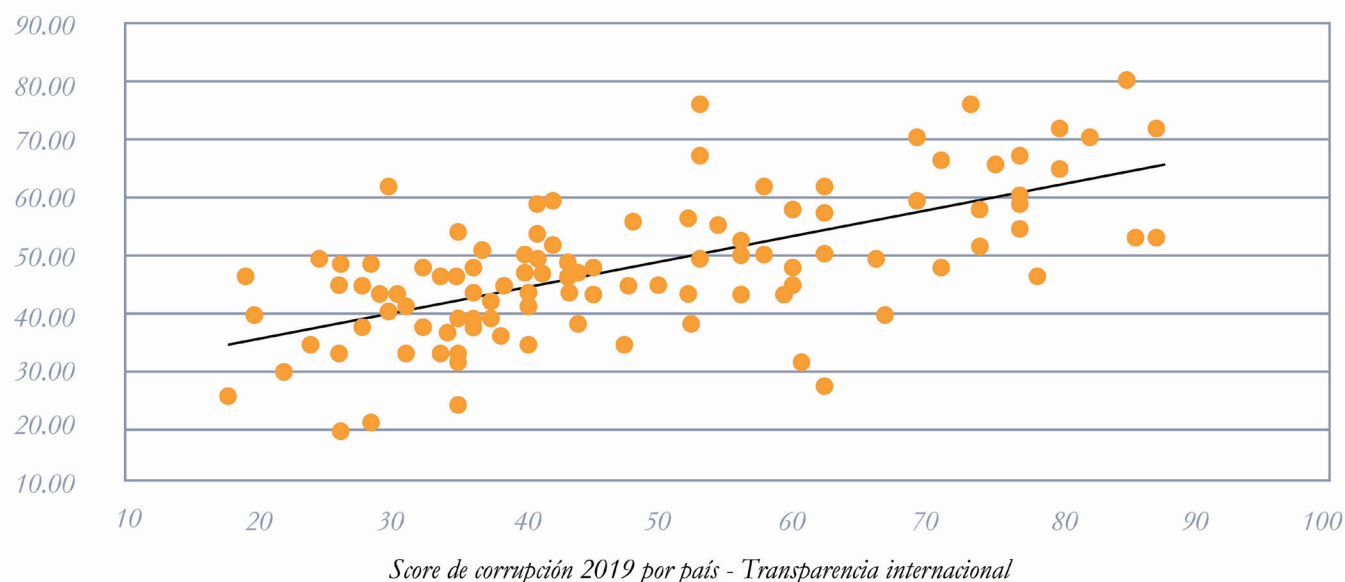


Tabla. 2 Monopolios vs corrupción - 115 país, 2019. Elaboración propia con datos del World Bank Group (2019) y Transparency International (2019).

La segunda pregunta, sobre si la corrupción ocurre primero, o los monopolios y/u oligopolios surgen primero, en realidad no tiene una respuesta clara, pues la situación de monopolios y/u oligopolios es como el caso del huevo y la gallina. Podría ser que un servidor público originalmente proponga a un individuo que éste haga un negocio y que, a cambio de un beneficio al servidor público, el individuo reciba algún tipo de arreglos protectores por parte de los diversos poderes del gobierno. Pero también podría ser que un individuo privado con afán “emprendedor”, le proponga al servidor público algún beneficio a cambio de dichos arreglos protectores, acordados entre ellos antes de que el negocio arranque. Esto podría ocurrir tanto para arrancar una nueva empresa enfocada en ventas al sector privado, pero también podría ocurrir en relación con algún contrato o concesión que somete a licitación pública el gobierno, que resultare desafortunadamente simulada, dado que ya podría haber un arreglo previo entre el servidor público y el dueño de alguna de las empresas licitantes. Así se podría además inferir que los monopolios y oligopolios se relacionan en este sentido con la corrupción “grande”, claramente, no con la pequeña escala.

Monopolios y oligopolios en el mundo

El fenómeno de la corrupción ligado a los monopolios, y oligopolios, no es nada nuevo en el mundo. En Estados Unidos⁵⁶, debido a arreglos corruptos entre políticos y monopolistas, dice la científica política Amy Klobuchar: Los políticos de finales del siglo XIX mostraban gran desinterés en preparar la sociedad americana para lidiar con los nuevos retos y oportunidades para la industrialización del país. Igualmente, en esos tiempos las cortes judiciales rehusaban exigir el cumplimiento de las leyes tal como estaban específicamente escritas, para favorecer a los monopolios de la época. El efecto de favorecer a los monopolios por los gobernantes parecía inexplicable a la población: pobreza creciente y desigualdad del ingreso en medio de la prosperidad de unos cuantos que aprovechaban los avances tecnológicos de la revolución industrial. Era importante enseñar a las masas acerca de los peligros del poder de los monopolios. Hubo que esperar al arribo del presidente Teddy Roosevelt para que, hacia los años de la segunda década del siglo XX, alrededor del año 1914, se popularizara el conocimiento sobre los efectos de los



monopolios u oligopolios, y se instituyeran leyes contra los monopolios, se decidiera así combatir los monopolios, y se creara la Federal Trade Commission, FTC (Comisión Federal del Comercio) para supervisar la economía y evitar la prevalencia de monopolios, u oligopolios en los Estados Unidos, entre otras medidas.

Monopolios nacidos por mérito, y otros monopolios

Hay monopolios que se forman gracias a la innovación y mérito industrial del fundador, lo que no implica que dichos monopolios deban continuar siendo el único proveedor de un invento valioso para la humanidad. Pero el premio potencial, temporal, que esa posición monopolística inicialmente representa para los innovadores promueve el avance tecnológico que mejora la calidad y productividad, y por ende la calidad de vida de la población. La innovación crea millonarios gracias a la ventaja temporal que tiene el monopolio creador de una muy notable innovación benéfica para la sociedad. En México, sin embargo⁵⁷, sin las instituciones y contrapesos públicos que promuevan trato igual a toda la población, las relaciones entre determinados empresarios y determinados servidores públicos (con una alta probabilidad de cementar esa conexión mediante corrupción) pueden crear millonarios propietarios de monopolios u oligopolios que quizás surgen aparentemente de forma repentina sin que medie en ello la creación de ninguna invención innovadora para la sociedad, sino más bien se basan en aprovechar el instrumento empresarial, que acaba extrayendo valor económico de toda la población, para bien de uno o unos cuantos. La solución, como contrapeso público idóneo sería, desde la perspectiva del que aquí escribe, la erradicación de la corrupción mediante la institución concreta requerida para atacar este grave mal en México de forma eficaz y definitiva.

Resolviendo la dominancia del mercado

Para resolver el problema de dominancia del mercado, es decir, la prevalencia de oligopolios y monopolios, la acción debe ser en dos frentes simultáneamente (el problema del huevo y la gallina). 1) Debe erradicarse la corrupción, y 2) Deben fraccionarse las empresas o grupos económicos con poder monopolístico u oligopólico, que pueden tener efectos tanto a nivel nacional como en mercados geográficamente particulares, y lograrlo conforme a los cánones generalmente aceptados para ello.

El primer punto es la materia de este escrito. El segundo requiere apreciar la estructura económica de las organizaciones comerciales de forma integral, desde su nacimiento hasta su muerte (disolución). Las empresas deben nacer porque un innovador concibe un producto, o servicio, o una mejora a un producto o servicio, mejor que lo que existía hasta el momento del nacimiento de la nueva empresa. Un producto o servicio es mejor cuando, entre muchas otras posibles virtudes, o se produce más rápido, o a menos costo (y por ende se puede vender más barato), o es más efectivo en resolver la necesidad que plantea resolver, o se distribuye a menor precio, o tiene mayor pureza, o tiene mejores atributos de desempeño y/o menos atributos desfavorables (contaminación, efectos secundarios adversos, etcétera). Las empresas nuevas nacen así porque éste conjunto de ventajas le confieren al fundador superioridad en su mercado, y esto solamente se logra cuando el mercado opera sin las ventajas injustas que otorga la corrupción a algunos jugadores o “emprendedores” que no presentan igual mérito.



En forma parecida a la etapa de nacimiento, las empresas no exitosas deben poder morir también rápidamente y sin gran dificultad derivada de sus obligaciones hacia sus trabajadores, proveedores, el fisco, y sus acreedores. Una muerte rápida de las empresas no exitosas libera recursos que regresan a la economía nacional (personas, activos físicos, capital intelectual, etcétera) de tal forma que dichos recursos puedan ser reaprovechados ágilmente, lo que beneficia a todo mundo⁵⁸. Esto es aplicable, y necesario, para el momento en el que necesariamente algunas empresas monopólicas u oligopólicas pudieran quebrar como resultado de su ruptura por acción gubernamental. Sería benéfico para México, entonces, que las normas, y su aplicación, en relación con la creación formal e igualmente la bancarrota y liquidación formal de las empresas, favorezcan que estos procesos se realicen de la forma lo más expedita y fácil posible por los empresarios, cosa que no necesariamente ocurre actualmente.

Resolviendo los problemas de monopolio u oligopolio en México

El proceso para “arreglar” un monopolio u oligopolio estriba precisamente en la acción por parte del gobierno federal para forzar, primero, y en un relativamente corto tiempo (meses), el que la compañía o compañías en cuestión no continúen desempeñándose como monopolio u oligopolio, sino que muy ágilmente limiten o ajusten sus precios si técnicamente no pudieran reducir su talla inmediatamente, manteniendo al mismo tiempo, o elevando, la calidad de su producto o servicio. Entretanto, una segunda acción que debe ser hecha en paralelo, es que ellas deben ajustar su talla conforme sea necesario, mientras que la política pública promueve el nacimiento o arribo de nuevas firmas para generar mayor competencia y tener adecuado suministro del mismo bien o servicio a los consumidores. La primera medida es la más apropiada en el corto plazo. Mientras tanto, conforme el gobierno federal implementa varias políticas que limiten el abuso de monopolios y oligopolios, al mismo tiempo debe promover el ajuste en la talla de las empresas dominantes mientras que simultáneamente estimula que surja la presencia de varias otras compañías que produzcan el mismo producto o servicio. Algunas de esas políticas pueden ser: a) Establecer un veto a la contratación de empleados para el monopolio u oligopolio para que éste enfrente dificultades adquiriendo capital humano de reemplazo o para futuro crecimiento, b) Prohibir todo tipo de fusión y/o adquisición en la industria que se sepa que sufre de dominancia de mercado, aún cuando dicha dominancia aplique a sub-mercados particulares o geografías específicas en el territorio nacional, c) Prohibir, punir y monitorear que los consejos de accionistas y los altos directivos-accionistas de las organizaciones que constituyen el oligopolio se comuniquen unos con otros de cualquier forma⁵⁹, aún socialmente, d) Establecer una tasa máxima de retorno, en términos de los dividendos y cualquier otro flujo de efectivo a los accionistas de compañías oligopolísticas, mientras que al mismo tiempo se establecen límites al precio máximo de venta, pureza mínima, tiempo máximo de entrega, y la garantía de que suficiente producto/servicio estará disponible para sustancialmente cubrir la demanda de todos los clientes, entre otras varias políticas que hay y otras aún que pueden desarrollarse contra la dominancia de mercado.

Cada política pública, naturalmente, debe ser filtrada por el tamiz de constitucionalidad bajo la ley mexicana, pero ello todo debe ocurrir con una disposición de “cómo sí”, más que de “cómo no”. Será natural que, como este tipo de acciones públicas raramente han ocurrido en México, surjan muchas controversias y barreras, muchas pseudo-legales, a la acción, que está encaminada precisamente a mejorar la posición del consumidor mexicano, siempre. Algo lograble si la corrupción está desapareciendo al mismo tiempo. El énfasis siempre debe ser no en el cómo terminar con el mercado de empresas y consumidores libres en México, sino, al contrario, en cómo sí preservarlo y robustecerlo eliminando poderes monopólicos/oligopólicos que le restan libertad y competitividad a los mercados.



La forma más definitiva de resolver el problema de monopolios/oligopolios es, de cualquier forma, el fraccionar las empresas para asegurarse de que el control gerencial de propietarios en ese mercado no permanece en unas cuantas manos que tienen total discreción para implementar decisiones precio-cantidad sobre el producto o servicio afectado que constituye un mercado particular. El gobierno federal debe ordenar que la empresa monopolística u oligopolística, dentro de un plazo determinado, venda partes de sus acciones, y los activos reales y capital intelectual asociados, a otro grupo de accionistas que sean tercera parte no relacionada. Por parte no relacionada se entiende que los tenedores de acciones para lo que efectivamente serán nuevas compañías extraídas a partir de la empresa monopolista u oligopolista previa de forma demostrable no tienen conexión alguna con los tenedores de acciones de la empresa original. Los tenedores de acciones de la compañía A no pueden tener relación de familia con los tenedores de acciones de la compañía B, hasta el cuarto grado, por ejemplo, para evitar colusión entre empresas. La estructura de tenencia desagregada de las dos o más compañías que emanan de la compañía original deben así permanecer a lo largo del tiempo, indefinidamente. Esto se puede lograr gracias a la supervisión periódica gubernamental sobre los registros de tenencia accionaria, algo factible gracias a la información que los registros públicos de la propiedad y el comercio operados por gobiernos locales para empresas no cotizadas en bolsa. Y esto es aún más fácil en el caso de acciones comunes que se cotizan en las bolsas de valores, o sea para empresas de tenencia accionaria pública. En este último caso, las casas de corretaje bursátil y la comisión reguladora de la industria financiera son colaboradores adicionales para ayudar en el proceso de monitoreo.

Para compañías en determinada industria donde la tenencia accionaria viniera del extranjero, el gobierno mexicano puede monitorear los registros de propiedad también para asegurarse de que los tenedores de cantidades significativas de acciones en la compañía A no tienen cantidades significativas de acciones en la compañía B, o C, conforme sea el caso, también. Conforme avanza el proceso, el gobierno federal debe alentar que nuevas compañías entrantes que producen el mismo bien o servicio se funden y/o se establezcan con sus operaciones comerciales en el país o en la particular geografía donde previamente un monopolio u oligopolio reinaba. El asegurarse que no habrá escasez del bien o servicio durante este período de transición a un mercado más competitivo debe ser una política pública clave. Una simplificación del proceso de permisos, siempre sin saltar ningún requerimiento legal, de tipo laboral, ambiental, fiscal, etcétera, ayuda a atraer nuevos jugadores al mercado, al igual que ofrecer gravamen reducido temporalmente para dicha industria, también.

Si hay voluntad política para fraccionar monopolios y oligopolios en México, ciertamente habrá formas efectivas de lograr esa meta, esto siempre y cuando la corrupción sea simultáneamente atacada. Es indispensable, sin embargo, que en todo momento el gobierno mexicano esté vigilante de que, a riesgo de repetirlo, la fraccionación de la empresa oligopólica o monopólica no resulte en la escasez de los bienes o servicios de dicha empresa, sea temporal o permanentemente. Y, si fuera necesario, asegurarse de que existen fuentes alternativas de dicho producto o servicio disponibles del exterior o mediante algún otro mecanismo, para asegurar que el consumidor mexicano no sufra innecesariamente la venganza violenta última de los monopolios y oligopolios en la forma de una última, duradera o no, dolorosa indisponibilidad del producto o servicio en cuestión.



El surgimiento de nuevos monopolios u oligopolios

Como mecanismos preventivos para evitar que se formen nuevos monopolios u oligopolios, están disponibles en el arsenal de política pública sobre materia económica el promover y facilitar la inversión extranjera directa, la que agrega competencia a los nacionales en diversas industrias y disminuye la dominancia de mercado. Todo ello siempre asegurando que los inversores extranjeros cumplan igual que los nacionales con todas las leyes mexicanas en todo momento. Sin corrupción se logran muchos efectos benéficos simultáneos en todos los frentes de la actividad económica, política y social de la nación. Esto podría llamarse el dividendo de la erradicación de la corrupción.

Más generalmente, tanto para extranjeros como para nacionales, reescribir leyes con el objeto de bajar las barreras de entrada a todos los distintos sectores industriales del país siempre logra aumentar la competencia comercial, siempre en beneficio del consumidor, que es toda la ciudadanía. Esto es la otra cara de la misma moneda de lo dicho antes sobre la muerte de empresas: que cumpliendo las leyes, sea siempre más fácil fundar nuevas empresas, al igual que liquidarlas o cancelarlas, con el consecuente dinamismo industrial resultante, que conlleva un aumento en la inversión en activos fijos reales, creación de empleos directos e indirectos, y aumento de ingresos al estado por impuestos. Toda una derrama económica generalizada, para beneficio de la ciudadanía.

Monopolios y oligopolios, y la inversión extranjera

México recibe afortunadamente una sana y creciente cantidad de inversión extranjera directa e indirecta, en forma de tenencia accionaria ésta última, cada año. Sin embargo, hay formas de inversión extranjera menos deseables para el país, en función de cómo ésta contribuye, o no, a que se creen, o se refuercen, monopolios u oligopolios en la economía nacional.

Una forma dañina de inversión extranjera ocurre cuando las corporaciones internacionales franquiciantes prefieren entenderse con monopolios u oligopolios emergentes o ya existentes en México que se especializan en adquirir el tipo de franquicias que ofrece el franquiciante. Para éste último, es más fácil entenderse con un solo franquiciatario para tantas “copias” de la franquicia como sea posible instalar en México. El efecto de escala favorece a ambas partes, franquiciante y franquiciatario. El mismo efecto monopolístico nacional o regional y las economías de escala redundan en mejores utilidades para el franquiciatario, y por tanto mejores regalías para el franquiciante. Todos ganan, menos los consumidores, la ciudadanía.

Para evitar esto, deberían crearse restricciones a los franquiciantes, ya que los franquiciatarios estarían difícilmente tentados a cumplir con el requisito de que sus franquicias sean limitadas en número y en localización, o a que haya otros franquiciatarios de la misma franquicia. Podrían los franquiciatarios aludir erróneamente al artículo 5° constitucional sobre la libertad de profesión, industria, comercio o trabajo. Pero esto difícilmente pasa una prueba jurídica rigurosa, pues el 5° constitucional se refiere a personas físicas, y no a personas morales. Y hasta con una sola franquicia, el franquiciatario está pudiendo dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que decida llevar a cabo. La regla a imponer a los franquiciantes es que no pudieran, por ejemplo, otorgar franquicias a una sola persona moral, sino que



Fig. 15 Capital concentrado Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).

secuencialmente las otorguen a al menos siete franquiciatarios distintos, y así seguir en ronda para el segundo bloque de franquicias. Se pondría también atención en los domicilios de cada franquicia, para evitar monopolios u oligopolios regionales.

Igualmente debería ocurrir con los inversionistas institucionales extranjeros, tales como fondos de inversión y portafolios tenedores de acciones de empresas públicas y privadas que tienen presencia en el mercado bursátil y en el mercado accionario privado de México (de empresas no listadas en Bolsa). Similarmente al caso de las franquicias, los fondos extranjeros tenedores de acciones públicas y privadas en México podrían preferir tratar con los consejos corporativos de monopolios y oligopolios. Y los monopolios y oligopolios naturalmente pueden arrojar mejores rentabilidades a los inversionistas, si no es que los accionistas mayoritarios que generalmente controlan dichos monopolios u oligopolios extraen beneficio económico de la empresa a costa de las utilidades de los accionistas minoritarios⁶⁰, como lo serían esos tenedores de acciones extranjeros.

Hay una forma relativamente fácil y rápida de estimar la dominancia de un mercado regional, y/o nacional, el grado de monopolio, u oligopolio, o competencia cuasi perfecta que vive un sector particular de la industria y el comercio gracias a la sencilla medida del Índice de Herfindahl (Hf^{61}).

Ya que la calidad del gobierno corporativo de firmas inversionistas institucionales, como serían fondos de inversión y tenedores extranjeros de títulos mexicanos, es una característica cada día más importante a los ojos de los clientes de dichas firmas inversionistas institucionales para decidir sobre a través de cuál firma invertirán sus ahorros en algunos títulos extranjeros, México puede hacer mucho en publicidad internacional, no necesariamente costosa e inclusive por las redes sociales, en inglés, para promover que estas firmas institucionales enfatizen su no inversión en títulos de empresas monopólicas u oligopólicas de países en desarrollo, como parte de su buen gobierno corporativo⁶². Obviamente, el debido respeto a la anonimidad de cada empresa monopólica u oligopólica debe mantenerse, y esto se logra al mandar el mensaje: “No ayudas a países en desarrollo si inviertes en títulos de empresas oligopólicas u oligopólicas de esos países”, pero sin jamás mencionar qué empresas nacionales son oligopólicas u oligopólicas.

Puntos finales

Las ideas finales sobre la corrupción y los monopolios y oligopolios son sencillas, pero poderosas para iniciar cambios benéficos a toda la población. La corrupción y los monopolios u oligopolios están íntimamente relacionados. La corrupción facilita la creación y existencia de monopolios u oligopolios. Los monopolios y oligopolios a su vez promueven la corrupción como moneda de cambio para obtener las ventajas del gobierno que requieren para sobrevivir y prosperar sin competencia comercial, en detrimento de la población consumidora, que es toda la población. Sin importar qué surge primero, si la corrupción o los monopolios u oligopolios, debe atacarse frontalmente y simultáneamente tanto la corrupción como la prevalencia preocupante de monopolios u oligopolios. El ataque a monopolios u oligopolios debe entablarse en ciertos casos en todo el país, pero también contra monopolios u oligopolios que afectan solamente determinadas regiones o geografías, en las cuales un grupo de ciudadanos sufre los estragos causados por monopolios u oligopolios aunque el resto del país no lo sufra. Todo ciudadano mexicano es igual en valor humano y merece igual trato en todo el país.



Fig. 16. Vigilancia del poder. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).

Hay diversas maneras para atacar a monopolios y oligopolios privados para limitar su daño a la nación, si a la vez se va extinguiendo la corrupción. Atacar la corrupción y la existencia de monopolios u oligopolios requiere de voluntad política continua y tenaz desde el tope del liderazgo político, sexenio tras sexenio para lograr el éxito. Si de plano un sector de la industria se constituye en un monopolio “natural” inevitable, sea tanto a nivel nacional, como a nivel geográfico local, en una democracia liberal que funciona bien, dicho sector debe operarse, sí, como un monopolio, pero como un monopolio operado por el estado. Y sólo se logra tener una democracia liberal que funcione bien, si se extingue la corrupción. No se está promoviendo aquí que haya

más monopolios operados por el estado mexicano pero, en casos extremos y tan poco frecuentemente como sea posible, la preferencia será por un monopolio operado por el estado nacional en una democracia liberal, por encima de un monopolio u oligopolio privado. Dicho monopolio del estado, como “curita”, no debe ser permanente, sino que debería existir el menor tiempo posible sólo para re-establecer un mercado competitivo, funcionante, nuevamente.

Seguirán surgiendo monopolios u oligopolios, pero la clave es constantemente monitorear, limitar, e inclusive disolver conforme sea necesario el poder monopolístico u oligopólico de esas empresas, lo que forzosamente requiere a la vez la acción honesta de servidores públicos no corruptos.



Fig. 17 Luz sobre el estándar. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).

PRÁCTICAS DE CLASE MUNDIAL

Países líderes en el combate a la corrupción, como referencia

Hay países que han logrado tener gran éxito en prácticamente extinguir la corrupción de sus sectores público y privado. Su éxito se reconoce empíricamente por las acoladas en los medios de comunicación, pero con aún mayor credibilidad, por las posiciones que ocupan en los índices generalmente aceptados mundialmente sobre la percepción de corrupción para cada país, como es el que publica Transparencia Internacional, ya mencionado antes.

Los países que de más interés pueden ser para su estudio por los mexicanos en términos de su corrupción, serían aquéllos que tienen una evolución social similar a la de México, más que la de aquellos países que, si bien han mostrado históricamente mucho más bajos niveles de corrupción que México, son sociedades histórica y culturalmente muy distintas a México. Si bien muchos países europeos, principalmente de la Europa anglosajona y del norte del continente, presentan indicadores de corrupción que los colocan entre los países menos corruptos del mundo, esos países son democracias consolidadas por muchos años ya, y que no vivieron el colonialismo que México vivió hasta el siglo XIX, ni han vivido revoluciones sociales como la de 1910, la Revolución Mexicana, cuyos efectos y evolución aún tienen impacto actualmente en su sociedad y en su política.

Es así que se vuelve interesante estudiar, y aprender, de países líderes en el combate a la corrupción, que actualmente muestran un alto grado de desarrollo económico, social, y que además fueron colonias o no democracias hace sólo algunas décadas, y que ahora constan de regímenes democráticos de gobierno. Por ende, se plantea aquí estudiar principalmente la historia de gran éxito de Singapur, que continúa año con año como líder en su exitoso combate a la corrupción⁶³, y que refleja también cada año mejoras en el ingreso per cápita y en la distribución del ingreso (índice de Gini), así como en el alto grado de felicidad que reportan sus ciudadanos⁶⁴. Se propone tomar también algunos aspectos de clase mundial en la lucha contra la corrupción de Hong Kong, hoy en la posición 14⁶⁵. El gobierno de esta “ciudad-país-antigua colonia” fue hace pocos lustros “retornado” a la República Popular China, conforme a tratados entre éste último y la Gran Bretaña. Hong Kong ha tenido históricamente posiciones incluso entre los primeros diez países con menor percepción de la corrupción en el mundo, y sus instituciones de lucha contra la corrupción ciertamente deben continuar trabajando con efectividad actualmente. Su estudio aporta en cierta medida a las pretensiones de elaborar un modelo mexicano anticorrupción efectivo, como lo tiene Singapur en la actualidad y hacia el futuro. Finalmente, hay ciertos elementos de las iniciativas contra la corrupción de las Filipinas que también han sido innovadoras y han dado resultados positivos en la lucha contra la corrupción que también serán comentados abajo.

Así, los principales elementos que se presentan aquí sobre las mejores prácticas contra la corrupción que podría incorporar México en su propio arsenal institucional y operativo, serán aquellas que en el contexto social e histórico, además de en la aceptación jurídica internacional actual, parecen ser las políticas más idóneas a incorporar en un nuevo modelo mexicano contra la corrupción que realmente logre la meta de extinguirla. Y dichos elementos provendrán principalmente de lo implantado en Singapur, también de ciertos elementos de Hong Kong que son procedimientos aplicables en aquella comunidad asiática, y también algún componente valioso de Filipinas, que haya sido reportado como útil en la lucha contra la corrupción por los expertos mundiales. Inclusive, avances derivados de Teoría de Juegos en Ciencia Política en particular respecto a normas y “meta-normas”, como se verá más abajo, deberían ser incorporados como parte de las mejores prácticas de clase mundial para el modelo ideal anticorrupción.

Consistencia jurídica jerárquica y liderazgo político ante los actos de corrupción

Una parte sustancial del texto siguiente emana principalmente de dos fuentes. La primera, es la misma CPIB, “Corruption Practices Investigation Bureau”, es decir, la “Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas” de Singapur⁶⁶, pero también proviene otra buena parte del análisis que Robert Klitgaard hace no sólo sobre la corrupción en Singapur, y en Hong Kong, en estudio publicado por este autor hace varios años⁶⁷, sino también de otras partes del mundo analizadas por Klitgaard, como lo es las Filipinas. Pero, adicionalmente, hay también aquí ideas y políticas valiosas en la lucha contra la corrupción que emanan de la ICAC, Independent Commission Against Corruption, la Comisión independiente Contra la Corrupción, de Hong Kong⁶⁸.

La constitución política de Singapur es de las pocas que incluye la palabra corrupción en su texto⁶⁹, aludiendo al hecho de que el presidente puede ser destituido de su cargo (y eventualmente investigado por el CPIB) cuando el Primer Ministro, o al menos veinticinco por ciento de los miembros de su Parlamento, determinan que el presidente ha incurrido en corrupción por abuso de su puesto, o inclusive por su mala conducta. México instituyó la palabra corrupción en la Constitución, en 2021, en el artículo 108, estableciendo por primera vez que el presidente de la República puede ser imputado y juzgado por hechos de corrupción. El que la constitución declare que hasta el presidente puede ser juzgado por corrupción manda una buena señal a la ciudadanía, de que ese crimen no se tomará a la ligera, y que nadie debe estar por encima de dicho principio de no corrupción. Jerárquicamente, implica en términos constitucionales que si el presidente puede ser imputado por actos de corrupción, todo individuo en el país puede igualmente ser imputado por hechos de corrupción. Esto representa un acto de gran liderazgo político en la dirección correcta por parte de cualquier líder de estado.

Características más salientes del diseño anticorrupción de clase mundial, principalmente a partir de los diseños de Singapur, Hong Kong, y un poco de las Filipinas

- a. El/la líder político(a) máximo(a), con convicción en la vital importancia de extinguir la corrupción, debe constantemente expresar en sus comunicaciones y en sus actos su compromiso sincero, público, constante, inmanente, enarbolando la campaña de extinguir la corrupción, como un motor indispensable para movilizar al servicio público y a la población civil para comenzar y continuar indefinidamente a atacar y extinguir la corrupción. En ello, el mejor ejemplo es el Primer Ministro singaporeano, Lee Kuan Yew, quien desde 1959 impulsó la extinción de la corrupción en el entonces recientemente más autónomo



país, formando los cimientos de la actual CPIB, y que, junto con el actual Primer Ministro en funciones, continuó hasta el día de su muerte en 2015 día promoviendo y difundiendo la política de cero tolerancia a la corrupción de dicho país

b. Elevar escalafones de salario no necesariamente reduce la corrupción significativamente⁷⁰. Esto tiene sentido porque la gran corrupción realmente no tiene comparación en la escala de su beneficio económico, en relación con la compensación formal que recibe en su función pública el/la corrupto(a). Más que elevar salarios muy por encima de aquéllos dignos para el servicio público, es importante seguir otras políticas anticorrupción que a lo largo de décadas han probado ser exitosas en países con muy baja corrupción, y que se presentan en los puntos siguientes

c. Para extinguir la corrupción, es imprescindible que exista la simetría de información. Simetría de información en el sentido de que la ciudadanía sepa qué está haciendo el servicio público con los recursos públicos y los bienes de todos, y además cómo son las finanzas de dicho servidor público. Y poder saberlo fácilmente con la frecuencia necesaria y sin previo aviso. Información simétrica es que la población sepa tanto sobre el quehacer de los servidores públicos, así como de sus patrimonios, como éstos últimos mismos lo saben, en todo momento. Para ello, las oficinas de registros públicos que son las que almacenan récords de las escrituras de propiedades inmuebles y la tenencia accionaria de las sociedades, además de los récords bancarios (potencialmente tanto nacionales, como internacionales con la ayuda de gobiernos extranjeros), así como cajas fuertes bancarias contratadas por individuos, deben ser fuentes creíbles de datos y deben poderse revisar con relativa libertad cuando hay sospecha fundada de que un individuo está involucrado en un acto de corrupción. Para acciones de empresas públicamente cotizadas, el acceso a información sobre tenedores debe ser igualmente fácil. Son igualmente útiles para aportar información de este tipo también las entidades involucradas en el corretaje de títulos financieros y las oficinas de los registros públicos de la propiedad y del comercio. Igualmente, aunque de forma más general, lo deben ser la libre prensa y los libres medios de comunicación, que hacen sus investigaciones independientes

d. La garantía total del anonimato de los ciudadanos denunciantes de actos de corrupción que puedan ser cometidos por miembros del servicio público es esencial. Se logra con líneas telefónicas “hotlines”, disponibles 24x365, y actualmente también se puede lograr dicha comunicación anónima con servicios de what’s app, por ejemplo, que podrían hacerse disponibles en quioscos, casetas, o establecimientos comerciales donde el denunciante pueda escribir un mensaje de “what’s”, sin que por ello haya revelado su nombre, ni imagen física, ni su número celular y por ende mantiene secreta su identidad.

e. La carga de la prueba debe moverse del investigador o fiscalizador por parte del Estado, al imputado, servidor público y, en su caso, también al individuo privado que pudiera ser el incitador a conducta corrupta en el servidor público. Así, el servidor público en la mayoría de los casos, pero también algún individuo privado en otros casos, puede(n) y debe(n) ser detenido(s) mientras que la investigación sobre su patrimonio, sus flujos económicos históricos y su estado financiero total (bancario, registros de propiedades inmuebles, títulos accionarios o bonos de inversión, fortuna en el extranjero, etcétera) pueden ser más completamente investigados por la entidad anticorrupción. El enriquecimiento no explicable siempre genera gran sospecha de que ahí hubo corrupción. Aquéllos con riquezas inexplicables deberían probar cómo la adquirieron lícitamente. Y la detención puede y debe ser acompañada por búsquedas o cateos, aún sin orden judicial que permita el cateo, cuando la entidad investigadora de corrupción así lo determina, por causa fundada



f. Las privatizaciones y concesiones de bienes y servicios públicos no son la solución para la corrupción. Al contrario, junto con los monopolios y oligopolios privados, son en general grandes promotores de la corrupción, por lo que la privatización o concesión de alguna infraestructura o servicio público que constituye un “monopolio natural”, en particular, no es nada aconsejable. Por ejemplo, la única carretera entre un punto A y un punto B es un monopolio “natural”. No se construyen típicamente más de una carretera de peaje, y quizás existiera la carretera estatal o federal gratuita, de mucho menor calidad y que requiere más tiempo para llegar al destino. Un monopolio u oligopolio en servicios públicos podría ser la provisión de agua potable y saneamiento en una ciudad. Los monopolios y oligopolios privados deben ser fragmentados para que sus partes compitan entre sí y se operen y sean propiedad de numerosos propietarios en lo posible, para reducir el incentivo de corrupción a los servidores públicos que frecuentemente pueden interactuar y acordar con los líderes de monopolios y oligopolios. Es menos dañino en términos de promoción de la corrupción que la gran infraestructura del país y servicios públicos que constituyen monopolios naturales, permanezca bajo la operación por el estado nacional, con la mayor transparencia posible (auditorías privadas semestrales, observadores ciudadanos constantes, apertura en su gobierno corporativo, etcétera), ya que un monopolio público con un gobierno transparente elegido democráticamente es mucho mejor que un monopolio (u oligopolio) privado para reducir posibilidades de corrupción

g. Más allá de que existan normas jurídicas que permitan a las autoridades anticorrupción investigar las cuentas de bancos de un sospechoso, o sus cuentas nacionales e internacionales de inversión en acciones y/o bonos u otros títulos, debe también estudiarse por las autoridades anticorrupción el nivel de vida material, gastos y compras, su evolución a lo largo del tiempo, cada mes para los últimos años, y la cantidad de recursos pecuniarios que presenta el sujeto bajo investigación, de tal forma que el análisis sobre posibles actos de corrupción sea integral para mejor explicar cómo y cuándo, en su caso, ocurrió la conducta corrupta

h. Se debe publicitar la lucha contra la corrupción e inclusive, glamorizarla, todo el tiempo. Explicar por medio de anuncios en los medios de comunicación qué es la corrupción, cómo opera, cómo puede detectarse, promover que se denuncie, impartir seminarios al público, dar la certeza de que las denuncias serán anónimas, publicitar casos exitosos narrando la historia y cómo se logró el éxito, sin omitir mencionar a los culpables. Además, ayuda el generar historias glamorosas sobre cómo los “buenos” logran prestigio y éxito cuando denuncian a los corruptos, y cómo los investigadores de corrupción son prestigiosos y admirados por la sociedad, mientras que los corruptos deben ser despreciados. Todo ello contribuye a una conciencia cívica y a una animadversión generalizada hacia la corrupción, así como a un apetito popular por la prevención y eventual extinción de la corrupción a nivel nacional. En países con muy baja corrupción, hay casos inclusive de series de telenovelas que tratan así el tema del combate a la corrupción, con amplia difusión nacional. Este procedimiento ha operado muy exitosamente en las Filipinas

i. Si bien la denuncia anónima debe ocurrir con libertad, debe estar claro a la ciudadanía que, idénticamente, el hacer una falsa denuncia dolosa (con intención de dañar al falso imputado) de corrupción sobre alguien, quizás con fines de venganza o fines políticos, constituye también una ofensa seria, castigable bajo el rubro de declaraciones falsas a un oficial en el código penal, como ocurre en Singapur⁷¹, lo que acarrea una potencial pena de prisión y de multas al infractor

j. Los servidores públicos a cargo de combatir la corrupción, sin excepción, deben ser sujetos a un escrutinio aún más riguroso que el resto del servicio público. Si debe ser fácil poder revisar los historiales patrimoniales y de flujos de efectivo de todo el servicio público, esto sistemáticamente debe ser aún más riguroso con el pequeño grupo que constituye la institución de combate a la corrupción nacional. Y en caso de que se detecten faltas, la penalización debe ser aún más rigurosa que para la generalidad de los servidores públicos y los privados que se embarcan en actos de corrupción⁷². La exigencia efectiva, y cumplimiento de las normas (jurídicas) en toda sociedad, se logra precisamente al hacer que los encargados de asegurar que las normas se sigan, sean aún más observados, y más castigados si infringen las normas, que el resto de la sociedad⁷³. Se puede decir que los “meta-servidores” públicos a cargo de combatir la corrupción, deben ser aún más observados, y deben seguir “meta-normas” aún más estrictas que las aplicables a la ciudadanía general, para lograr que los meta-servidores a su vez no incurran infracciones a las normas anticorrupción ellos mismos.

k. La institución pública a cargo del combate a la corrupción del país, debe ser totalmente independiente y capaz de investigar a cualquier servidor público o individuo privado, sin excepción. La ley no exceptúa ni al presidente, ni al primer ministro, ni al senador, ni al juez, ni al fiscal, ni a nadie en el servicio público. El que la entidad anticorrupción pueda investigar a cualquier persona en el país, genera una gran confianza de que nadie está por encima de la ley, y que la institución realmente no debe lealtad a nadie, más que a la ciudadanía. En el caso del ICAC (“Independent Commission Against Corruption”), de Hong Kong, su nombre mismo, traducido como Comisión Independiente Contra la Corrupción en Hong Kong, lo reafirma ante la ciudadanía

l. Debería observarse más cercanamente y más frecuentemente la situación y evolución patrimonial y de flujo de efectivo de servidores públicos de alto nivel en áreas de gobierno tales como las relacionadas con la seguridad pública, la milicia, las aduanas, la educación, los pagos de bienestar, y la salud pública. La estudiosa de corrupción de extracción militar Sarah Chayes⁷⁴, operando en países musulmanes de Asia, como Afganistan, documenta que en esas áreas del servicio público en las que la atención a, e interacción diaria con, la ciudadanía por los rangos más bajos de esas organizaciones es extenso. La extracción por pequeña corrupción ocurre constantemente, porque los altos rangos exigen, y reciben, porciones sustanciales de esos sobornos pequeños en agregado, ya en forma de gran corrupción, y a cambio protegen los empleos de los rangos más bajos. Esto puede ocurrir también en México, como muchos ciudadanos podrían corroborar cuando se enfrentaren con un policía de tránsito automotriz que les dijera por ejemplo algo así como: “Si, mi jefecito, pero yo tengo que pasar mi parte diaria a los jefes arriba...” En este sentido, el poder ver esa evolución patrimonial y de flujo de efectivo de esos servidores públicos no debería considerarse como una violación de sus derechos constitucionales a la privacidad. Ellos son servidores públicos, su ingreso personal debe provenir sólo de los impuestos. Y el bien común, el bien de todos, depende de que ellos cumplan con su deber sin que medien pagos ocultos. Constitucionalmente, la justificación para poder observar con la frecuencia necesaria esa evolución económica en patrimonio e ingresos está en que si ellos prefieren no “perder su privacidad” bancaria o en el registro público de inmuebles y tenencia de empresas, ellos pueden migrar de ese trabajo, a muchos otros, tanto en el servicio público como en el sector privado. Hoy en día, esa capacidad de escrutinio sobre los patrimonios y flujos de servidores públicos se toma cada vez menos como una violación a los derechos humanos de esos servidores públicos, por el bien común⁷⁵. El Banco Mundial⁷⁶ inclusive lo recomienda por la seguridad

nacional de los países, y lo justifica argumentando que la prevención de la corrupción y el exponer la riqueza inexplicable de servidores públicos y sus familiares inclusive, constituyen intereses públicos serios y legítimos.

Patrón emergente de una buena solución

De los principios anteriores, y a riesgo de repetición, se puede decir que surge un patrón del actuar de aquéllos países que han logrado un significativo progreso en la extinción de su corrupción. Países que eran colonias o tenían alguna forma de dependencia de otros países más avanzados en el pasado, como es el caso de México. Países que tenían una reputación negativa sustancial por su abundante corrupción hace solamente algunas décadas. El patrón se puede resumir como sigue:

1. El líder político debe estar convencido de que hay que extinguir la corrupción, y debe comunicarlo claramente a su pueblo. Sus sucesores, igual.
2. Pagar bien en el servicio público, pero no tanto que atraiga gente poco valiosa, más interesada en el salario, que en servir a su país. Más salario no necesariamente reduce el incentivo de tomar parte en la “gran corrupción”.
3. Para extinguir la corrupción, las finanzas del servidor público deben ser transparentes, todo el tiempo. Constitucionalmente, hay formas de confrontar esta exigencia, por el bien de todos. Se verá más tarde, que México ya tiene los rudimentos constitucionales, perfectibles ciertamente, para lograr esta transparencia cuando hay sospechas de corrupción.
4. El anonimato del denunciante es clave. No debe haber posibilidad de detectar quien denuncia ante el órgano anti corrupción.
5. La carga de la prueba de la inocencia del imputado en acusaciones de corrupción grande o grave, debe estar sobre el imputado, no sobre el estado nacional. También hay rudimentos constitucionales para hacer esto posible en México, perfectibles.
6. En el rubro económico, debe lanzarse una lucha frontal contra

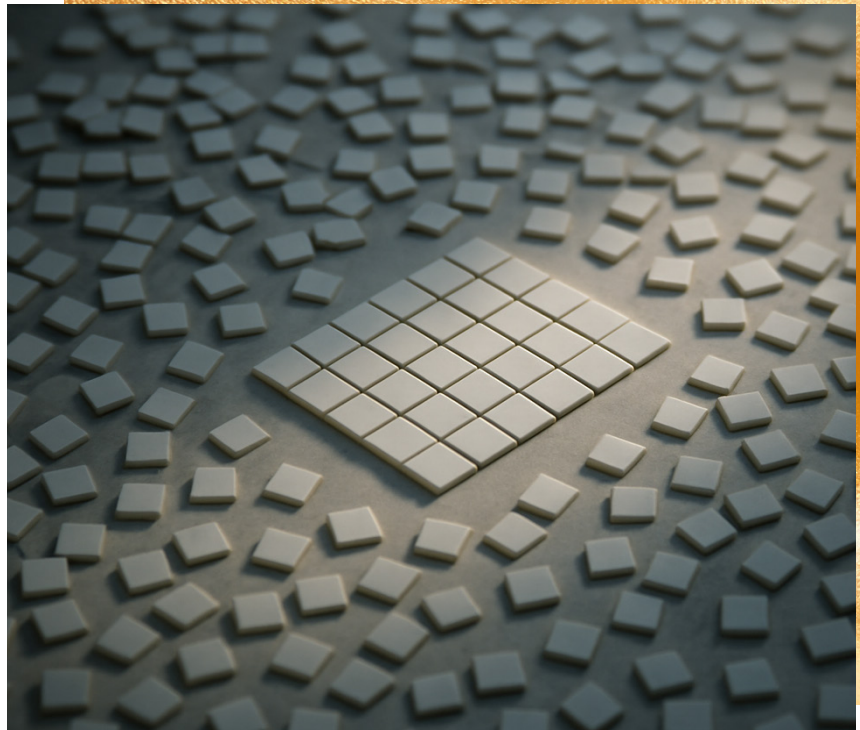


Fig. 18. El patrón que emerge. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).

todo monopolio u oligopolio privado. Y cuando un activo, proyecto o infraestructura forzosamente deba ser monopolístico, es mejor que éste se maneje por el estado nacional, con total transparencia y publicidad de sus actuaciones.

7. El estudio sobre el patrimonio del servidor público bajo sospecha de corrupción debe ser detallado, multidimensional, total, y por un largo tiempo, uno a dos años mes con mes, generalmente, para entender integralmente cómo evolucionó la riqueza del sospechoso.

8. Los medios populares de entretenimiento son muy efectivos en crear una conciencia y formar una opinión negativa de la población hacia la corrupción: telenovelas, noticias, películas, narrativas, deben promover las victorias sobre los corruptos, y el desprecio por los corruptos, y publicitar los éxitos reales recientes sin miedo a mencionar nombres de los condenados por corrupción. Los medios de comunicación son el medio por el cual el liderazgo público, y privado, mantienen vivo el impulso a la conciencia popular sobre la importancia de erradicar la corrupción, y cómo la población puede ayudar a lograrlo.

9. Hay que evitar las falsas denuncias. Una denuncia falsa debe tratarse como una declaración falsa ante una autoridad con la consiguiente pena de prisión.

10. Los servidores públicos a cargo de la entidad gubernamental de lucha contra la corrupción deben estar bajo un aún mayor escrutinio constante sobre sus finanzas que los demás servidores públicos, y sus faltas deben ser castigadas aún más duramente que las de los demás servidores públicos.

11. La entidad gubernamental de lucha contra la corrupción, por derecho constitucional, debe poder iniciar investigaciones y acciones contra literalmente cualquier servidor público, incluidos el presidente, cualquier ministro de la suprema corte, juez, cualquier diputado o senador, fiscal, y cualquier servidor público, en general.

12. El escrutinio sobre la evolución y estado de las finanzas personales, ingresos y patrimonio monetario, inmobiliario y accionario sobre altos funcionarios, y sus familiares cercanos, de las fuerzas de seguridad, la milicia, las aduanas y los servicios públicos de salud debe ser aún más frecuente, más estrecho y más detallado que a otras funciones públicas, por el flujo diario de pequeña corrupción de sus subordinados a ellos, que se convierte en gran corrupción, debido a la gran interacción que estas áreas del gobierno tienen con la ciudadanía general día a día.

Para poder implementar estas medidas, será menester contar con el andamiaje constitucional y legal que haga la lucha contra la corrupción accionable de forma concreta en el quehacer gubernamental día a día, con la participación de la ciudadanía, conforme ésta se concientiza por medio de la difusión gubernamental, todo ello impulsado por líderes gubernamentales y del sector privado que le den claridad y continuidad al proyecto más importante para México en el siglo XXI, el lograr extinguir su desafortunada corrupción, prevaleciente por tantas décadas, y siglos.

CORRUPCIÓN Y LA LEY

Las leyes, el conjunto de normas obligatorias del Estado mexicano, juegan un importante papel en limitar, o favorecer inadvertidamente, que exista la corrupción. México es un país con herencia jurídica napoleónico-románica, por lo que su derecho es escrito, - llamado derecho positivo, en donde la ciudadanía debe ceñirse a lo que establecen reglas de conducta escritas. En este orden de ideas, el cuerpo de normas jurídicas escritas que aplican a la sociedad mexicana deben ser siempre consistentes con, y emanar filosóficamente de, lo que establece la norma “fundamental”, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM⁷⁷, en su versión vigente. La CPEUM se constituye como el tronco principal que establece los derechos y obligaciones aplicables a todos los individuos en la nación, derechos y obligaciones que no pueden ser alterados ni desobedecidos por nadie.

Cuando a alguna persona no se le respeta alguno de los derechos establecidos en la CPEUM, en particular cuando dicho derecho no lo observa un servidor público, la figura jurisdiccional del Amparo está disponible para que un juez federal pueda darle el amparo de la justicia federal al demandante. Esto implica que lo que pueda mejorarse en el texto de la CPEUM en aras de extinguir la corrupción en México, tiene mayores probabilidades de tener consecuencias favorables a esta iniciativa que lo que se incluya en las leyes “secundarias”, es decir, las demás leyes que deben por fuerza ser consistentes con lo establecido en la CPEUM de forma integral.

Si algún servidor público no cumple con algo que está estipulado en la CPEUM, y/o también en leyes secundarias, y por ende daña a algún individuo en México, éste tiene el derecho de buscar el amparo de la justicia federal (jueces federales, en segunda instancia tribunales colegiados y en última instancia, si fuere necesario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación).

El amparo, si concedido por violación a derechos establecidos en la CPEUM, entonces obliga a que el servidor público que había sido omiso al respecto, deba hacerle efectivo en la mejor manera factible dicho derecho al individuo quejoso. Esto es un arma poderosa, indispensable de hecho, para remediar de la mejor manera posible posibles abusos de las autoridades en México para la ciudadanía, generalmente causadas por la corrupción.

Es importante entonces considerar lo que está escrito en la ley, primordialmente en la CPEUM, y qué podría faltar para contribuir jurídicamente a la solución de la corrupción. El acercamiento de este análisis al derecho escrito mexicano es desde una perspectiva práctica. Queriendo desarrollar una solución concreta y duradera para atacar con efectividad la corrupción en México, ante el estado actual de las cosas: ¿Qué aspectos, los mínimos esenciales posibles, deben modificarse o agregarse en las leyes positivas (escritas) existentes para coadyuvar a dicha solución? Tomar otra perspectiva sería meramente desarrollar aún otro estudio teórico sobre los problemas de la corrupción en México, sin plantear pasos accionables, concretos y factibles que la sociedad mexicana pueda comenzarle a exigirle a sus gobernantes y ciudadanos corruptos del país hoy, y en los años venideros.



Derechos fundamentales y la corrupción

El artículo 1º constitucional establece que todas las personas deberán gozar de los derechos humanos establecidos en la misma CPEUM, y de los encontrados en los tratados internacionales de los que México es parte. Pero para que esos derechos humanos, o derechos fundamentales, puedan ser plenamente respetados por todos, la corrupción no debe existir⁷⁸. Porque la corrupción distorsiona la actuación de los servidores públicos, de tal forma que éstos no pueden ni están motivados para tutelar, cuidar, que los derechos públicos de toda persona sean respetados. De hecho, los derechos fundamentales de los pobres o grupos más vulnerables son los más atropellados cuando existe corrupción.

Extendiendo este argumento, hay estudiosos del derecho en otros países que han postulado que el vivir libre de corrupción debe constituirse como un derecho fundamental en sí mismo⁷⁹. ¿Por qué no incluir en el artículo primero constitucional, como oración en continuación de su primer párrafo, que vivir libre de corrupción es un derecho fundamental de toda persona? La redacción sencilla podría ser:

A continuación de: ... “bajo las condiciones que esta Constitución establece.” Adicionar: “Toda persona tiene el derecho fundamental a vivir libre de corrupción”.

El cohecho y la prisión preventiva oficiosa

En este rubro, se tiene que intervenir en dos partes. Una es en mejorar la definición de soborno (cohecho) en el código penal federal mexicano vigente, y el otro es en el artículo 19 constitucional, mismo que alude al delito de corrupción.

Como se ha mencionado, cohecho es sinónimo de soborno. El soborno es la forma más común por la cual los servidores públicos e individuos del sector privado ejercen corrupción. El artículo 222 del Código Penal Nacional⁸⁰ define el cohecho y sus consecuencias de manera satisfactoria cuando el texto de este artículo se compara, por ejemplo, con aquél para el soborno que tiene el código de los Estados Unidos (“U.S. Code, article 201⁸¹”).

Sin embargo, en el artículo 222 penal mexicano falta agregar que también comete cohecho aquél testigo, o declarante ante cualquier autoridad a cambio de dinero o cualquier otro beneficio. Esta pequeña adición atajaría una cantidad sustantiva de falsedades de testimonio, de declaración o de afirmación ante diversas autoridades en México, que son a su vez instrumentos para “amarrar” actos aún mayores de corrupción que el soborno mismo que muchas veces es dado por dicho falsario al servidor público que toma testimonio falso. El ajuste al artículo 222 del código penal sugerido sería como sigue:

Fracción II: ... a su empleo, cargo o comisión,] “e igualmente aquél que dé, prometa, reciba, o acepte para sí o como interpósita persona dinero o cualquier beneficio relacionado con algún testimonio, declaración, afirmación o negación falsa ante cualquier autoridad o entidad pública”],



Por el lado del artículo 19 constitucional, que versa sobre lo que comúnmente se denomina la “prisión preventiva oficiosa”, se ha agregado como reforma constitucional recientemente al delito de corrupción. Pero el 19 de la CPEUM indica esa prisión preventiva solamente tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, además de crímenes electorales, robo al transporte de carga, etcétera.

Es decir, este artículo sí alude a la corrupción, pero aún no incluye el cohecho, o soborno, cuando es éste delito la forma más común por medio de la cual se ejerce la corrupción, incluida la gran corrupción. Como el ya citado artículo 222 penal de hecho marca una línea de separación entre sobornos “grandes” y “pequeños”, que está referida al índice de la UMA diaria, “unidad de medida de actualización⁸²”, y que actualmente pone esa línea en alrededor de los cincuenta mil pesos, no sería necesario en el artículo 19 constitucional el establecer montos de soborno que ameriten la prisión preventiva oficiosa y cuales sobornos “pequeños” no requieran ni investigación ni la aplicación del 19 constitucional mismo.

Dado lo anterior, se propone que el artículo 19 constitucional vigente, en relación con la corrupción, sufriera la siguiente sencilla adición, la que tendría un fuerte efecto de amedrentamiento a los corruptos:

... tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito], [y ejercicio abusivo de funciones, ...] “, cohecho,” [robo al transporte....

Aquí cabe el comentario de que los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones son mucho más difíciles de encuadrar en actos delictivos cometidos por los servidores públicos, mientras que el delito de cohecho (soborno) es no sólo mucho más común en ocurrencia, sino que además es mucho más fácil de encuadrar como para poder ejercer la acción penal, en particular en casos de “gran” corrupción.

Los monopolios y oligopolios en la Constitución

El artículo 28 constitucional alude a los monopolios, las prácticas monopólicas y los “estancos”, pero no menciona los oligopolios. En la práctica literalmente no existen monopolios privados, mientras que sí pueden hoy existir diversos oligopolios privados, a nivel nacional o a nivel regional. Dada la gran correlación que se aprecia entre la corrupción y los monopolios y oligopolios, es menester que la Constitución prescriba la directiva a seguir por el Estado mexicano para abatir éstos últimos en todo momento.

Dado lo anterior, sencillos afines al texto del 28 constitucional serían de gran apoyo para contribuir al abatimiento de la corrupción, a la vez que para mejorar el poder adquisitivo de la ciudadanía y las oportunidades de empleo y de prosperidad de las pequeñas y medianas empresas mexicanas conforme los monopolios y oligopolios sean debidamente atacados por mandato de la norma constitucional.

En el primer párrafo del artículo 28 constitucional:

“Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios regionales y nacionales, los oligopolios regionales y nacionales, las prácticas monopolísticas u oligopólicas, los estancos, ...”

Agregándose también un puntual párrafo entre el primero y el segundo hoy existentes:

“El Estado determinará en cada caso de monopolio u oligopolio las medidas económicas a tomar para resolver dicha falla de mercado lo más pronto posible en cuanto ésta surja, con el objeto de evitar las consecuencias adversas a la población en términos de precio, cantidad, calidad, tiempo de espera y disponibilidad del producto o servicio sujeto a la condición de monopolio u oligopolio. El Estado también promoverá que dicho monopolio u oligopolio se transforme en un mercado competitivo en el plazo más breve que sea razonablemente posible mediante las políticas económicas de mercado que sean procedentes.”

No puede concebirse un México sin corrupción, donde existan monopolios u oligopolios privados que dañan seriamente el bienestar material de toda la población cada día, en particular el bienestar de los más vulnerables.

Los financiamientos de campañas electorales y de partidos

El artículo 41 toca el tema de elecciones y partidos en la Constitución. Si bien se está proponiendo una reforma que afecta este artículo así como al Instituto Nacional Electoral, con base en la importancia de que toda la población se entere de inmediato y en todo momento con total transparencia sobre quién financia a quién, cuándo, y con cuánto; y con el apoyo empírico de qué ha funcionado al respecto en otros países democráticos que tienen mucho menores grados de percepción de la corrupción a los ojos de Transparencia Internacional, se proponen un sencillo y conciso ajuste textual que logra esto.

Al final del primer párrafo del artículo 41 de la CPEUM, fracción numeral romano II, como continuación del párrafo debería agregarse:

“Para todo recurso de origen privado, cada partido y candidato independiente deberá informar y presentar de inmediato en los medios digitales abiertos a la población para cada contribución quien, persona física o moral, con cuánto recurso, monetario o en especie y detallando en qué consiste ésta última, está contribuyendo a cada partido, candidato independiente, o campaña política. Toda contribución con valor mayor a diez UMA’s (Unidad de Medida y Actualización) diarias deberá ser mediante cheque nominativo. Todo candidato deberá presentar su declaración patrimonial de forma mensual durante todo el tiempo de campaña, tal y como si fuera servidor público federal y publicarlo también en los medios digitales abiertos. Aquél que no lo hiciere podrá ser denunciado y su delito se equiparará al fraude.”

La claridad en que todo recurso privado que se use por cualquier candidato, partido o campaña debe ser identificado y sabido por toda la población, es un elemento esencial para que la ciudadanía sepa de inmediato qué intereses personales pueden distorsionar la futura actividad política potencial de toda persona que tenga interés en eventualmente ocupar un puesto público de elección. Sólo así las mayorías ciudadanas pueden determinar, en conjunto y por voto libre y secreto, qué candidato será el que mejor cubra las necesidades de la mayor parte de la población en cada momento. La fuerza política de todo candidato debe radicar en el apoyo que el pueblo en su mayoría le otorga en cualquier momento, desde



cuando está por decidirse quienes estarán a cargo del servicio público, y que por ende tendrán discrecionalidad sobre el uso y aplicación de los bienes y recursos públicos por el período que duren en funciones.

El "Sistema Nacional Anticorrupción" y el 113 constitucional

La corrupción tiene que atacarse de forma centralizada, no distribuyendo responsabilidades de forma "diluida" entre muchas organizaciones públicas. La asignación y coordinación de responsabilidades debe estar unificada bajo una sola organización cuyo mando y seguimiento a las actividades de otras organizaciones que le apoyen aseguren que todos los involucrados hagan su trabajo y den buenos resultados en tiempo y forma. En tiempos de crisis, comparables a la crisis de corrupción que vive México ya desde hace un muy largo tiempo, el liderazgo debe ser de comando, no democrático o consensual, y sí con todas las áreas de apoyo alineadas al, y debajo del, comando central⁸³. Esto sólo se logra con un Sistema Nacional Anticorrupción cuya configuración organizacional obedece a, se coordina por, y apoya a, en todo momento, la entidad líder, sin posibilidad de que haya una administración "democrática" o "consensuada" de los distintos órganos que constituyen el Sistema.

Fig. 19 El centro del liderazgo ético. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).



Actualmente ya está determinada la puesta en marcha de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, como entidad del poder Ejecutivo federal que será responsable de que no haya actos de corrupción o colusión en México⁸⁴. Ella deberá ser entonces el comando central en la lucha contra la corrupción, como dicha entidad líder única.

Entretanto, el artículo 113 constitucional cuya última reforma data de 2015, no refleja idóneamente la meta anticorrupción y el entramado organizacional que deberá prevalecer para que esto se logre plenamente, bajo el compromiso de extinguir la corrupción ya planteado frecuentemente por la administración actual⁸⁵ desde antes de las elecciones de 2024. Es necesario reflejar tanto el objeto del Ejecutivo respecto de la corrupción, como la flexibilidad operativa y el liderazgo adecuado e indispensable que ya ha sido asignado a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno en una nueva, breve redacción del artículo 113. Un planteamiento viable para arrancar con esto es:

“Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción estará al mando de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, a la que le deberán prestar todo el apoyo efectivo e información veraz y expedita por parte de todas las demás instancias de gobierno de los tres poderes y de todos los órdenes de gobierno, para que la Secretaría pueda cumplir con su cometido de eliminar la corrupción en la República.

Corresponderá a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno coordinar dicha colaboración con cualquier organismo público. Durante y para cualquier investigación sobre posibles actos de corrupción, el Secretario Anticorrupción y de Buen Gobierno tendrá jerarquía igual a la del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la del fiscal, a la de cualquiera de los senadores o diputados presentes o pasados, federales o de cualquier estado, y a la de cualquiera de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno no sufrirá corte presupuestal alguno y gozará al menos de ajustes presupuestales iguales a la inflación anualmente. Nadie podrá destituir al Secretario Anticorrupción y de Buen Gobierno, y éste será elegido cada seis años sin posibilidad de reelección por mayoría calificada tanto del Congreso como del Senado, de entre diez candidatos debidamente preparados y de inmejorable fama pública propuestos por el Presidente del Ejecutivo. El Secretario Anticorrupción y de Buen Gobierno podrá ser investigado por actos de corrupción cuando dos terceras partes de alguna de las cámaras así lo solicite, en cuyo caso ocupará su cargo el Subsecretario que se determine por mayoría calificada de las dos cámaras mientras se elige al nuevo Secretario dentro de los noventa días siguientes a la destitución del anterior.”

Este texto nuevo para el 113 constitucional cumple con la realidad actual de la ya definitiva existencia de la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, a la vez que actualiza la línea de mando, las jerarquías y las más amplias capacidades de investigación de esta entidad anticorrupción que ya forma parte del Estado mexicano. El texto propuesto ofrece remedios preventivos a posibles deficiencias en la operación de este organismo anticorrupción ya tomando en cuenta que éste se ha constituido como una Secretaría, y no como un “cuarto poder autónomo”, como es el de Singapur, por ejemplo, y que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos también reporta al Presidente allá.



Sentido práctico ante la corrupción bajo la situación actual

Sería impráctico, ejercicio meramente académico e inútil, el proponer aquí una serie de reformas que aspiraran a simplemente “importar” una solución extranjera que ha funcionado afuera del país, en condiciones sociales, culturales, políticas y económicas distintas a las de México. Es más rápido, factible, e implementable con menor resistencia política el hacer ciertos ajustes considerados esenciales, bajo una filosofía minimalista, a lo que ya está plasmado en el cuerpo normativo mexicano, sí con la intención de implantar en México normas que induzcan al servicio público y a la sociedad mexicana en general a alejarse de la corrupción a partir de ahora, lo más ágilmente posible, y sin dar posibilidad a crisis sociales, políticas o económicas con grupos que, si bien pueden ser pequeños, verían precisamente sus perversos intereses afectados adversamente conforme la corrupción disminuya en México.

En un sentido Pareto, los vitales pocos cambios a las leyes aquí planteados pueden general numerosos beneficios en la lucha contra la corrupción sin causar revuelo ni resistencia por la gente que se beneficia de la corrupción hoy, a costa y en detrimento de toda la población mexicana. Los cambios serán altamente efectivos al implantarse a nivel constitucional: las leyes secundarias se encargarían de trasladar a la operabilidad factible dichas normas conservando íntegramente el espíritu y objeto de los preceptos reformados en la norma constitucional, para que así cualquier desviación sobre los planteamientos de reforma aquí propuestos, abran la oportunidad para el escrutinio jurisdiccional federal, y por ende al amparo de la justicia federal, lo que aumenta la probabilidad de éxito en la ardua batalla contra la corrupción que hoy apenas comienza a enfrentar México y la gran mayoría de su población, la no corrupta.

CORRUPCIÓN Y EL FUTURO DE MÉXICO

México tiene enormes oportunidades de un futuro próspero, por su cultura, por su población, recursos territoriales y naturales, y por su localización geográfica privilegiada. A la vez, México enfrenta enormes retos para fructificar esas oportunidades: necesidad de inmensas cantidades de infraestructura crítica nueva y de reemplazo, urgente, para enfrentar el crecimiento material futuro y a la vez poder cubrir las necesidades de energía y comunicaciones más imperiosas de casi un tercio de la población que actualmente vive bajo la línea de pobreza⁸⁶, que debe salir de esa dura situación cuanto antes. El reto es económico y también moral, pues de aproximadamente 36% de los aproximadamente 130 millones de mexicanos, hoy, a su vez aproximadamente una quinta parte, es decir aproximadamente el 7% de toda la población mexicana vive aún en niveles de pobreza extrema.

Hay que producir electricidad y conducir con nuevas líneas infinidad de watts adicionales, y reemplazar generadoras viejas y contaminantes. Hay que asegurar los hidrocarburos que, si bien ya van de salida en el mundo por el Cambio Climático, aún tendrán que consumirse por algunos años más. Se tiene que acercar agua potable a millones de mexicanos sin agua corriente además de asegurar el suministro creciente requerido para la que se espera sea una creciente clase media, y la industria, que se expanden en el territorio nacional.

Igualmente se requieren cantidades enormes de kilómetros de líneas férreas y carreteras, y crear y renovar o ampliar muchos puertos y aeropuertos, entre otras necesidades como también son universidades, escuelas y hospitales. Evidentemente la optimización en el manejo del agua potable (y drenaje), de los hidrocarburos y de la electricidad ayudarán a disminuir algo los requerimientos. Pero si se aspira a que no haya pobres en México en el futuro cercano, aproximadamente una tercera parte de la demanda actual de esos servicios e infraestructura, la que no existe hoy pero que corresponderá a ese 36% de pobres que actualmente existen, tiene que estar lista para contribuir al círculo virtuoso de prosperidad que los sacará de la pobreza lo más rápidamente posible y ofrecerá continuidad de bienestar material al resto de la población.

No se necesita recurrir a pruebas de que la corrupción frena seriamente el desarrollo económico de cualquier país⁸⁷ y además la corrupción promueve la inseguridad⁸⁸. Ese dueto, de seguridad y ausencia de corrupción, son esenciales para asegurar un futuro brillante para todos los mexicanos en los años venideros. Nadie quiere vivir en un país en el que no hay seguridad y en donde prevalece la corrupción. Y la inseguridad a su vez depende en gran medida en la incorruptibilidad de los servidores públicos, en particular de aquéllos que forman la cadena de la seguridad pública, que son las fuerzas policiales en cantidades suficientes, las fiscalías bien entrenadas que investiguen bien los delitos, los jueces honestos que dicten sentencias y los reclusorios con dignidad humana que mantengan segura a la ciudadanía al no permitir a los delincuentes que dañen a la sociedad al rondar en calles, campos, caminos y ciudades de todo el territorio nacional, las 24 horas de cada día del año.

El círculo virtuoso del desarrollo económico beneficia a todos: ricos, pobres, gobierno, inversionistas y banqueros, tanto dentro de México como fuera del país, esto último a través del comercio internacional. La inversión tanto en infraestructura física como en proyectos productivos del sector privado requiere que el capital y los préstamos bancarios fluyan hacia México por la confianza que el país genere en todo el mundo de que aquí se puede confiar en que la seguridad protege los bienes de inversión y que la ausencia de corrupción hace predecibles las reglas de decisión de todos y para todos. Que lo que dicen las normas jurídicas de la nación es lo que aplicará en caso de controversias. Por lo que para llevar cada proyecto a buen término se requiere mostrar día a día a la ciudadanía y al mundo que en México reina la seguridad y la no violencia, y que absolutamente todos los servidores públicos cumplen con sus obligaciones sin privilegiar a competidores desleales a través de la corrupción.

El reto en el México hoy y hacia adelante es que de forma simultánea se logre abatir drásticamente la corrupción, a la vez que se cuente con las cantidades y calidades, así como los procedimientos idóneos, de y para el sector público, en particular a cargo de la seguridad pública y de la administración de la justicia. Mientras que en paralelo estas señales claras al mundo atraigan capital del gobierno, de los inversores privados locales y del extranjero, con el cual detonar construcción de infraestructura, generación de buenos empleos, transferencia de conocimientos y tecnologías nacionales e internacionales, salarios, impuestos, todo en sinergia.

Para lograr superar el reto de México y hacerlo de la forma lo más ágil y eficiente posible, se tendrá que encargar el Estado de fortificar y/o crear las instituciones y mecanismos para extinguir la corrupción lo más rápidamente posible, a la vez que deberá desplegar la cadena de la seguridad pública, desde guardia nacional/policía, pasando por fiscales, jueces y correccionales, en cantidad y calidad suficiente en todo el territorio⁸⁹. Además, el Estado deberá hacer muchas de las inversiones mencionadas al inicio de este capítulo, las que sean más urgentes en infraestructura, por sí mismo, dada la naturaleza inherente de muchas de ellas como monopolios “naturales”. Pero inevitablemente el Estado tiene y tendrá capital limitado como para embarcarse en desarrollar todos los proyectos de infraestructura que se requieren casi de inmediato para el futuro que se visualiza aquí. Excederse en inversión pública es imposible sin elevar peligrosamente la deuda pública nacional y extranjera y los consecuentes efectos en inflación, tasas de interés y la consecuente recesión económica probable. Además, es muy conocido que las privatizaciones y las subcontrataciones, dígame concesiones que hace un gobierno, son notorias fuentes de corrupción en cualquier país⁹⁰.

¿Cómo enfrentar entonces la enorme demanda de capital cuasi-inmediato para tanta infraestructura crítica que requiere México para lograr el plan delineado arriba con éxito, sin con ello elevar a niveles peligrosos el endeudamiento público y tampoco sacrificar calidad y cantidad de servicios de educación, salud, y poder mantener un margen, si bien delgado, sí afortunadamente existente actualmente, de cobertura a las necesidades básicas de los más pobres mediante los indispensables y bastante moderados pagos del bienestar que han dado una mínima dignidad humana a los más pobres en el país?

Ciertamente cuando se trata de monopolios naturales, regionales o nacionales, como lo es mucha de la infraestructura básica aquí planteada no es aconsejable que esos proyectos se encarguen a la iniciativa privada sin supervisión gubernamental y de observadores ciudadanos y empresas auditoras técnicas y financieras. Hay enormes volúmenes de

capital privado en México y en el mundo que estarían dispuestos a invertir en un México sin corrupción, en un México con una gran seguridad física y patrimonial permanente, pues el riesgo-país sería mucho más bajo que el actual riesgo México⁹¹, que es principalmente el producto de esas dos incertidumbres (corrupción e inseguridad).

Durante los años venideros de desarrollo, el alza gradual de los salarios de todos los mexicanos se visualiza acertadamente que aún dejará margen amplio para que el capital de inversión y los préstamos obtengan los retornos atractivos superiores a aquéllos obtenibles en países más desarrollados para el mismo tipo de proyectos, y que así finquen dichos recursos en proyectos mexicanos. Pero si se trata de proyectos naturalmente monopólicos, es menester que se aproveche ese apetito del capital, a la vez que se controla el gran apetito de los mercados financieros y la justificada ambición privada por el retorno financiero, mediante la supervisión y el control del Estado Mexicano como participante en esos proyectos.

La manera de poder aprovechar el apetito de inversión de los capitalistas y banqueros globales en México sin que su potencial voracidad por maximizar sus retornos pudiera dañar a la población mexicana en forma de precios altos, mal servicio, insuficiente disponibilidad, etcétera, es que esos proyectos de infraestructura los realicen como “Inversiones con Capital Mixto”. Proyectos en que todo el capital necesario pueda ponerlo un grupo de inversores privados que a la vez construya y opere el proyecto, pero teniendo como socio al gobierno mexicano quien tenga voto de calidad para temas de gobierno corporativo que toquen aspectos tales como el precio, calidad y disponibilidad del bien ofrecido a la población, y/o que toquen el debido cumplimiento a toda norma o ley mexicana, con particular énfasis en el cumplimiento de las normas laborales, ambientales, fiscales, y las pertinentes a la industria a la que pertenece el proyecto. Por ejemplo, la Ley de Pemex y la Ley de Hidrocarburos para proyectos de infraestructura, en el caso particular de gas natural. Este tipo de proyectos, además, no pueden ser sujetos de “rescates” por el Estado Mexicano, para evitar el riesgo moral de los inversionistas privados.

La apertura, transparencia, observabilidad, auditabilidad pública y privada, nacional y global, de las asignaciones competitivas de esos proyectos al capital mundial en este esquema de capital mixto, sería parte de los requisitos básicos para que la perniciosa e invasiva corrupción no mine los resultados esperados de toda esa gran inversión en infraestructura. La simetría de información, que todo mundo sepa sobre todo lo que sucede al seno del gobierno, y también lo que hacen los del sector privado igualmente al interior de estos proyectos, es por tanto clave para anular posibilidades de corrupción.

Este esquema es factible. Proyectos de licuefacción de gas, por ejemplo, han sido ya exitosamente estructurados y ejecutados en esta forma. Numéricamente, el siguiente ejemplo ficticio mostrará como salen las cifras entre ambas partes. El gobierno de México puede participar con un grupo privado en un proyecto de infraestructura en el que, con precios y volúmenes asegurados y razonables de suministro a la población el retorno global a la inversión sea de 18% anualizado en dólares después de impuestos durante 15 años⁹². Si el capital global requiere para este tipo de proyecto y para el riesgo México, digamos, un retorno del 15%, entonces el gobierno de México puede quedarse con ~13% de las acciones del proyecto, y el sector privado puede invertir todo el capital necesario para desarrollarlo, y con el 87% de los dividendos resultantes de las acciones restantes lograr su retorno requerido del 15% durante 15 años, mientras que el gobierno de México, sin necesariamente haber invertido capital, recibe dividendos y a la vez tiene voto de calidad para poder vetar cualquier intención de infringir normas mexicanas por parte del grupo privado. A los 15 años, el grupo privado ha obtenido su retorno y repago de su capital en el proyecto, y el gobierno de México cuenta con la infraestructura ya operacional, para licitar nuevamente quien la opere bajo las mismas reglas, quizás por otro



Fig. 20 Capital transparente. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).

período igual. Los períodos de estos proyectos mixtos deben ser lo más cortos posibles que a la vez logren el retorno deseado al capital. Competencia a lo largo del tiempo, con contratos “cortos”, para no privilegiar a una sola empresa en el tiempo.

Si el esfuerzo del gobierno mexicano por extinguir la inseguridad pública y la corrupción en México es exitosa, el riesgo país del orden del 8.34% anual hoy puede potencialmente bajar a cero. Entonces proyectos que en un país sin riesgo como es por ejemplo Alemania, que requieren hoy digamos un retorno sobre la inversión del 12% anualizado, y que hoy requerirían dar un retorno de al menos 20.34% al capitalista privado en México por la adición del 8.34% del riesgo-país de México, podrían efectuarse con este esquema mixto mucho más fácilmente, y más económicamente, si la inseguridad y la corrupción desaparecen de nuestro país. Esta es una clara expresión del altísimo costo de la gran corrupción en México, que hace escaso el capital otrora abundante, para que se detonen rápidamente todos los proyectos nacionales indispensables para salir de la pobreza extensa que se vive por muchos compatriotas.

Hay proyectos enormes necesarios, urgentes, limpios, rentables, generadores de impuestos, empleos, infraestructura valiosa, transferencia de tecnología. Cuando algún político se opone a ellos, o no los promueve, debe pensarse en corrupción. O bien se podría estar protegiendo a monopolio/oligopolio con tecnología vieja o mercado protegido bajo riesgo con el nuevo proyecto, o el político(a) podría estar reticente a hacerlo porque por su estructura el proyecto no se presta a sobornos o corrupción. En particular si se requiere tanto capital que el proyecto debe ser de capital mixto, público-privado. Y proyectos público-privados tienen que tener más ojos revisándolos, más simetría de información, que baja la posibilidad de corrupción. Es deber del Pueblo, y de líderes de opinión, de resaltar lo que ocurre, e impulsar dichos proyectos críticos para el futuro.

México está en un punto decisivo hoy: puede tomar el camino de extinguir la corrupción, y con ello también lograr la seguridad pública nacional, y con ello la inversión que tanto se requiere en tantos proyectos de infraestructura pública. Y también aquéllos proyectos de inversión privados, muchos que se esperan por el “near-shoring”, que surge como oportunidad situacional única de nuestra nación frente al bloque norteamericano vital para la salud comercial de nuestro país.

Puede México sin embargo también soslayar la urgencia de atacar concretamente la corrupción, y encaminarse a un empobrecimiento progresivo como el que viven muchos países del Sur Asiático, del Africa no



Fig. 21. El horizonte de decisión. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).

Mediterránea, y de Sudamérica. Y con ello defraudar a los pobres de nuestro país, y crear los círculos viciosos de carencias materiales, abusos en los derechos humanos, y debilidad comercial y diplomática frente a nuestros socios comerciales, que prevalecerán si la corrupción persiste. Todo ello en detrimento de la mayoría, y sólo en beneficio de unos cuantos privilegiados que usan como moneda de cambio a la corrupción, ... Minoría de la cual muchos ni siquiera viven en México ni se someten a las penurias materiales y de inseguridad de aquéllos que les consumen y les trabajan cada día en sus imperios monopólicos u oligopólicos, pero que es una minoría que sí recibe mes con mes en el extranjero y en la opulencia, sus dividendos fruto de negocios corruptos en colusión con ciertos servidores públicos. Todo ello sólo factible bajo una rampante corrupción.

Está en nosotros los mexicanos decidir qué sendero tomará la nación.

UN DISEÑO ANTI CORRUPCIÓN PARA MÉXICO

Es necesario y urgente un diseño institucional concreto y práctico para implantar en México y lograr abatir sustancialmente la corrupción tan pronto como sea posible.

Un buen diseño debe tomar en cuenta la realidad actual de México, con su contexto histórico y cultural, así como con las normas y el ambiente político actuales.

El diseño anticorrupción mexicano logrará disminuir significativamente la corrupción conforme sus medidas concretas primarias entren en funcionamiento. La lucha contra la corrupción ha tomado décadas en países como Singapur. Pero cada día, si hay menos corrupción en México, mejorará la situación de la gran mayoría de los mexicanos.

Este diseño no plantea atropellar los derechos legítimos y legales de nadie, ni siquiera de los pocos, muy perniciosos, corruptos de mayor escala en el país. Simplemente restablecerá la lógica jurídica, social, y económica comun a todos los países con muy baja corrupción: las normas son para seguirse, todo servidor público, sin excepción, debe servir al pueblo con honestidad, y el que hace un daño, debe pagar o compensar por él.

El resultado que se debería esperar de atacar en concreto la corrupción con una base lo más científica posible, como la planteada aquí, es: una significativa y continuada baja principalmente en la inseguridad, en la desigualdad, en la pobreza, y en los atropellos a los derechos humanos, sobre todo de la porción más vulnerable de la población, es decir, de los pobres de México.

El diseño aquí propuesto se describirá de forma esbelta. Este diseño anticorrupción es, por mucho, ni completo ni perfecto. Pero con los puntos básicos de este diseño, podría con un alto grado de probabilidad confiarse en que resultados tangibles y relativamente rápidos comenzarían a ocurrir en términos de reducir significativamente la corrupción, y el pueblo lo notaría. Cada una de las políticas, medidas y acciones propuestas abajo como parte de este diseño anticorrupción, conforme fueren implementadas, lograrían reducciones notables en la corrupción en lo general. Sería un efecto Pareto: aún con la implantación de pocas de esas medidas vitales, se lograrían muy probablemente muchos resultados positivos expresados en reducciones medibles y concretas de la perniciosa corrupción.

Los detalles sobre en qué consisten diversos puntos que conforman el diseño propuesto se encuentran ya descritos en otras partes del presente escrito. Todos los componentes de este diseño anticorrupción cumplen en lo general con las leyes vigentes y se plantean para que sean siempre a nivel ya detallado apegadas a las doctrinas mundiales prevalecientes actualmente sobre respeto

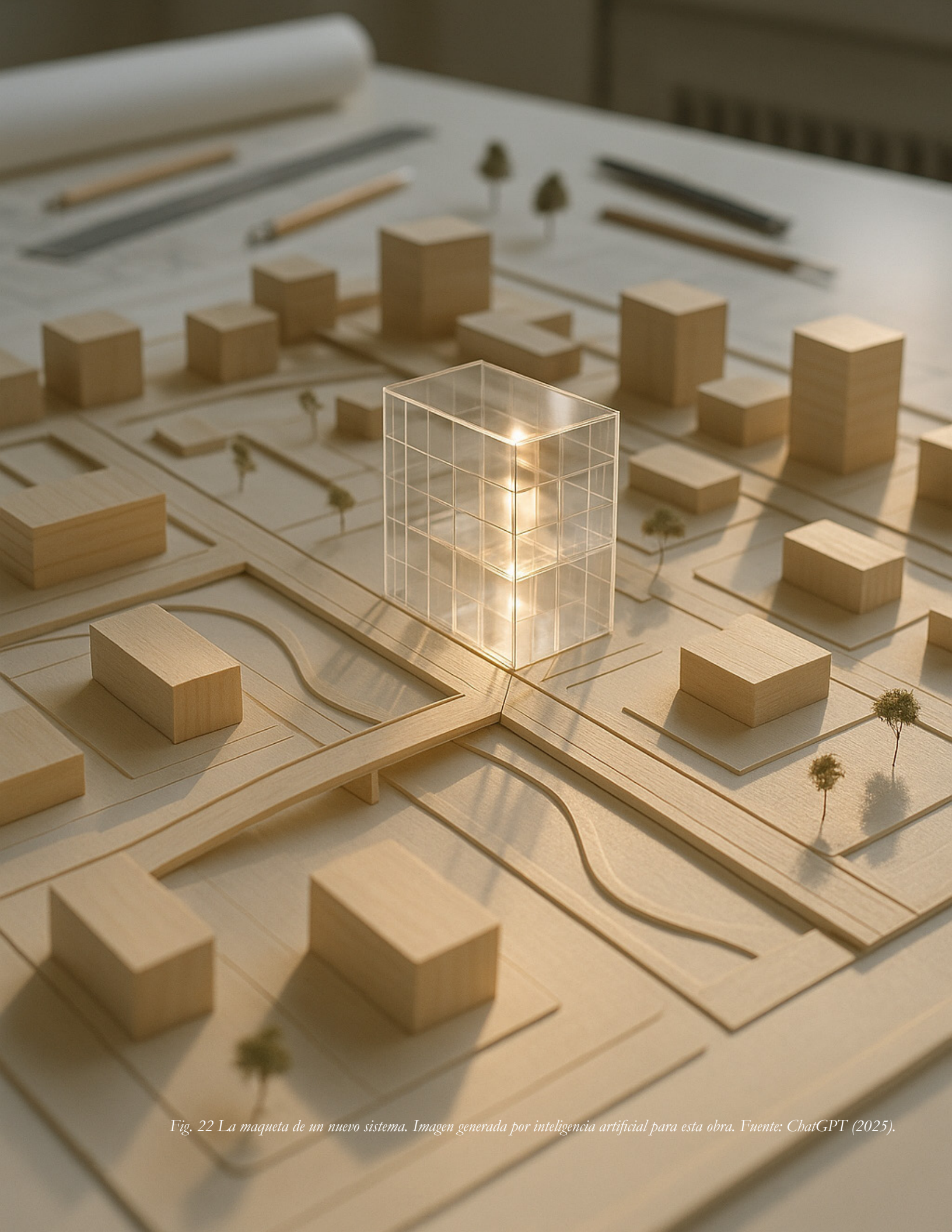


Fig. 22 La maqueta de un nuevo sistema. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).



a los derechos fundamentales de las personas. Y las reformas propuestas a las leyes se considera que son legítimas en lo general, y que se sustentan en principios similares que, en otros países con mucha más felicidad, mucho menos corrupción, y mucho menos pobreza que en México, se aplican rutinariamente así.

Se pretende que este diseño cause mella duradera y favorable en la memoria del lector. Y que éste lo plantee, lo justifique y explique, lo comparta y lo promueva con todo quien esté a su alrededor. Es sólo con una masa crítica creciente de mexicanos promoviendo ante su gobierno con legalidad, legitimidad y respeto que todo servidor público, no sólo una mayoría, trabajen de conformidad con este diseño que México se convertirá en un país libre de corrupción. Sólo con una masa crítica creciente de mexicanos(as) que pugnen ante sus gobernantes con legalidad, legitimidad y respeto para que todos ellos, no una mayoría solamente, trabajen conforme a este diseño, es que se logrará tener un país sin corrupción.

Y a la vez, sólo así se logrará la implantación duradera de este diseño, por convicción popular. La única fuerza política otorgada a los gobernantes es la que emana de la voluntad del pueblo. La gran mayoría, si no es que la totalidad, del pueblo de México tiene que conocer la importancia de extinguir la corrupción, cómo hacerlo, y debe expresarlo a su gobierno, pronto. Siempre debe ser el pueblo el que genere el “momentum” político, siempre legal y legítimo, respetuoso, ante el estado mexicano en todas sus esferas, para que este diseño se implante cuanto antes.

He aquí la propuesta de diseño anticorrupción para México:

1. Convencer a las cabezas del Ejecutivo, de las Legislaturas y del Poder Judicial, de que ellos deben impulsar este diseño y su implantación. Por el bien de México, y también porque les será favorable ser los autores ejecutivos de esta implantación. Ellos deben volverse los campeones publicistas de que el diseño anticorrupción mexicano realmente está en fase de implantación.

Pero políticos y candidatos de todos los partidos y niveles pueden y deberían también enarbolar este diseño impulsando su implantación concreta, prometiéndolo y cumpliéndolo, pues lograr extinguir la corrupción en México es la mejor promesa de campaña para ganar votos, y realmente saber cómo implementarlo, porqué, y cumplir esa promesa, asegurará la permanencia de cualquier político en su puesto de forma legítima. Lograr concretar este diseño hará que los políticos y servidores públicos que lo logren pasen a la historia muy positivamente.

2. Los artículos constitucionales 1º, 19, 28,41, y 113 deben ser reformados:

- a. Haciendo el derecho a vivir libre de corrupción un derecho fundamental (1ºCPEUM)
- b. Adicionando el “cohecho” a las causales para prisión preventiva oficiosa (19CPEUM). Por supuesto, los derechos humanos de los muy pocos sí corruptos en el sentido de su integridad personal, supervivencia física, buen trato sin tortura, comunicabilidad con su defensor, etcétera, deben ser garantizados durante la prisión preventiva. Pero los derechos fundamentales de la grandísima mayoría de los mexicanos serán



mucho más respetados, si el cohecho amerita la prisión preventiva oficiosa de unos pocos muy corruptos en México, para así lograr amedrentar a los malos y condenarlos como se merecen. La corrupción al final de cuentas al que roba, es al pueblo, todo él.

c. Los oligopolios y monopolios, tanto nacionales como regionales, deben desaparecer (28CPEUM), y el estado debe encargarse de corregir las fallas de mercado derivadas de la falta de competencia, con su participación temporalmente, y con el establecimiento de mercados competitivos posteriormente, en los sectores que sufren el estrago de los monopolios y/u oligopolios. La base de la industria privada mexicana debe sustentarse en competitividad y en innovación en su totalidad, eliminándose así los negocios de aquéllos “empresarios” que optaron por la vía deshonesta de crecer gracias a la corrupción.

d. Los candidatos y los partidos tiene que rendir cuentas al pueblo, en tiempo real, con total transparencia, sobre qué, cuánto, quién, cuándo, y a quién están personas físicas y/o entidades o personas morales financiando antes, durante y después de sus campañas (41CPEUM). Candidatos y partidos son un mero intermediario para la voz del pueblo ante el Estado Mexicano, y el pueblo merece candidatos y partidos que reflejen fielmente lo que la gran mayoría de los mexicanos desean.

e. La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno tiene que tener “filo” en sus herramientas anticorrupción, y que su liderazgo pueda enfrentar sin miedo hasta a cualquier presidente(a), a cualquier diputado o senador, y a cualquier ministro de la Suprema Corte sin riesgo de que el(la) secretario(a) sea destituido, o se le recorten los recursos (113CPEUM).

f. El anonimato total de denunciantes de la corrupción ante la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno debe estar garantizado con los mecanismos digitales sin visibilidad del denunciante, 24x365 (113CPEUM).

3. Los servidores públicos, todos, son públicos. Se deben al pueblo de México. Nadie de ellos está por encima del pueblo, deben servir al pueblo. Hay ya un gran honor en que hayan sido elegidos por el pueblo para ocupar sus puestos públicos. Entonces debe terminar todo privilegio o protección a todo servidor público en lo referente a conocer de sus finanzas y patrimonios durante su servicio público y por un tiempo perentorio posterior a su servicio (Conv. ONU sobre la Corrupción- UNCAC)

Si el servidor público quiere privacidad de su información económica, puede dejar el servicio público y servir en el sector privado. La publicidad de la información personal económica de todo servidor público, en particular cuando éste está bajo sospechas de corrupción, no debe considerarse ya en México como una violación a sus derechos fundamentales, y así es ya la postura normalmente en muchos países del mundo.

El beneficio a prácticamente todos los mexicanos que se logra por la erradicación de la corrupción en México compensa con creces la falta de privacidad en la información económica de aquéllos, muy pocos, que son servidores públicos bajo escrutinio por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, bajo el 19 constitucional, y durante el juicio correspondiente en el Poder Judicial para su debida sentencia con sus contrapartes privados participantes en corrupción.

Los derechos humanos del pueblo se preservan atacando la corrupción, y eso vale mucho más que el respetar los derechos humanos de unos muy pocos bajo sospecha de ser corruptos. Y a esos pocos bajo sospecha de ser corruptos ni siquiera se les toca cosas vitales en su dignidad humana, pues la única “violación” es el abrir la información económica de un servidor público bajo sospecha fundada de corrupción. Si no quieren esa violación a sus “derechos a la privacidad”, que no sean corruptos. Además, sin información económica del servidor público, no se puede determinar qué persona o ente privado es la contraparte del posible acto corrupto bajo investigación. Debe acabarse el “endiosamiento” a muchos servidores públicos y debe tratárseles sí siempre con respeto, pero a la vez con una perspectiva de igualdad ciudadana respecto de cualquier otro(a) mexicano(a)⁹³.

El aplicar todas las herramientas legítimamente posibles por parte de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno para exponer y analizar la situación económica de servidores públicos bajo sospecha de corrupción, inclusive, es parte de lo acordado por México en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC), que México ratificó con decenas de otros países hacia 2004. Así lo refiere este convenio en sus artículos 31,37, 40 y 52 . Parecería que a la fecha este convenio ha sido en general olvidado y no aplicado con toda su fuerza y extensión por diversos gobiernos nacionales del pasado, si bien la misma Constitución le da a este tratado fuerza de ley.

4. Las privatizaciones y concesiones deben ser eliminadas y en vez de éstas, deben realizarse proyectos de inversión mixta, pública y privada, con toda la simetría de información posible en todo momento, para que todo mundo se pueda enterar de todo lo que está ocurriendo financiera y operativamente en este tipo de proyectos. Tanto la ciudadanía debe saber todo sobre qué hacen los inversores privados y el gobierno en el proyecto, como el gobierno debe saber qué hacen los inversores privados en el proyecto. Además, el gobierno no está para hacer rescates si estos proyectos fallan. En una democracia, realmente sólo los planos de prisiones y bases militares, así como inventarios humanos y de materiales militares y policiales y planes de operación de defensa y policiales deberían ser considerados como confidenciales: el Estado es público, y ve por el Bien Comun, el Bien de Todos, el Estado no tiene porqué guardar más secretos que éstos, y por ende debe rendir cuentas a todos.

5. El Estado, y también las empresas de comunicación pública de México, deben popularizar y publicitar la campaña permanente anticorrupción. Mediante anuncios, orientando cómo denunciar anónimamente, y también glamorizando a los héroes contra la corrupción y vilificando y avergonzando a los villanos culpables de actos de corrupción en series, novelas, documentales y películas. La opinión del pueblo y su actitud ante la corrupción serán más favorables a este diseño anticorrupción si los medios de comunicación hacen también su parte con estos mecanismos de forma constante. Los medios privados de comunicación deben hacer su parte, voluntariamente, o por instrucción del Estado.



Fig. 23 El Estado transparente. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).

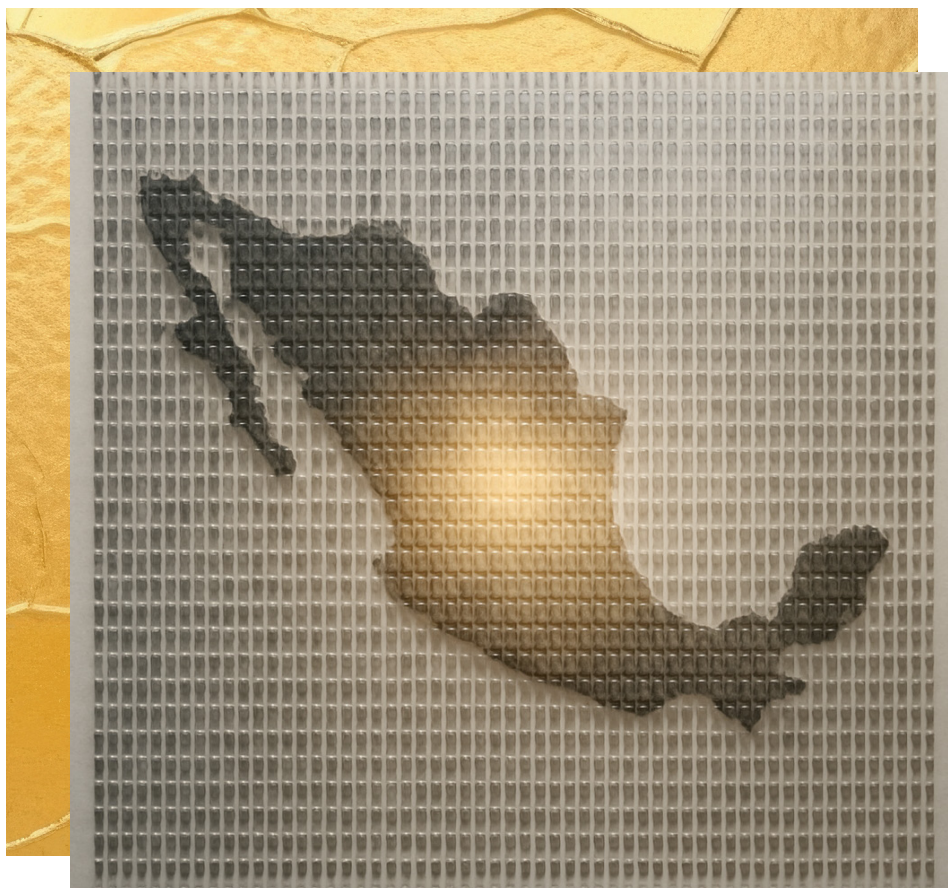


Fig. 24. La mente colectiva. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).

Todos los políticos primordialmente, al igual que los representantes y líderes de todos los partidos, como voces públicas de México, junto con líderes del sector privado que también tienen voz que se escucha por los medios, deberían conocer bien y hacer eco a estos principios básicos del diseño anticorrupción mexicano. También los políticos y servidores públicos de partidos del gobierno en turno, para comunicar al pueblo su conciencia de la situación y su conocimiento de la solución, ello inclusive fortalecerá su popularidad y convicción popular en que ellos están realmente comprometidos con el pueblo, y con erradicar la corrupción

en México de forma definitiva. Pero también todos los políticos de partidos de oposición, como argumento válido y patriótico para, con la promesa de cumplir dicho diseño, poder ganar posiciones en gobiernos futuros por elecciones limpias.

En esa sana batalla política por ocupar puestos públicos, el aludir a las herramientas concretas, basadas en hechos científicamente reportados de causa-efecto (si se hace X, entonces lo más frecuente históricamente es que ocurre Y) así como en correlaciones estadísticas sugerentes de qué variable Y tiene una variación alineada con la variación de la variable X (dominancia de mercado correlacionada con grado de corrupción de cada país, por ejemplo), más allá de sólo palabras bien intencionadas sobre atacar la corrupción sin implantar instituciones, procedimientos y normas específicas como las de este diseño anticorrupción, aludir a esas herramientas, repito, muy probablemente será notado por el pueblo, que así elegirá con una base sólida en cada decisión electoral: el pueblo en lo colectivo no se equivoca. Todos los componentes planteados aquí como el diseño anticorrupción tienen esa base científica, empírica, en mayor o menor grado, como lo atestiguan sus fuentes.

Y una vez que el político ganador en cualquier posición de liderazgo deba cumplir su promesa de implantar este diseño anticorrupción, es muy aconsejable que, sin alejarse del pueblo ni cesar su comunicación constante, veraz y completa con el pueblo, ese líder político en funciones tome las precauciones de seguridad sobre su persona y sus seres cercanos conforme sea necesario: los muy pocos, sí corruptos que existan en ambos sectores público y privado, que ejerzan corrupción en gran escala, muy probablemente no dudarían en atentar contra el bienestar del político líder en funciones que sí se enfoque en implantar este diseño anticorrupción. La debida protección de su

seguridad personal sería ciertamente bien entendida por el pueblo, conforme éste viera los buenos resultados sobre la corrupción, reflejados en la seguridad, el respeto a los derechos humanos sobre todo de los más vulnerables, y en su bolsillo inclusive.

Los profesores, investigadores, académicos y estudiantes de instituciones universitarias y preparatorias también se constituyen en elementos muy valiosos para diseminar estas ideas y promover que el diseño se implante.

Que todo el pueblo de México lo sepa, y que el pueblo siempre lo exija civilmente, civilizadamente, legalmente, legítimamente, y respetuosamente, sin excepción.

Lograr con el diseño anticorrupción que esta enfermedad mexicana tan añeja se erradique constituye una victoria ventajosa para una grandísima parte de la ciudadanía mexicana, incluidos los muchísimos participantes de los sectores público y privado que no son corruptos. Mientras que el costo de perder ganancias enormes que han sido logradas inmoral, inética, y en muchísimos casos ilegalmente, solo recaerá sobre esa muy pequeña minoría, muy dañosa para México, que conforma el grupo de los (sí, pocos, pero muy dañosos) corruptos nacionales y extranjeros operando en nuestro país tanto en el sector público, como sus similares contrapartes en el sector privado.



Fig. 25 La claridad alcanzada. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).

ALGUNAS CONCLUSIONES

México necesita reducir drásticamente su corrupción si se aspira al bienestar generalizado de toda la Población ante los cambios geopolíticos presentes y futuros, y la presión comercial prevaleciente que se relaciona con el bloque de Norteamérica y la emergencia asiática en la escena económica mundial de las últimas décadas.

La palabra corrupción ya está en el vocabulario político habitual, algo muy positivo, pero que requiere acciones concretas de política pública y normatividad que emanen de las ciencias sociales que apuntan a lo que debe hacerse para erradicarla – eso es un diseño más científico anticorrupción.

La percepción de la corrupción no es algo objetivo y medible con precisión. Pero la percepción de la corrupción, apoyada en herramientas estadísticas estandarizadas y aceptadas por prácticamente toda la comunidad mundial enfocada en estimar el grado de corrupción de la mayor parte de los países del orbe, es un indicador “blando” bastante confiable respecto de si la actividad corrupta de México aumenta, disminuye, o permanece constante. Los indicadores más recientes de Transparencia Internacional (TI⁹⁴) sugieren que la corrupción, y por ende los mecanismos mexicanos para atacarla, desafortunadamente no han cambiado significativamente, al paso de diversas administraciones.

El enfoque actual, y acertado, de atender las necesidades de los pobres primero, con un énfasis en un estado de bienestar, inclusive es favorecido como la política pública idónea para que, a través del papel redistributivo de un estado democrático, se promueva el emprendedurismo económico y el empresarialismo capitalista⁹⁵.

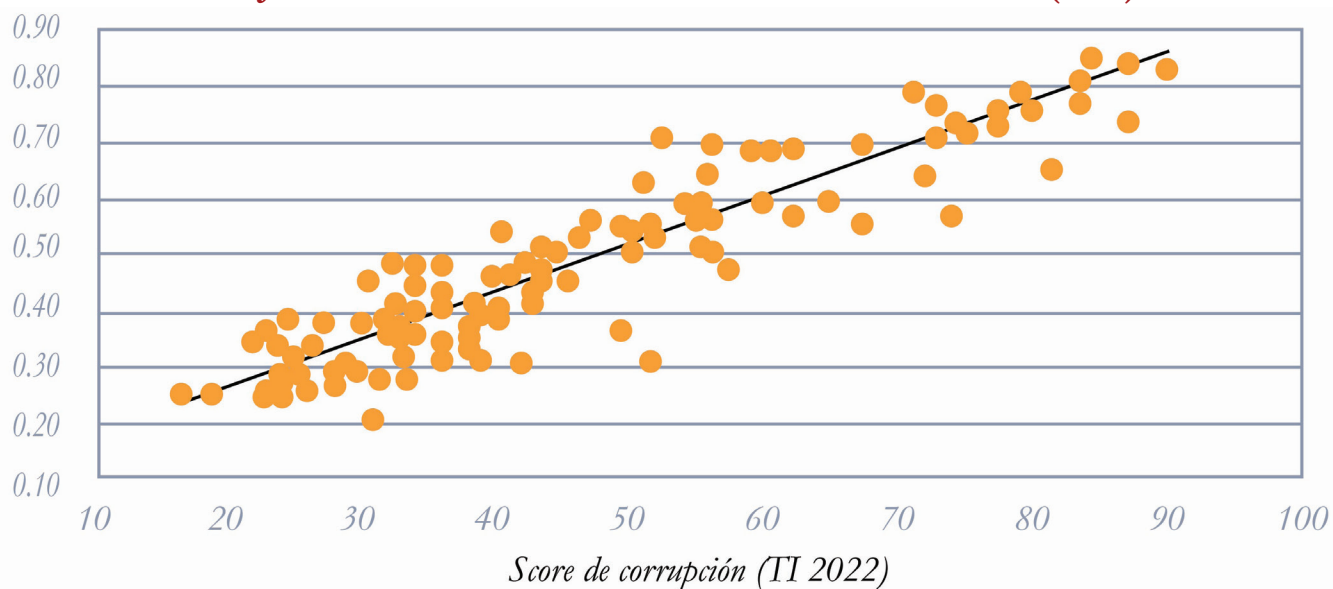
Se ha logrado inclusive asegurar el estado de bienestar con el apoyo material y económico a los pobres de México sin tener impacto adverso significativo en las finanzas públicas y en el déficit presupuestal. Esto se ha reflejado en la fortaleza de la moneda, la creación de empleo, la baja en la proporción de la población en condiciones de pobreza, en el aumento real al salario mínimo, la relativamente constante y baja inflación, el endeudamiento público moderado y el relativamente bajo déficit gubernamental en años recientes⁹⁶.

Sin embargo, no se vislumbra fácil que las políticas públicas enfocadas en el bienestar con el apoyo estatal para los más vulnerables, y el crecimiento económico nacional, puedan continuar y sustentar las finanzas públicas que incluyen la inversión anual en ese estado de bienestar para los pobres, si no se actúa de forma concreta con una base científica, probada, contra la corrupción en México.

Y, al contrario, si se actúa de forma concreta y con una base científica, probada, contra la corrupción en México, la prosperidad y el crecimiento económico generarán naturalmente una captura fiscal mayor que facilitará el círculo virtuoso entre apoyar con bienestar a los más pobres del país y el aumento en la prosperidad económica generalizada.

Existe la gran preocupación generalizada tanto entre la población general, como por parte del gobierno porque la justicia, sobre todo la justicia penal, así como el respeto a los derechos humanos, y el ingreso anual promedio de todos los mexicanos, esto último, en relación a la cantidad de pobres en el país, mejor. Pues bien, estos cuatro rubros se correlacionan con significancia estadística con toda mejora en los niveles de corrupción de los países.

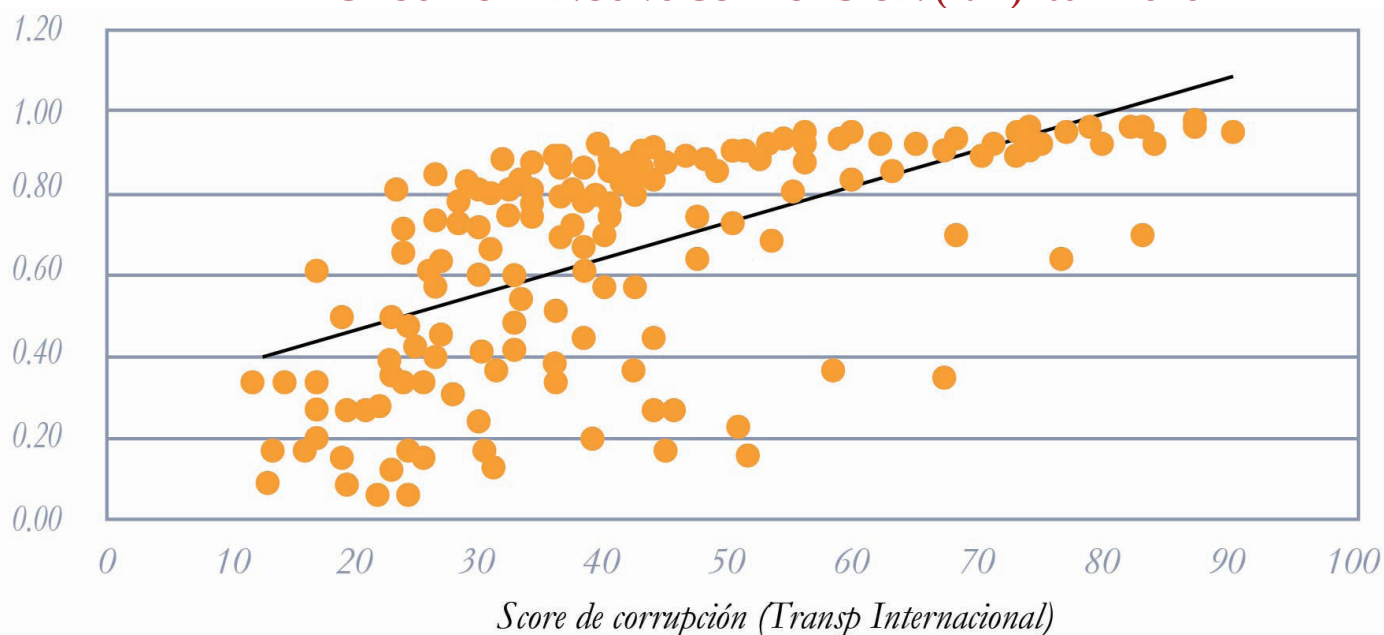
JUSTICIA PENAL VS CORRUPCIÓN - 120 PAÍSES (2022)



*Tabla. 3 Justicia penal vs corrupción — 120 países (2022).
Elaboración propia con datos de World Justice Project (2022) y Transparency International (2022).*

Es decir: una menor corrupción se correlaciona con una mejor administración de la justicia penal, que es donde se cometen los abusos más penosos y dolorosos, casi siempre en contra de los pobres, que precisamente no cuentan con los medios económicos para “comprarse” una buena administración de justicia.

DERECHOS HUMANOS VS CORRUPCIÓN (2022) 168 PAÍSES

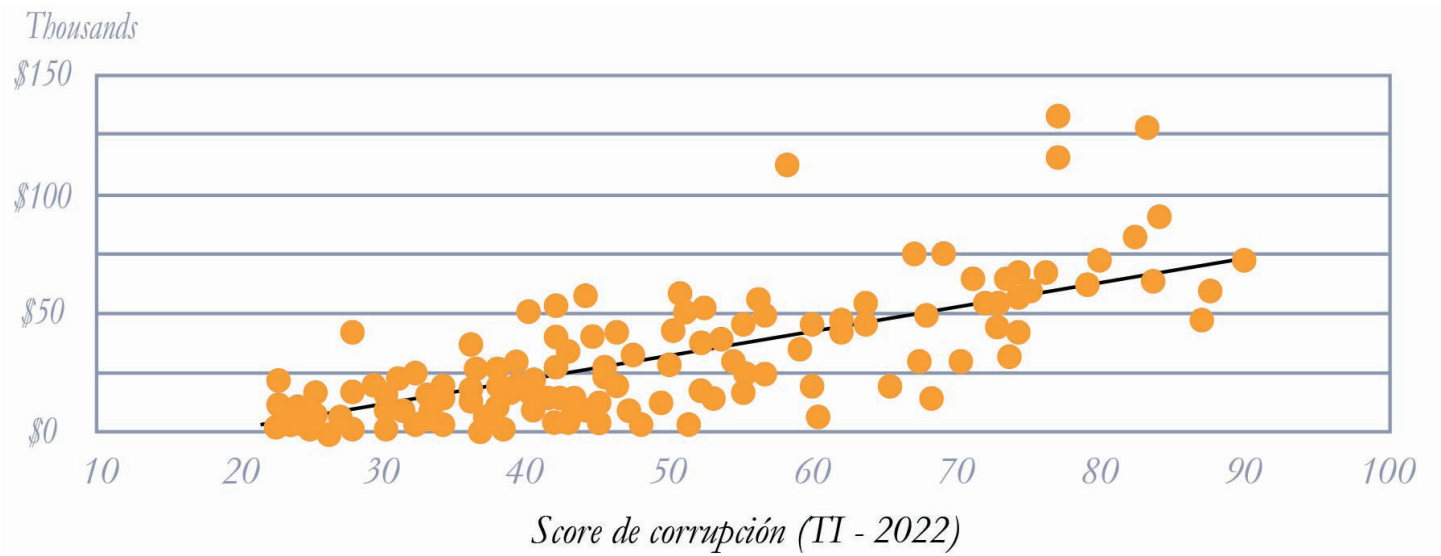


*Tabla. 4 Derechos humanos vs Corrupción — 168 países (2022).
Elaboración propia con datos de Our World in Data (2022) y Transparency International (2022).*

Igualmente, el respeto a los derechos humanos (no detenciones arbitrarias, no tortura, libertad de expresión, atención médica, educación accesible a todos, etcétera) va en función directa del grado de no corrupción de los países.

En relación con la parte económica, la corrupción también tiene un efecto claro:

PIB PER CAPITA VS CORRUPCIÓN (2015 - 2023) 159 PAÍSES R2= 59%



*Tabla. 5 PIB per cápita vs Corrupción (2015–2023) — 159 países.
Elaboración propia con datos de CIA World Factbook (2023) y Transparency International (2022).*

Un país que quiere sacar a los pobres de la pobreza, y que quiere dar bienestar a todos, necesita prosperidad material. El PIB, o Producto Interno Bruto, es el valor económico de todo lo que el país produce en un año. Sin embargo, pueden haber países que tienen un enorme PIB, pero debido a su enorme población, generan un PIB per cápita pequeño. Es decir, la producción anual por persona resulta pequeña cuando se divide entre muchos ciudadanos. Y el ingreso per cápita, que es lo que en promedio cada ciudadano gana en un país al año, es la cifra socialmente importante, puesto que está directamente relacionada al PIB per cápita, siendo ambas cifras muy cercanas una a la otra, generalmente. Un PIB per cápita pequeño implica pobreza de los ciudadanos, en promedio. Si bien hay divergencia entre ambas medidas, el PIB per cápita es el primer indicador para la aproximación al ingreso per cápita, aunque esté varíe⁹⁷ también en función del poder de captura que tienen los propietarios de las empresas (oligopolios y monopolios no favorecen mejoras en el ingreso per cápita), el tamaño de cada familia, quienes trabajan y quiénes normalmente no en dicha sociedad, y otros factores. No puede haber un alto ingreso per cápita promedio si el PIB per cápita es pequeño.

De la gráfica anterior, es claro que el PIB per cápita está correlacionado significativamente con el nivel de corrupción en un país.

Y de la siguiente gráfica, si bien está relativamente dispersa, es claro que a menor nivel de corrupción, menor porcentaje de la población está debajo de la línea de pobreza para un país:

POBREZA VERSUS CORRUPCIÓN (142 PAÍSES) - AÑOS 2006 - 2022

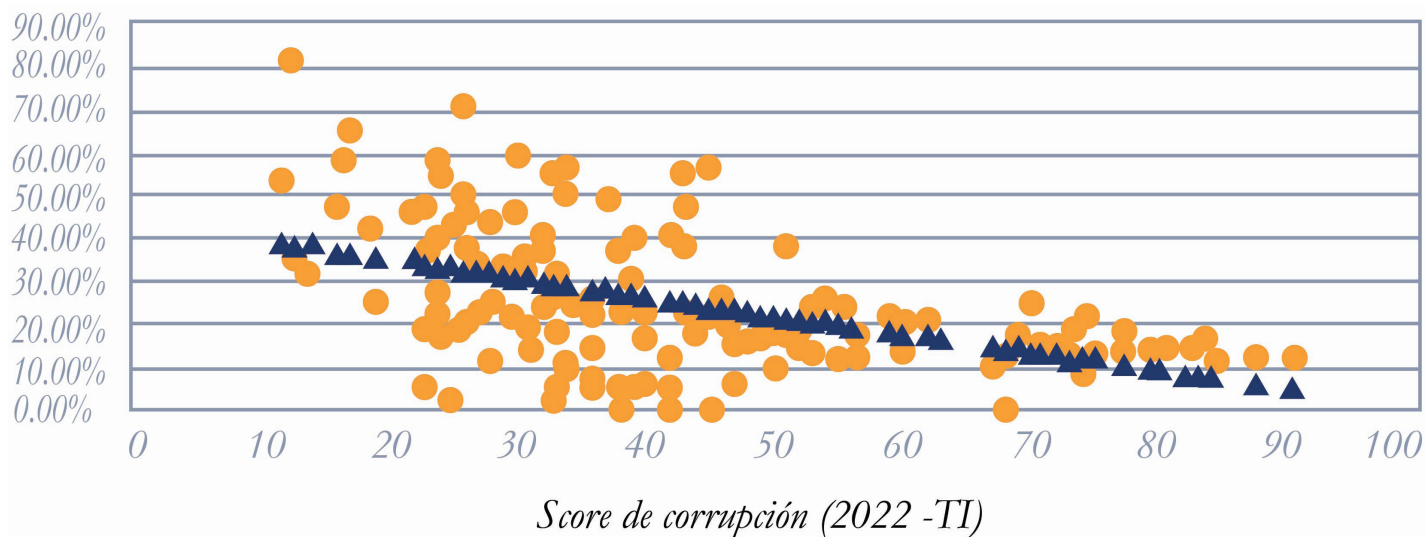


Fig. 26 Pobreza vs Corrupción — 142 países (2006–2022).
Elaboración propia con datos de World Population Review (2022) y Transparency International (2022).

¡Si se quiere elevar el ingreso per cápita de México y se quiere reducir la pobreza del pueblo de México, tiene que atacarse la corrupción! Teniendo un alto ingreso per cápita, al reducir la corrupción y por ende el dominio de los monopolios y oligopolios, indirectamente también se reduce la posibilidad de que gran parte del PIB se lo lleven los propietarios de dichos oligopolios, en detrimento de su asignación a la población general, eventualmente como salarios (ingreso per cápita).

Además, con un PIB per cápita mayor, se reduce la presión presupuestal sobre las finanzas públicas, ya que existirían mayores recursos para poderlos aportar al bienestar que el Estado provee a los más pobres.

Con base en todo lo anterior, se puede concluir que:

1. La corrupción es muy dañina para cualquier sociedad
2. México tiene un alto nivel de corrupción
3. La corrupción genera un gran daño a México
4. La corrupción tiene solución
5. La solución tiene que ser concreta, consistir en políticas públicas concretas y probadas, adaptadas al contexto cultural e histórico mexicano actual
6. El pueblo de México es el más indicado para generar impulso a que la corrupción pare
7. Los líderes políticos y del sector privado, y los grupos con mayor educación en el país, son los indicados y moralmente obligados para difundir el mensaje sobre qué es la corrupción, cómo ocurre la corrupción, cuál es su efecto social, político y económico, y cómo se resuelve la corrupción
8. La corrupción siempre ocurre entre dos partes, una oculta en el seno del sector público, y otra oculta en el seno del sector privado, ambos son culpables

9. Los líderes políticos y su impulso personalizado y convencido a la solución contra la corrupción constituyen el factor clave de éxito para iniciar, y sostener, la lucha efectiva y concreta contra la corrupción
10. Las herramientas concretas de solución de la corrupción, algunas normativas, otras organizacionales en el sector público, aún otras más comunicacionales, son implementables de forma relativamente sencilla en la realidad actual mexicana
11. El panorama y estructura política y partidaria prevaleciente actualmente en el gobierno de México y sus poderes constitucionales (legislativo, ejecutivo, judicial) facilitan la implementación de un diseño efectivo para erradicar la corrupción en México, hoy. Esta coyuntura no debería desperdiciarse
12. Para complementar el estado de bienestar al que se aspira para proteger a los más vulnerables en México, debe aplicarse la erradicación efectiva de la corrupción que aumentará para la población entera su dignidad humana y ofrece una oportunidad real para la mejora material de todos los ciudadanos mexicanos por igual
13. Atacar la corrupción implica otorgar un beneficio incalculable a la gran mayoría de los mexicanos, mientras que representa un costo despreciable que solamente afectaría adversamente a quien merece cargar con ése costo, que es la pequeñísima minoría, muy dañina, de corruptos escondidos en las entrañas del sector público y del sector privado por igual
14. Todas las medidas para atacar y erradicar la corrupción son legales y legítimas, tienen su justificación en su uso en otros países exitosamente, y no vulneran los derechos humanos de nadie
15. Los servidores públicos deben retornar, en la escala axiológica social de México, a su estatura correcta: todo político es igual a cualquier otro mexicano y así debe ser tratado, sin por ello violarle sus derechos humanos
16. El argumento de violación de los derechos humanos del corrupto por la apertura pública de la información sobre su situación económico-financiera durante las investigaciones, es falso al representar una molestia mínima en el sentido esencial para el potencial corrupto, con una ganancia social máxima para la gran mayoría de la población de México
17. Cualquier argumento de violación a los derechos humanos por prisión preventiva oficiosa o por investigación de potenciales corruptos es injustificado jurídicamente, pues ya hoy el artículo 19 constitucional establece, desde hace años, dicho mecanismo de prisión preventiva oficiosa para otros posibles delitos, entonces el tema de ataque a la corrupción como una potencial violación a los derechos humanos de los imputados ya debería estar ampliamente superado y no ser cuestionable hoy
18. La esencia del ataque exitoso a la corrupción es que exista el mecanismo, y se aplique rutinariamente, para poder averiguar fácilmente y en tiempo real, la situación patrimonial y de flujos de dinero presentes y pasados de potencialmente todo servidor público, para así detectar y seguir la pista del crimen de corrupción y cómo ocurrió, y con quien, en el sector privado, para castigar a ambas partes culpables. Simetría de información porque el servidor público es público, y el estado sirve al pueblo, y el servidor público no puede abusar de su posición para dañar el bien común, el bien de todos para ganancia personal, privada, del servidor público y de su contraparte también beneficiada por la corrupción, del sector privado
19. Confrontar la corrupción y conocer, comprometer y aplicar el diseño anticorrupción por parte de todo político en funciones o con aspiración a entrar en funciones gradualmente es muy probable que se convierta en una obligación y un factor clave de éxito personal y de supervivencia tanto en períodos de elecciones como ya en funciones en el servicio público para todo político si el pueblo de México se entera, como debe ser, de los temas ventilados aquí.



20. Conforme estos conceptos y soluciones se diseminen en la sociedad, el pueblo podrá generar la sana presión a sus gobiernos y a sus partidos y candidatos. Aquél que no enarbole estos conceptos e impulse su implementación lo tendrá entonces que hacer en detrimento propio, a merced de aquéllos que sí lo enarbolan y lo implementen.

Una conclusión más general es que, si la corrupción es alta, y hay solución a la corrupción, entonces es prerrogativa del pueblo de México el lograr que en la nación se erradique la corrupción. No hay entonces a quién culpar, más que al pueblo de México mismo. Este breve texto ha planteado qué es, sus causas, y posibles soluciones. Extingamos la corrupción, pronto.

Conclusión: ¿Quiénes son las víctimas de la corrupción?

La corrupción no es un fenómeno abstracto. Hoy, con múltiples ejemplos en México, sabemos que mata; no solo en nuestro territorio, sino alrededor del mundo. Para muestra, dos ejemplos:

- i. El colapso de escuelas en Sichuan, China (2008), donde miles de niños murieron tras el terremoto, evidenció que constructoras habían reducido costos con materiales de baja calidad gracias a sobornos y colusión local (BBC News, 2008).
- ii. En Beirut, Líbano (2020), la explosión del puerto que causó más de 200 muertes fue atribuida en gran parte a corrupción, negligencia y omisiones deliberadas de autoridades que sabían del almacenamiento inseguro de nitrato de amonio (Human Rights Watch, 2020).

Estos ejemplos internacionales recuerdan que la corrupción no solo vacía arcas públicas: también arranca vidas, genera pobreza y profundiza desigualdades. Pero ¿qué pasa cuando la lucha anticorrupción sí funciona? Existen también casos que demuestran que la corrupción puede combatirse con instituciones sólidas y ciudadanía activa:

- i. Hong Kong en la década de 1970, donde la creación de la Independent Commission Against Corruption (ICAC) transformó una administración plagada de sobornos en un modelo internacional de integridad, basado en investigación, prevención y educación ciudadana (Quah, 2011).
- ii. Singapur, que en los años sesenta era percibido como un país altamente corrupto, logró convertirse en uno de los países más transparentes del mundo gracias a la aplicación estricta de la ley, la profesionalización del servicio público, y una fuerte cultura de rendición de cuentas (Transparency International, 2022).
- iii. Georgia, tras la Revolución de las Rosas (2003), implementó una reforma radical que incluyó la disolución total de la policía de tránsito, sustituida por un nuevo cuerpo profesional y transparente. En menos de una década, el país mejoró 80 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (Banco Mundial, 2012).

Estos casos demuestran que la voluntad política, la presión ciudadana y el diseño institucional adecuado pueden transformar países enteros, reducir desigualdades y salvar vidas.



Este libro ha sido una invitación a leer con espíritu crítico y con sentido de urgencia. La corrupción no es solo una estadística: es tiempo perdido, servicios deficientes, pobreza agravada, inseguridad, y en muchos casos, vidas truncadas. Frente a ello, Diseño Anticorrupción para México propone un camino posible, que requiere tanto de un Estado decidido, como de una ciudadanía vigilante y exigente.

Este texto representa un aliciente y un potente recordatorio de que la corrupción no nos define, y de que México puede aspirar a un futuro más justo, más transparente y más digno para todos.

A manera de conclusión, el presente texto y la evidencia que el lector constató a través de sus páginas, confirma que la corrupción es un determinante central del bienestar social y del desarrollo de cualquier nación; tenerla entre las filas de las instituciones mexicanas ha deteriorado el ingreso per cápita, eleva la pobreza, acrecienta la desigualdad y ha erosionado las capacidades estatales básicas para satisfacer necesidades de las personas, sobre todo de aquellas que menos tienen. En términos normativos y empíricos, su reducción no puede considerarse como un lujo institucional, sino un prerrequisito para el desarrollo inclusivo y sostenible.

Quiénes son las principales víctimas

La corrupción golpea con más fuerza a las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en el acceso a la justicia y en el goce efectivo de derechos. Como señala el libro, “una menor corrupción se correlaciona con una mejor administración de la justicia penal... [donde] los abusos más penosos y dolorosos [son] casi siempre en contra de los pobres”. Hemos “avanzado” en la historia reciente del país creyendo que la justicia ya no nos tocará por los estragos que ha realizado la corrupción.

Las víctimas tienen nombre y apellido, y deben ser el foco de nuestra atención. Aquellas personas que no llegaron a su hogar por las desapariciones producto de la infiltración de grupos criminales en todas las esferas de la vida pública, propiciado por la corrupción que es solapada por sobornos. Los hijos de las mujeres en prisiones que no reciben alimentación adecuada y que tampoco vivirán cerca de ellas, porque no han tenido en años un juicio justo, pues no tienen dinero para pagar sobornos al poder judicial. Las miles de personas que siguen muriendo porque los servicios básicos no llegan a sus hogares, pues viven en lugares con alta marginación porque a pesar de haber presupuestos, estos se diluyeron en gastos para quienes detentan el poder a costa de la pobreza. La cifra negra de los homicidios dolosos en el país que no se traducirá en carpetas de investigación, menos aún en justicia, porque los encargados de los ministerios públicos tienen consigan de no abrir carpetas para hacer parecer que no pasa nada.

Por ello es que la evidencia nos muestra que, como lo menciona Ricardo en este libro, “el respeto a los derechos humanos... va en función directa del grado de no corrupción de los países”. En síntesis: las víctimas inmediatas son quienes menos capacidad tienen de “comprar” justicia y servicios, y las víctimas mediatas son toda la sociedad, al normalizarse la arbitrariedad y la captura de lo público. A continuación, señalo las 5 conclusiones más relevantes con énfasis en quiénes son esas víctimas de la corrupción, a las cuales necesitamos poner en el centro si queremos hablar de Estado de Derecho.



1. Pobreza, ingreso y captura oligopólica.

El texto muestra que menos corrupción se asocia con mayor PIB per cápita y menor pobreza. De ahí la conclusión del autor, “¡Si se quiere elevar el ingreso per cápita... y reducir la pobreza... tiene que atacarse la corrupción!”, incluyendo la disminución del dominio de monopolios y oligopolios que detraen renta en perjuicio de la población general.

Esta relación importa porque quien padece primero la inflación de costos, la baja calidad de servicios y la regresividad de la captura es, de nuevo, la ciudadanía con menos recursos.

2. Círculo virtuoso de bienestar y finanzas públicas.

Sin una estrategia anticorrupción “concreta y de base científica”, ni el bienestar ni el crecimiento son sostenibles fiscalmente; con ella, la prosperidad logra una “captura fiscal mayor” y refuerza el binomio de apoyo social y crecimiento inclusivo. Esto implica que las políticas sociales protegen mejor cuando hay integridad sistémica: el Estado puede financiar derechos y bienes públicos con estabilidad, sin pensar en clientelas sino en bienestar y desarrollo como eje transversal.

3. Mandato social y coalición cívica

El libro insiste en que la fuerza transformadora es la ciudadanía: “Que todo el pueblo de México lo sepa, y que el pueblo siempre lo exija civilmente... y respetuosamente”

Se trata de construir una masa crítica que exija y vigile la implantación del diseño anticorrupción para que todas las personas servidoras públicas, no solo una mayoría, actúen conforme a él. En esta coalición, academia, profesorado y estudiantes son “muy valiosos para diseminar estas ideas” y acelerar la adopción del diseño. Si el diseño e implementación de una política anticorrupción no emerge y es abrazada por la ciudadanía con el enfoque de aquellos que más víctimas ha traído la corrupción, es poco probable que la instauración avance y genere resultados.

4. Costos y beneficiarios de la reforma

La implementación beneficia a la gran mayoría honesta de los sectores público y privado; solo pierde una “muy pequeña minoría” que ha obtenido ganancias inmorales e ilegales a gran escala. Esta precisión política y ética es crucial: la agenda de integridad es pro-mayoría y pro-derechos, y su oposición proviene, principalmente, de intereses concentrados en unos cuantos.

5. La corrupción acrecienta el número de víctimas.

“La corrupción es muy dañina para cualquier sociedad” y México exhibe niveles altos con “gran daño” asociado. Por ello, es relevante comenzar a diseminar la idea de que “La corrupción tiene solución”, traduciendo esto en políticas públicas concretas y probadas, “adaptadas al contexto cultural e histórico mexicano actual”.



“El pueblo de México es el más indicado para generar impulso a que la corrupción pare”. A mayor escala, el diseño anticorrupción mexicano se presenta como respuesta situada a los retos geopolíticos y a las oportunidades de impacto regional y global ante una reducción drástica de la corrupción

Reducir estructuralmente la corrupción es una política redistributiva de derechos: libera ingresos, baja la pobreza, mejora la justicia penal y robustece derechos humanos, empezando por quienes menos tienen. El diseño anticorrupción aquí propuesto ofrece una hoja de ruta empíricamente informada y contextualizada. Su implantación demanda exigencia ciudadana sostenida, liderazgo político responsable y alineación institucional. Con ello, la ganancia social alcanza a la inmensa mayoría honesta; el costo recae en la exigua minoría que lucra con la captura. Ésta es, ante todo, una agenda de víctimas y de reparación colectiva: cortar los circuitos de corrupción es devolver derechos, oportunidades y bienestar a quienes históricamente han sido despojados.

Que estas páginas no sean en vano; que nos recuerden que la corrupción cuesta vidas. No participar activamente en la implementación de una política anticorrupción integral para México nos vuelve, tarde o temprano, no solo corresponsables del rezago en el desarrollo sostenible, sino también convierte en víctimas a nuestras hijas e hijos.

Si empezamos hoy, mañana faltará un día menos.

Vania Pérez Morales

Septiembre 2025.



Fig. 27. El rostro de la esperanza. Imagen generada por inteligencia artificial para esta obra. Fuente: ChatGPT (2025).

FUENTES DE CONSULTA

Barrington, R., David-Barret, E., Power, S., & Hough, D., Understanding Corruption – How Corruption Works in Practice (Entendiendo a la Corrupción – Cómo la Corrupción Opera en la Práctica), 2022, Agenda Publishing LTD, United Kingdom

Chayes, S., Thieves of State – Why Corruption Threatens Global Security (Ladrones de Estado – Porqué la Corrupción Amenaza la Seguridad Global), 2015, W.W. Norton & Company, New York

Holmes, L., Corruption – A Very Short Introduction (Corrupción – Una Muy Corta Introducción), 2015, Oxford University Press, United Kingdom

Klitgaard, R., Controlling Corruption (Controlando la Corrupción), 1988, University of California Press, Berkeley (USA)

Klobuchar, A., Antitrust – Taking on Monopoly Power from the Gilded Age to the Digital Age (Antimonopolio – Atacando a los Monopolios, desde la Edad Dorada hasta la Edad Digital), 2021, Alfred A. Knopf, New York

Robinson, J.A., & Acemoglu, D., Why Nations Fail (Porqué las Naciones Fallan), 2012, Crown Currency (Penguin Random House) Canada

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B.J., Corruption and Government – Causes, Consequences, and Reform (Corrupción y Gobierno – Causas, Consecuencias y Reforma), 2016, Cambridge University Press, United Kingdom



FUENTES DE TABLAS E IMÁGENES

Fig 1. OpenAI. (2025). *México que se levanta*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 2. OpenAI. (2025). *Luz sobre México*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 3. OpenAI. (2025). *El despertar de la conciencia*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 4. OpenAI (2025) “*El espejo roto*” (para ilustrar la brecha ética entre lo ideal y lo real) [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 5. OpenAI. (2025). *El precio del silencio*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 6. OpenAI. (2025). *Luz entre los muros*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 7. OpenAI. (2025). *Dos caminos*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 8. OpenAI. (2025). *El espectro humano*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 9. OpenAI. (2025). *Camuflaje social*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 10. OpenAI. (2025). *El patrón roto*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 11. OpenAI. (2025). *La sombra del voto*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 12. OpenAI. (2025). *Después del voto*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 13. OpenAI. (2025). *El poder concentrado*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 14. OpenAI. (2025). *El ciclo del poder*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 15. OpenAI. (2025). *Capital concentrado*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 16. OpenAI. (2025). *Vigilancia del poder*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 17. OpenAI. (2025). *Luz sobre el estándar*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 18. OpenAI. (2025). *El patrón que emerge*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 19. OpenAI. (2025). *El centro del liderazgo ético*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

FUENTES DE TABLAS E IMÁGENES



Fig 20. OpenAI. (2025). *Capital transparente*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 21. OpenAI. (2025). *El horizonte de decisión*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 22. OpenAI. (2025). *La maqueta de un nuevo sistema*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 23. OpenAI. (2025). *El estado transparente*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 24. OpenAI. (2025). *La mente colectiva*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 25. OpenAI. (2025). *La claridad alcanzada*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Fig 26. OpenAI. (2025). *El rostro de la esperanza*. [Imagen generada con IA]. <https://chat.openai.com/>

Tabla 1. Falk, Ö., Wallinius, M., Lundström, S., Frisell, T., Anckarsäter, H., & Kerekes, N. (2014). *The 1% of the population accountable for 63% of all violent crime convictions*. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 49(4), 559–571. <https://doi.org/10.1007/s00127-013-0783-y>

Tabla 2. Monopolios vs Corrupción — 115 países (2019) .World Bank Group. (2019). *World Economic Forum Market Dominance Dataset* (WEF + GCI) [Data set]. World Bank Data 360. <https://prosperitydata360.worldbank.org/en/dataset/WEF+GCI> Transparency International. (2019). *Corruption Perceptions Index 2019* [Data set]. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2019>

Tabla 3. Justicia penal vs corrupción — 120 países (2022) World Justice Project. (2022). *Rule of Law Index 2022: Criminal Justice Indicator*. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2022/> Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2022*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>

Tabla 4. Derechos humanos vs Corrupción — 168 países (2022) Our World in Data. (2022). *Human Rights Data Explorer* [Data set]. Our World in Data. <https://ourworldindata.org/human-rights>. Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2022* [Data set]. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>

Tabla 5. PIB per cápita vs Corrupción — 159 países (2015–2023) Central Intelligence Agency (CIA). (2023). *The World Factbook: Real GDP per capita* (country comparison) [Data set]. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/real-gdp-per-capita/country-comparison/> Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2022* [Data set]. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>

Tabla 6. Pobreza vs Corrupción — 142 países (2006–2022) World Population Review. (2022). *Poverty Rate by Country* [Data set]. *World Population Review*. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/poverty-rate-by-country> Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2022* [Data set]. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>

Endnotes

- 1 *What is Corruption?*, Transparency International, en: <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>
- 2 Barrington, Robert, David-Barret, Elizabeth, et al, “Understanding Corruption”, Agenda Publishing, 2022, Great Britan
- 3 Early Detection of Fraud and Corruption in Public Procurement Through Technology, publicado por el World Bank Group, octubre 06, 2020, disponible en: <https://www.worldbank.org/en/events/2020/10/06/early-detection-of-fraud-and-corruption-in-public-procurement-through-technology>
- 4 GIACC – Global Infrastructure Anticorruption Centre, Cost of Corruption, April 2024, disponible en: <https://giaccentre.org/the-cost-of-corruption/>
- 5 Así se mide la corrupción en México, Deloitte, 2024, disponible en: <https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articulos/asi-se-mide-corrupcion-mexico.html>
- 6 *Tasa de Prevalencia de Corrupción por cada cien mil habitantes*, 2024, INEGI, disponible en: <https://en.www.inegi.org.mx/temas/transparencia/>
- 7 *Cuéntame de México – Economía – PIB*, INEGI, datos para 2020, disponible en: <https://cuentame.inegi.org.mx/economia/pib.aspx?tema=e>
- 8 GLACC, *Op.Cit.*
- 9 *Durante 2022, Jamaica tuvo 53 homicidios por cada 100,000 habitantes, la estadística más alta del mundo, México tuvo 26, Estados Unidos sólo 6.4, pero en países con prácticamente cero corrupción, como es Singapur, la estadística es de sólo 0.12 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2022! En México hubo una persona de cada 1886 que fue asesinada en 2022, mientras que fue 1 en 16,666 en Estados Unidos, y en Singapur 1 persona de cada 833,333! Fuente: World Population Review, Murder Rates by Country 2024*, disponible en: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/murder-rate-by-country>
- 10 Recordando que de acuerdo con Transparencia Internacional, que sigue la pista de una inmensidad de países y la percepción que se tiene de la corrupción en cada uno, y que por tanto publica un “ranking” o clasificación de grado de corrupción anualmente para más de 140 países del orbe, se reporta que México en 2023, el dato más reciente (que ha sido más o menos constante en las últimas décadas, desafortunadamente), tiene un ranking de 126, con un score o calificación de elementos contra la corrupción de 31, en base a 100. Como comparación, Dinamarca es el número 1, con una calificación de 90, y Singapur es el #5, con calificación de 83. Disponible en: https://www.transparency.org/en/cpi/2023?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuO_-jIChQMVeTfUAR1diiM-NEAAYASAAEgJi2vD_BwE
- 11 *Donate Life America, Organ, Eye and Tissue Donation Statistics*, disponible en: <https://donatelife.net/donation/statistics/>, basado en 23,000 donadores en 2023, en un país con aproximadamente 335 millones de habitantes
- 12 Örjan Falk, Märta Wallinius, Sebastian Lundström, Thomas Frisell, Henrik Anckarsäter and Nóra Kerekes, “The 1% of the population accountable for 63% of all violent crime convictions”, publicado por Society of Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, de fecha 2014, volumen 49:559-571, disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-013-0783-y>
- 13 *World Population Review, Happiest Countries in the World*, 2024, disponible en: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/happiest-countries-in-the-world>
- 14 *World Population Review, Happiest Countries in the World*, 2024, disponible en: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/happiest-countries-in-the-world>
- 15 *Prison Policy Initiative*, disponible en: <https://www.prisonpolicy.org/profiles/US.html#:~:tex->

t=With%20nearly%20two%20million%20people,1%25%20of%20our%20adult%20population.

16 *Population of the United States, 2024, disponible en: [17 *Holmes, Leslie, "Corruption – A Very Short Introduction", Oxford University Press, 2015*](https://www.google.com/search?q=total+us+population+2024&sca_esv=7786c63c048a012b&source=hp&ei=KeIaZ8LIEdyrur8PnpHcoAY&iflsig=AL9bb-dgAAAAAZxrwOdIO1ErPpyZGJpmCswQheEwC-EJl&oq=total+US+population&gs_lp=Egdnd-3Mtd2l6IbN0b3RbbCBVUyBwb3B1bGF0aW9uKgILAJIFEAAAYgAQYBhAAGBYHHjIGEAAAYF-hgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYHHjIGEAAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYHHjIGEAAAYFhgeMgYQABgWGB5IqyNQAFiEEnAAeACQAQGYAc4CoAH5EKoBCDEzLjUuMC4xu-AEDyAEA-AEBmAlS0ALUDsICChAAGLAEGEMYigXCAGsQABiABBixAxiDAcICDhAA-GIAEGLEDGIMBGIOFwngIREC4YgAQYsQMY0QMYgwEYxwHCAhAQABiABBixAxbDGIM-BGIOFwngIIEAAAYgAQYsQPCAg4QLhiABBixAxiRAxiHAcCCxAnuGIAEGLEDGIMBwngIOE-C4YgAQYsQMYgwEYigXCAGgQLhiABBixA8ICBxAAGLAEGAqYAnCSBwQxMy41oAepfQ&scli-ent=gws-wiz</i></p></div><div data-bbox=)*

18 *What is the Pareto Principle – aka the Pareto Rule or the 80/20 rule, disponible en: <https://www.investopedia.com/terms/p/paretoprinciple.asp>*

19 *Psychopathy, en Psychology Today, 2024, disponible en: <https://www.psychologytoday.com/intl/basics/psychopathy#:~:text=It%20has%20been%20estimated%20that,such%20as%20the%20Hare%20checklist>*

20 *Scott, Mathew, J., Evolutionary Hierarchy of Needs, Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science, 2019, disponible en: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-16999-6_643-1*

21 *Corporate Finance Institute, 2024, Moral Hazard, disponible en: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/economics/moral-hazard/>*

22 *Dalio, R., "Principles", Simon & Shuster, 2017, p. 513*

23 *Investopedia, "What is Asymmetric Information?", disponible en: <https://www.investopedia.com/terms/a/asymmetricinformation.asp#:~:text=Asymmetric%20information%20refers%20to%20when,being%20sold%20than%20the%20buyer.>*

24 *Stone, Deborah, Policy Paradox, 3rd ed., W.W. Norton & Co., 2012, p. 239*

25 *Federal Reserve Bank of St. Louis, "What makes a market an oligopoly?", May 17, 2023, disponible en: <https://www.stlouisfed.org/open-vault/2023/may/what-makes-a-market-an-oligopoly>*

26 *Investopedia, Ross, Sean, "How does a monopoly contribute to market failure?", Enero 04, 2024, disponible en: <https://www.investopedia.com/ask/answers/042215/how-does-monopoly-contribute-market-failure.asp>*

27 *Pinheiro Machado, Arthur, "Corruption and Monopolies – An Endemic Problem", Forbes, Jul 20, 215, disponible en: <https://www.forbes.com/sites/arthurmachado/2015/07/20/corruption-and-monopolies/>*

28 *Zephyr Teachout, "The Problem of Monopolies and Public Corporate Corruption", Daedalus Magazine, Summer 2018, disponible en: <https://www.amacad.org/publication/daedalus/problem-monopolies-corporate-public-corruption>*

29 *Federal Reserve Bank of St. Louis, May 17, 2023, What makes a Market an Oligopoly?, disponible en: <https://www.stlouisfed.org/open-vault/2023/may/what-makes-a-market-an-oligopoly>*

30 *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), artículo 28, disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>*

31 *AmosWeb Encyclonomic Web-Pedia, "Eight-Firm Concentration Ratio", acceso el 25 oct 2024, disponible en: https://www.amosweb.com/cgi-bin/awb_nav.pl?s=npd&c=dsp&k=eight-firm+concentration+ratio*

32 *NEC y FIDIC están disponibles en sus sitios web: <https://fidic.org/> y en: <https://www.neccontract.com/?srsltid=AfmBOoqW6kvbCHjdaaGG9d0X78PjBdLjH1KeyPiRTzrF3OFd681yMQG->*

- 33 Dixit, A.K., & Nalebuff, B.J., *The Art of Strategy*, Chapter 12: "Voting", p. 359, W.W. Norton & Company, UK, 2008, presenta diversos detalles estratégicos sobre cómo vota la población en sistemas de dos partidos, y en sistemas con varios partidos. Diversos puntos de esta sección emanan de estos autores.
- 34 Mayer, T., & Huber, R., "Vollgeld – Das Geldsystem der Zukunft", CPI Ebner & Spiegel, Ulm, 2014, cita a Gabor Steingart (p.179) sobre cómo la democracia, entre más directa, mejor para la población.
- 35 Brenner, Reuven, *Labyrinths of Prosperity: Economic Follies, Democratic Remedies*", The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1994, p.49, libro que aboga por la democracia lo más directa posible, incluyendo el uso de iniciativas ciudadanas y referenda o consultas ciudadanas.
- 36 Leo Rogers, *Is Democracy the best form of government?* Disponible en: <https://www.nulondon.ac.uk/wp-content/uploads/2018/04/Is-democracy-the-best-form-of-government-28829.pdf>
- 37 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 41, disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- 38 La Silla Rota, *Cuánto costarán las elecciones 2024?*, Febrero 17, 2024, por Juan Ortiz Escamilla, disponible en: <https://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/febrero24m/INFOM170224/A6.pdf>
- 39 Federal Election Commission, *Contribution Limits*, disponible en: <https://www.fec.gov/help-candidates-and-committees/candidate-taking-receipts/contribution-limits/>
- 40 Las contribuciones 2024 a Donald Trump aparecen a un primer nivel de desglose, en: <https://www.opensecrets.org/2024-presidential-race/donald-trump/contributors?id=N00023864>, y las de Kamala Harris en: <https://www.opensecrets.org/2024-presidential-race/kamala-harris/contributors?id=N00036915>
- 41 Las reglas para Canada están disponibles en: <https://www.elections.ca/content.aspx?section=pol&dir=lim&document=lim2023&lang=e> (límites), y en: <https://www.elections.ca/content.aspx?section=pol&dir=tra/fin/cont/co9&document=trans&lang=e> (contribuciones anónimas), y en: <https://webapps.qlik.com/np-donations/index.html> (nombres de donadores en campañas)
- 42 Enviada el 05 de febrero de 2024 al Congreso por el entonces Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está la iniciativa de reforma a la constitución en materia electoral, dirigida a la Dip. Marcela Guerra Castillo, entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, de cuyo texto se obtiene la información planteada aquí
- 43 CPEUM, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al 31-oct-2024, Artículo 41, Numeral Romano II, disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- 44 Ley General de Partidos Políticos, artículo 10, disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP.pdf>
- 45 US Capitol Visitor Centre, *The House of Representatives and Senate: What's the difference?*, disponible en: https://www.visitthecapitol.gov/sites/default/files/documents/resources-and-activities/CVC_EED_StudentEssay_HouseSenate.pdf
- 46 Requejo Rodríguez, Paloma, "Democracia Parlamentaria y Principio Minoritario", Ariel Derecho, 2000, España
- 47 Le Monde, *Elections Legislatives 2024, Les Résultats des Elections Législatives 2024*, disponible en: <https://www.lemonde.fr/resultats-elections/> donde se aprecia la segunda ronda para el poder legislativo
- 48 BallotPedia, *Runoff Election*, disponible en: https://ballotpedia.org/Runoff_election
- 49 Dixit, A. & Nalebuff, B., *Op. Cit.*, p. 360
- 50 Musgrave, R.A., & Musgrave, P.B., *Public Finance in Theory and Practice*, Mc Graw Hill, New York, 1976, p.106
- 51 El control constitucional es observar y asegurar que toda actividad de la vida pública se adhiera estrictamente

a la constitución. El control convencional es lo mismo, en lo que respecta a los tratados internacionales firmados por México, en especial, en relación con el respeto a los derechos fundamentales de las personas humanas. El control de la legalidad es lo mismo, en relación a los ordenamientos secundarios (leyes que emanan del mandato constitucional) específicos para cada rubro normado en el cuerpo jurídico mexicano.

52 Investopedia, *What is a monopoly? Types, regulations and impact on markets*, 2024, disponible en: <https://www.investopedia.com/terms/m/monopoly.asp>

53 Por ejemplo, podría ser que un oligopolio u oligopolio, que tienen poder económico debido a los altos precios que cobran por su producto o servicio, decidan bajar los precios de sus productos temporalmente, para que el potencial competidor no pueda tener suficiente ingreso como para cubrir todos sus costos y ganancia necesaria mínima, de tal forma que el potencial competidor quiebra en breve tiempo, volviendo a dejar el mercado libre para el goce exclusivo del monopolio u oligopolio.

54 Federal Reserve Bank of St. Louis, *What makes a market an oligopoly?*, May 17, 2023, disponible en: <https://www.stlouisfed.org/open-vault/2023/may/what-makes-a-market-an-oligopoly#:~:text=for%20the%20product-,Oligopoly,similar%20but%20not%20identical%20products.>

55 World Economic Forum, *Market Dominance Scores by Country*, disponible en: <https://prosperitydata360.worldbank.org/en/dataset/WEF+GCI> y: Transparency International (TI) *Corruption Perceptions Index (Score)*, disponible en: <https://prosperitydata360.worldbank.org/en/indicator/TI+CPI+Rank>

56 Ideas expresadas por: Klobuchar, Amy, *Antitrust – Taking on Monopoly Power from the Gilded Age to the Digital Age*, Alfred A. Knopf publicaciones, New York, 2021

57 Acemoglu, Daron, and Robinson, James, A., *Why Nations Fail*, Crown Editora, USA, 2013

58 Seung Hyung Lee, Mike W. Peng, and Jay B. Barney, *Bankruptcy Law and Entrepreneurship Development: A Real Options Perspective*, publicado por The Academy of Management el 01 enero 2007, disponible en: <https://journals.aom.org/doi/full/10.5465/amr.2007.23464070>

59 Pyndick, Robert, S. y Rubinfeld, Daniel, L., *Microeconomics*, McMillan Publishing, 1989, New York, p. 368, cita una investigación del Departamento de Justicia de USA, tan sólo por una conversación telefónica entre los directores de las empresas American Airlines y Braniff Airlines

60 Tsafack, George, and Guo, Lin, “Foreign Shareholding, corporate governance and firm performance: Evidence from Chinese Companies”, *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, Volume 31, September 2021, 100516. Las firmas monopólicas u oligopólicas en general aprovechan las utilidades extraordinarias generadas en sus mercados aún a costa de darle menos utilidades a tenedores de acciones minoritarios. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214635021000605?__cf_chl_tk=QJXm27rQ6F0GYVQbX6Z-Brp2gZGaH_eFAk41E0HqHXz0-1734367276-1.0.1.1-xgvkEpq6SR07jO3sqxpY5OMFKestzfpPpw4s_pNVXQ

61 El índice de Herfindahl (Hf) estima con una sola cifra la dominancia de un mercado determinado. La cifra oscila entre 1.0 para un monopolio en determinada región o país, y puede ser muy pequeño, pero nunca cero. La cifra límite que marca la diferencia entre un oligopolio y una situación de competencia cuasi-perfecta, es $H_f = 0.15$. H_f es igual a 1.0 si hay un monopolio, pues éste tiene el 100% del mercado anual del que se trate. Si hay siete empresas distintas del mismo tamaño y por ende con aproximadamente 14.29% del mercado anual del que se trate cada una, H_f es igual a $[(0.1429)^2] \times 7 = 0.1429$ que es menor a 0.15. El mercado formado por una empresa con 50% del mercado, y 7 empresas cada una con 7.14% del mercado dan un $H_f = (0.50)^2 + [7 \times (0.0714)^2] = 0.25 + 0.0051 = 0.2551$, que es mucho mayor a 0.15, lo que muestra que el caso de “Blanca Nieves y los 7 enanitos” no deja de constituir un oligopolio con todos sus efectos adversos.

62 OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), 2011, “The Role of Institutional

Investors in Promoting Good Corporate Governance”, disponible en: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2011/11/the-role-of-institutional-investors-in-promoting-good-corporate-governance_g1g15a8a/9789264128750-en.pdf

63 *Singapur es el país con la posición número 5 en 2024 en términos de la percepción de su corrupción, con una calificación total de 83*, disponible en: <https://www.transparency.org/en/countries/singapore>

64 (Singapore) “This is the happiest country in Asia, according to the World Happiness Report”, by Ernestine Siue, with CNBC, stating on March 19th, 2024, that the city state achieved position 30 amongst the 143 countries surveyed. Available at: <https://www.cnbc.com/2024/03/20/singapore-is-the-happiest-country-in-asia-world-happiness-report-2024.html>

65 *Hong Kong 2024, Corruption Perceptions Index*, disponible en: <https://www.transparency.org/en/countries/hong-kong>

66 *Corruption Practices Investigation Bureau, CPIB*, disponible en: <https://www.cpi.gov.sg/>

67 Klitgaard, Robert, “Controlling Corruption”, Londres, 1988, principalmente en su capítulo 4 (“Graft Busters”, “Combatientes de la Corrupción”), pero más generalmente con información obtenida de todo su libro.

68 ICAC, *Independent Commission Against Corruption, Comisión Independiente Contra la Corrupción*, de Hong Kong, sitio web disponible en: <https://www.icac.org.hk/en/about/c/msg/index.html>

69 *Constitution of Singapore*, section 22L-(3)-(c), disponible en: <https://sso.agc.gov.sg/act/cons1963>

70 Klitgaard, Op. Cit., p. 77

71 *Section 182 of the Penal Code, conforme lo declara el 02 de marzo de 2021 un abogado penalista singaporeano en un artículo escrito y disponible en: https://www.singaporecriminaldefencelawyer.com/how-false-accusations-can-get-you-into-trouble/*

72 *Ex-CPIB assistant director Edwin Yeo jailed for 10 years for criminal breach of trust*, The Straits Times, Feb 20, 2014, by Elena Chong, disponible en: <https://www.straitstimes.com/singapore/ex-cpiib-assistant-director-edwin-yeo-jailed-10-years-for-criminal-breach-of-trust> (cuando el código penal dispone máximo 5 años para crímenes de corrupción)

73 Axelrod, Robert, “An Evolutionary Approach to Norms”, *The American Political Science Review*, Vol. 80, No. 4, Dec. 1986, pp. 1095-111, disponible en: [https://websites.umich.edu/~axe/Axelrod%20Norms%20APSR%201986%20\(2\).pdf](https://websites.umich.edu/~axe/Axelrod%20Norms%20APSR%201986%20(2).pdf)

74 Chayes, Sarah, *Thieves of State*, W.W. Norton & Company, New York, 2015, p. 59 y subsecuentes

75 Dammeier, Dieter, C., *Fading Privacy Rights of Public Employees*, *Harvard Law & Policy Review*, Vol. 6, 2012, p. 297-, disponible en: <https://journals.law.harvard.edu/lpr/wp-content/uploads/sites/89/2013/06/Fading-Privacy-Rights-of-Public-Employees.pdf>

76 Kotlyar, Dmytro, and Pop, Laura, *Asset Declarations: A Threat to Privacy, or a Powerful Anticorruption Tool?*, World Bank Group, September 26, 2016, disponible en: <https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2016/09/26/asset-declarations-a-threat-to-privacy-or-a-powerful-anti-corruption-tool>

77 CPEUM, *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, siempre en su versión más reciente, de aplicabilidad vigente, está disponible a todos en el sitio del Congreso: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

78 *United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Corruption and Human Rights*, disponible en: <https://www.ohchr.org/en/good-governance/corruption-and-human-rights>

79 Spalding, Andrew & Murray, Mathew, *Freedom from Official Corruption as a Human Right*, Brookings Institution, enero 28, 2015, disponible en: <https://www.brookings.edu/articles/freedom-from-official-corruption-as-a-human-right/>

- 80 Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_Penal_Federal.pdf
- 81 Disponible cortesía de la Universidad de Cornell en: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/201>
- 82 El INEGI publica diariamente el valor diario de la UMA, que está en aproximadamente 110 pesos a finales de 2024. Se puede consultar en: <https://www.inegi.org.mx/temas/uma/>
- 83 Feigen, M., Wallach, B., and Warendb, A., Look to Military History for Lessons in Crisis Leadership, July 29, 2020, de HBR (Harvard Business Review), disponible en: <https://www.bizjournals.com/sanjose/news/2020/07/29/hbr-look-to-military-history-for-crisis-leadership.html>
- 84 Gobierno de México anuncia creación de Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, disponible en: <https://www.gob.mx/sfp/prensa/gobierno-de-mexico-anuncia-creacion-de-secretaria-anticorrupcion-y-de-buen-gobierno-380785>
- 85 Diario El País, Jorge Zepeda Patterson, Sheinbaum Contra la Corrupción: Entre la Ambición y el Realismo, 03 abril 2024, disponible en: <https://elpais.com/mexico/opinion/2024-04-03/sheinbaum-contra-la-corrupcion-entre-la-ambicion-y-el-realismo.html>
- 86 BBVA Research, Mexico, Poverty decreases at its lowest level (36.3%), but access to health deteriorates. August 16, 2023, disponible en: <https://www.bbvarsearch.com/en/publicaciones/mexico-poverty-decreases-at-its-lowest-level-363-but-access-to-health-deteriorates/>
- 87 World Bank Group, Corruption is a Global Problem for Development, June 13, 2023, by Ousmane Diagana and Mouhamadou Diagne, disponible en: <https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2023/06/13/corruption-is-a-global-problem-for-development-to-fight-it-we-all-have-a-role-to-play>
- 88 AACI American Anticorruption Institute, escrito por el staff, Corruption and National Security: A call to action for sustainable security, August 19, 2024, disponible en: <https://blog.theaaci.com/corruption-and-national-security-a-call-to-action-for-sustainable-development/>
- 89 Una estimación personal del autor, basada en proporciones tanto de territorio nacional como de población en países desarrollados con un buen nivel de seguridad pública y baja criminalidad sugiere que, para que México logre abatir la violencia y criminalidad en todo el territorio nacional, 24×365 , se requerirían aproximadamente 500,000 cuerpos en campo de Guardia Nacional bien seleccionados, equipados, entrenados y compensados, más de aproximadamente 5,000 fiscalías estatales y federales, junto con más de aproximadamente 2,000 jueces de todos los órdenes, y capacidad penitenciaria para al menos aproximadamente unos 1.3 millones de internos sin condiciones de hacinamiento. Las cifras actuales son mucho más bajas. Como ejemplo está el número de Guardias Nacionales operativos, que no suma siquiera 250,000 aproximadamente, actualmente. Aunque parece ser que entre Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, aplicadas de forma más o menos indistinta a la seguridad pública nacional, se llegaría a la cifra deseada. Bajo este escenario muy parecido al actual, cuando un área territorial requiriese urgentemente atención policial, fuerzas que se desplazan hacia ella abren huecos de supervisión policial en otros territorios, en una historia aparentemente inacabable de insuficiencia policial. El resultado puede ser gran número de denuncias y casos no atendidos, tiempos extremadamente largos de atención, y baja o nula respuesta de la seguridad pública ante el crimen, así como altos niveles de excarceración, inclusive de criminales que por su perfil de peligrosidad no deberían cumplir condenas fuera de prisión. La extinción de la corrupción conllevaría un círculo virtuoso de confianza-inversión-empleo-utilidades-impuestos que generaría la capacidad financiera pública para sustentar este urgente aparato secuencial de control de la violencia y criminalidad en México. El requerimiento presupuestal para lograrlo se estima que podría ser para este rubro de aproximadamente un 50% más alto que el actual. Las estadísticas publicadas sobre inseguridad en México recientemente parecen indicar que hay positivos avances en este rubro actualmente, algo muy deseable y que merece ser celebrado, conforme los hechos futuros en seguridad pública reafirmen estos indicadores afortunados.
- 90 Holmes, Leslie, Corruption – A very short introduction, Oxford University Press, London, 2015, pp. 70-

91 *Expansión, Prima de Riesgo México, 09 dic 2024, está en 8.34% anualizado, disponible en: <https://datosmacro.expansion.com/prima-riesgo/mexico>. Es decir, cualquier proyecto de infraestructura, digamos en Estados Unidos, debe ofrecerle a los capitalistas un retorno esperado anualizado que es 8.34% menor al retorno que esos mismos inversionistas pedirían si tuvieran que invertir su capital en México. Los propietarios del capital en México no piensan distinto, pues ellos ven globalmente en todo el planeta dónde colocar su capital para maximizar sus retornos a la vez que minimizan el riesgo de que su capital y retornos se desvanezcan o reduzcan por el riesgo de cada proyecto y cada país.*

92 *Si un proyecto necesitara \$100 de capital, opera 15 años, y rindiera 19.64\$ de dividendos totales cada año, retornaría un 18% anualizado. Si en este ejemplo el grupo privado capitalista requiere un retorno del 15% anualizado para el riesgo del proyecto en sí y el riesgo país de México, este grupo puede invertir los \$100 completos, obtener el 87% de los dividendos (\$17.08/año) por 15 años, y así lograr su retorno al capital de exactamente el 15% anualizado. El gobierno de México no invirtió nada, tiene capacidad de veto en el voto y supervisión total del proyecto, mientras que recibe una pequeña porción de los dividendos del proyecto, a la vez asegurándose que el proyecto no desampare a la población por precios excesivos del producto o servicio, o mala calidad, o escasez o largos tiempos de espera. A la vez, la estructura mixta facilita la simetría de información, puesto que se introducirían las figuras de la Auditoría Superior de la Federación, y también de auditores técnicos y económicos del sector privado, para que unos cuiden a los otros, y unos delaten a los otros en casos de mala conducta (corrupción).*

93 *Comenta Sarah Chayes ("Thieves of State", Op.Cit.), pp.164-167, que el abogado de derechos humanos Geoffrey Robertson resalta la relevancia para estos derechos de que al rey inglés Carlos I se le juzgara como a cualquier otro ciudadano inglés y se le condenara a muerte por sus delitos, hace más de 3 siglos, hacia 1649.*

94 *Transparency International – Mexico, disponible en: <https://www.transparency.org/en/countries/mexico>*

95 *Musgrave, R.A., & Musgrave, P.B., en "Public Finance in Theory and Practice" (2nd edition, McGraw Hill, p. 95).*

96 *CELAG Data, "México, a 5 años de la 4T", Auxiliadora Honorato y Anibal García Fernández, 09 enero 2025, disponible en: <https://www.celag.org/mexico-a-5-anos-de-la-4t/>; y El Sol de León, "Los Logros y los Retos de la 4T", Adriana Guzmán Serna, 27 septiembre 2024, disponible en: <https://oem.com.mx/elsoldeleon/analisis/los-logros-y-los-retos-de-la-4t-13142020>*

97 *Hongseok, Kim, Why Does GDP per Capita differ from per capita family income?, Iowa State University, Nov 6, 2023, disponible en: <https://www.econ.iastate.edu/ask-an-economist/why-does-gdp-capita-differ-average-family-income>*



Fig. 1 Mexico Rising. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

PROLOGUE

We must acknowledge it: corruption hasn't ended...

Saying that corruption is over, or simply not mentioning it, doesn't make it disappear. Corruption doesn't obey declarations: it is a system that adapts, disguises itself, and learns to exploit loopholes in the law, the lack of professionalism in public administration, and the gray zones of politics. That is why corruption hasn't ended. And precisely because it hasn't, today it can finally begin to be dismantled in earnest.

This is not about denying progress or spreading discouragement. It's about recognizing that the problem runs deeper than a headline or good intentions. The person waiting in line at a public hospital, the businesswoman competing for a contract, the young woman taking an entrance exam, the honest police officer reporting a bribe; they all know the difference between propaganda and results. We owe them the truth, not comfort.

The uncomfortable truths must be brought to light through the lens of the text that brings us together:

1. Impunity persists. As long as sanctioning and criminal proceedings take years, the incentives for corruption remain intact. According to the Atlas of Impunity 2024, Mexico has faced a bleak outlook for over a decade, with high scores reflecting severe gaps in justice, governance, and human rights. Both citizen perception and independent data reinforce this reality: impunity continues to erode the rule of law; a responsibility shared by all levels and branches of government.
2. Public procurement remains opaque. Where there is urgency, there is often exception; where there is exception, there is risk. If data are incomplete, untimely, or incomparable, oversight becomes an illusion. An open government vision cannot remain rhetoric; we must truly render accounts, ensure transparency, and foster constant collaboration between citizens and institutions to build joint solutions for the public good.
3. Public works are especially vulnerable. Advance payments, "extraordinary prices," amended contracts, complacent supervision, and delayed audits; a familiar script repeated under new names. According to Mexico's Auditoría Superior de la Federación (ASF), in 2024 most federal and state agencies failed to comply with the Public Works Law by executing projects without executive plans, leading to cost overruns, in some cases exceeding 284% of the original budget.
4. Whistleblowers remain unprotected. Without secure channels, guarantees of confidentiality, and protection from retaliation, the message seems to be: "better not to report." Let's not forget that major corruption cases (Panama Papers, Odebrecht), which drove political and legal change worldwide, came from whistleblowers. Mexico still lacks a comprehensive national law to protect them, relying instead on scattered regulations and internal government protocols that often fail outside the federal sphere.



Existing frameworks, such as the General Law of Administrative Responsibilities (LGRA), include limited mechanisms for reporting irregularities but do not ensure effective protection or safeguards against reprisals.

5. Asset intelligence remains weak. Public officials' asset and interest declarations, beneficial ownership data, and information on procurement, works, registries, and judgments are still neither open nor interoperable. As long as public offices are seen as spoils and institutions as personal fiefdoms, they cannot fulfill their intended public purpose. Where the State fails to cross-check information or generate early alerts for control and sanction, corruption finds a perfect refuge.

The Cost of Inaction

Corruption has not only weakened the Mexican State; it has stolen our time, trust, and future. It is the most “competitive” input because it always wins: it shuts down clinics, drives up medicine prices, expels talent, distorts markets, destroys the promise of social mobility, and turns the law into an auction for whoever can pay more. When citizens affirm that, along with insecurity, corruption remains one of the country's top two problems, public life withers and democracy fades.

Corruption hasn't ended. But it can begin to end today if we choose to move the right gears, like those Ricardo Zamora highlights in this text. We are not asking for miracles, only for rules that do not depend on goodwill, institutions that work and outlast administrations, and results verifiable by anyone.

Because, in the end, the most powerful message against corruption is simple: clear accounts, certain sanctions, and open doors to citizens. Speaking about corruption in the world is to speak about an open wound that cuts across politics, society, and the economy. For decades, it has been assumed that this evil is inevitable, a part of history and culture in many nations. Yet the book the reader holds dismantles that narrative; it shows clearly that corruption is not an inevitable destiny, but a structural problem that can be solved with knowledge, will, and institutional design.

Ricardo Zamora Mesinas approaches the phenomenon with uncommon rigor: he explains in clear terms what corruption is, how much it costs, what causes it, and above all, which proven mechanisms can be applied in national contexts. He does so without resorting to current scandals or personal accusations, giving the text an objective and universal tone. This approach makes each chapter both a tool for analysis and a call to civic action.

The value of this contribution lies in its practicality. It doesn't stop at denunciation; it offers a realistic anti-corruption design for Mexico, adapted to our political, social, and cultural context, yet enriched by international experiences and scientific studies on human behavior. The author reminds us that corruption can be fought, and that other countries, under even harsher conditions, have done so successfully.



May this book, then, be a point of departure; a reminder that corruption does not define us, and that Mexico can aspire to a fairer, more transparent, and dignified future for all.

Natalia Téllez Torres Orozco y Vania Pérez Morales

Ciudad de México, Summer 2025.



Fig. 2 Light over Mexico. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

INTRODUCTION

Practically all Mexicans, including myself, have had enough with corruption. Corruption is a popular conversation topic in the majority of social circles, professional groups, and families. Sometimes, even without mentioning the word “corruption”, people complain or criticize so many things which are not functioning well in everyday life in Mexico.

Very few people, nonetheless, know what corruption is about, how corruption is harmful, and how corruption can be resolved. It is common to associate many bad things or events happening in everyday life to bad luck, “divine providence”, or to “bad people” in general. Few people visualize or take conscience of the link between corruption and numerous adverse happenings taking place in everyday life.

Whenever a society, such as the Mexican society, is so afflicted by corruption, it is imperative that this topic be resolved in a radical fashion, as soon as possible. In an ambient of corruption, “nothing works out the way it should”, loosely said. In essence, with the prevalence of corruption, things do not turn out the way they logically should. And if things do not turn out how they logically should, very likely the root cause of the problem is corruption.

Problems of all types are traceable to corruption in Mexico. Without citing every one of them, difficulties of a variety of nature’s find their origin in corruption. Problems in the labor market, environmental problems, tax-related issues, security risks, health service difficulties, deficient education themes, problems in the fuel markets, in the administration of justice, a horrible poverty problem, traffic and logistical problems, scarcity of electricity and of potable water, Northbound migration, So many problems are born due to corruption!

How may corruption be resolved? The first thing to do is to believe that corruption in Mexico can be solved. Other countries in previously worse corruption conditions than Mexico have achieved it, as long as due popular will and political momentum are in place.

The present writing attempts to shed some light upon this grave social problem hurting a large proportion of the world, a problem particularly acute in Mexico, our country. Each individual in Mexico may well have his/her own perspective as to why corruption occurs. Each person has his/her own opinion as to whether corruption in Mexico is light or intense. The individual perspective depends on how corruption hurts, or (unfortunately) benefits each person.

In order to begin resolving this serious corruption problem it is key to, first, understand the causes of corruption, and how it has been successfully attacked in other countries, without neglecting the fact that what may have worked in other parts of the world, may not necessarily or exactly be the cure for corruption in Mexico. Resolving the Mexican corruption problem demands that known anti-corruption tools be realistically adapted to today’s Mexican context, as well as to the

Mexican culture. Wrong ideas are frequently aired about this problem and its solution, this oftentimes works great in favor of the few ones who actually benefit substantially from corruption; those who naturally do not want corruption to stop. Those few ones benefiting from corruption circulate wrong ideas about its solution, their argument is that corruption is inevitable, that it is a “cultural” trait of Mexico, inherited as part of our history, even claiming that Mexicans are “different” from all other humans in the world, etcetera. Of course education is an important, but not sufficient, component in the fight against corruption. Other generally applicable principles are indispensable and do complement education, if the aim is truly to extinguish corruption in our society.

Frankly said, in the real material world, taking into account the economic behavior of every human being, there are rules of stimulus-reaction which are of general applicability, both to persons in Mexico as well as to those in the rest of the world. These cause-effect models have been well understood in countries with little or essentially no corruption today. Countries with greater levels of wellbeing enjoyed by the overwhelming majority of their citizens. Such models have given quite positive results upon application, clearly. Corruption has become practically a resolved matter across many such countries on this planet, without regard for particular “cultures or histories”.

The more people become aware of corruption, its causes, its gravity, and the feasible solutions to fix it in the Mexican current reality, the louder the clamor, the stronger the popular demand upon the State may become, so it does its due job to abate, even to extinguish perhaps, this terrible Mexican disease, before it is too late. It should be expected that the Mexican people, rather than its government, create respectful, legal and legitimate pressure upon the latter to induce it to act effectively to eliminate all possible causes of corruption. This writing is focused on highlighting those public policies with the greatest probable effect at the expense of the smallest possible change requirement. Policies amenable to implementation today in this country, without requiring drastic changes impossible to enact in a short one- or two- year term, so as to begin noticing good results as soon as possible.

This brief study does not attempt to become an exhaustive analysis of each corrupt event or situation documented in the international literature. Rather, it has as a key goal to offer the reader a clear and simple view of the problem, and what can be done about it. A large majority of the ideas and information provided here emanate from other studies of corruption in the world. The writer has simply concentrated on establishing a coherent thread of many of those ideas and concepts already proven, framing them within the Mexican current context with a primarily practical perspective: which of them, and how could they be implemented in our country. An essentially practical, rather than theoretical, approach to this problem.

The more Mexicans raise their voice demanding the eradication of corruption while simultaneously stating the right mechanisms to achieve it, the more likely it will be that this evil reduces its size substantially, hopefully disappearing from our society. The consequence of this popular effort would naturally be reflected in positive and magnified favorable effects upon Mexican justice, wellbeing, the economy, and the overall quality of life of the general population. It is hoped that every reader may be able to, and willing to, communicate as amply as possible and with all feasible frequency to everyone around themselves the notions of what is corruption, how it is combated, while at the same time inviting more citizens to generate healthy, legal, respectful and legitimate popular pressure that the Mexican State will listen to, so as to promote the action on the part of government according to such popular mandate, soon.

This text avoids at all times mentioning specific names and facts when exemplifying the horrendously harmful effects of corruption. The idea is never to generalize, as in every ambit of social life there generally are a very large majority of good people, and very few evil, harmful individuals. Granted, the very few evil ones cause great damage to the very many good ones.

Neither is the intent of this text to exacerbate the confrontation between different social, political or economic groups within Mexican society. The idea is, with due respect, and with the essential scientific basis, to promote that the average Mexican citizen may do his/her part, from wherever his/her work point is, and always supported by valid knowledge about what solutions (as simple as possible) will function, so that the corrupt part of the Mexican State and of the private sector, and every corrupt individual in Mexico, greatly diminish their corrupt conduct or, better still, do stop behaving in a corrupt manner altogether. This can only be achieved once the rules of the Mexican public sector incorporate equitable, legal and democratic incentives to behave less corruptly from now on.

In reality, every political system and almost every economic system, without corruption, with full adherence to the norms established based on the acquiescence of the people, and without distortions generated by the economic interest of a few promoting disobedience of those general norms, can work very well. The focus should be on erradicating corruption, rather than on creating and maintaining a pugnacious tension regarding which political side or which economic group “runs” Mexico at any given moment. Corruption’s harm does not respect neither political nor economic colors, while the absence of corruption does infinite good to every possible political or economic line, doubtlessly.

It is expected that this text turns out to be light to read, and informative. Hopefully, many a reader will utter an “Oh!” exclamation whenever he/she discovers interesting knowledge with practical applicability in corruption prevention. More important even, is to stimulate the reader to embark upon a personal crusade to combat corruption by disseminating these ideas, publishing them, voicing them aloud, demanding in his/her own reach within the personal sphere of action that a few key rules change in the public life of this country, chiefly those relevant rules governing the relationship between the public and the private sectors in the country. Hopefully a few such basic rules or policies will change in a definitive fashion the popular acceptance as to how the Mexican public sector should conduct itself in the future, as a whole.

Let us never forget that a very sizable portion of all Mexican citizens, both from the private and the public sectors, are honest and non-corrupt. It is that very small proportion of human beings with an unfortunate propensity to practice corruption, as it will become evident in this text, what causes great harm to a very large majority of the Mexican population. And that, honestly, is not fair.

It is clear to the author, and it is expected that so it is for all readers as well, that man and woman are entirely equal across all dimensions, always. For grammatical economy, this text has been written frequently omitting the syntactic differentiation for he/she. This should not be interpreted by the reader that this implicitly means there is any differences between the feminine and masculine genders, as there aren’t any. For everything written here, gender is indistinct, and the writer thanks the reader for his/her consideration.

Ricardo Zamora Mesinas

February 2025



Fig. 3 The awakening of conscience. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

WHAT IS CORRUPTION?

In general terms, corruption is defined as “the abuse of public power for private benefit¹”. Corruption, philosophically, means that people are not doing what they are supposed to do, since by not doing it, they materially benefit. Corruption is to open the divide between “what ought to be”, and “what is”. As a result of such divide, someone derives a material benefit for himself/herself. In a practical sense, corruption is a social problem. Besides constituting a crime, it is socially relevant as a seriously damaging element to the detriment of the general population. Corruption always involves, at least, a public servant and a private individual. Corruption may also occur exclusively within the private sector domain, but this type of corruption is only a matter of interest for the owners of the enterprises where it occurs, while the corruption which is a matter of general interest for everyone, is the one occurring between a public servant, and an individual from the private sector, the latter as a single citizen, or as a part of a private enterprise which derives benefit from the corrupt act.

Thus, society’s true interest in corruption is as it relates to the public sector, not corruption occurring between two private parties, which would be the case, for example, of a corporate buyer for a commercial enterprise asking for bribes from his/her suppliers.

Corruption presents many faces in daily life. It materializes via an infinitude of behaviors, for example:

- The police officer who accepts a money bribe in exchange for not applying the law, giving rise to street insecurity
- The medical worker asking for a gift or a gratuity to perform a patient consultation, or to deliver medication from the hospital pharmacy to a patient
- The school principal expecting something material in exchange for enrolling the kid, or to guarantee a passing grade
- The public employee who distributes food to the poor who rations food because he/she prefers to deliver better product in the right quantity only if a gratuity is given to him/her
- The state attorney who refuses to record a crime, lest the victim applies some “rub money” on his/her palm; or the public attorney who, for a pack of bills in an envelope indicts an innocent individual for crimes not committed by the latter
- The judge who acquits a guilty one, or the judge who convicts the innocent, as long as enough “dough” has been given to his/her “Honor” to have the sentence “fixed”
- The legislator, or group of them, who writes and passes a law, or refuses to pass a law, so a particular group is protected, or a particular group is attacked, thus hurting or not protecting the general population in the process
- The expensive and inexperienced company winning a public tender for a juicy supply contract, a public works contract, or a concession contract, when other enterprises can guarantee a better product or service, under better price conditions, and who also may have much better capacity to fulfill the contract’s obligations

- The selective distribution of free goods and food in emergencies by public servants assisting disaster-stricken communities in exchange for palm money while the weakest, poorest are left without access to such emergency resources
- The real estate developer who offers the environmental inspector money, or shares of the development corporation, or a house or a lot in the development, in exchange for the granting of the environmental permit, or for the permit to drill a well to extract unlimited volumes of potable water for the exclusive use by the new development, in a desert tract of Baja, for example, where surrounding dwellers do not even have running water
- The public servant who includes in the government's payroll a friend, or a family member, or grants contracts to his own corporation (nepotism) or one from friends or family; or the public servant who in exchange for performing the "favor" to his/her private sector counterpart requests the same in relation to the private sector individual's businesses or companies
- Etcetera

As soon as a conscience has developed as to what corruption consists of, one starts to detect its pernicious effects everywhere. Sometimes it is difficult to realize it, but with a little analysis and taking into account the definition of corruption, one may conclude that when something is very wrong, a corrupt event may well be behind the grave problem. Other subtle expressions of corruption and its workings can be: Dangerous roads because the government "saved" on the clover ingress and egress to the road by providing awkward left turn access lanes without medians between the opposing lanes. Public parks with non-rectangular shapes as they were converted into parks from former local airport grounds no longer in use but which were rectangular, when the park-"sponsoring" politician carves out a portion of the rectangle for himself/herself for personal development and sale of residences and lots facing the park. In an even more veiled fashion, corruption may emerge in as vulgar a fashion as when legislators, strangely, do not pass a law banning the sale of junk food at elementary school concessions by providing ridiculous arguments on job losses, so the manufacturing companies selling junk food keep their business going.

There is no limit to the forms, some subtle and others evident and grotesque, in which corruption materializes harming the citizenry, every day, everywhere, with its deleterious effects as government poor service, extra costs, lost time, unpleasant treatment, suboptimal results, threat on life and/or freedom, etcetera. In general, corruption involves acts which do not comply with a given written law, acts in which a private individual or enterprise is involved, in coordination with one or a few public servants who facilitate the violation of such norm. The non-observance of the norm generates some benefit to the private individual or enterprise. And the public servant or servants coordinated with the private individual or enterprise also derive a material benefit from the former, in exchange for easing the non-observance of the norm. In other cases there may prevail a similar situation, but the "deal" is to ensure through the corrupt public servant(s) that a norm be written in certain form, or that a given norm be abrogated, or that a given norm be interpreted in a particular way in a court of law so as to favor the corrupt act and actors. And in general, corruption affects some public good, goods that belong to everyone, sometimes in an evident fashion, sometimes in subtle ways. Oftentimes corruption thus generates a "confusion" between public goods and private goods, always in benefit of some private person or company. For example, when a formerly public tract of land illegally ends up being the property of a private party, thanks to corruption.

Whenever something is going wrong in the public spaces, on the streets, in the services and products provided by any level of government, even including the unavailability, inordinate prices or low quality of goods and services sold by private sector companies, corruption in action may become evident. One just needs to ponder: What corrupt arrangement could have been made by a public servant, along with a private individual or enterprise, so as to have rendered this thing, or that, unusable, useless, or generally malfunctioning?

The answer obtained via analysis, sometimes simple, sometimes complex, generally ends up being a plausible explanation as to how corruption functioned in each case: How a public servant disobeyed norms, not observing his/her duty, in conjunction with a private individual, to the benefit of both, to the detriment of society, as a whole.

Corruption, then, occurs when things do not function as they should, when norms are not observed. As norms are not observed and things malfunction, a material benefit accrues to the two parts involved in the act: to the public servant and to the private individual or enterprise who have come to secret terms, precisely in order to circumvent the written norms which dictate how the public servant should conduct himself/herself.

In general terms, what may represent a material benefit to a public servant in exchange for his/hers not fulfilling his/her obligations, so as to benefit a private entity or individual? The most common ways of compensating a public servant for his/her willful non-observance of his/her obligations can be: giving him or her either cash money, or bank deposits, material gifts or intangible (services) which the private corruption actor normally produces or sells, and/or trips, meals, entertainment, sexual favors or even shares of stock from companies, or deeds of real property². These illegal forms of compensation can be provided to the public servant himself/herself, or to his/her close relatives instead, mostly to: children, parents or spouses, and sometimes even to a “friend-ally”.

In more sophisticated schemes, compensation to public servants in corrupt acts may be received by such “friend-ally” individuals apparently not related to the public servant himself/herself. The recipients are commonly known as “name lenders”, in which case identification of the corrupt act by following the money trail or gift “trail” is more difficult, but not impossible. The search effort may then have to focus on what material or financial benefit has been recorded in favor of any individual, who does not appear to be at all related to the occupation or business of the “name lender”. Illogical and sudden appearances of wealth in the digital records of any individual are always suspect and may point to acts of corruption which should then be traced back to a relationship to an individual in the public sector.

Lastly, it must be clear, there always are two criminal parties in every corrupt act. Both are guilty, and both deserve punishment. Culpability and its effects should be borne both by the public servant who asks for and/or accepts/receives any economic or material benefit, inasmuch as the private individual or enterprise who offers, or agrees to give, by himself/herself, or via intermediary, such economic or material benefit to the corrupt public servant. Corruption is an anti-social act, harmful to all of society, and corruption unfortunately tends to become a contagious conduct. Corruption intensity and variety of expression increases with time whenever society shows tolerance to it. Corruption, then, is always an act which requires the participation of at least two parties, one who always belongs to the public sector, and another, belonging to the private sector, be it a private individual or a private enterprise, alike.



Fig. 4 The broken mirror. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

THE COST OF CORRUPTION

There is a variety of social studies attempting to estimate the economic cost and frequency of occurrence of corruption for a large set of countries, Mexico included. For example, the World Bank Group reports that between the payment of bribes and what is stolen through corrupt acts worldwide, 3.6 trillion dollars were wasted in 2020, representing approximately 5% of world GDP³.

For the case of Mexico in particular, consulting firm Deloitte published that the cost of corruption for our country is approximately equivalent to 9% of the country's GDP, citing as a source the World Bank⁴. Thus, in terms of the purely economic cost of corruption, while the world average stands at approximately 5% of GDP for the entire planet, Mexico's is roughly double the world average. On the other hand, INEGI, the Mexican Statistics Office, reports in 2024 that during 2023, the prevalence of corruption in Mexico as it relates to an interaction between a private citizen and a public servant was estimated from surveys to be about 13,966 corrupt events per 100,000 inhabitants during the year. This means that approximately one in 7.16 citizen-public servant interactions involved some corrupt act in the country during the year⁵.

The above statistics have some important implications for Mexico. There are many more statistics illuminating the quantitative intensity of corrupt activity in different countries. What can be gleaned from the above figures is that with Mexico being a country with a GDP estimation of 1.073 billion USD in 2020 terms⁶, approximately 90 billion USD are "lost" to corruption every year. It is as if from each liter of milk produced each morning in a cattle ranch, roughly 90 millimeters are thrown away, or rather pillaged away. Despite this, Mexico's GDP has grown, sometimes feebly, but it has grown throughout the years, nonetheless. Not a small feat, under the circumstances.

An interesting scenario is to consider what would happen if the Mexican population produced at the same pace as now, but without corruption in the country. A great material improvement would result for all Mexicans, to the extent that corruption would not "eat away" such great proportion of GDP. Here, the term "eat away" is appropriate because in general those parties involved in corrupt acts, inferentially are thought not to apply the proceeds from corruption to productive uses, but that they rather consume it themselves.

The cost of corruption, nonetheless, is not only of an economic nature. The highest cost in a country, such as Mexico with its very high levels of poverty, occurs at the social and multi-dimensional levels. The GIACC quotes: "Corruption is one of the greatest obstacles to the alleviation of poverty, and to the development of adequate and safe food, water, healthcare, education and infrastructure. CORRUPTION KILLS⁷!".

If the high rate of criminality is taken into account in today's Mexico, and a connection inference is made to corruption as the substantive possible cause for the insufficient performance on the part of many government entities involved in national security, then it can really be concluded that corruption kills⁸.

Going back to the position that, as a result of corruption, public servants do not do what they should do, thus not complying with the norms they should follow, things in Mexico's public life may not turn out very well in general as a result of corruption. Obviously, if things do not get done well, the results are generally adverse: insufficient production ensues, what is produced is faulty, things are not cared for and looked after, corrective action does not happen on time, etcetera. Here, the term producing means both the production of goods as well as the "production" or the rendering of services.

The above implies that corruption may have had a cost even in terms of human lives, in addition to an infinitude of person-hours, plus money, lost by Mexico's citizens. Costs borne only by the Mexican population in general, not by the corrupt individuals who caused them.

It is unfortunate to infer, correctly from all of the above, that those most hurt by corruption tend to be the poorest, the least educated, those with the least social protection. Corruption is an undeserved punishment flogging more harshly those less prepared to escape from it. Even in the economic front, a bribe of a given size represents a greater fraction of the income of a poor individual, relative to the income of a rich person: the poor pay in their daily lives the ravages of corruption more expensively than the rich ones, in relative terms.

Keeping in mind that corruption means that public servants do not do what they should, because by not doing it they personally benefit directly or indirectly, immediately or after a delay, the connection can be established between a large number of situations normally occurring in Mexico, and corruption as being their most probable cause. In practical terms, corruption in Mexico touches upon all public and social activity, unfortunately⁹. Without question, Mexico is a country correctly perceived to have very high levels of corruption, in the world order.



Fig. 5 The price of silence. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).



A few hypothetical examples, which may very well have happened once, without getting too specific, may be realistically taken as cases worthy of potential corroboration by the Mexican citizenry:

- Food support for the poor that never gets to them, as public servants keep the food supports for themselves
- Polluted milk, for example, purchased abroad by a public servant in exchange for a bribe, despite the fact that the milk was poisoned or undrinkable
- The taking of funds, or the reduction in available funds due to kickbacks, which would otherwise be employed to build piping and canals for potable water for the people or for elimination of sewage and rain water to avoid flooding and/or drowning
- Medication past its expiry date, “medication” without active curing molecules to heal in it, accepted by public servants who distort a bid process to favor the supplier who gave a bribe to win the contract, patients dying notwithstanding
- Fertilizer not reaching the hands of the poorest peasants, as public servants sell the free fertilizer to more prosperous farmers, thus exacerbating hunger and malnutrition amongst the poorest
- Insufficient miles of roads, roads poorly built, yet expensively made, dangerous routes when not all funds tagged for construction are applied to building them. The same in the case of construction of schools, hospitals, power generating plants, courts, police quarters, rail lines and other key infrastructure
- Criminals on the loose due to insufficient police forces, without adequate, and ominously low wages, criminals on the loose due to district attorneys without the motivation or the diligence to promptly research crimes, while also willing to invent crimes. Judges issuing senseless sentences, giving rise to out-of-control criminality
- Electric power which may not be too expensive, but may be produced in insufficient quantity, with all too frequent black outs resulting in low national productivity
- Insufficient potable water, contaminated or brackish water for the general population, distributed via tank trucks to the neediest,as long as a side payment is collected by the truck driver
- Very high rates of interest resulting in loans which can never be amortized, as loan foreclosure laws are not enforced giving rise to usury street lenders profiting, instead of counting on reputable lending institutions lending to the poor at reasonable risk-adjusted rates. Nonpaying debtors rewarding judges for not issuing eviction sentences to protect the delinquent borrowers for ages
- The medic not well prepared, the ignorant accountant, the incapable lawyer, the insufficiently prepared engineer, the absentee teacher, all those professionals coming out of mediocre schools, learning from bad instructors who bought their union teaching posts, professionals who acquired their professional license in the black market with falsified school transcripts
- The woman murdered just by virtue of her being a woman, whose death goes unpunished, but also the innocent man who enters prison due to false accusations by a woman without scruples
- Etcetera



Corruption kills!

Corruption always results in solutions which end up being scarce and arrive late to the population: too little, too late. Corruption always produces bad service, bad quality, long waiting times, scarcity, insecurity, danger. Corruption enables the stronger echelons of society to increase their power by co-opting public servants so laws are written in their favor, law are administered in their favor, laws are interpreted in the courts in their favor, harming consumers and annihilating competition in their commercial sector.

Adversity brought about by corruption in everyday life promotes high levels of stress across the general population. Corruption becomes unbearable and creates a sense of generalized despair not conducive to positive social change. The population, in masse, loses all hope that things may change for the better. Corruption builds anxiety across the population, nobody knows what outcome to expect from most situations in which the government intervenes. Corruption makes any logical and predictable outcome not predictable, not logical, and this effect stalls the efforts of the overall population to come ahead in life. Corruption is a meta-risk on top of all other naturally occurring risks derived from daily living, due to the uncertainty corruption generates in every aspect of life across all of society.

Corruption cannot change if the leading public servants, those morally responsible for eliminating it, do not do it. As many of them have no incentive to fight it, in a vicious cycle. It is thus essential that the general population learn what corruption is and how it is evidenced under different circumstances, so that people may fully identify corruption's harmful effects on each of them as individual citizens. Only so may the citizenry build up the critical mass of public voices with sufficient political momentum to uproot corruption for good.

As a conclusion, corruption is very costly, both macroeconomically, hurting GDP, but also from the point of view of the welfare of the population. Corruption is very costly across dimensions different from the merely economic front, directly and personally affecting each citizen in his/her daily life. Thus, it becomes key to promote across all citizens the concept that corruption is what makes things not function properly. All individuals must learn that corruption is the non observance of the norms by public servants. As a result of corruption, a great variety of things do not function in the community. Corruption is the result of someone, secretly, providing a personal benefit to a public servant so the latter skirts his/her lawfully mandated obligations which were stipulated in the written norms. With corruption, things do not turn out as expected, and that is very costly to everyone, all the time.

Only by creating a generalized conscience in the minds of the entire population about how corruption is the most likely cause of society's daily problems, will sufficient popular political force rise to demand to public servants a tangible and concrete attack on corruption, in order to stop its deleterious effects, before it is too late.



Fig. 6 Light between walls. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).



Fig. 7 Two paths. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

SOME CAUSES OF CORRUPTION

Corruption as an anti-social conduct has psychological, sociological and economic bases. No single cause determines whether an individual acts corruptly. It is a combination of factors, not each one singly, that contribute to the emergence of corrupt conduct, expressing itself concretely in the form of adverse impacts to society. There are four relevant factors contributing to the emergence of corruption. The first is that no two human beings are alike. There are altruist, very generous, selfish, and frankly psychopathic/sociopathic individuals and, amongst the latter, those who commit grave crimes, in which “grand” corruption could be included. The second factor is a conduct amply occurring across humankind, of an economic nature, called “moral hazard”. A third cause is the existence of “asymmetries of information” among different persons taking part in a given event or deal, and this opens the door to the potential abuse of some, to the detriment of the others. The final factor is the existence or absence of large enterprises which may have been granted exclusivity, or even without it do have market dominance, that is, possess the right or capacity to sell a particular product or service to a given community or in a given geography, and this may have a non-negligible effect on the intensity of the corrupt activity in such society.

The following sections will describe the causes contributing to the existence of corruption in greater detail. It must be kept in mind that none of these causes is the single one giving rise to corruption but, rather, a conjunction of all of them. Taking them all together, whenever norms and institutions are inadequate and unable to control them, they give rise to a great prevalence of corruption in any society.

Altruism, selfishness and criminality

All human beings are born and form their personality with varying degrees of altruism, or generosity, or selfishness, or even of criminal conduct. Altruism is a synonym for generosity, here. Altruism is an extremely high level of generosity, which means a human being offers from himself/herself to all others without expecting anything in return. Selfishness is the opposite of altruism and generosity, it is the human tendency to think and act only to one's own benefit, without regard for the harm one may cause to other human beings, to a lesser or a greater extent. Criminal conduct refers to the harmful behavior of human beings toward their fellow humans without remorse or a conscience of the harm inflicted, this conduct always being associated with a psychopathy/sociopathy, a mental dysfunction, either congenital or acquired.

Altruism naturally occurs in about 40% of the population¹⁰, from a maximum level of, for example, those who willingly donate a kidney to a stranger because they consider this to be the right thing to do, to people who regularly give to the poor or to charities. Available data from the US suggest that altruism in that country occurs in about 0.007% of its population¹¹ (approximately 1 in each 14,300), considering those who donate their organs to strangers. But the figure could be higher once those who systematically give to charities, churches or beggars are included. There would be no reason to suppose that this estimation should be different for the Mexican population.

The difference amongst altruism, selfishness, and criminality is one of degree of conduct alone. There are no clear boundaries, just gradual tones from the altruist extreme, down to the outright criminal conduct, with the bulk of the population exhibiting moderate levels of altruism or selfishness. The behavioral spectrum fluctuates from the voluntary donor of his/her organs, to the criminal who commits serious crimes like murder (with intent), sexual crimes, fraud.... And perhaps grand corruption, too. Beyond the approximately 40% of the population estimated to be within the altruist-generous block, human society includes subjects who, gradually, selfish to a lesser or greater extent, do not yet reach the point of behaving criminally.

At the extreme of the frankly psychopathic/sociopathic conduct, therefore with a propensity to behave criminally, there are variable statistics which suggest that between 3.9% and 1.0% of the population engages in violent crime within society. A Swedish study¹² covering all the country's citizens born between 1958 and 1980, and reviewing all criminal sentences between the years 1973 and 2004 states that 3.9% of all Swedish citizens have had at least one sentence for a violent crime, but that 1% of the Swedish population was responsible for 63.2% of all violent crimes in that country.

In analyzing what is stated above, it must be taken into account that Sweden is a country reportedly with very high levels of happiness, year after year¹³. Sweden ranks fourth in 2024 in the world classification of countries by levels of overall happiness. It is a country with an advanced welfare system, under the auspices of its government-state, offering all its citizens access to quality education, job opportunities in case jobs were not available in the private sector, and assured food and shelter guaranteed for the poorest, from cradle to grave. If in such a happy country, with a social safety net as robust as this for the least favored, the percentage of population committing violent crimes is at that level, such percentage perhaps constitutes, anywhere in the world, a conservative proportion of the human population with a propensity to conduct themselves not only in a selfish fashion, but already in a criminal, or psychopathic/sociopathic fashion.



Fig. 8 The human spectrum. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

ALTRUISM, GENEROSITY, SELFISHNESS AND CRIMINAL CONDUCT IN HUMANKIND - ILLUSTRATIVE CONCEPTION

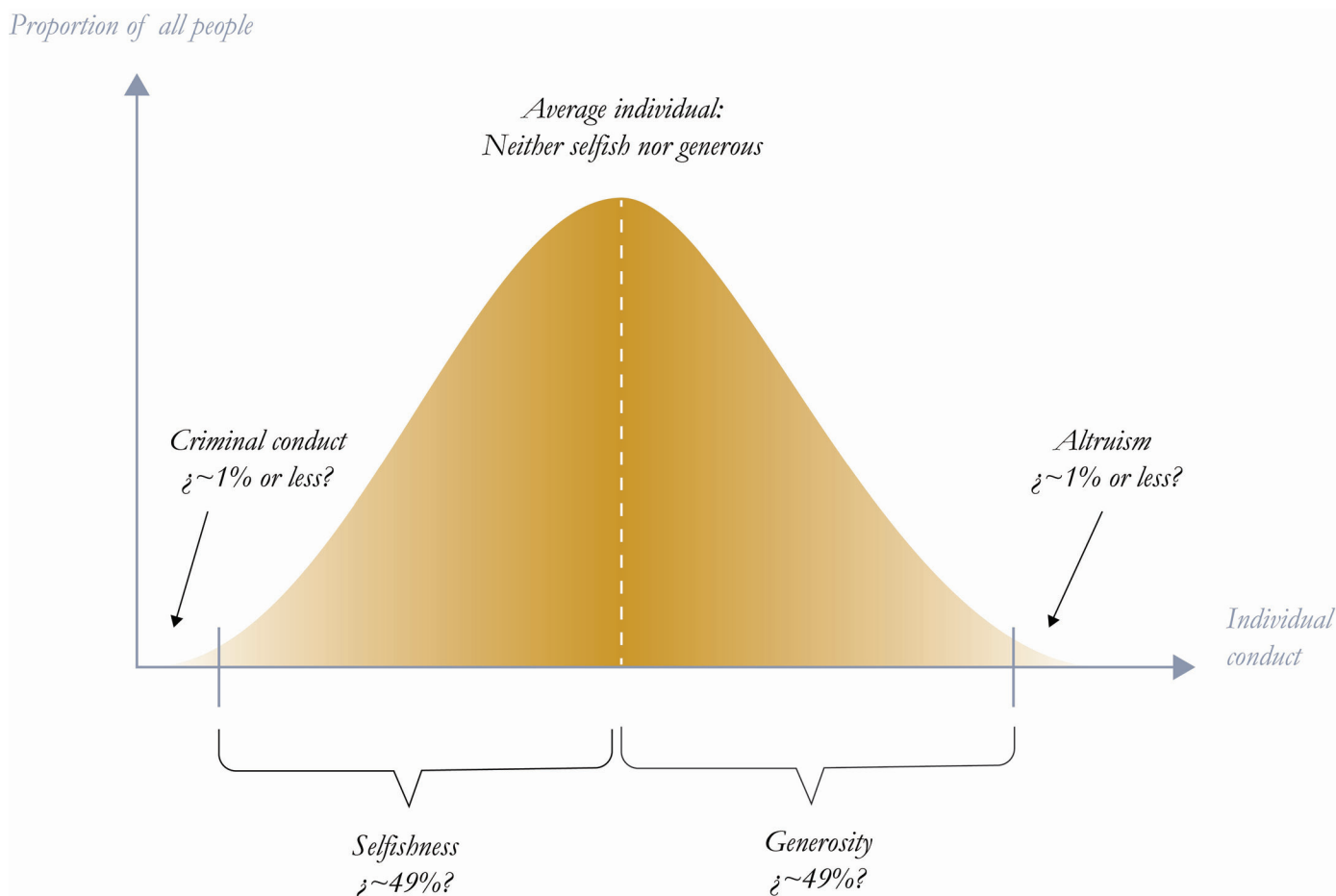


Table. 1 Altruism, Generosity, Selfishness, and Criminal Behavior in Humanity – Illustrative Concept. Source: Falk et al. (2014).

From the previous discussion, a vision emerges about human conduct in today's society: a very small proportion of humans is altruistic, approximately half of the people are generous, the other half is selfish, and between 1% and 4% of the human population has a propensity to commit violent crimes, wherein the 1% with the most extreme expression of criminal conduct commits close to two thirds of all violent crimes.

From these approximate statistics, a proportion of humans with a proclivity to engage in corrupt acts could be inferred. Any figure between 1% and 4% of the total population is equally useful for corruption discussion purposes. The important point is, very few humans commit the greatest majority of anti-social acts in the world. By extension, very few humans get involved in acts of corruption, but their activity is to the detriment of a great majority of the population in each nation.

One more approximate reference is available from the United States, which has roughly two million individuals behind bars as of 2024¹⁴, the entire country having a total population in the order of 345 million¹⁵, more or less. This means that, in the US, approximately 0.6% of its population is currently held in prison, a figure pretty consistent with the reported 1% quoted by the Swedish study.



Fig. 9 Social camouflage. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

With regard to corruption, the previous figures suggest that a very tiny fraction of the population would possess the mental features which permit antisocial conduct, conduct consistent with the boldness necessary to engage in grave corruption acts. By “grave”, here it is meant a corrupt act with a large economic effect, “grand” corruption, where the economic stakes are big. It is always important to think in terms of “grand corruption” and “petty corruption”, as mentioned before. Evidently, grand corruption should be the first focus of attention for Mexico. In fact, by attacking grand corruption first, the “petty” corruption would tend to gradually disappear in parallel with the disappearance of the large scale corruption, given the psychological effect resulting from the punishment of those involved in grand corruption, as reflected in the mass media, which works as a deterrent for those involved in small corruption. “The fish rots from the head¹⁶”.

The Pareto¹⁷ principle talks about the “vital few and trivial many”. In the case of corruption, it could be approximately inferred that “about 2%, more or less, of the population cause about 98% of the corruption problem”. Very few citizens, involved in corruption crimes, turn out to be very expensive or harmful to the great majority of society in general!

It is needed to determine the precise cause of the approximate distribution sketched here amongst the altruists, the generous ones, the selfish ones, and the psychopaths¹⁸ to determine what causes corruption. Psychopaths being composed by about 1% of the total male population, and only by about 0.7% of the female population, engaged in the most violent crimes. The reason for this behavioral distribution could be genetically induced, or cultural-familial in nature, probable a varying mixture of both in different proportions in each case. Although the cultural-familial factor could and should be addressed through the appropriate support mechanisms on the part of every government, the Swedish study seems to prove that, even despite the presence of a strong social safety net, antisocial conduct emerges in stubbornly fixed proportions throughout the human species, regardless of which country or society is studied. In the case of Mexico, the state could and should contribute, for example, to the preservation of good family habits enabling parents to inculcate good behavioral principles to the infant and to the teenager, to promote the practice of sports, and to ensuring the proper coverage of the most basic material necessities to the poorest sectors of society, and guaranteeing the availability of jobs with a modicum of human dignity for adults and youths in the poorest communities, etcetera. All this notwithstanding, the case of Sweden demonstrates that, even in those societies offering the most robust welfare framework in the world, crime occurs and, within the crime sphere, corruption may arise, no matter how much attention is being paid by the state to the very neediest. Both the creation of a strong welfare state in Mexico, as well as a well designed frontal attack on corruption in the country must be implemented, both in parallel and simultaneously.

Now, it should be expected that a very small minority of corrupt citizens, occurring in every society and country, do not want to expose themselves to the scrutiny of the general citizenry. Corrupt individuals tend to hide, to mix in, to camouflage, amongst the rest, non- corrupt, citizens who have varying degrees of generosity or selfishness, so as not to be detected. Corrupt people hide amongst certain groups of both the private sector, and the same within certain areas of the public sector, with the aim of obtaining their private, personal gains, at the expense of the public, at the cost of public goods, as described in previous sections.



Moral hazard

Once the scientifically based estimation of the approximate proportion of human beings who conduct themselves in an altruistic, or generous, or selfish, or criminal way, has been delineated, the natural question regarding the last group, the criminal group, is: How do they operate, thus causing the social harm they cause?

Economists and psychologists provide a glimpse through a pair of concepts contributing to having a more complete description of the individual behavioral responses within human society.

Psychology, since the times of Abraham Maslow¹⁹ in the first half of the 20th Century, set forth the basic needs of every human being, to be covered daily, such as shelter, food, and rest, among others. More recently, with an evolutionary perspective, the basic human needs started to include the need for reproduction. This means that human beings at the most basic level are moved chiefly by the need for food, territory (shelter) and reproduction. The basic needs of each human being are material in nature, relate to survival and to the continuity of the species. This shall be taken into account given that corruption acts generate, when unpunished, material benefits to the corrupt individual.

In parallel, Economics, the social science studying the distribution of scarce goods, reaffirms that all material resources required for the satisfaction of human material needs are, precisely, scarce. Those scarce resources must eventually be assigned to every person within society in some way. Economics has also defined a practically universally existent conduct found in humankind, called “moral hazard”. One definition of moral hazard is: “a situation wherein an individual can take advantage of a deal or situation, knowing that all risks and consequences will fall upon another person²⁰”.

Without necessarily being a formal definition, the following text by the successful and philanthropically oriented Ray Dalio²¹ constitutes a good description of moral hazard, or the morally hazardous conduct: “Don’t assume that people are operating in your interest rather than their own. A higher percentage of the population than you might imagine will cheat if given the opportunity. When offered the choice of being fair with you or taking more for themselves, most people will take more for themselves”.

Thus it is that the moral hazard concept gets connected to corruption. Both from the behavioral or psychological, as well as from the economic or material points of view, corruption and moral hazard are linked. Corruption requires the sociopathic element, in which the decision making capacity about what is right or wrong, is deficient in the corrupt individual, the psychopath/sociopath. The economic element also emerges in the corruption phenomenon, implying that if the opportunity arises, the individual will act for his/her own benefit, even when such action will be to the detriment of everyone else.

Information Asymmetries

If “information asymmetry²²”, also an economic concept, is added to the discussion, a procedural anatomy of how corruption emerges and occurs can be completed. Information asymmetry means that “one of the parts has more information than the other part” in a given deal or situation. Information asymmetry could have almost “adversely



fraudulent consequences” for those who count on a lesser amount of information regarding a particular deal or arrangement. Information asymmetry gives an advantage to the person who knows more about a given situation, and represents a disadvantage to the person who knows less about the same situation. Ironically, the advantage derived from an information asymmetry to the party who knows more about the situation will attract more people interested in participating in deals where information asymmetry prevails, since as a product of such asymmetry, the party with more information takes an economic advantage over the situation without having to pay for the harmful consequences inflicted on the other party having less information. As a menial example, a smoker who does not reveal to the insurance company that he/she smokes could buy a health policy. If the information asymmetry prevails, the costs of smoking will not accrue to the smoker, but to the insurance company and to all other non-smoking insureds. Worse still, if this information asymmetry is not remedied, there will emerge a process of “adverse selection”, which means that more and more smokers will be attracted to buy such policies, worsening the cost situation for the insurance company, without little or no economic harm to the smokers themselves.

Combining all prior concepts, some scientific explanation as to what corruption consists of, and why and how it emerges can be formed. Corruption emerges when a few individuals, who do not reveal their delinquent nature, infiltrate parts of the public and private sectors, and take advantage of the difficulty to identify them and the results of their actions so they may benefit themselves, thereby harming all others in society. Corruption represents a cost to the citizenry, to the tax payers, to everyone in society, since corruption always has adverse consequences, it harms or takes advantage of the public goods, which are held by the state in a democratic nation. Through corruption, a criminal minority, having information asymmetry advantages in their favor in the absence of transparency, conduct themselves harmfully causing damage to all of society. And the continued existence of a deficient informational framework is abused by those practicing corruption, thus attracting others to act corruptly, a process of “adverse selection”. A vicious cycle of corruption, truly!

The existence of monopolies and oligopolies

Political science states that there are four types of [political] battles in society²³:

- a. Battles with diffuse costs among the many, and concentrated benefits among the few
- b. Battles with diffuse costs among the many, and diffuse benefits among the many
- c. Battles with concentrated costs among the few, and concentrated benefits among the few
- d. Battles with concentrated costs among the few, and diffuse benefits among the many

Those battles where costs are diffuse among the many, and benefits are concentrated among the few, in analogous way to those where costs are concentrated among the few, and benefits are diffuse among the many, tend to be won by the few, at the expense of the many. There is a lot to lose, or win, for a small group, while what the many can win, or lose, is relatively small, distributed across them all. The few will focus much attention and effort in winning the battle, while the many will not pay as much attention to the battle, since what they win, or lose, is little if they indeed win, or lose.



A monopoly is in place when, by definition, an enterprise has the opportunity to singly sell a product or service to a community, without having competitors, and without practical substitutes for the product or service sold. All buyers, all consumers, will thus be obligated to buy from the monopolist. Something similar occurs with an oligopoly. An oligopoly is a market in which very few sellers or suppliers dominate the sale of a product or service, and/or its substitutes²⁴. The practical rule is that an oligopoly exists when the five largest enterprises in a given geographical market are in control of 60% or more of the sales of a given product or service. The few, monopolists or oligopolists, have a lot to win as such, or a lot to lose if they are no longer such as a result of the entry of more competitors. Hence, for them it is very important to win all battles so as to preserve their monopolistic or oligopolistic position in the given market.

Oligopolies, and to a maximum extent monopolies, offer scarce product²⁵ (or service), high prices, bad service or attention to the consumer, poor quality and excessive waiting times to receive the product or service. Monopolies and/or oligopolies do not innovate and tend to be inefficient. They all earn higher-than-competitive profits nonetheless, always at the expense of consumers.

The situation of monopolies and oligopolies is one where a few, with a very concentrated interest, face the many who have a rather diffuse interest. The latter are the consumers, obligated to buy from the monopolies and/or oligopolies. Due to their size and inefficiency²⁶, monopolies and oligopolies are able to create, and indeed many of them do create, a privileged relationship with certain authorities and with certain players in government. A promiscuous relationship may thus develop between certain government servants, and certain owners or upper managers of monopolies and/or oligopolies. With concentrated interests, the extraordinary economic benefit that is at stake, considering the prevalence of moral hazard, make it attractive for psychopathic/sociopathic personalities, perhaps certain enterprise actors hidden within the monopolistic or oligopolistic organizations, and their similar counterparts within the public sector, to find and establish mutually beneficial relationships between a given enterprise and a given segment of government, precisely through corruption.

Corruption induces certain actors of the public sector not to establish measures to promote more competition, thus not promoting that a larger number of enterprises may enter the market so as to serve a given geography for a given product or service. Thus, the monopolistic or the oligopolistic enterprises may continue to earn extraordinary profits extracted from their clients or consumers, who are forced by necessity to buy from them. The extended presence of monopolies and oligopolies may favor corrupt practices in a country or within a smaller community, and vice versa: corruption permits and may promote the existence and the continued presence of monopolies and oligopolies²⁷ in the country.

The empirical rule is that a given market is oligopolistic when the five largest enterprises offering a product or service in such market, sell at least 60% of such product or service to consumers²⁸. When oligopolies are found across a variety of productive sectors in a country or a community, and are dedicated to selling several products or services which are essential for daily human life in such geography, the oligopolies' intense interest to preserve their privileged position in order to continue making extraordinary profits, and the extent of the economy that such enterprises affect, suggest that corruption may be particularly intense in oligopolistic or monopolistic markets. And if corruption



becomes conspicuous there in relation to the reigning local oligopolies, it would be natural that in other activities where that community's government participates, there may well be infiltration of corrupt individuals, too, individuals seeking their personal benefit in other government activities within such community or country.

Thus, the existence of monopolies and oligopolies in Mexico should be considered as a factor which may contribute, while at the same time may be a result of, corrupt activity in areas of the public sector of the country, as well as on the part of some individuals within the top ranks of stockholders and/or managers of a variety of enterprises operating in the national or regional economy. As a potential cause for corruption, all monopolies and oligopolies should be combated and abated, through adequate public policy, to promote the birth of far more competitive markets, for the sake of the consumers, i.e., the citizenry. The higher prices, the scarcity, the time to deliver on the part of monopolies and oligopolies are an additional, hidden, cost of corruption afflicting the country's population. A cost which is not always included in the standard estimation of the published costs of corruption as a fraction of the GDP. Without corruption, monopolies and oligopolies most likely would not exist long term, or would undergo the commercial transformation into competitive companies, as required by applicable law²⁹.

Empirically it has been determined that the existence of at least eight enterprises, all of them nearly of the same size, in each sector of the economy³⁰ and throughout the national geography would gradually diminish the harm inflicted by oligopolies upon the consumers. At the same time, this would allow the inference that the advantage of any of the enterprises participating in a given market, as derived from corrupt acts between owners or managers and public servants, would be rather limited.

Linked to monopolies and oligopolies, there is the likely collusion of companies for public tenders related to construction and/or service contracts from the State. Part of the problem may even emanate from the texts of the model contracts applicable to the winning bidder, oftentimes drafted in a "custom fashion" to favor one player. There may be bribery problems during the bidding/contracting phase, but "extra costs" beyond contract price while the contract is being fulfilled do occur, too. In this regard, there are two elements which aid to diminish corruption. One is the use of contract models available internationally for each type of competitive bid (the "FIDIC" and the "NEC" contract models³¹, for example). For change orders, "extras" and deductions, symmetry of information is achievable by having "consultative" committees in operation to vote on each such change to contract price, not only with public servants administering the contract, but also including external independent private observers as well as members of the Superior Federal Audit office who reports to the Legislature to vote in the committee.

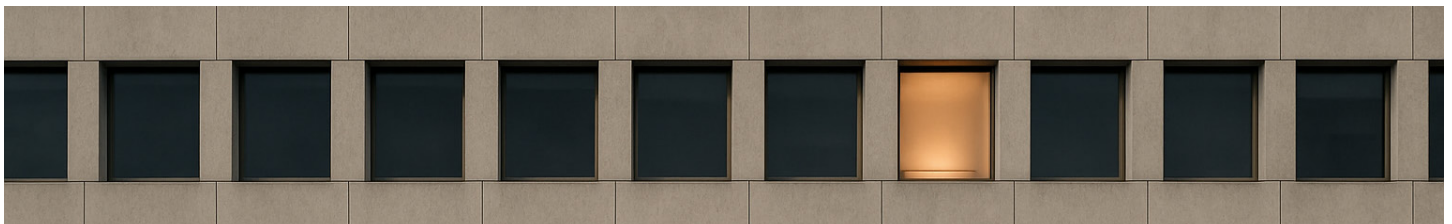


Fig. 10 The broken pattern. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

CORRUPTION AND ELECTIONS

Democracy and the vote

“The foundation of a democratic government is the respect of the people’s wish, as it is expressed in the ballots³²” . This applies to liberal democracies, which obey the people’s mandate through the latter’s representation. A democracy is a liberal one when elections are free, the press is free, and votes are transparently counted. Without intermediation, countries like Switzerland operate as direct democracies, not as a representative democracy, wherein each citizen exercises his/her vote over executive and financial decisions without the need for intervention by a parliament or legislature. “Switzerland, with its direct democracy, repeatedly shows its robustness and political maturity. Switzerland is accustomed to planning in terms of decades, its goals are not for the next election, but are instead focused on long term stability³³” . “The issue [for a prosperous society] is responsible governance and the political institutions undergirding it, more than relying on one or another economic theory³⁴...” Democracy is not perfect, but it is the least imperfect of all political systems. Democracy is the form of government granting the most freedom to the largest fraction of its citizens³⁵ .

From all of the above, it should be clear that a true liberal democracy can operate only in a corruption-free environment. Without corruption, what is promised, and what gets done, are the same. Without corruption the people’s will is reflected upon every action on the part of the public servants, who in this way take care of the interests of the majority of the citizens. The more direct the connection between the decision on the part of the citizenry and the action on the part of the government, the better will the results of government be across all levels of the national government. Democracy is the government upon which the people’s trust is placed through elections, with periodic change of those designated to govern.

Switzerland has in the order of 9 million inhabitants today, which enable its democracy to be exercised directly by its citizens through direct votes on key decisions which arise in their cantons (districts) and in its federal government. Mexico, with over 130 million inhabitants must for the sake of operational efficiency make its democracy work through the legislative power, as the representative of the interests of its People, wherein its People choose the legislators: Mexico is an indirect democracy, so established constitutionally at least since 1917³⁶ .

Understanding, then, that Mexico operates under an election system which has undergone gradual refinements since the nineteen nineties, when the Federal Electoral Institute (now “INE”) was born. And recognizing that, formally, the real possibility of the candidates of the various political parties to be chosen for the presidential post only truly began in the year 2000, it can be stated that Mexico is a nascent democracy in the process of consolidation and maturation, with many aspects of democratic governance still in a stage of refinement, oftentimes by trial and error. Elections were mostly seen to be rigged before the year 2000.

If the virtues of a liberal democracy are recognized the world over, with ample proof of the benefits that this governmental regime grants to the majority of a country's population, it should then be expected that the tactical implementation mechanism of democracies, the vote, must be free of corruption. This is how it should occur if democracy is to be successful in Mexico, to the benefit of the great majority of its citizenry. Unfortunately, this has not been entirely the case along the country's history.

Election financing.

The nascent Mexican democracy has been very expensive to its taxpayers in the recent years. The last figure reported by the government was a budget of about eleven billion pesos, over 500 million dollars, distributed amongst all political parties and independent candidates in accordance to an established apportioning rule, which the Mexican State infused into the electoral process of 2023-2024 to pick new president and the new legislature³⁷, as well as the governorships and local legislators of several of the federal states of the republic. Given that the Mexican Constitution, in its article 41st, section II, demands that public election funding prevail over private funding, it could be stated that the Mexican democracy has, somehow, survived thanks to the financial "oxygen" which the Mexican state has given to the political parties and candidates until now.

Among the advances of the Mexican democracy, it can be said that the freedom of each citizen to express his/her preference in the ballots, that the ballot processing mechanism, and that the vote counting process in the overwhelming majority of the electoral districts of the Mexican territory, as well as for the Mexicans living abroad, have become rather trustworthy with regard to the transparency with which they are being performed nowadays. It appears more difficult today than a couple decades before, that at the ballot and ballot counting stages within INE, election fraud could be taking place. It would be too bold to assert today, nevertheless, that ballot and vote counting fraud were completely devoid of fraud already.

It is, nonetheless, the harmful effect of illegal or hidden contributions by a variety of private entities or persons to particular parties or candidates what may stain Mexican elections with corruption. Who contributes great quantites of funds to a candidate expects favors once the candidate wins, if he/she wins. And elections are won, yes, with public messages and well communicated political platforms suitable to the majorities' liking. Platforms which represent the "center of gravity" towards which majorities gravitate with their favorable opinion. Such public communications are costly. Candidates taking extreme positions: "I will be in favor of the right to bear arms", for example in the Mexican historical-cultural context, do not win too many votes. Candidates who reaffirm to their voters that, upon winning they will execute public policy with which the majority of the citizens are in agreement are the winners: "subsidy programs to assist farmers in the countryside and for fishing communities", in a country with an abundance of peasants active in such trades, ring enough votes for a victory.

The other indispensable success factor for a political campaign is thus the availability of funds to achieve, precisely, a well designed, well heard, well repeated message across the territory, enough to make it known well enough by the voters by ballot time. This costs money.

There are severe restrictions in other countries limiting the possibility that donations to a given party(ies) or candidate(s) represent a large amount and/or that remain hidden from the general population. If the citizens knows who gave funds to which candidate, the citizens will also know what political agenda, or economic agenda the candidate, upon

winning, will follow to benefit his/her greatest sponsors. This symmetry of information, wherein the people find out who has financed whose campaign, reorients the vote of free citizens to better reflect what the majority wants. This is much better than the anonymity of donations with its ensuing ignorance on the part of the people about what company, organization or individual gave what donation to which candidate.

The Federal Election Commission³⁸ (FEC) of the United States limits the absolute donation amount anyone can give to less than USD 123,900 over the course of one year irrespective of which position elections are for, regardless of whether the donor is an individual, a company, or a PAC (“Political Action Committee”). Besides, and this is the most important aspect, FEC establishes that cash contributions cannot exceed USD 100 per individual or organization, and anonymous contributions cannot be greater than USD 50. Contributions are itemized and visible by the entire population potentially, via Internet, so the voters may conjecture who will be favorably looked upon by each public servant, should the vote turned out victorious for the given candidate³⁹. In Canada, the financing rules for campaigns, parties and candidates, are very similar⁴⁰.

Pertinent legislation in México, today

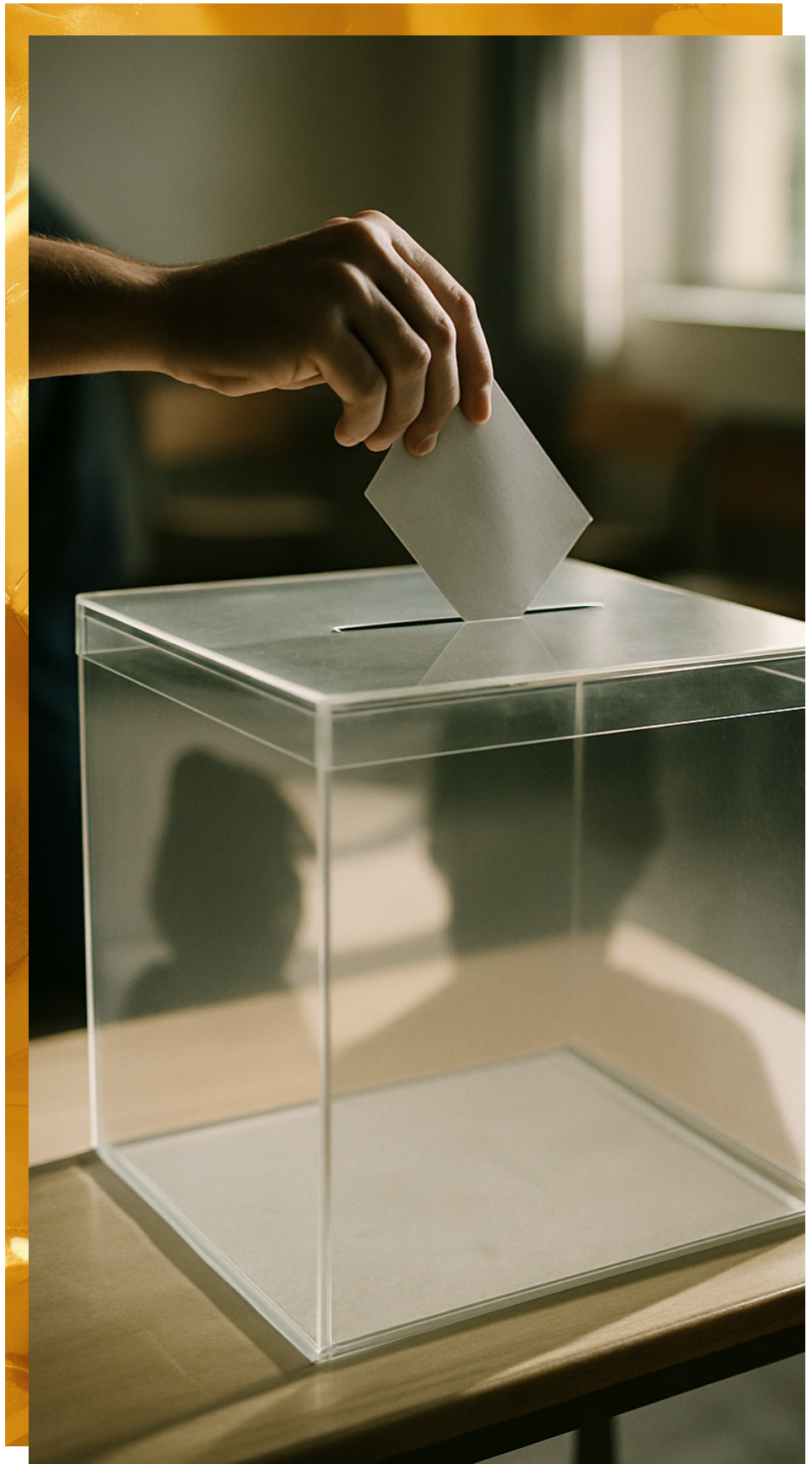


Fig. 11 The shadow of the vote. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

In contrast, there is no clear Mexican legislation regulating the need for all voters to know who donates how much, when, and to which party or candidate. An anonymous donor could technically “invest” tens of millions of pesos not in one, but even in two or more candidates to the same post, who will accept the donations without regard for the fact that the donor is actually “hedging” his/her bets. Multicandidate donations by the same citizen become a hedging mechanism for the donors. No matter who wins later, they win, always. Information asymmetry is a grave problem in México, as voters cannot easily find out which candidates have the support of which powerful individuals or enterprises, who in turn would favor the political benefit of the providers of such support, once the candidate occupies his/her post.

In an incipient fashion to date, a constitutional reform has been proposed regarding election matters. The proposed reform points towards the identifiability of the sources of private funds contributed by individuals and/or companies to candidates during campaigns⁴¹. In this reform proposal, going to vote in February 2025, and relating to article 41 of the constitution, in its section II, the following paragraph is being considered for addition: “Financing of independent candidates occurring for election campaigns shall come from public sources as well as from contributions from Mexican individuals only, as per the following terms”.

In the same proposed article reform, for its point (a), the intended wording is: “a) The public financing for the (party’s) ordinary activities will be set annually, multiplying the total number of citizens already registered in the voter lists by thirty three percent of the daily minimum wage”. At the same time, a (c) paragraph is up for cancellation, while new text is being considered for addition: “For private source financing, both for the support of ordinary activities, as well as for campaign expenses during the campaign processes, parties shall subject themselves to the following: 1. The source of every resource obtained [from private sources] shall be identifiable and reported in the accounting books, according to rules established prior to the campaign period....”

Analyzing these texts proposed for the constitutional reform on election topics one may be mildly encouraged to conclude that the Mexican state indeed wants to reduce the public financing for parties and independent candidates to approximately half of what these groups receive by law today. This represents a smaller dependency of the Mexican democracy upon public financing and should therefore also reduce the incentive to create new political parties, which are formed because of the public funding they receive. At the same time, this reform will promote that political parties and independent parties seek independent financing sources among the citizens themselves, with greater transparency about the sources of funding.

Besides this, paragraph (c) of the proposed constitutional reform already alludes to the responsibility of the political parties and independent candidates to inform, with a clear identification of items, who the sources are for each economic resource obtained, but does not stipulate the level of detail, or how to identify them, nor when should the general population know about them, which should preferably be before the elections and in real time. These seem to be the necessary steps, but not the sufficient steps, in the right direction: less dependency upon public funding, with the ensuing lesser cost to taxpayers, even when public funding shall prevail over the private sources. In the extreme, 50% of the pecuniary amount, less one peso, of private financing meets the requirement that a majority of the funds be from a public source⁴².



On the other hand, the fact that the previously mentioned requirement forms part of the imminent reform should somehow result in greater transparency, better information symmetry in favor of the voters (the citizenry), about who finances whom in political campaigns. But how effective this reform will be cannot be predicted. It will be important to see in the near future, if and when this proposed reform got approved, how these leading principles will be implemented at a tactical operational level in the secondary laws which govern INE, foremost to ensure that the information about who finances whom, when, and by how much, becomes amply known by all the voters, rapidly.

The existence of a multiplicity of parties

In Mexico, the formation of a political party can be good business. The current constitutional text determines that an important portion of public financing be distributed on an annual basis in equal amounts to all political parties, regardless of size, in addition to the distribution of other public funds in accordance to the percentage of votes each party won during the prior legislative election .

On the other hand, the general political party law in force today in Mexico establishes that a national-scope party can be formed by rounding up 60,000 signatures, be it in the form of 3,000 signatures from at least twenty Mexican states, or 300 signatures from at least 200 voting districts⁴³ . This in addition to some documentation required to file registration, which is rather easy to gather and organize. The same applies to the formation of a local (one state-only) party, with correspondingly smaller requirements in terms of numbers.

It is with these two rules, found in the constitution and in the pertinent party laws, that new parties can be founded with relatively little effort. A new party, by its mere existence and even when winning few votes, will receive substantial federal funds in the same proportion as bigger parties, thanks to the “democratic” distribution of equal amounts established for each party in existence prior to campaign times. Small political parties can become a great business for their founders!

The above has generated a proliferation of political parties, some of them of a very small size and a very short life, but which thanks to public funding and the rules of distributing the funds, can become good business for their founders.

Plurinominal legislators

To date, Mexico has a legislature with 300 popularly elected representatives, plus 200 representatives who have not been elected via direct vote by the citizens (Article 52 of the Mexican Constitution). The latter 200 hundred “representatives” are called “plurinominal” legislators. In the Mexican Senate, there are 128 senators, of which 64 are elected by vote, and the other half are not elected by vote, but have been assigned via an unintelligible formula to distribute those other 64 seats amongst all registered parties (Art.56 of the constitution). The idea is to afford small parties a right to be represented in Congress and in the Senate, even when they may not have won sufficient votes for their candidates at the ballots on voting day. Just as a comparison, and keeping in mind the considerable annual cost each legislature represents to the citizens, it may be interesting to know that the United States, with approximately 335 million inhabitants, as opposed to roughly 130 million Mexicans, only has 100 senators, 2 per each US state, and 435 representatives⁴⁴ , all of them duly elected by direct vote of the American citizens.



The goal of having “plurinominal” legislators is, theoretically, that the very smallest minorities also have a right to be heard⁴⁵. The designation of plurinominal legislators not via vote represents a complex mathematical mechanism which is not easily understood by the common citizenry, supposedly intended to ensure that at least one legislator of each active party occupies a seat in the legislature. This, notwithstanding that those parties which won the most seats, also add as per the rules a considerable number of [plurinominal] legislators into both chambers (Representatives and Senators), which in turn again causes extreme dilution of the voice of the most extreme minorities whose voice it is intended to make audible thanks to the existence, and maintenance, of such “plurinominal” system.

Beyond the possibility that the plurinominal legislative positions could merely be political gifts which, without the effort that winning an election through the promotion of a particular political platform entails, could these seats just constitute a prize to allies of power groups in Mexico? It is also worth asking: What interests specifically emanating from the very smallest minorities deserve to be heard at the legislature for the good of the totality of the citizenry? To this question, a plausible answer is that only had the fundamental rights of any citizen been violated, would such interest deserve to be heard not only in the legislature, but also in the judicial and the executive powers, so as to be addressed at once. Such issues would require the immediate attention by the jurisdictional and administrative authorities so as to remedy such violation as soon as possible.

And: If the rights of a very small minority are not being respected, are there no other stages where such oversight should be resolved? If the issue does not relate to a violation of fundamental rights (human rights protected by the Mexican constitution as well as by international treaties of which Mexico is a signor), but relates to the promotion of “rights” of a very small minority why, then, precisely do such interests only constitute the concern of such a small group of society without an enlargement of the number of citizens interested in the advancement of such issue over time? Another perspective: If as time passes, such interests of a very small minority do not attract more individuals to the ranks of promoters, could it be that such interests are too particular so as to warrant the attention of the central State, especially if such interests in and of themselves do not constitute issues relating to fundamental rights violations?

With the above questions, it is intended to establish that the existence of “plurinominal” legislators in Mexico is expensive, its purpose is not clear, and it may also imply that their purpose, that of representing the particular interests of a very small minority, should not warrant the legislative attention until when those interests are shared by a larger portion of society. And if such stage is reached, those interests should, by then, have become the focal point of attention of the main body of the legislature, as a reflection of their importance to the general population.

All of the above, apart from the hypothesis that the “plurinominal” positions in the legislature could simply be yet another corruption scheme. A source of income for politically favored persons, who may arise as a product and justification of the proliferation of small political parties created due to the availability of federal funds for them from the moment even a very tiny new such party is formally born.



The proliferation of political parties and simple majority victories in elections

Also related to the easy birth of political parties in Mexico, but along the more rigorous dimension of democracy which mandates that the People not only choose the individuals governing them, but also that those governing the People be elected by the majority of the citizens, the question arises as to whether the Mexican election mechanics is not too restrictive, rigid and antiquated to meet these democratic principles nowadays.

Not too far back, there have been Mexican presidents of the republic who won the election with less than fifty percent of the popular vote in their favor!

Democracy is the government elected by the majority. Is it not a contradiction that the election mechanism of Mexico does not ensure that the winner have at least a simple majority of the voters supporting his/her victory?

France, the modern world's oldest democracy, resorts to election run offs to elect not only its president, but many other posts subject to suffrage⁴⁶. In the United States, only two parties exist, fundamentally: the Democratic and the Republic parties, plus some independent candidates during some elections, independents who normally get a very small, negligible, percentage of the popular vote in Presidential elections. In the US, however, nine states⁴⁷ resort to run off mechanisms, both for gubernatorial elections as well as for legislative elections, whenever a single election round for a popularly designated post does not yield a clear winner, holding at least 50% plus one votes at the ballots.

With the digital technology for computer voting, which is particularly useful for counting the votes (handling each vote anonymously), whenever there are more than two political parties contending for the position, a run off can easily and inexpensively be set up to resolve, from the ground up, the antiquated election mechanism in place in Mexico today. With run offs, the president, local governorships, legislators and other positions could easily be elected with a clear victory with at least a majority count in favor of the winner, each time, and at a reasonable election cost to the government.

The popular vote in a run off procedure does not ensure that the winning candidate will simultaneously be the first choice for all those voters who pushed him/her to get at least 50% of the votes plus one. But the run off procedure offers the electorate a fair opportunity to express their first preference in the first round of elections, while in the second round, in the run off, many voters will continue to see their first choice win, while many others are given the chance to choose from the available two choices, whom they think is best to occupy the position. In the process, the people will be assured that, through the issuance of their free choices in the two stages of voting, one contender will definitely earn the favor of at least 50% plus one of the citizens.

An electoral run off also allows the voters to behave strategically during the first round so that, under the circumstances and the offering of the political platforms of the more than two contenders, the population may determine, in sufficiently large quantities of votes, the potential elimination of one or several of the candidates since the outset⁴⁸. This promotes that the two finalists showing up on the run off ballots, if and as necessary, present positions or political platforms more in line with the preferences of the largest proportion of the voting citizens. "My first choice



did not win. But I, in conscience, chose from both finalists in the run off the one who appeared better to me. The one I picked in the first round really was not my first choice, but in order to ensure that a given candidate I deem undesirable does not win, I favor the candidate I pick in the run off episode”.

So, accumulating a substantial number of votes through this type of individual voting strategies, the possibility that someone truly undesirable for society ended up winning with a less than 50% of the votes in his/her favor, gets drastically diminished. In a country in which violent crime may run rampant, this run off safeguard may result quite useful and important for national security and for the preservation of the state in a condition of govern-ability.

With the run off system of voting, each voter may not end up being completely pleased with the chosen one. But in the aggregate, all voters are pleased that the process gave each of them the opportunity during the run off to pick the best candidate each voter considered, given the circumstance that only two options were then available. Thus, the perception of arbitrariness is eliminated during the election⁴⁹. This posture promotes more govern-ability, adding legitimacy to the winner, and reducing the possibility of citizen questioning about the honesty of the election.

In the political market, ensuring that the winning candidate is picked by majority, even simple majority and through a run off process whenever necessary, reduces the probability that a political monopoly or oligopoly holding power, a minority analogous to the case of monopolies and/or oligopolies in the economic market of goods and services, capture a position which grants it power over the public resources in disregard for the desires of a large portion of the population, a portion which did not want such political monopolist or oligopolist in the first place, anyway.

Contributing to the eradication of corruption in the elections context

Looking after Democracy and its associated electoral processes is key to minimize corruption. Without democracy as a source of political competition, government servants are not incentivized to do what they must, so they may tend to do what is convenient for them instead, always to the detriment of the general population.

Democracy cannot live at the expense of taxpayers, it must sustain itself thanks to the citizen conviction in it, as reflected in the diversity of possible contributions that the private sector may wish to perform to promote the political competition expressed as the support each private individual gives to his/her particular pick. The transition to reduce the dependency of the Mexican democracy upon public financing of parties and independent candidates alike must be reaffirmed by the appearance of enforceable norms promoting transparency in the financing of parties and candidates on the part of private individuals and enterprises. Enabling all citizens to easily and quickly find out who is financing whom, when, by how much as early before election day as possible enables the entire citizenry freely and individually decide who might be the better public servant, if he/she were democratically elected. There is progress in the implementation of norms along these lines, hopefully about to become concrete through some upcoming constitutional reforms in Mexico. But there always will be an opportunity for electoral norms to demand ever greater symmetry of information between the candidates and the voters with regard to the private financing of candidates and political parties.

The proliferation of political parties in Mexico has been most likely derived to a great extent from corruption, since birthing political parties has frequently become an attractive source of money for minorities who thrive by creating such new small parties. Along the same lines, the existence of “plurinominal” legislators seems to be an unproductive ploy not only in terms of achieving its theoretical goal of representing the interests of the smallest fractions of the citizenry at the fringes of the political spectrum of agendas, but also with regard to the small parties’ oftentimes declared, self imposed, goal of looking after the interests of very small minorities through the upholding of constitutional, treaty-derived, and legislation-established fundamental rights . The Mexican Supreme Court is the judicial body charged with precisely that: with the upkeeping of those perhaps⁵⁰ more unusual or less frequently occurring fundamental rights, and this duty on the part of the courts renders the pretended duty of the plurinominals useless. Additionally, a variety of other non governmental organizations have sprung up to assist in the publicity and the defense of precisely those rights for precisely those super small minorities.

Combating corruption, and the refinement of democratic election processes in Mexico, constitute a vicious cycle, which must convert into a virtuous cycle. As in the proverbial question as to what came first, “the egg or the hen”, as Mexican corruption goes down, there will be improvements in the procedural aspects of the Mexican Democracy, At the same time, as improvements in the procedural aspects of the Mexican Democracy take place, Mexican corruption will diminish. Because top elected officials, with their morality or their corruptibility, are the first gate keepers, or promoters, of corruption throughout every aspect of Mexico’s governmental and political life. As long as numerous political parties exist, and/or numerous independent candidates for each elected governmental post are in play, it will be indispensable to use the run off procedure as the nearly ideal mechanism to assign public positions with a greater sense of legitimacy for the voters. Today’s digital times lend this process easy to implement, with the necessary citizen reach, at a commensurate cost which should be more than warranted, if it contributes to the improvement of democracy, and to the extinction of corruption in the country.

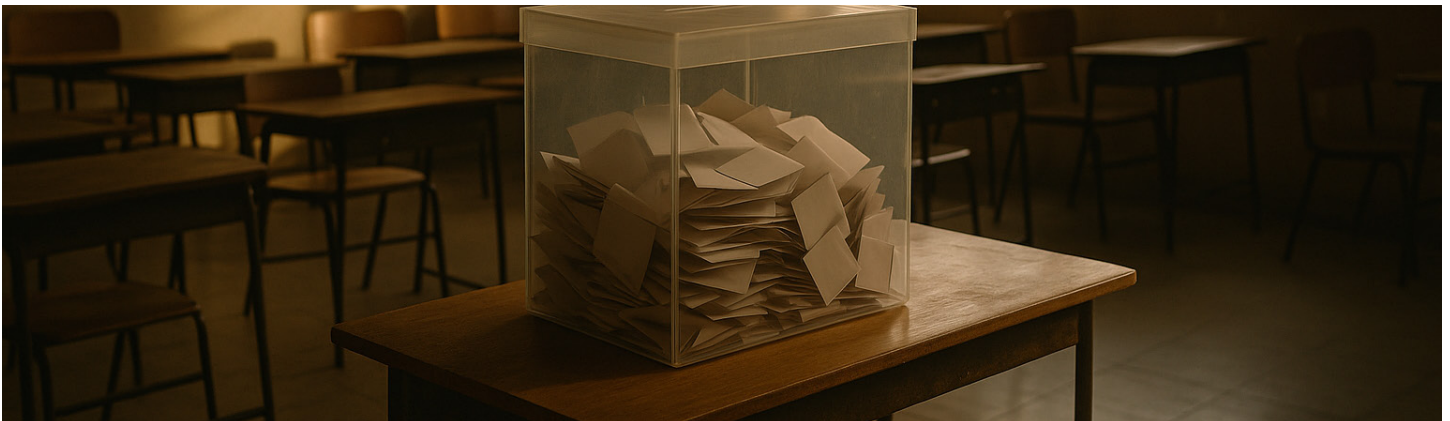


Fig. 12 After the vote. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).



Fig. 13 Concentrated power. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

CORRUPTION AND MONOPOLIES

What are monopolies and oligopolies?

A monopoly is the presence of only one supplier and/or producer in a given market or geography⁵¹. An oligopoly is a market in which a few large enterprises dominate sales, establishing barriers to entry⁵² to other suppliers and/or producers, in a market with few or no substitutes for what is offered by such enterprises to consumers⁵³. It could be said that the critical extreme of an oligopoly on one side, is a monopoly, and at the other extreme of an oligopoly, there is a “perfect” market. A “perfect” market would typically consist of the presence of at least about eight enterprises (more rigorously speaking than the previously mentioned 60% market share rule with 5 companies or more), all of them having roughly the same size, all of them offering the same product or similar substitutes to a specific market or geography. Every monopoly has a finite life, which in some cases may be decades long, since although the monopoly can avail itself of barriers to prevent competition in its market, sooner or later competitors arrive thus taking away a portion of the market. In contrast, oligopolies may have a very long life, to the detriment of consumers, as their basis consists precisely on the fact that several enterprises jointly agree on price and quantity of the product or service they will offer to a given market or geography where they have “captive” consumers. The level of impact exerted by monopolies or oligopolies into a given market or region is called level of market “dominance”, and monopolistic or oligopolistic enterprises are euphemistically called “dominant” enterprises.

A monopoly has its consumers as “prisoners”, in such fashion that the company may set price and decide upon the monthly or yearly volume it will sell in such a way that it will maximize its profits, at the expense of the captive consumer. Besides, monopolies generally offer poor service, may give very long waiting times to serve an order, and may offer below standard quality. Additionally, they are poor innovators on their products or services and as a rule they sell at prices higher than those which would be found should the market were competitive, or “perfect”. All the disadvantages of a monopoly, to a decreasing degree as the number of oligopolistic producers/suppliers grows, are also part of the disadvantages of an oligopoly. Once the “critical” figure, empirically observed to be in the order of about eight or more similarly sized producers/suppliers selling a similar product or service in a given market or geography, the monopolistic/oligopolistic power vanishes. This generally occurs because one or more of the oligopolists may tend to cheat against the preagreed collusion with the other oligopolists, by lowering price or improving quality or delivery time surreptitiously on its own, etcetera. This causes a discoordination amongst the members of the former oligopoly, to the benefit of consumers.

On the production side, not on the sales side, monopolies and oligopolies to a lesser extent tend to be inefficient in their processes, may charge prices above the comparably competitive market price, and may also force their suppliers to supply raw materials at a lower cost and under contractual conditions only favorable to the buyer, something they can also practice

towards their employees, thus offering less than competitive wages. All this may actualize because monopolies and oligopolies have market power, negotiating power both toward their clientele, as well as toward their suppliers and employees. If all these stakeholders do not deal with the monopoly or oligopoly, who else can they do business with? Besides, monopolies as well as oligopolies have a relatively safe demand for their products or services and, habitually counting on barriers to competition, tend to acquire considerable size due to their growth in sales, and such great size confers them “economies of scale”. Scale economies are those production/distribution costs, as well as the inputs purchases, being lower for large enterprises, relative to smaller enterprises. Scale economies may be derived from volume discounts, negotiating power upon suppliers and employees, investments on automation, and lower periodic operating costs as their operations may grow without necessarily increasing such periodic operating costs. The low periodic operating costs may be due to, for example: the monthly cost of office rent, or the monthly cost of systems and data processing which do not necessarily double when the sales volume doubles. The resulting additional economic margins due to scale of operations provides monopolies and oligopolies with additional economic security to buffer for their operational inefficiencies, the latter being derived from the lack of pressure given the absence of significant competition. Finally, these margins eventually turn into greater profits for their shareholders relative to those achievable in competitive markets. All this occurs generally at the expense of the consumers, forced to buy from such monopolies and oligopolies.

Monopolies and oligopolies in Mexico

It would appear that Mexico has oligopolies across a variety of industries. Fortunately, private monopolies practically do not exist in Mexico, and the energy monopoly (electricity and hydrocarbons) is, at least, managed by the Mexican state government, which offers the possibility of having certain discipline in the price setting to the benefit of consumers, so as to cap the raises as long as the country is governed by a democratic regime in which, should the energy state monopoly become abusive, the incumbent party would have the risk of giving up power to an entrant party who committed to capping raises in prices. It is sometimes difficult to detect the oligopolies operating in a country. Some companies even choose a strategy of selling their goods under different “company” names, so as to disguise the fact that they are, in actuality, a single company running the market oligopolistically or monopolistically. Oligopolistic, or quasi-oligopolistic industries in Mexico could very well be, among others, the following: communications, cement, beer, department stores and supermarkets, broadcasting stations, franchise restaurant chains, private hospitals, commercial banks, etcetera. Some oligopolies even disguise themselves as apparently competitive enterprises, without being so. For example, the car dealerships for different European, American and Asian brands may operate in a given city all owned by the same proprietor, something certainly harmful for the consumer. A similar thing happens with car rental companies at airports, where different car leasing brands are all run in Mexico by a single proprietor. Taxi cabs outside airports also appear to be oligopolies.

Monopolies and oligopolies, and corruption

There is a clear correlation between the intensity of corruption in a country, and the prevalence of market dominance caused by monopolies and/or oligopolies. Statistics suggest that higher levels of corruption imply greater prevalence of monopolies and/or oligopolies, and vice versa. Both the World Economic Forum (WEF) and Transparency International (TI) periodically develop rankings of a large portion of all the countries in the world, in terms of their market dominance situation and in terms of their corruption, respectively⁵⁴. It should suffice to observe the tendency of the dots in the graph shown below to corroborate this fact: Statistics indicate that approximately 39% of the extent of market dominance prevailing in a given country is explained by the level of corruption prevailing in such country. If, in an analogous fashion, statistics suggest a correlation between the prevalence of corruption in a country and the reliability of its justice administration system (courts and judges), then since justice administration in turn has a statistical correlation with market dominance, by transitivity corruption is even further related to market dominance in an indirect way. Each point in the graph shown below represents a country, thus 115 countries with their respective values for market dominance and corruption levels form the cloud of dots which, together with the regression line crossing the cloud represent a visualization of the fact that the more corruption there is in a country, the greater the market dominance of such country is, and vice versa.

The egg and the hen in the corruption–monopolies/oligopolies link

Why is market dominance so related to corruption? What occurs first, corruption, or a high level of market dominance in a country? These two questions are interconnected. Monopolies and oligopolies emerge and remain in existence primarily thanks to corruption. Such enterprises require protection on the part of government so as not to have to face competition. Limitations to importation of goods turned into law, for example. The definition of a very specific “product standard” which only a very limited number of companies “fulfill”, a standard stipulated by the government of course, is yet another subtle barrier to competition. Corruption enables the arrangement between certain companies and certain public servants so: a) laws are written in favor of such enterprises by the legislative power, b) laws are administered in favor of such enterprises by the executive power, and c) laws are interpreted in favor of such enterprises by the judicial power.

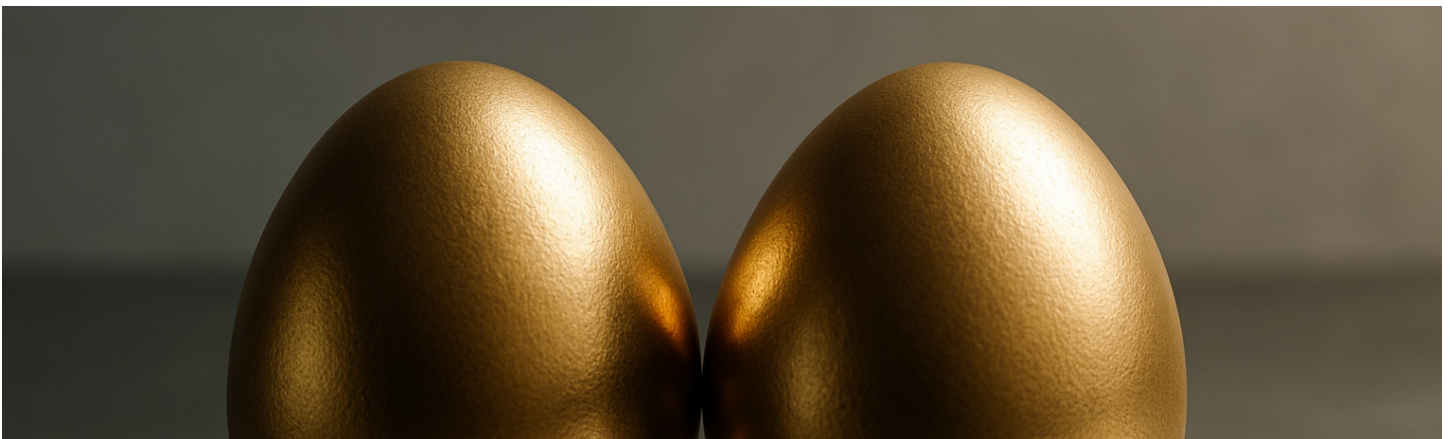


Fig. 14 The power cycle. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

MONOPOLIES VS CORRUPTION - 115 COUNTRIES, 2019

Market dominance score (WEF)



Table. 2 Monopolies vs Corruption — 115 countries (2019). Author's elaboration based on data from World Bank Group (2019) and Transparency International (2019).

The second question, as to whether corruption occurs first, or do monopolies/oligopolies occur first does not have a distinct answer. The monopoly/oligopoly and corruption situation is a case of the proverbial egg and the hen issue. It could be that a public servant originally proposes to an individual that he/she do business in a favored manner and that, in exchange for some material benefit, the public servant will grant the individual some sort of protective arrangement on the part of the various powers of government. It could also be the case that an “entrepreneurial” individual proposes to the public servant some type of benefit in exchange for those protective arrangements, agreed upon between the two parties before the business starts. This could be the case for a company focused on sales to the private sector and/or general consumer, but it could also be the case with regard to the granting of a particular government contract or a concession bid, where bid simulation would render the individual a winner thanks to the previous arrangement between both parties. Monopolies and oligopolies are thus concurrent with grand corruption, not small corruption, it should be inferred.

Monopolies and oligopolies in the world

The monopoly and oligopoly phenomenon is nothing new in the world. Even in the US⁵⁵, says political scientist Amy Klobuchar, due to corrupt arrangements between politicians and monopolists, politicians towards the end of the Nineteenth Century showed disdain to aiding the American society prepare to cope with the new challenges and opportunities for the country’s industrialization. In an analogous fashion, at that time courts refused to enforce laws as they were expressly written, in order to favor the monopolies of the time. This effect resulting from favor toward monopolies on the part of government servants seemed inexplicable to the general population: increasing poverty and income disparities ensued amidst the prosperity of the very few who did take advantage of the technological advances fruit of the Industrial Revolution. It was thus important to teach the masses about the dangers created by the power of monopolies. It was President Teddy Roosevelt who around the year 1914 popularized the knowledge



of the adverse effects of monopolies and oligopolies, followed by the enactment of laws against monopolies thus commencing a real fight against them, including the creation of the FTC, Federal Trade Commission to supervise the economy and to avoid the prevalence of monopolies and/or oligopolies in the US.

Monopolies born thanks to merit, and other monopolies

There are monopolies being born thanks to innovation and industrial merit on the part of the founder. This does not imply that such monopolies should continue to be the sole supplier of a valuable invention useful to Humankind after a while. But the potential and temporary reward that this monopolistic position initially represents for innovators promotes technological progress resulting in improvements in quality and productivity, leading to rises in the quality of life for the general population. Innovation gives rise to millionaires thanks to the temporary advantage that the creative monopoly grants society as derived from a notably beneficial invention. In Mexico, however⁵⁶, without the institutions and checks and balances needed to promote equal treatment and access of the entire population to all available opportunities (education, etcetera), the relationship between certain businesspersons and certain public servants (with a high probability of cementing such connection through corruption) may give rise to the creation of millionaire owners of monopolies or oligopolies who may apparently emerge in a sudden fashion, without the creation of any innovative invention beneficial to society justifying the ensuing economic success of the given business person. Such persons can be more appropriately defined as takers of the unfair advantage to create the enterprise tool which enables them to extract economic value from the general population, to the benefit of a reduced minority. The ideal check-and-balance solution to counter this should be, in the writer's opinion, the eradication of corruption thanks to the proper institution to concretely attack in an effective and definitive fashion this grave malady afflicting Mexico.

Solving the market dominance problem

In order to solve the market dominance problem, that is, the prevalence of oligopolies and monopolies, the action must be to address it along two fronts simultaneously (the egg and the hen problem). 1) Corruption must be eradicated, and 2) Companies with monopolistic or oligopolistic power should be broken up, regardless of whether their market power harms consumers throughout the entire country, or it only harms consumers in particular geographies. This must be achieved in accordance with the generally accepted policies in existence to address this problem.

The first front is the core matter of this writing. The second front requires an appreciation of the economic structure of commercial organizations in a holistic manner, from their birth until their death. Companies must be born because an innovator conceives a product, or service, or an improvement upon an existing product or service, yielding a better result than what prevailed until the moment of the company's birth. A product or service is better when, among others, it can be produced faster, or at a lesser cost (and thus becomes amenable to being priced lower than before), or is more effective in addressing the need it is set out to resolve, or it can be distributed at a lesser cost, or has greater purity, or has better performance attributes and/or fewer unfavorable attributes (less pollution and less adverse secondary effects, etcetera). New enterprises are thus born because this set of attributes confer the founder an advantage in the market, but this only occurs when the market runs without unfair advantage granted to particular market participants who, without merit, simply practice corruption.



In an analogous fashion to their birth, unsuccessful enterprises should be able to die rapidly and without great difficulty, being able to swiftly resolve their pending obligations toward their workers, suppliers, the tax authority, and their lenders during the dissolution process. A quick company death for unsuccessful enterprises frees up resources for reuse in the national economy (persons, physical assets, intellectual capital, etcetera) in such a way that such resources may be rapidly put to good use elsewhere, something beneficial to everybody⁵⁷. This is applicable, and necessary to the extent that, by force, monopolistic or oligopolistic enterprises might be at risk of dying as a result of governmental action on them. It would be highly advantageous to Mexico then, if bankruptcy and insolvency laws and their application became simpler and faster to apply, exactly as it is so touted that Mexican laws enable a very quick creation of new companies. Being able to easily “kill” companies in Mexico is not currently the case, unfortunately.

Solving the monopoly/ oligopoly problems in Mexico

The process to “fix” a monopoly or oligopoly hinges precisely on the action on the part of the national government to force that, first, in a relatively short time (months) the company or companies in question do not continue to perform as monopolies or oligopolies but instead that they very swiftly limit or adjust their prices if they technically cannot immediately reduce their size, at the same time maintaining or raising the quality of their product or service. In the meantime, a second action to be done in parallel, is that they shall adjust their size as necessary, while public policy promotes the birth or arrival of new firms to generate further competition and to supply more of the same good or service to the consumers. The first measure seems most appropriate in the short term. Meanwhile, as the national government implements various policies limiting the abuse of monopolies and oligopolies, at the same time it must promote the adjustment in their size while simultaneously stimulating the arrival or new presence of more such companies producing the same good or service. Some such policies are: a) Establish a hiring veto for the monopoly or oligopoly so it will face difficulties acquiring replacement talent or talent needed for further growth, b) Prohibit all mergers and/or acquisitions in the given industry known to suffer from market dominance, even when such dominance merely applied to particular sub-markets or specific geographies across the nation, c) Ban, punish and monitor that the governance boards and the employee-stockholders up to a given (high) echelon of the organizations making up the oligopoly communicate with one another in any form⁵⁸, even socially, d) Establish a maximum rate of return, in terms of dividends and all other cash flows to equity holders of the oligopolistic companies, while at the same time setting a cap on maximum sales unit price, minimum purity, maximum delivery time, and the guarantee that sufficient product/service will be available for substantially all consumers, among a few other antitrust policies which may be available, or which may be developed for each case at hand.

Each public policy must, naturally, be filtered through the sieve of constitutionality under Mexican law, but this must take place with an incoming perspective of how to achieve it, rather than the perspective of how not to achieve it. It will be natural that, since these actions have seldom occurred in Mexico, great controversy and barriers could be erected, many of them pseudo-legal, to stall this process. But this path is geared precisely to the improvement of the position of the Mexican consumer, always. This is something achievable if corruption is simultaneously disappearing. Emphasis should always be not on how to terminate the free market of enterprises and consumers in Mexico but, on the contrary, how to preserve the free market, how to strengthen it by eliminating monopolistic/oligopolistic powers which subtract freedom from the markets.



The most definitive way to solve the monopoly/oligopoly problem is to break up enterprises so as to ensure the proprietary managerial control of the market does not remain in a few hands with total discretion to implement price-quantity decisions on the given product or service in the particular market. The national government must mandate that the monopolistic or oligopolistic enterprise, within a given time frame, sell parts of its stock and associated real assets and intellectual capital to new non-related third party stockholders. By non-related it is meant that the new holders of the stock for effectively new companies carved out of the previously oligopolistic or monopolistic company demonstrably have no connection with the previous stockholders. Holders of stock at A company cannot be familiarly related to stockholders of the new B company, up to the fourth family relation degree (up to second cousins banned), for example, so as to avoid further collusion. This disaggregated stockholding structure of two or more new companies out of the original company must remain in place throughout time, indefinitely. This can be achieved thanks to periodic governmental supervision over the registers of ownership of the stock certificates, something feasible thanks to the information available in the state land and company registries run by state governments in Mexico for privately held companies, and even more easily in the case of the common stock traded in the public exchanges for publicly held companies. In the latter case, financial brokerages and the financial regulatory commission are additional contributors to aid in the monitoring of the process. For companies in a given industry wherein the stock ownership came from overseas, the Mexican government could monitor records of such ownership to ensure that holders of significant or controlling stock for company A do not have significant holdings of stock in company B, or C as the case may be, too. As oligopolistic or monopolistic companies are being broken up, the government must entice new entrant companies producing the same good or service to establish their operations in the nation or in the geography where the monopoly or oligopoly previously reigned. Ensuring no scarcity of the good or service takes place during the transition to a more competitive market is a key public policy priority. A simplification of the permitting processes, without skipping all legal requirements; labor-wise, environmentally-wise, fiscally-wise, etcetera, helps to attract new players into the market. Temporarily reduced taxation for such industry may help, too.

If there is the political will to break up monopolies and oligopolies in Mexico, there certainly will be effective ways to achieve this goal, as long as corruption is simultaneously being dealt with. It is of paramount importance, however, that at all times the Mexican government be vigilant to, again, ensure that the break-up and regulatory activity upon monopolies and/or oligopolies does not result in temporary, or longer-term scarcity of the goods or services such monopolies or oligopolies sell to the Mexican market. And also, if and as necessary, to ensure that alternative sources for such product or service are made adequately available from overseas or via any other mechanism, so as to guarantee that the Mexican consumer does not unduly suffer the spasmodic ravages of monopolies and/or oligopolies in the form of a last, enduring or not, painful unavailability of the given product or service in question.

The emergence of new monopolies and oligopolies

As preventative mechanisms to avoid the formation of new monopolies and/or oligopolies, various public policies are available in the economic arsenal to promote and facilitate foreign direct investment, something that always adds competition to the domestic markets thus reducing market dominance. All of the above must happen with prior assurance that foreign investors fulfill, similarly to domestic ones, all Mexican laws at all times. Without corruption, many benefits simultaneously accrue to all fronts of the economic, social and political activity within the country. This may be called the corruption eradication dividend.



More generally, for both foreign and domestic firms, all law rewriting efforts geared toward the lowering of entry barriers into all industrial sectors of the country will always increase commercial competition, always to the benefit of the consumer, that is, to the benefit of all citizens of Mexico. This is the mirror image of what has been said before about the death of enterprises: meeting all applicable laws, it should always get easier to start new enterprises, similarly to the ease with which existing enterprises should be liquidated or cancelled. The ease to start, and to finish, the operation of companies by the private sector brings along robust economic dynamism, which brings along investment in real assets, the creation and/or recycling of direct employment posts, and the increase and/or continuity in tax revenues. All these being a great benefit for the citizenry.

Monopolies and oligopolies, and foreign investment in Mexico

Fortunately, Mexico gets a healthy and growing volume of foreign direct and indirect investment every year. Nonetheless, there are forms of foreign investment which are less desirable for this country, as a function of how such foreign investment contributes, or does not contribute, to the creation or strengthening of monopolies and/or oligopolies in the domestic economy.

A harmful form of foreign investment takes place when international franchisors prefer to deal with local Mexican monopolies or oligopolies as their franchisees in Mexico when granting franchises. For the franchisor, it is far easier to come to an agreement with a single franchisee company for as many “copies” of the franchise as possible. The scale effect favors both parts, franchisor and franchisee. The same domestic monopolistic effect at a national or regional level, and the ensuing scale economies, contribute to better profits for the franchisee, and therefore to better royalties for the franchisor. Everyone wins, except for the Mexican consumers, that is, the citizenry in general.

In order to avoid this, some restrictions should be created for franchising activity in the country. Franchisees will naturally be reticent to meet the requirement that the number and location of their franchise outlets be limited and thus will not favor the motion of having several franchisees competing in the same area. Franchisees could erroneously claim legal action for violations to the fifth article of the Mexican Constitution, regarding “freedom of profession, industry, commerce or work” for all Mexicans. This legal action would hardly pass muster since said fifth article applies to human persons, not to corporate “persons”. And even owning one franchise, a single franchisee is effectively able to enjoy the freedom of exercise of profession, industry, commerce or work said article alludes to. The proper rule which could be imposed upon franchisors would be, for example, the prohibition to grant all franchises to a single corporation or individual. At least seven different franchisees, on a rolling sequential basis, could get their franchises one by one in a given region, more so in the whole national territory. Attention would also have to be paid to the operational addresses of each franchise, in order to prevent the formation of regional oligopolies.

The same should occur with institutional investors from abroad, such as investment funds and stockholding portfolios owning stock of publicly listed or privately held corporations. Similar to the case of franchises, institutional investors could prefer to deal with the boards of monopolies or oligopolies. And monopolies and oligopolies could naturally yield better profitability to foreign investors, as long as majority shareholders controlling such monopolies or oligopolies did not extract undue economic benefit from the company at the expense of minority investors⁵⁹, as foreign institutional investors oftentimes are.



Fig. 15 Concentrated capital. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

To tackle this challenge, there is a relatively easy and quick method to estimate the degree of regional or national market dominance of a particular industrial/market sector, thanks to the simple measure afforded by the Herfindahl Index (Hf^{60}).

Since the quality of corporate governance of institutional investors, such as investment funds and other holders of foreign securities, from Mexico for example, is a feature more and more prized every day by the clients of such institutional investors when they reach their decisions as to through whom to invest in securities abroad, Mexico can do a great deal via international publicity, not necessarily costly publicity if done primarily through social networks, in English. Mexico could promote that such institutional investors emphasize their pick of securities of foreign corporations not of a monopolistic or oligopolistic nature across developing countries, as part of their own good governance⁶¹. Obviously, due anonymity on the actual names of each monopolistic or oligopolistic corporation should be expected and can be achieved via a message such as: “You do not help developing countries if you invest in securities of monopolistic or oligopolistic enterprises in those countries”, never citing any names of any enterprises whatsoever.

Final remarks

The final ideas on corruption and monopolies and oligopolies are simple, but powerful to initiate beneficial changes for the entire population. Corruption and monopolies/oligopolies are intricately and intimately bonded to one another. Corruption facilitates the creation and continued existence of monopolies and oligopolies. Monopolies and oligopolies, at the same time, promote corruption as the exchange currency to get governmental favors that such enterprises need to survive and prosper without commercial competition, to the detriment of the consumer population, meaning the entire population in the country. Without regard for what comes first, corruption or monopolies/oligopolies, both corruption and the prevalence of monopolies and oligopolies must be attacked simultaneously. The attack on monopolies and oligopolies should be launched throughout the whole country in certain cases, but it should also be launched against those monopolies or oligopolies which operate in particular regions or sub-markets within the country, as the local citizens suffer their ravages nonetheless. Every Mexican citizen has equal human value and rights and thus deserves equal treatment across the entire country.

There are several ways to attack private monopolies and oligopolies so as to limit their harm to the nation, as long as corruption is simultaneously being extinguished. Attacking corruption and the existence of monopolies/oligopolies takes continuous and tenacious political will right from the top of the political echelons, administration after administration, in order to succeed. If, to no avail, a sector of industry constitutes itself into an inevitable “natural” monopoly, such sector must be run, yes, as a monopoly, but as a state-run monopoly. And a liberal democracy is achievable only if corruption is extinguished. It is not being advocated here that more state-run monopolies be implemented but, in extreme and select cases, few and far in between, the preference will be for a state-run monopoly in a liberal democracy, over any privately run monopoly or oligopoly. Such state-run monopoly band-aid should not be perennial, but should last as little time as possible in order to reestablish a well functioning, competitive market again.

New monopolies or oligopolies will no doubt continue to emerge over time, but the key is to constantly monitor, limit and even destroy as necessary any sprouts of monopolistic or oligopolistic companies, and this at the same time demands the honest action of non-corrupt public servants



Fig. 16 Power under watch. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).



Fig. 17 Light on the standard. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

WORLD CLASS PRACTICES

Leading countries in the fight against corruption, as a reference

There are countries which have been successful in practically extinguishing corruption in their public and private sectors. Their success is empirically recognized by the accolades they get on this matter in the public media, and even more so thanks to the positions they routinely achieve in the generally accepted global indices on the perception of corruption by country, such as the one published by Transparency International, mentioned before.

Countries for study which may be of most interest relative to the Mexican corruption challenge are those with a social evolution similar to that of Mexico. More so than those other countries which, although showing lower corruption levels than Mexico, constitute societies that greatly differ socially and culturally from Mexico. Although many European countries, principally in Anglo-Saxon Europe and in the Northern portion of America show corruption indicators placing them amongst the least corrupt countries in the world, such countries have been consolidated liberal democracies for many years now, and are countries which did not live the colonialist past Mexico underwent until the Nineteenth century. Neither have such countries lived a social revolution like the 1910 Mexican Revolution, whose effects and evolution still have a social and political impact on Mexico today.

It becomes interesting, then, to study and learn from leading countries in terms of their fight against corruption, countries which nowadays show a very high level of economic and social development and very low levels of corruption. Countries which also were colonies or non-democratic nations a few decades ago, which now are governed under democratic regimes. Given this, it is hereby proposed to study the success story of Singapore, chiefly. As a country which continues to lead in its fight against corruption year after year⁶², a country which also displays yearly improvements in its income per capita and income distribution (Gini) indicators, while displaying high reported levels of happiness by its citizens⁶³. It is also proposed here to take some world class aspects of Hong Kong's fight against corruption, ranking 14th by TI today⁶⁴. The government of this "city-country-former colony" was recently returned to the command of the People's Republic of China, as fulfillment of an age old agreement between the latter and the United Kingdom. Hong Kong has historically held positions among the top ten countries with less perceived corruption in the world, and its anti corruption institutions certainly must continue to work successfully today. Studying the Hong Kong case surely contributes to the aspirations of building an effective Mexican anticorruption model, similarly to that contribution of Singapore in this regard, today and in the future. Finally, there are some elements in several anti corruption initiatives of the Philippines which have also proven innovative and which have yielded positive results in the fight against corruption, as will be shown below.

Thus, the chief elements to be presented here about the best anti corruption practices amenable to incorporation in Mexico's own institutional and operational arsenal shall be those which, in Mexico's social and historic context, as well as in their international juridical acceptability,

seem to be the most appropriate public policies amenable to their incorporation in a truly new Mexican model against corruption which eventually hopefully proves to be successful in the goal of extinguishing this serious malady. Those elements will be derived mostly from what has been implemented in Singapore, and in Hong Kong, and in the Philippines, elements which have been touted by experts on corruption to be truly useful in the fight against corruption. Even advances derived from Game Theory in Political Science, particularly regarding norms and “meta-norms”, as will be seen below, should be incorporated into the best world class practices for an ideal anticorruption model

Juridical hierarchical consistency, and political leadership when facing acts of corruption

A substantial portion of the following section emanates mainly from two sources. The first is the materials disseminated by CPIB itself, that is, by the “Corruption Practices Investigation Bureau” of Singapore⁶⁵. The second one is the analysis prepared by Robert Klitgaard on the fight of corruption in Singapore, and in Hong Kong, as described in a study published by this author a few years ago⁶⁶. Klitgaard also presents an analysis of what is done in other parts of the world, such as in the Philippines. Finally, a few other ideas and valuable policies in the fight against corruption emanate from ICAC, the Independent Commission Against Corruption itself, which is based out of Hong Kong⁶⁷. The work on “meta-norms” emanates from research performed by Dr. Robert Axelrod, researcher at Princeton.

The constitution of Singapore is one of the very few which includes the term “corruption” in its text⁶⁸, alluding to the fact that the president may be removed from office, and he/she may be eventually investigated by CPIB, when the Prime Minister, or at least 25% of the members of Parliament, determine that the president has committed a possible act of corruption or abused its power from his/her post. The president may even be removed due to bad conduct. Mexico entered the term corruption in the Constitution in 2021, in its article 108, establishing for the first time that the president of the Republic could be charged and tried for acts of corruption. When the constitution declares that even the president may be tried for acts of corruption, it sends the right signal to the citizenry, a signal that such crime will not be taken lightly, and that nobody may be above the principle of no corruption in the country. Hierarchically, this implies in constitutional terms that if the president himself/herself may be charged with acts of corruption, every other individual in the country can be equally charged for acts of corruption. This represents a great act of political leadership in the right direction on the part of any head of state.

Most salient features of a world class anticorruption system, as derived from those designs coming from Singapore, Hong Kong, and to a lesser extent from the Philippines

- a. The top leader, with perennial conviction about the vital importance of abating corruption, must constantly express in his/her communications, and in his/her acts a total, honest, sincere, public, constant, unchanging commitment to extinguish corruption. This is an indispensable driving force to mobilize the public service and civil society to begin and to indefinitely continue its attack upon corruption, until its extinction. The best example is the Singaporean Prime Minister, Hon. Lee Kuan Yew, who since 1959 pushed for the extinction of corruption in the then-recently autonomous city-state, thus establishing the foundations of today’s CPIB. He, along with the current Prime Minister on duty, continued until 2015 when he died to promote and disseminate the policy of zero tolerance to corruption in that country.



b. Raising the pay levels does not necessarily reduce corruption to a significant level⁶⁹. This makes sense since grand corruption has no comparison on the scale of its potential economic benefit, in relation to the formal compensation that the corrupt individual might receive from performing its public duty. Rather than raising salaries much over those for a good standard of living of the public servants, it is more important to apply other anticorruption policies which, for a few decades already, have proven to be successful in those countries with very low levels of corruption, which will appear in some of the following sections, below.

c. In order to extinguish corruption, it becomes imperative that there be symmetry of information. Symmetry of information in the sense that the citizenry must easily know what the public servants are doing with public resources and public goods, as well as the state of the finances of such public servant as frequently as necessary and without prior notice. Symmetry of information means that the population knows as much about the public servants 'duties, wealth and activities as the public servants themselves, at all times. For this to happen, the public records holding information about the public deeds of fee simple ownership of real estate by all types of owners, including public servants, as well as which owners hold what common stocks of privately held companies, must be credible sources of truthful ownership information. And there must be easy, quick and open access to those records whenever there is founded suspicion that an individual is involved in a likely act of corruption. The same must apply to historical and current bank records (potentially both domestic and international ones, with the cooperation of foreign governments to perform those searches), as well as for the contents and the inside of bank rented safe boxes. The ownership of stocks of publicly listed corporations should be equally easy to access in corruption cases. Equally useful to contribute this type of information are the brokerage entities involved in the trading of financial securities and the public records (land registers) offices throughout the nation. The free press and the free media, in more general form, are other useful sources, since they perform their independent investigations.

d. The total assurance of anonymity of each citizen denouncing acts of corruption potentially committed by members of the public service is also essential. This is achieved by the existence of hotlines, available 24x365. This anonymous communication may exist thanks to what's app type services which could be made available on the streets, in kiosks, booths or even at commercial establishments where the citizen interested in expressing a corruption related complaint may write a what's app message, from a publicly available cell phone, without having to reveal his/her name, nor displaying his/her physical image, nor his/her mobile phone number, therefore remaining unknown to everybody as the complaint is filed.

e. The burden of proof is displaced from the side of the public attorney or state investigator, to the person being charged with the corrupt act, being him/her the public servant or private sector individual promoting a corrupt act upon a public servant, alike. So, both the public servant suspect but also a private individual in some other cases may be arrested while the investigation on their wealth, economic flows over time and their financial status (bank records, real estate ownership records, stocks and bonds ownership records, wealth overseas, etcetera) may be more thoroughly investigated by the anti corruption entity. Development of inexplicable wealth always generates great suspicion about potential corruption. Those with inexplicable development of relatively sudden wealth during the term in public office shall prove they acquired it licitly. Arrest may be accompanied by searches, judges 'warrants not being necessary, when the investigating agency so determines due to urgency and to the risk of vanishing evidence.



f. Privatizations and public concession contracts for public goods and services is not the solution against corruption. On the contrary, together with private monopolies and oligopolies, they tend to be great promoters of corruption. The privatization or the granting of a public concession of a given public infrastructure or public service which in itself constitutes a “natural monopoly” is not at all advisable. For example, the only road between point A and point B is a “natural” monopoly. Typically, not more than one toll road is built between the two points, there may be another, toll-free provincial road connecting the two points, perhaps, but it might represent less driving quality and/or more time to reach destination. It would thus be a very bad idea to grant the toll road as a concession, or to yield the right to build and operate such road, to a private sector player. A natural public service monopoly could be the potable water and sewage collection service of a city. Private monopolies and oligopolies should be broken down so the broken groups start to compete with each other, and each becomes held by numerous private owners competing against each other, so as to reduce the corruption incentive for public servants to interact, and secretly agree, with the leaders of such private monopolies and/or oligopolies. In terms of corruption, it is far less harmful that the great infrastructure of the country and the public services constituting natural monopolies remain under operation by the national or state governments. Such public operation must be run under as much transparency as possible (private audits every half year, citizen observers at all times, openness in their corporate governance, etcetera), since a public monopoly run by a transparent, democratically elected government is far better than the one run by a private monopoly or oligopoly.

g. Beyond the mere existence of juridical norms allowing anticorruption authorities to investigate the bank accounts of a suspect, and/or his/her domestic and/or international investments in stocks, bonds, and other forms of wealth, the standard of living, daily expenditures, purchases, and their evolution along time, monthly for years even, in conjunction with the knowledge of the pecuniary resources of the subject under investigation, must be analyzed and evaluated in such a way that the corruption investigation should become an integral exercise so as to explain when and how, if any, the corrupt conduct occurred.

h. The fight against corruption must be publicized and even glamorized, all the time. It is key, too, to explain via advertisements to all popular audiences what is corruption, how it operates, how it may be detected, and also promote that whistleblower come forward (anonymously). Publicity of open seminars on corruption for the general public and assuring certainty of anonymity for all whistleblowers, publicity of success corruption-cracking stories with an account of their facts and how success was achieved, without omitting the names of the guilty ones so as to create public shame upon the corrupt individuals, are other useful communications tools. Generating happy-ending stories about the prestige earned by the “good ones” while the corrupt ones spend time behind bars showing on TV and in the general media, even in the form of soap operas, is yet another tool which has proven to be very valuable in deterring corruption, in the Philippines, for example. Exalting the heroic deeds of corruption investigators for the admiration of society while promoting the popular dislike and repulsion originating towards a corrupt individual when he/she is discovered in the corrupt act is yet another valuable publicity mechanism. All these tactics contribute to creating a civic conscience in the population and a generalized animosity towards corruption, while instilling a popular appetite for the prevention and for the eventual extinction of corruption at the national level. In countries such as the Philippines, there are soap operas on TV which so treat the theme of corruption, such programs being widely broadcast and watched.

- i. While all whistleblowing must be entirely anonymous, it must be clear to the citizenry that all false information provided to the anticorruption agency, if provided with malice, will be punishable by law. This deters individuals from making frivolous (false) accusations with the aim of revenge, or as simple pranks. This is how it occurs in Singapore⁷⁰, with accompanying fines and prison sentences for the individual frivolously whistleblowing.
- j. The very public servants making up the anticorruption agency, without exception, shall be subjected to an even more detailed scrutiny of their finances than the generality of the public servants. While it should be easy to review the wealth and cash flow status of public servants in general, the scrutiny over the anticorruption public servants must be systematically more continuous, rigorous and thorough, as they are charged with the key duty of combating national corruption. And whenever fault is found on the part of any of them, penalties and punishment are even tougher than those applicable both to the generality of public servants, as well as to private individuals involved in corruption⁷¹. The workable exigency to ensure compliance with all (juridical) norms in society is achieved precisely by ensuring that those who are the key enforcers of the norms, are more thoroughly observed and more severely punished whenever they infringe the norms themselves, than the rest of society⁷². Thus, public servants in charge of the anti corruption agency make up a cadre of “meta-public servants”, who must display even more symmetry of information toward the citizens, and they must follow even more strict meta-norms than those to be observed by all other citizens, public servants or otherwise. This is the most effective mechanism to avoid shirking on the part of the anticorruption agents themselves.
- k. The public entity in charge of combating corruption in the country must be totally independent and empowered to investigate any public servant or private individual, without exception. The law should not make exceptions for the president, or the prime minister, or any senator or representative, or judge or magistrate, or federal or state attorney. When the anticorruption entity is empowered to investigate any person in the country, it generates a high level of trust by the citizenry that nobody will be above the law, emphasizes that the anticorruption institution does not owe allegiance to anybody, except to the citizenry in general, to whom it is fully accountable. In the case of ICAC, the Independent Commission Against Corruption of Hong Kong, its name itself reaffirms this independency and lack of conflict of interest, noticeably being responsive to the citizenry only.
- l. A more profound, frequent and closer scrutiny over the wealth and cash flow situation and evolution of high-ranking public servants in such particular areas as those related to public security, national security/ defense, customs, education, welfare payments and public health should take place on a continuous basis. The US Army officer and student of corruption Sarah Chayes⁷³, with long deep experience in countries of Asia, like Afghanistan, documents how areas of public service where attention to, and interaction with, the general citizenry by the lower ranking public servants of those organizations is extensive, small scale extraction of daily bribes from citizens coalesces eventually into grand corruption flowing to the upper echelon of those organizations. Extractive “petty” corruption occurs constantly because the higher ranks receive substantial portions of those bribes, “grand” corruption, in exchange for job protection and immunity from prosecution for the lower ranks within such type of agencies. This could also happen in Mexico, where many citizens might have a hypothetical encounter with a traffic police agent who might state something like: “Yes, boss, but I must pass my daily share to my chiefs up the ladder...” In this sense, being able to watch the wealth evolution and the cash flow of such high-level public servants should not be considered to be a violation of their constitutional right to privacy. They are public servants, and their personal income should solely come from the tax payers. The common good, the “good for everyone”

depends on their fulfilling their duties without any hidden payments being required. Constitutionally, the justification to enable the observation, as frequently as necessary, of the economic evolution in their wealth and income lies in the fact that, should they choose to not lose their “privacy” on their bank accounts, or on their public records regarding their real estate and stock holdings of private and public companies, they always have the option to migrate from their job to many other jobs, both within the public sector and in the private sector. Nowadays, this ability to scrutinize the wealth and economic flows of public servants is less and less considered to be a violation of the human rights of such public servants, as this is for the “common good”⁷⁴. Even the World Bank⁷⁵ recommends on account of national security to practice such scrutiny under the argument that corruption prevention and exposing unexplained wealth on the part of public servants and their close family members constitute a serious and legitimate public interest.

Emerging pattern of an effective solution

Based on the principles cited above, a pattern emerges as to what the procedure is on the part of the countries which have achieved a significant progress in extinguishing corruption worldwide. Countries successful in abating corruption, which were colonies formerly, or which had some form of dependency on other more advanced countries in the past, making them similar to Mexico in terms of historical path. Countries which had a substantial negative reputation due to their prevalent corruption just a few decades ago. This pattern, at the risk of repetition, could be summarized as follows:

1. The political leader must be convinced that corruption must be extinguished, and the leader must clearly communicate this to the people. The same applies to all successors.

2. Paying well for public service, but not to an excessive level, diminishes attraction of less valuable people more interested in salary than in country service to the government jobs. Higher salaries do not necessarily reduce the incentive to engage in “grand corruption”.

3. To extinguish corruption, the finances of every public servant must be completely transparent, all the time. Constitutionally, there are ways to deal with this requirement, for the sake

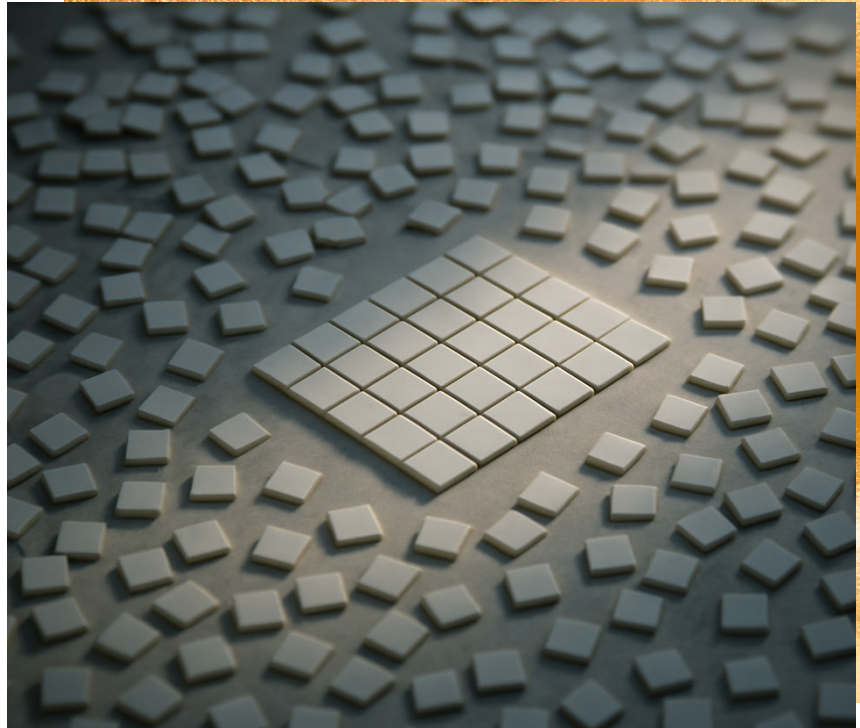


Fig. 18 The emerging pattern. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).



of the public good. Later on, it will become evident that Mexico already has the constitutional basics, amenable to improvement certainly, to achieve this level of transparency on the public servants' wealth and flows whenever they are under the suspicion of corruption.

4. Anonymity for the whistleblowers is key. There must be no possibility of detecting any whistleblower making charges before the anticorruption entity.

5. The burden of proof as to the innocence of the person being charged of incurring grand or grave corruption crimes must rest on the person charged himself/herself, and shall not be the burden of the national government. There also are constitutional provisions in the Mexican Constitution to deal with this aspect, naturally amenable to improvement, too.

6. On the economic front, a frontal attack must be launched against all private monopolies and/or oligopolies. Whenever a physical asset, or project, or infrastructure item naturally constitutes a monopoly, it is better to assign its operation and stewardship to the government, under complete transparency in its governance.

7. The study of the evolution of the wealth of a public servant under suspicion of corruption must be very detailed, multi-dimensional, holistic, over a long period of time, perhaps for one or two years at least and with monthly detail, so as to fully understand how the wealth and economic flows of the public servant evolved in recent history.

8. The popular media and entertainment channels are very effective to create a conscience and to form a negative opinion on the part of the population towards corruption: soap operas, newscasts, films, narratives, they all must promote the victories against corruption and display disdain for the guilty ones, without fear of mentioning names of those sentenced under corruption crimes. The means of communication are the mechanism through which public and private leaders keep the drive to eradicate corruption in every mind of the population, and how the population at large could help to achieve it.

9. False charges of corruption should be avoided. A false imputation of corruption should be treated, in the criminal law realm, the same way as a false statement to the authorities or before a judge, including the penalty of prison time.

10. Public servants in charge of the anticorruption governmental agency must be subject to even more scrutiny in terms of their finances relative to the rest of the public service, and crimes committed by anticorruption agency public servants should be punished far more harshly than similar crimes incurred by all other public servants and private sector persons involved in corruption cases.

11. The anticorruption agency, with constitutional support, must be empowered to start investigations, and take actions, against literally any public servant, president, supreme court minister, senator or representative, or any other public servant, in general.

12. The scrutiny over the evolution and situation of the personal finances, periodic income and monetary flows, real estate and stock wealth of high level functionaries and their close family members, in the security agencies, in the military, in the customs agency, as well as in education, in the welfare payments and in the health areas of government should happen more frequently and in more detailed fashion than in other public function areas. This, given the flow of "petit" corruption from subordinates coalescing daily into a "grand" corruption pattern derived from the frequent and close interaction of the lower ranks of those functions with the general population of the country.



To implement these measures, it will be critical to have the constitutional and legal undergirding enabling the actionability of the fight against corruption in concrete ways across all governmental activity, always with transparency and with the active participation of the citizens. Citizens must acquire a conscience of the importance of extinguishing corruption thanks to governmental dissemination of information on the subject. This must be done as driven by governmental, and private sector, leaders who ensure the continuity of message and of effort to sustain Mexico's most important project in the 21st Century, which is to kill corruption altogether, a disease afflicting the country for decades, perhaps centuries already.

CORRUPTION AND THE LAW

The laws, the set of obligatory norms established for and by the Mexican State, play a very important role in either limiting, or inadvertently favoring, the existence of corruption. Mexico is a country with a Napoleonic Romanic law heritage, its laws are written, - this is called positive law, wherein the citizenry must stick to what is established in written rules of conduct issued by a Legislature. Along these lines, the body of juridical norms (legal norms) applicable to Mexican society must be consistent with, and must philosophically emanate from, what is established in the “fundamental” norm, which is the Mexican Constitution, CPEUM⁷⁶, in its currently valid form, that is, its latest version with all amendments up to date. Thus, CPEUM constitutes the core trunk establishing the rights and obligations applicable to and enforceable in favor and/or against all individuals within the nation. Such rights and obligations are not to be, at least theoretically, altered or disobeyed by anybody.

Whenever any of the rights established by CPEUM is not respected in relation to any person, and particularly when rights are not observed by public servants to the detriment of a citizen, there is the recourse to the judicial figure of “Amparo” to protect any citizen. “Amparo” is a legal shelter procedure, something similar but not the same as Habeas Corpus but granted by a district judge, potentially after appeal by the Supreme Court in its role as the constitutional tribunal of Mexico. Thus, this procedure is not necessarily resolved by the President, as in other countries. This implies that whatever text that gets written as a reform into the body of CPEUM geared towards the extinction of corruption in Mexico has greater probabilities of resulting in favorable effects as to what subsequently gets imbued into the “secondary” laws. Secondary laws which, without exception, must conform to and abide by what has been established in the CPEUM in the first place. If they do not, particular “Amparo” procedures come into play to align such secondary laws to CPEUM norms, almost verbatim.

If any public servant does not comply with something stipulated in the Mexican Constitution, or in the “secondary laws” aligned with the CPEUM, and as a result an individual is harmed by this noncompliance event in Mexico, the individual has the right to resort to an “amparo”, the jurisdictional procedure, before a federal judge, or a circuit court in appeal, and eventually potentially by second appeal before the Mexican Supreme Court working as constitutional court.

Thus, the “amparo” procedure, if it grants a favorable sentence to the “harmed” individual given a violation of his/her rights as established in the CPEUM, instructs the public servant who originated the violation examined in the “amparo” to remedy as best as humanly feasible the aggrieved right of said individual. This is a powerful jurisdictional tool, indispensable as a matter of fact, to offer remedy in the best possible way to the citizenry before the likely abuses of the Mexican authorities, generally caused by corruption.

It is important then to consider that what is written into law, principally within the CPEUM, must be drafted with the aim of being a helpful tool to combat corruption. The approach here is from a practical perspective. The goal is to develop concrete, lasting and effective legal text geared towards the eradication of corruption in Mexico, under the current circumstances and within the institutional and legal structures now prevailing in the country. What aspects, as few as

practically possible, could and should be modified or added into the existing positive Mexican law to contribute to a real solution to corruption? Taking any other stance on the issue would merely result in yet another theoretical study about the problems of corruption in Mexico, without presenting actionable, concrete, feasible normative prescriptions. Prescriptions which Mexican society should then be able to impose upon the Mexican public service and the few, but highly damaging, corrupt citizens of the country, today and in the future.

Fundamental rights and corruption

Article 1 of the Mexican Constitution states that every person in the country shall enjoy the human rights stipulated within CPEUM, as well as those embodied within the international treaties Mexico is a part of. But so that those human rights, or fundamental rights, may be fully observed by everyone in the land, corruption should not exist⁷⁷. Because corruption distorts the performance of public servants, resulting in the inability to steward, to observe, that all human rights pertaining to every person are respected and complied with. In fact, the fundamental rights of the poorest or most vulnerable groups of citizens are those least respected whenever corruption prevails.

Extending this argument, there are academics of Law in other countries who postulate that living free of corruption should constitute a primordial fundamental right, in and of itself⁷⁸. Why not, then, include in Article 1 of CPEUM a sentence as a continuation of its first paragraph stating that living free of corruption is a fundamental right for every individual?

The text addition could be:

As a continuation after: “under the conditions that this Constitution establishes”, the following text should be added: “Every person has the fundamental right to live free of corruption”.

Bribery and preventive imprisonment

In this regard, there should be a two-part intervention. One should deal with the definition of bribery in the Mexican federal penal code in force. The other one relates to article 19 of CPEUM, one alluding to corruption.

As it has been mentioned, bribery is a synonym of graft. Bribery is the commonest form by which public servants and individuals from the public sector engage in corruption. Article 222 of the National Penal Code of Mexico⁷⁹ defines bribery and its consequences in a relatively satisfactory manner, if one compares it against the article for bribery in the US Code (US Code, article 201⁸⁰).

Article 222 of the Mexican Penal Code, nonetheless, is missing important text. It should clarify that bribery also takes place when a witness or a person making a statement before a governmental authority receives money or a material benefit to alter the truth. This small addition would stop a substantive quantity of false testimonies before the Mexican authorities. The act of falsity in the declarations before public authorities typically becomes, in turn, the stepping stone to greater acts of corruption beyond the mere subornation of perjury itself. Hence, the suggested adjustment to article 222 of the Mexican Penal Code would be as follows:



Fraction II: to his/her employ, charge or commission,] “and similarly he/she who gives, promises to give, or accepts for himself/herself or as an intermediary, money or any other benefit related with the giving of any false testimony, or declaration, affirmation or negation before any authority or public entity”[,

Regarding article 19 of the CPEUM, which deals with cases under which mandatory pretrial detention (“prisión preventiva oficiosa”, in Spanish) should take place, a recent constitutional reform added to this text expands the possibility of application of this measure to cases of corruption, too. Such mandatory pretrial detention is currently applicable only to cases of potential illicit enrichment and to potential abuse of public powers in the case of public servants, as two other forms of corruption, not being bribery. Other classes of crimes, such as electoral crimes, truck and bus robbery, etcetera, are envisioned in article 19, today, too. Article 19 of CPEUM, aside from questioning the issue of respect for the human right to trial before imprisonment which is not the point here since article 19 has already been enacted, could be a powerful deterrent tool against crimes of bribery. Yet it does not include bribery today as it is written, when bribery is the commonest form of corruption. Aside from that, it may be worth commenting that the already-cited article 222 of the penal code establishes a quantity border between “small” and “large” corruption, relating the quantity linked to the bribery case to a multiple of an index called “UMA” (“Unidad de Medida de Actualización”, in Spanish, or: “daily updating unit”) which takes into account Mexican inflation⁸¹ “. The text in article 222 of the penal code marks a division at around fifty thousand Mexican pesos today, adjustable to inflation through the UMA measure, between “small” and “large” bribery. This makes discriminating what bribery cases warrant application of the mandatory pretrial detention, and which do not, rather easy as it can be based on bribe size, and thus requires no further clarification on the issue of size of the bribe.

Based on the above, it is suggested that article 19 of the CPEUM, as it relates to corruption, underwent the following simple addition, which would ensure the proper deterrence effect for people involved in grand corruption:

... pertaining to illicit enrichment crimes, abuse of public office,.....], bribery, [transport theft.....

It is also worth mentioning that corruption related crimes of illicit enrichment and abuse of public office are much harder to fit onto literal definitions of criminal conduct performed by public servants. And adherence of the suspect’s conduct to the definition of the crime to the letter of the law is a Napoleonic law requirement to indict a suspect. Bribery is not only a much more frequently incurred crime than “illicit enrichment” or “abuse of public office”. Bribery also constitutes a crime relatively easier to match with the conduct of bribe giving or bribe receiving on the part of suspects as precisely defined in article 222 of the Mexican Penal Code, thus easing somewhat the prosecutor’s criminal action against them, particularly in cases of “grand” corruption.

Monopolies and oligopolies in the Mexican Constitution

Article 28th of the CPEUM alludes to monopolies, monopolistic practices and state monopolies (save for CFE, the state power utility, and Pemex, the state oil company). The article never mentions “oligopolies”. In practice, private monopolies do no longer exist in Mexico, while there still may be a few private oligopolies in existence today, both at



a national and at a regional level throughout the country. Given the great correlation existing between corruption and monopolies/oligopolies (market dominance), it is important that the CPEUM prescribe a directive to be followed by the Mexican state in order to combat corruption by attacking monopolies and oligopolies at all times possible.

Given the above, simple refinements to the text of the 28th article of CPEUM would greatly contribute to the extinction of corruption, something which would improve the acquisitive power of the citizens and the employment opportunities and access to prosperity of small and medium-sized Mexican enterprises, since those refinements would enable a more effective attack on monopolies and oligopolies, by constitutional mandate.

In the first paragraph of article 28, CPEUM:

“Article 28. In the Mexican United States national and regional monopolies, monopolistic practices, national and regional oligopolies and state monopolies are prohibited...”

Also adding a concise paragraph between the existing first and second ones:

“The State shall determine in each monopoly or oligopoly case the economic measures to take in order to resolve the market failure as swiftly as possible whenever it emerges, with the goal of avoiding adverse consequences to the population in terms of price, quantity, quality, waiting time and product or service availability in the market subjected to the monopolistic or oligopolistic condition. The State shall also promote that such monopoly or oligopoly be transformed into a competitive market in the shortest possible timeframe reasonably achievable through market oriented economic policies, as necessary.”

A corruption-free Mexico cannot be conceived as long as private monopolies or oligopolies remain in existence, seriously harming the material wellbeing of the general population every day, particularly as the most vulnerable echelons of society end up being the most affected group.

Campaign and candidate financing during political campaigns

Article 41 of the CPEUM touches upon the topic of elections and parties. Although a constitutional amendment is being presented to Congress at the time of this writing, one which will touch upon elections, campaigns and the operation of the National Electoral Institute, the key issue really is now to implement text changes to permit the population to learn through real-time complete transparency who finances whom, when, and by how much as soon as any political contribution takes place. The suggested amendments should be based on the successful experiences of other democratic nations with far lesser levels of corruption perception as seen by Transparency International. The following text adjustment is suggested to accomplish this.

At the end of the first paragraph of CPEUM’s article 41, roman numeral II, as a continuation of such paragraph, add:

“All resources of private origin going to a political party or independent candidate shall be immediately reported and accessible digitally by anyone, showing what person, corporation or any other entity has contributed to a party or candidate, whether in currency or in kind, specifying the kind, and to what party, campaign or political

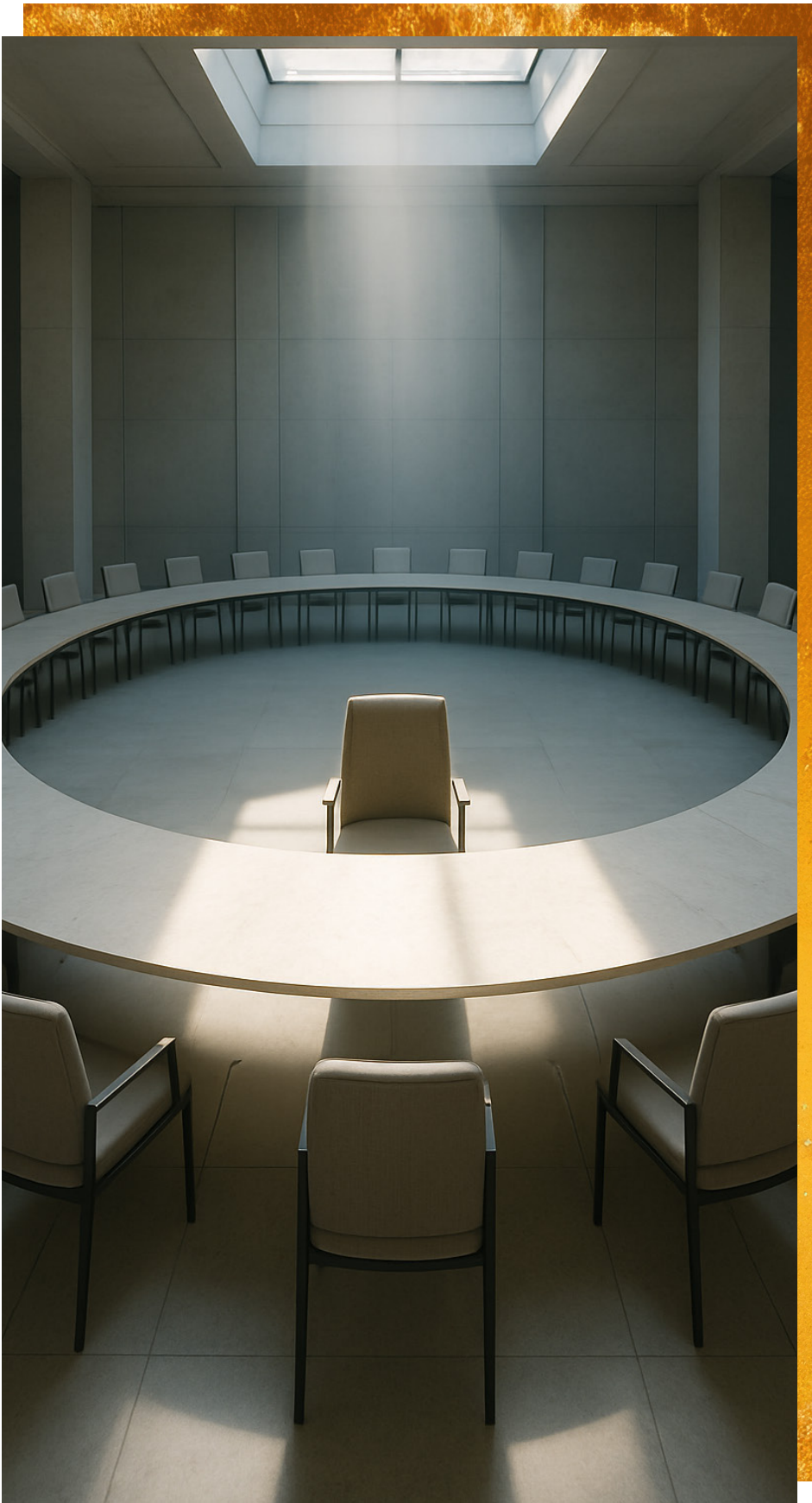


Fig. 19 The center of ethical leadership. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

candidate it is being given. Any and all contributions greater than the equivalent of ten UMA's ("Unidad de Medida y Actualización", Updated Measuring Unit, in English, - worth about 1,000 MX\$ today) shall be made via personal check, without exception. Every political candidate shall present his/her patrimonial/wealth declaration on a monthly basis during the entire campaign period, as if he/she were a federal public servant. Transgressors will be charged with fraud."

Transparency as to what private resources are used by any candidate, party or campaign, identifying who, when and how much, with such information made accessible to the entire population in real time constitutes an essential element for all voters to infer what personal interests may distort the future political activity of anyone with an interest in potentially occupying a public post through election. It is only so that the citizen majorities may properly determine, as a whole and through free and secret vote, which candidate has better chances of more adequately meeting the needs of the majority of the population at all times. The political force of each candidate shall always rest in the genuine support the majority of the people grants him/her, since the

moment when the decision has to be reached as to who will occupy the public post available for replacement, the winner acquires the discretionally on the use and application of those public goods and public resources during his/her tenure at the public post.

The “National Anticorruption System” and article 113 of the CPEUM

Corruption must be attacked in a centralized fashion, not distributing responsibilities in a diluted fashion across diverse public organizations. Dispersed duties to achieve a common goal will result in failing to meet the common single goal. The assignment and the coordination of responsibilities must be unified under a single organization which, in the leadership position among the group, should instruct other public organizations what to do and how to provide the necessary support to ensure good and timely results. During times of crisis, comparable to those Mexico has been living under the flog of corruption for a long time now, leadership must operate in command mode, not in democratic or consensual mode. All support areas must be aligned under a central command to address a crisis⁸². This is only achieved with a National Anticorruption System whose organizational configuration obeys, is coordinated by, and provides continuous support to, the leading public entity in charge, without the possibility of running a democratic or consensus-based structure.

The determination of having an Anticorruption and Good Governance Secretariat, reporting to the president, that is to the head of the federal Executive, has been published already. This secretariat will be responsible to address corruption and collusion acts in Mexico⁸³. This entity should then be the central command point for the fight against corruption, as sole leader of the entire governmental constellation fighting corruption.

Meanwhile, article 113 of the CPEUM, which was last amended in 2015, does not adequately reflect the anticorruption goal and the organizational scaffolding which shall prevail to achieve the corruption eradication goal fully, especially when contrasted against the credible commitment of the current president to eradicate corruption, as she stated it since the times even before the 2024 election⁸⁴. It is then necessary to reflect in this article 113 both the goal of the current Executive head regarding corruption, as well as the operational flexibility and the necessary leadership that has been granted to the Anticorruption and Good Governance Secretariat. A viable text for article 113 should go along the following lines:

“Article 113. The National Anticorruption System will be under the command of the Anticorruption and Good Governance Secretariat, to whom all other governmental entities shall report and lend timely and truthful information at all times. This secretariat will look to any other governmental entity from any of the three powers, at the state, federal and municipal levels, for any necessary support in resolving any corruption matters.

It will be the responsibility of the Anticorruption and Good Governance Secretariat to coordinate such collaboration by any other public entity. For corruption investigation and criminal charging matters, the Anticorruption and Good Governance Secretary shall possess equal hierarchy to that of the President of the Mexican United States, that of any Representative of Congress or Senator, that of the Attorney General, and that of any Minister of the Supreme Court of Justice.

The Anticorruption and Good Governance Secretariat shall never undergo budgetary cuts and shall enjoy budgetary adjustments annually according to inflation. No one can remove the Anticorruption and Good Government Secretary during his/her tenure. He/she shall be elected every six years without the possibility of reelection. Appointment shall take place via supermajority vote in his/her favor by both Congress and the Senate, from amongst ten duly prepared and capable candidates with impeccable public fame, proposed by the Executive. The Anticorruption and Good Governance Secretary may be removed and may be investigated for corruption acts whenever two thirds of either the House of Representatives or the Senate so request it, in which case an Anticorruption and Good Governance Undersecretary will occupy his/her post while a new Secretary is elected via the same procedure within ninety days of said removal.”

This new proposed text for article 113 of CPEUM meets the new reality of the definitive birth of the new Anticorruption and Good Governance Secretariat. It also updates the command lines and hierarchies granting the most ample powers of investigation to this public entity which now is a part of the Mexican State. The proposed text provides remedial and preventive solutions to potential deficiencies in the operation of this anticorruption secretariat, precisely given the fact that it came into creation as a secretariat, and not as a “fourth independent power” of the Mexican union, as it would be the case in Singapore, for example. But also taking into account that the Department of Justice in the US reports to the President of the US, similarly to what has been established in Mexico now.

A practical sense before corruption under the current circumstances

It would be impractical, merely constituting a useless academic exercise, to propose here a series of reforms which only aspired to the importation of a foreign solution which may have functioned outside this country, under social, cultural, political and economic conditions different from those applicable to Mexico. It is far faster, more feasible, with less likelihood of encountering political resistance to implement certain adjustments deemed to be essential, to only implement these relatively marginal changes here presented. It is the application of a minimalist philosophy, to what has already been in place in the Mexican body of norms. This is obviously with the intention of implementing in Mexico norms leading to distance the Mexican public service and the Mexican society away from corruption starting now, as swiftly as possible, without giving rise to potential social, political or economic crises. Crises which may originate, yes, within small groups who see their perverse interests harmed by the fight against corruption.

In a Pareto sense, the few vital changes suggested as amendments on the Mexican laws and expressed here could generate great benefits in the fight against corruption without creating turmoil or generating resistance on the part of the very small yet damaging group of people who benefit from corruption today. When the very small group of corrupt people in the public and private sector of Mexico benefit, it is always at the expense and to the detriment of the greatest majority of the Mexican people, who are not corrupt. These suggested changes would be highly beneficial when implemented at the constitutional level: secondary laws would have to translate those principles into the operationally feasible secondary norms (regular laws), while simultaneously preserving the spirit and object of the amended constitutional precepts. Once those amendments were implemented, any deviation from the proposed reforms found here would give rise to the scrutiny of the federal justice system via the “amparo” Mexican judicial figure, something which would increase the probability of success in the arduous battle against corruption, a battle now barely starting in Mexico on the part of the great majority of its people, who are not corrupt.

CORRUPTION AND MEXICO'S FUTURE

Mexico faces enormous opportunity thanks to its culture, its population, its territory and natural resources, and a privileged geographical position in the world. At the same time, Mexico faces huge challenges to fructify these opportunities: a dire need for immense quantities of critical infrastructure, new and to replace old infrastructure, to urgently confront future material growth and to meet energy and communication needs of about one third of its population who currently live below the poverty line⁸⁵, a sizable number of citizens who must overcome abject poverty as soon as possible. This challenge is not only of an economic nature, it also should be a moral calling for all, as roughly a fifth of the 36% of the approximately 130 million Mexicans alive today, at the very bottom of the pyramid, live in extreme poverty right now. 7% of all Mexicans live under conditions of extreme poverty in the year 2024.

There is the need to supply and transmit over new power lines an infinitude of additional watt-hours, while older power generators must be simultaneously replaced. Even though hydrocarbons are on their way out of the energy scene on the world stage due to Climate Change, they must by force be available for consumption in Mexico over the next few years if the country is to move its economy at all. Potable water services to millions of Mexicans without running water now, in conjunction with ensuring adequate water supply for the growing middle class and industry undergoing expansion in the entire territory, must be operational as soon as possible. Likewise, enormous numbers of rail lines and highway miles are needed, along with the construction and renovation of many ports and airports, among other needs which also include universities, schools and hospitals. The optimization of potable water consumption, and of drainage-sewage volumes, and that of liquid and gaseous hydrocarbons and electric power should help diminish these needs, somewhat.

If the goal is to eradicate poverty from Mexico in the near future, roughly an additional third of today's demand for services and infrastructure in existence today, representing about 36% of the current total that shall be geared towards the poor leaving poverty, must be prepared. This additional capacity must be ready and commissioned as soon as possible to contribute to the virtuous cycle of project investment-jobs-taxes and to ensure departure from the nightmare of poverty for millions of Mexicans, and simultaneously the continuity of material wellbeing for the rest of the Mexican population.

It is not necessary to prove that corruption seriously slows down economic development in any country⁸⁶ while at the same time corruption promotes insecurity⁸⁷. The public security and the absence of corruption, together, are essential to guarantee a brilliant future for all Mexicans in coming years. No one likes to live in a country devoid of security, where corruption prevails as well. Insecurity in turn depends to a great extent upon the incorruptibility of the public servants, particularly those making up the public security chain. A security chain made up of sufficiently numerous



police forces, well prepared public attorneys ready to investigate crimes well, honest judges writing proper sentences expeditiously, and the indispensable correctional facilities with a modicum of human dignity keeping criminals away from streets, fields, roads and cities across the territory, 24 hours each day of the year.

The virtuous cycle of economic development benefits everyone: the poor, the rich, government, investors and bankers, both within Mexico as well as outside the country, through international commerce. Investment in physical infrastructure as well as on private sector projects demand that capital and loans flow towards Mexico thanks to generalized trust by everyone upon the fact that security in Mexico protects the physical goods resulting from physical investment, while the absence of corruption assures everyone that the decision-making rules are logically predictable, without surprises. No corruption means the juridical norms of the country will be upheld if and when controversies arise. Day in and day out it must be demonstrable to the Mexican citizens and to the world that in Mexico public security and safety reign, and that all public servants discharge their obligations without granting privilege of any kind to unfair competitors through corruption, if investment projects are to succeed in Mexico.

The challenge in Mexico today, and moving forward, is to simultaneously abate corruption while sufficient quantities of public sector human capital, of the right quality and preparation, and knowledgeable of their applicable procedures and duties, particularly in the areas of public safety and security and in the administration of justice, are actively performing good work every day. In parallel, clear signals of this proper public activity should attract capital from local and foreign private sources alike. Capital which must be applied to the urgent construction of infrastructure, with the resulting creation of quality jobs, bringing the welcome transfer of domestic and international know-how, all this while wages and taxes also grow in flow, synergistically.

In order to overcome Mexico's challenges in as efficient and expeditious a manner as possible, the Mexican State shall fortify and create, as necessary, the institutions and mechanisms to extinguish corruption as fast as possible. This, while simultaneously displaying an efficient public safety and security chain, starting with police-national guard resources, followed by adequate public attorneys, judges and correctional centers. All of it in sufficient quantity and quality across the entire territory⁸⁸. Besides, the government shall implement many of the urgent infrastructure investment projects mentioned at the top of this chapter. Those most urgent infrastructure needs must be done by the government itself, given that they may constitute natural monopolies. Invariably, the State will confront limitations in capital availability to embark upon all these infrastructure projects, which unfortunately are required almost immediately if Mexico is to materialize its good future as envisioned here. To exceed the amounts of capital investment by the government would be impossible without incurring dangerous excessive domestic and foreign public debt, with the accompanying adverse effects upon inflation, interest rates and the resulting economic recessions. Additionally, it is well known that privatizations and government concessions granted by a government are notorious sources of corruption in any country⁸⁹.

How, then, can the enormous demand for near-immediate capital for so many infrastructure projects be met so as to successfully fulfill the urgent plan outlined above without the dangerous consequences of excessive indebtedness and without sacrificing quality or quantity of the other priority public services, such as education, and health, while at the same time also being able to continue supplying to the Mexican poor the indispensable, thin layer of well-being payments that give today a modicum of human dignity to the very bottom of the pyramid?



It is certainly not advisable to let projects focused on natural national or regional monopolies, such as those currently needed in Mexico, be implemented by the private sector without due governmental supervision, also accompanied by citizen observers and private technical and financial auditing groups. There could be substantial volumes of private capital both within Mexico and in the world willing to finance projects in a Mexico without corruption, and with great physical safety and security. But Mexico's country risk should be greatly diminished relative to the current political risk of today's Mexico⁹⁰, chiefly by drastically reducing two significant sources of uncertainty today: corruption and insecurity. During the coming years of development, the gradual rise in wages for all Mexicans should still leave ample margin for investment capital and loans to realize attractive returns higher than those achievable in more developed countries for the same types of projects. This fact represents an attractive anchor for foreign capital investment in the country. But if the investment projects represent truly natural monopoly opportunities, it will be essential that the appetite of investors be taken advantage of, without losing control of the desire for excessive returns imposed by the financial markets. Project financing must occur without permitting that the natural and justified ambition for capital returns on the part of the private sector runs amok in those projects. And this can be achieved with the minimally invasive supervision and control of the projects' fate through the measured participation of the Mexican State in them.

The manner to take advantage of the investment appetite by global capitalists and lenders in Mexico without the risk of falling prey to voracious return maximization potentially harming the Mexican population through high prices, bad service, poor quality, insufficient availability, etcetera, is to structure these capital infrastructure projects as "Mixed Capital Investments". In such projects, all the necessary capital funding may come from a group of private investors who eventually build and operate the project, but having as a minority participant the Mexican government. The government having a limited veto power exclusively to ensure that such governance themes as price, quality, availability of the good or service provided to the population, as well as the observance of norms particularly pertaining to labor, environmental, and fiscal laws, are properly met. Observance of the particular norms pertaining to the industry in which the project will run is also a must. For example, a natural gas project of this nature should also comply not only with all tax, labor, environmental laws, but also with the applicable hydrocarbon laws of the country. These mixed capital projects should never be subjected to the possibility of bail outs on the part of the Mexican State, so as to avoid moral hazard on the part of the private investor groups.

The openness, transparency, observability, public and private audit-ability, domestic and global, of the public bids leading to the designation of private groups vying to execute and operate these projects are a key part of the basic requirements intended to eliminate the pernicious and invasive corruption, both during the bidding and contracting phase, as well as during the construction and operation phases. Symmetry of information, that is, enabling the world literally to know what happens inside the government and the private sector components deeply inside the workings of these projects through state and private observers and auditors at all times, is a key success factor in the fight to eliminate corruption from the equation.

This structure is quite feasible. Projects in gas liquefaction for example, have already been successfully structured and executed in this fashion. Financially, the following fictitious example will show how the numbers pan out. The Mexican government may participate with a private investor grupo in an infrastructure project which, with prices and volumes assured and with a reasonable planned assured supply for consumption by the population at market prices, the global



Fig. 20 Transparent capital. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

investment return reaches 18% compounded per year in after tax dollars over the course of 15 years of the project's life⁹¹. If the globally sourced capital required for this type of project and for the Mexican country risk demands, let us say, a 15% return on investment, then the Mexican government can keep about 13% of the project's shares, and the private sector investors may invest all the funds required to develop the infrastructure, in exchange for about 87% of the shares (the rest of them) to achieve the desired 15% annually over 15 years. The Mexican government, without having required to invest any funds, receives 13% of the dividends and at the same time has a "quality vote" at the board's table with limited veto rights. Veto rights pretty much limited to issues related to any potentially adverse intention on the private group's part to infringe Mexican laws. 15 years later, the private group has earned its return on invested capital, and the Mexican government has availed itself of the infrastructure, fully operational, with the possibility of the government's bidding out the right to run it under similar conditions protective of the people (availability, price, quality) for perhaps another 15 years. The time period of operation rights for this type of mixed capital projects should be as short as possible, subject to ensuring that it is long enough so as to enable the private group to realize its required return on investment, accounting for the project's risk and Mexico's country risk. This represents competition among private operators along the timeline, so as not to grant special privileges to any private operator for too long.

Should the efforts on the part of the Mexican government to extinguish public insecurity/crime and corruption prove to be successful, Mexico's country risk, now in the order of 8.34% per year on any investment, could potentially go to zero. Today, projects which in a country with essentially zero country risk, such as Germany for example, could require an annualized compounded return of 12%, must yield a return in the order of 20.34% to account for Mexico's country risk. Without today's Mexican country risk, about 8.34% per year today, the return needed by foreign and domestic investor groups would be substantially lower. More capital would be available with a big appetite for Mexican

investment projects, and thus the Mexican infrastructure challenge described in this text would be resolved far faster and with less capital restrictions than in the current state of country insecurity/violence and corruption. This country risk "premium", levied upon any Mexican investment project by any capital provider worldwide today, is a clear expression of the very high cost of corruption Mexico suffers now. As a result, funds otherwise abundantly



Fig. 21 The horizon decision. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

available for the Mexican enormous infrastructure project needs, become more expensive and harder to find. The worst adverse impact of this dearth of funding for Mexican infrastructure projects most likely goes to the poorest of the poor within the country.

There are enormous, necessary projects. They can be clean, profitable, tax generators, jobs generators, creators of valuable infrastructure, providers of technology transfer avenues. Whenever some politician opposes them, or does not promote them, corruption becomes a likely cause in our minds. A monopoly/oligopoly with older technology or a protected market might be at risk under the new project. Or the politician might be reticent to do it because the project structure might not lend itself to bribes, to corruption. In particular, if the project demands so much capital that a public-private investment mix is necessary. Public-private projects have the possibility of being under more scrutiny, under more audits, thus lowering the opportunities for corruption. It is the duty of the People, of the opinion leaders, to highlight the reticence and to drive the implementation of such projects, so critical to Mexico's future.

Mexico stands at a crossroads today: it could take the road towards the extinction of corruption and, along with it, achieve a satisfactory state of national public security. This would bring along the so badly needed investment capital for the heap of public infrastructure projects, as well as for private ones, all of them generating valuable jobs. With near-shoring at the doorstep, this issue becomes a critical opportunity for the country.

Mexico could take an alternate, not happy, road instead. Mexico could skip or postpone the near-mandate to launch a concrete attack against corruption. Gradual impoverishment would liken the country to many regions in southern Asia, in non-Mediterranean Africa, and in South America. Taking this road would defraud the poor of the country, creating a vicious cycle of material scarcity, human rights abuses, and present Mexico in a greatly weakened commercial and diplomatic position before its trading partners and geographic bloc allies. The Mexican majority would lose, while relevant portions of the Mexican elites would, using the currency of corruption, inordinately gain from taking this alternate road. These elite portions oftentimes do not even live in Mexico, are never subjected to the material penury and the public insecurity of those sad and unfortunate masses who work for them every day in monopolistic or oligopolistic empires, and consume from them every day, too. A relevant portion of the Mexican elite who gets their monthly dividends abroad, the fruit of corruption and exploitation, have to be in collusion with certain public servants to get away with it. This would be the alternate road, under rampant corruption.

It is up to Mexicans themselves, to choose which path the nation shall take.

AN ANTI CORRUPTION DESIGN FOR MEXICO

It is necessary and urgent that a concrete and practical institutional design amenable to implementation in Mexico be created in order to substantially abate corruption as soon as possible.

A good design shall take into account Mexico's current reality, as well as its historical and cultural context, and also its current norms and the prevailing political environment.

The suggested Mexican anticorruption design should be able to significantly reduce corruption as its primordial concrete measures start functioning. The fight against corruption took decades in countries like Singapore. With the corruption problem improving every day, the life situation of the great majority of Mexicans will improve.

This design does not propose obliteration of the legitimate rights of anyone. Not even those rights of the most pernicious individuals practicing large scale corruption should be abused. The aim of this design is to implement in Mexico the juridical, social and economic logic common to all countries living with very little corruption: Norms must be observed, every public servant must serve the people with honesty, every private sector individual must conduct himself/herself in full accordance with all laws and regulations, and he/she who harms, must retribute to those harmed.

The main results that should and could be expected from a concrete attack upon corruption on as scientific a basis as possible, as laid out in this text, are: a continued and significant drop in public insecurity, in inequality, in poverty, and in the abuse of human rights, especially as all these topics relate to those sectors of Mexican society who are most vulnerable; the poor.

The design herein proposed will be described in lean form. The details about what several points making up the design consist of are described in other prior parts of this text. All components of this anticorruption design comply generally with all applicable current laws and they also adhere to world doctrine currently prevailing regarding due respect for the people's fundamental rights. Those reforms to several laws as proposed here are believed to be legitimate and find their basis in similar legal doctrines from other countries which report much greater levels of happiness, much less prevalence of corruption, and less poverty than Mexico; doctrines generally applied on a routine basis in such countries.

This proposed anticorruption design is, by far, not complete nor perfect. But with the basic points of this design, it should be trusted with a high level of probability that tangible favorable and relatively quick results could begin to take place in terms of an effective reduction of corruption, and the Mexican people would certainly notice that. Each of these proposed policies, measures and actions as described below as part of the anticorruption design, upon implementation,

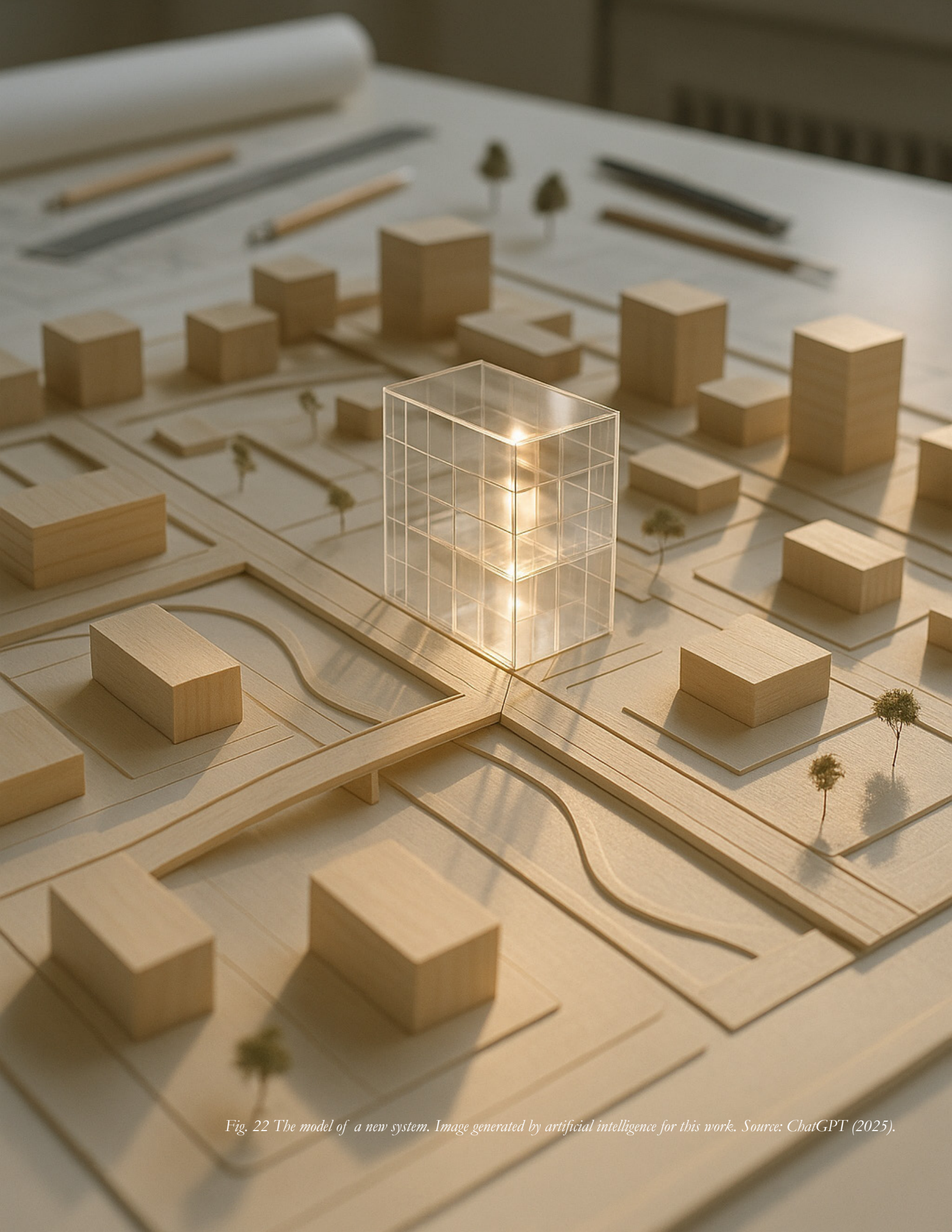


Fig. 22 The model of a new system. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

would begin to achieve notable reductions in general corruption, with a Pareto effect: with a few of such first vital measures in place, most likely important positive results expressed as measurable and concrete reductions of the pernicious corruption would ensue.

It is intended that this design cause a lasting and favorable memory in the reader's mind. The reader should show this design, justify it, explain it, share it and promote it to everyone around himself/herself. It is only with a growing critical mass of Mexicans promoting before their government with legality, legitimacy and respect that every public servant, not just a majority, work in conformance to this design, that Mexico will become a country devoid of corruption. At the same time, only with the implementation of something along the lines of this design will the Mexican people convince themselves that living without corruption is better for the great majority of them, and thus they will make the design's operation a lasting one. The only political force granted to the people in government is the one emanating from the will of the people. The people of Mexico must know about the importance of extinguishing corruption, and how it can be done, and the bulk of the Mexican people should express it to its government, soon. The Mexican people should generate the political momentum, always legally, with legitimacy, respectfully, impinging upon the Mexican state integrally, so as to ensure this design gets implemented as soon as possible.

Here is the proposed Mexican anticorruption design:

1. The heads of the Executive, the Legislature and the Judicial Powers must be convinced that they gain by promoting this design and its implementation. For the sake of Mexico, but also because doing it will favor them as executive authors of this implementation. They must become the champions in charge of publicizing that the Mexican anticorruption design truly is undergoing implementation.

But also politicians and candidates from all parties and at all levels could and should embrace this design, know it well, and promote its concrete implementation, promising it and meeting their promise, since achieving the extinction of corruption in Mexico is the best campaign promise to win votes and implementing the design is a very attractive and near assured way to remain in office. Achieving the concrete implementation of this design is a good way to be remembered in Mexico's history books, too.

2. Several constitutional articles, 1º, 19, 28,41, and 113 should be reformed:

- a. Enacting in constitutional article 1 that every individual has the fundamental right to live free of the ravages of corruption.
- b. Adding to constitutional article 19 "bribery" as one more cause for preventive imprisonment. Of course, the human rights of the very few individuals who indeed commit the crime of corruption should be integrally respected and guaranteed when detained; such rights as their personal integrity, their physical survival, humane treatment devoid of torture, communicability with defense attorney, etcetera. But preserving the aim and spirit of article 19 of the constitution assures that the fundamental rights of the very large majority of Mexicans will be respected if and when [large scale] bribery warrants preventive imprisonment. The deterrence effect of this addition to constitutional article 19 upon the "bad" guys, and the better capacity of government to indict them and sentence them via due process would be invaluable. In the end, corruption takes from all the Mexican people, corruption despoils all the Mexican people.



c. Oligopolies and monopolies, both of nationwide as well as regional scale, must disappear, via the reform of constitutional article 28. The Mexican state must be charged with correcting market failures derived from lack of competition. The state may and should if necessary participate on a temporary short term basis, until an eventual reestablishment of competition in the market previously afflicted by an oligopoly or monopoly situation happens. The basis for the growth of the Mexican private sector should be sustained upon competitiveness and innovation as a whole, rooting out any businesses owned by “entrepreneurs” who opted for the dishonest lane of corruption in order to make their businesses thrive.

d. Candidates and political parties should be accountable to the Mexican people, in real time, with complete transparency, about what, how much, who, when and to whom are individuals, business entities and even nonprofits financing before, during and after the campaigns. This amendment upon constitutional article 41 would thus reiterate that candidates and parties are mere intermediaries to transmit the voice of the people before the Mexican state, and that the Mexican people deserve candidates and political parties which truthfully reflect what the great majority of Mexicans want.

e. The Anticorruption and Good Governance Secretariat must count on good anticorruption “sharp” tools, and its leadership must be able to fearlessly face even a President, any Representative or Senator, or any Supreme Court Minister without risk of losing his/her job, and without threats of budget cuts to his/her secretariat. This should be implemented as a reform to constitutional article 113.

f. Total anonymity of citizens filing corruption complaints before the Anticorruption and Good Governance Secretariat should be guaranteed by taking advantage of the most advanced and effective digital communications to assure zero chance of visibility of the person filing the complaint, 24x365, by stipulating it constitutionally on article 113, also.

3. All public servants, all of them, are public. They owe their post to the Mexican people. None of them should be above the Mexican people, and all of them without exception should solely serve the Mexican people. There already is great honor in having been chosen by the people to occupy a public post. Thus, all privileges and protections to public servants with regard to acquiring public knowledge about their finances and wealth during their time of public service, and for adequate time after it, should be banned. This is already stipulated in the United Nations Convention Against Corruption and thus should be enforced.

If a public servant wants privacy of his/her economic information, he/she is free to leave public service and enter the private sector ranks. Publicity of the personal economic information of every public servant, in particular when a public servant is under suspicion of being engaged in corrupt acts, should not be considered a violation of the public servant’s fundamental rights in Mexico, as this position is already becoming the norm in many countries of the world.



The benefit to practically all Mexicans derived from an eradication of corruption compensates, by far, the relative lack of privacy on the economic information of those, really few, public servants under potential scrutiny by the eyes of the Anticorruption and Good Governance Secretariat under constitutional article 19, as well as during the judicial procedure for sentencing.

The human rights of the Mexican people are preserved by attacking corruption, and this is worth much more than respecting the human rights of those very few suspects under corruption charges. And those few ones suspected of acting corruptly do not lose any vital aspects of their human dignity when under financial scrutiny, since the only human rights “violation” is the opening of their economic information before the eyes of the people. If these suspects did not want this violation to their “privacy rights”, they always may refrain from engaging in corruption. Besides, without economic information of the public servant, it cannot be determined what person or business entity from the private sector constitutes the counterparty essential to all corrupt acts potentially under investigation. The near worship demeanor granted to public servants should end, while never ceasing respectful treatment, among equals, between every public servant of any rank, and any Mexican citizen⁹².

By applying all legitimately feasible tools on the part of the Anticorruption and Good Governance Secretariat to expose and analyze the economic situation of public servants suspected of corruption is, as said before, a part of what Mexico has committed to doing under the ratification of the United Nations Convention Against Corruption, which Mexico signed in 2004, and which makes this stipulations explicit in its articles 31, 37, 40 and 52⁹³. It would seem that until now this agreement has been forgotten and has not been applied with the necessary impetus by a diversity of governments of Mexico in the past, even though this Convention document, constitutionally, is enforceable in Mexico as if it were constitutional law.

4. Privatizations and private concessions should be eliminated and, instead, mixed investment projects resorting to public and private joint participation should be implemented. Such mixed participation projects should operate with as much information symmetry at all times as possible. So the whole world may easily find out about all that is happening financially and operationally in this type of projects at all times. Both the Mexican citizenry as well as the Mexican government and the private sector investors need to know about all details of the project, including what each of these parties is doing regarding the project at all times. Besides, the Mexican government should never be required to bail out any of these projects. Only drawings of prisons and military bases, as well as security/defense human resources, security/defense materials inventories and security/defense operational information are deemed confidential in a true democracy: the State is public, it looks after the Common Good, the Good of Everyone and is thus accountable to everyone.

5. The Mexican state, as well as the public communications companies of Mexico, should publicize and popularize the permanent campaign against corruption. Via advertisements, providing orientation on how to file anonymous complaints, and also by glamorizing the heroes in the fight against corruption, while vilifying and ashaming the guilty ones via TV series, soap operas, documentaries and films. The opinion of the Mexican people, and its attitude before corruption will become even more favorable to this anticorruption design if the means of public communication do their part too thanks to these communicational mechanisms on a constant basis. The private communication channels must also do their part, either voluntarily, or upon mandate by the Mexican state.



Fig. 23 The transparent state. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

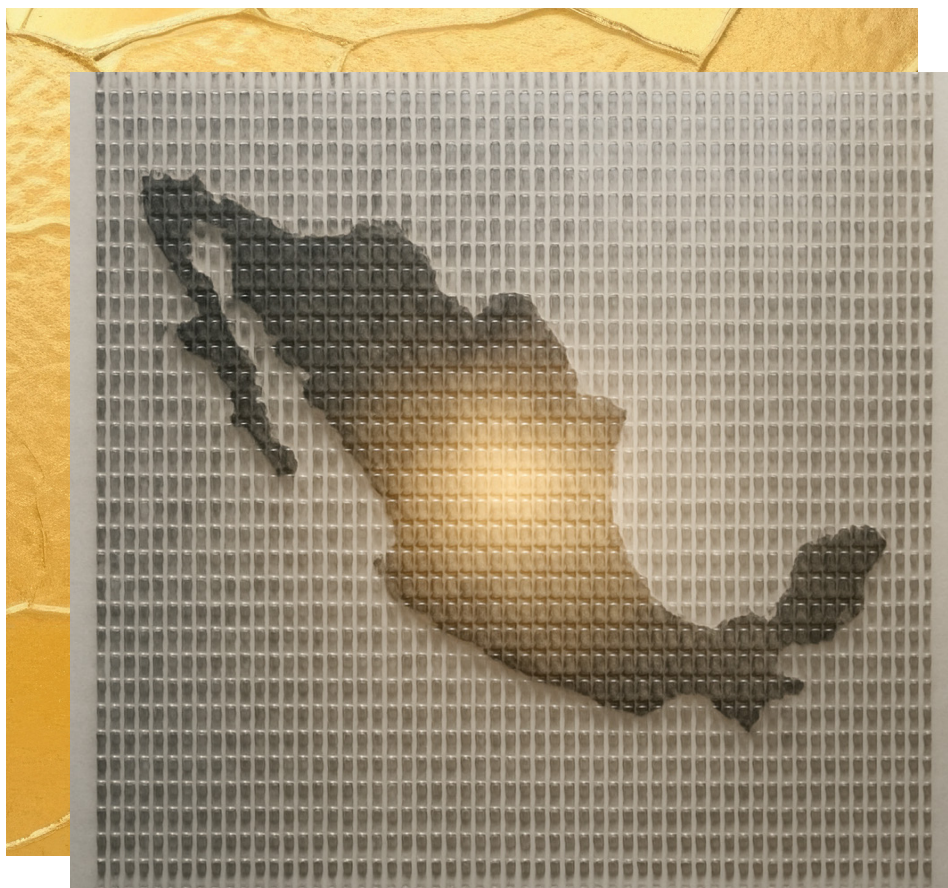


Fig. 24 The collective mind. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

All politicians primarily, as well as the representatives and leaders of all parties, as public voices in Mexico, along with leaders of the private sector whose voice is also heard through the public means of communication, should know well and loudly echo these basic principles of the Mexican anticorruption design. Politicians from the party leading the current administration, should also air and begin to firmly apply these concepts so as to share with the Mexican people their awareness about the situation and their knowledge about what it takes to solve it. This will strengthen their popularity and the popular conviction that they are truly committed to working for the people to eradicate in definitive fashion

corruption in Mexico. But all other politicians from the opposition parties, too. As a patriotic and valid argument to, under promise to comply with the design concept, be able to win positions through clean elections for future administrations.

In the healthy political battle to occupy public posts, alluding to concrete policy tools such as the ones here presented, based on scientifically reported cause-effect facts (if X is done, then the historically most frequent result is Y), as well as on statistical correlations suggesting on what variable X variable Y aligns its variation in general (market dominance is highly correlated with the degree of corruption in each country, for example), beyond the mere citation of well intentioned words without concretely attacking corruption, without implementing institutions, procedures and specifically written norms such as those found in this proposed design, will most likely be noticed by the Mexican people, who will then be able to choose on a solid basis at all election times: the collective of the Mexican people as a grand majority does not tend to incur mistakes in its decisions.

And once a winning politician in any position of leadership is in a position wherein he/she shall meet his/her promise to implement the anticorruption design as here suggested, it is very advisable that, without ever distancing himself/herself from the people nor ever ceasing his/her constant, truthful and complete sharing of information with the people, such active political leader take appropriate precautions for his/her personal security and that of his/her family and others close to him/her, as necessary. The very few ones, who are corrupt within the ranks of the public and private sectors and who incur large scale corruption, most likely would not doubt attempt actions against the physical integrity and wellbeing of an active political leader truly devoted to implementing the anticorruption design.

Proper protection of this political leader's personal security would certainly be well understood by the Mexican people, especially after it started seeing the good results of the fight against corruption, as reflected in the heightened sense of security, the improved state of respect for human rights, and the betterment of the personal finances of nearly every common citizen, in particular, of those in the most vulnerable sector of society, that is, the poor.

University professors, researchers, academics and students of universities and high schools alike also constitute very valuable elements to disseminate these ideas and to promote the implementation of the design.

May the entirety of the Mexican people know about it, may all the people demand it with civility, in a civilized fashion, with legality, on a legitimate basis, and respectfully, without exception.

Ensuring with such an anticorruption design that this Mexican disease for so many decades entrenched in the country's society eventually reaches eradication would constitute an advantageous victory for the grandest majority of the Mexican citizenry, naturally including the great majority of the public and private sector players, who are not corrupt. While the cost of losing enormous economic gains which may well have been "earned" in an immoral, unethical and in many cases illegal ways, will only befall upon the very small, minute minority, a very harmful group damaging Mexico now, making up the bunch of Mexican and foreign players within the public and the private sector who thrive thanks to corruption today.



Fig. 25 The face of hope. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

SOME CONCLUSIONS

Mexico needs to drastically reduce its corruption if it aspires to generalized wellbeing of its entire population in light of the current and future geopolitical changes present all around, as well as because of the commercial pressure now prevailing that is related to the North American bloc and the Asian emergence onto the global economic scene evolving over the last few decades.

The word “corruption” is now in the everyday vocabulary of politicians. This is a very positive situation, but it still requires concrete public policy and normative adjustments derived from social sciences pointing toward what needs to be done to eradicate corruption – that is what is meant by a scientifically based anticorruption design.

The perception of corruption is nothing objective or amenable to precision measurement. But the perception of corruption, as supported by standardized, widely accepted, statistical tools in worldwide use to estimate the level of corruption across the majority of the countries on the planet does constitute a “soft” but reliable indicator with respect to whether Mexican corrupt activity rises, diminishes, or remains constant. The most recent indicators by Transparency International (TI⁹⁴) suggest that corruption, and therefore the Mexican mechanisms to attack it, unfortunately have not significantly changed over several past administrations.

Today’s focus, appropriately, has been to tend to the needs of the poor first, with a state of wellbeing as a goal. This goal is favorable to proper public policy so that, through the state’s redistributive role, entrepreneurship and the private sector may flourish⁹⁵.

It has been possible, thus far, to provide a state of wellbeing via the material and economic support to the Mexican poor without significant adverse impact upon the public finances and without effect upon the budget deficit. This has been reflected in the strength of the currency, the creation of jobs, the diminution in the proportion of Mexicans under the poverty line, the real increase in the minimum wage, the relatively constant and rather low level of inflation, the moderate public indebtedness incurred, and the relatively low governmental deficit over the recent years⁹⁶.

Nonetheless, it does not look as if the public policies providing wellbeing through state support for the most vulnerable population sectors, and the national economic growth, may continue in consistency with healthy public finances as wellbeing policies impinge upon the annual expenditure. That is not achievable if corruption in Mexico is not acted upon with a scientific, proven, basis.

While, on the contrary, if acting against Mexican corruption is done in a concrete fashion and with a scientific basis, ensuing prosperity and economic growth will naturally generate greater legitimate fiscal capture, thus easing the virtuous cycle between supporting the welfare aid to the poor and increase generalized economic prosperity for all.

There exists a generalized concern both amongst the general population, as well as on the part of the government with regard to justice, criminal justice in particular, as well as respect for human rights, the annual income for all Mexicans, and the connected issue of the proportion of the poor in the country, all of which are important variables to improve. Well, these four issues show statistical correlation with improvements in the levels of corruption among the countries of the world.

Let's see:

CRIMINAL JUSTICE VS CORRUPTION - 120 COUNTRIES (2022)

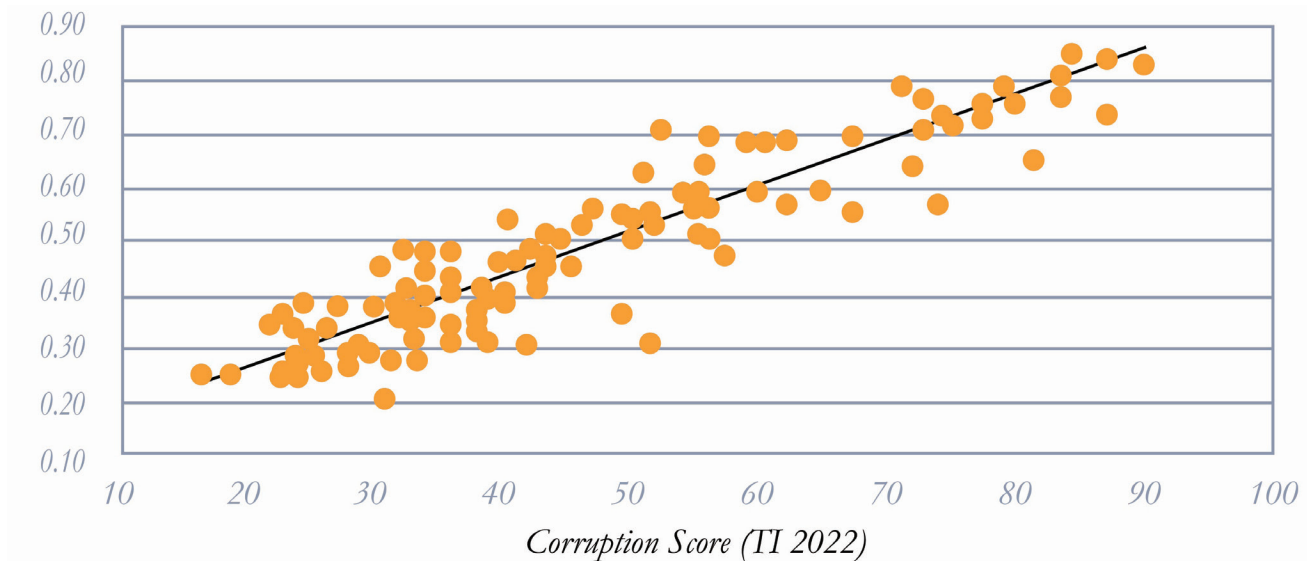


Table. 3 Criminal Justice vs Corruption — 120 countries (2022). Author's elaboration based on data from World Justice Project (2022) and Transparency International (2022).

This means: less corruption correlates with better administration of criminal justice, the type of justice where the most painful and shaming abuses are committed, almost always against the poor, who are precisely the group lacking the economic means to “buy” themselves good administration of justice.

In a similar fashion, respect for human rights (no arbitrary detentions, no torture, freedom of expression, right to medical attention, accessible education for all, etcetera) has a direct correlation with the level of absence of corruption in each country, as shown below:

HUMAN RIGHTS VS CORRUPTION (2022) 168 COUNTRIES

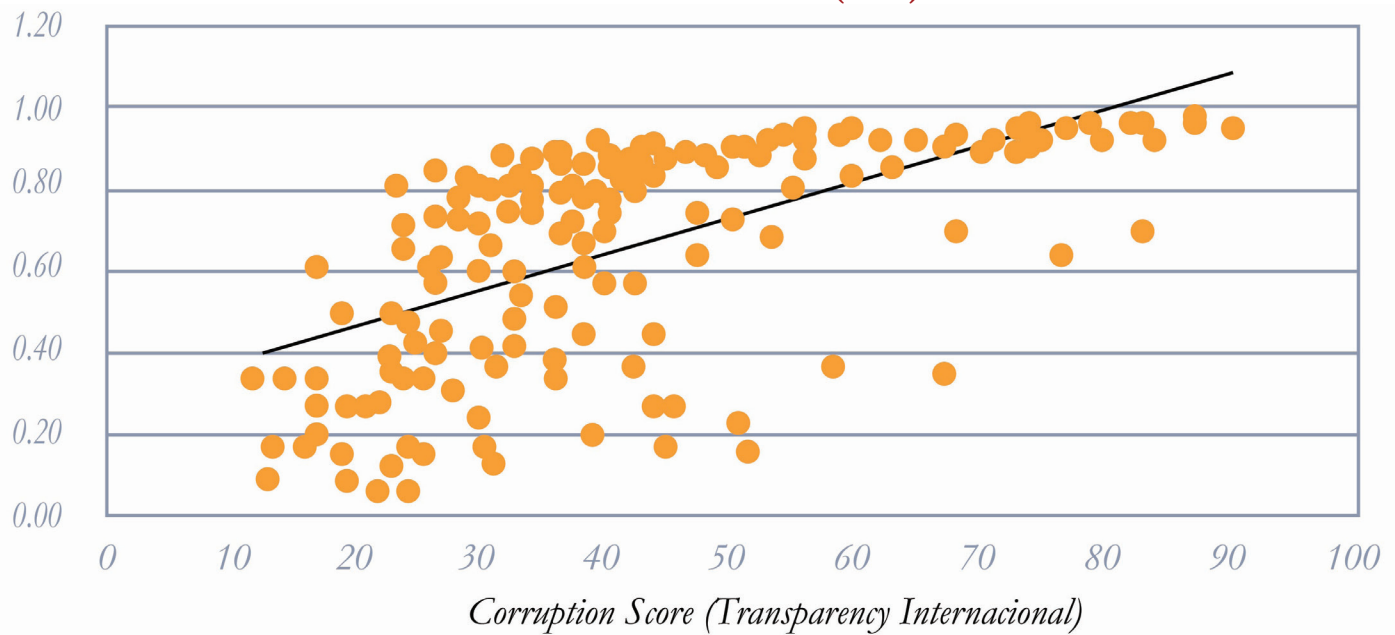


Table. 4 Human Rights vs Corruption — 168 countries (2022). Author's elaboration based on data from Our World in Data (2022) and Transparency International (2022).

With regard to the economic dimension, corruption also has a part to play:

PER CAP GDP VS CORRUPTION (2015 - 2023) 159 COUNTRIES R2= 59%

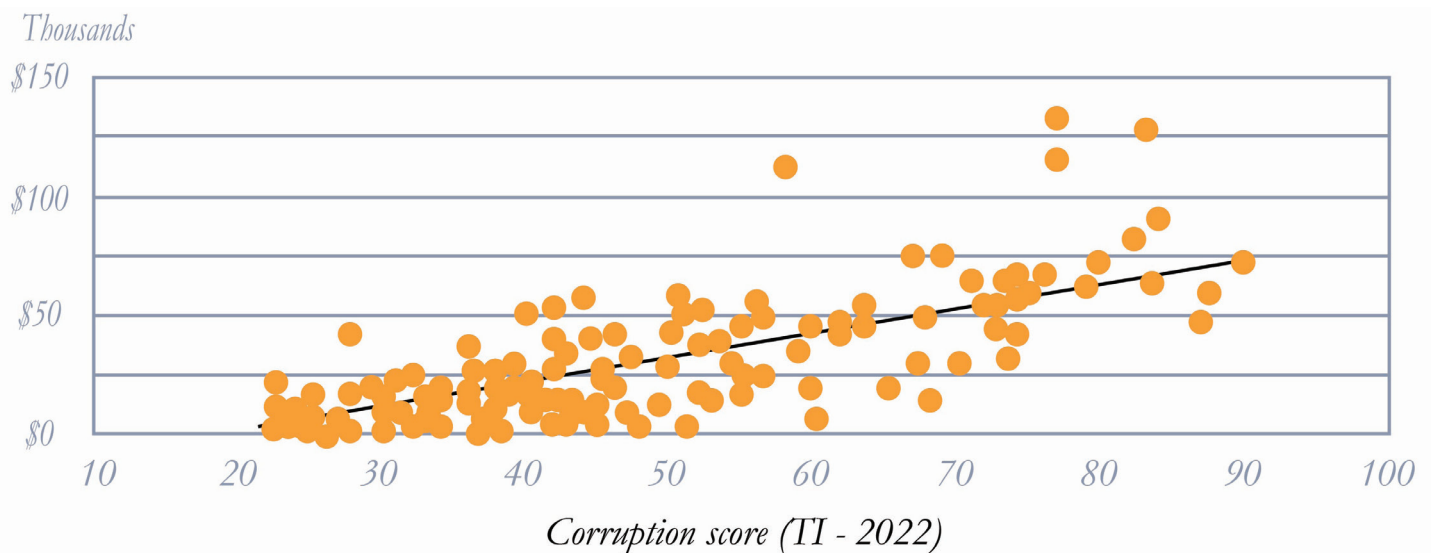


Table. 5 GDP per Capita vs Corruption (2015–2023) — 159 countries. Author's elaboration based on data from CIA World Factbook (2023) and Transparency International (2022).

A country which aims to get its people out of poverty, one which wants material wellbeing for everyone, needs material prosperity. GDP, or Gross Domestic Product, is the economic value of everything the country produces in a year. Nonetheless, there may be countries with an enormous GDP, but due to their enormous population, generate a rather small GDP per capita. That is, the annual output per person turns out to be small when such large total GDP is due to the work of so many citizens in the country. Further, income per capita, which is what on average each citizen earns as income over a year, is a socially important figure. It is directly related to GDP per capita, both figures generally being close to one another. A small GDP per capita implies poverty of a country's citizens, on average. There is indeed divergence between both measures. GDP per capita is the first indicator for an approximation for annual income per capita. This variations between both figures⁹⁷, is partly dependent upon the power to capture economic gains on the part of the owners of capital (oligopolies and monopolies do not favor improvements in income per capita, since they take extraordinary profits for themselves at the expense of workers). It also depends on family size and structure, who works and who is unemployed, and other factors. But there cannot be a high per capita income in a country, if the country's GDP per capita is small.

From the prior graph, it is clear that GDP per capita is significantly correlated with the level of corruption in each country.

From the following graph, despite its dispersion of points around the regression line, it becomes clear that as corruption levels get lower, a smaller proportion of the country's population make up the poverty statistic (in %) for the country:

POVERTY % VERSUS CORRUPTION SCORE (142 COUNTRIES, YEARS 2006-2022)

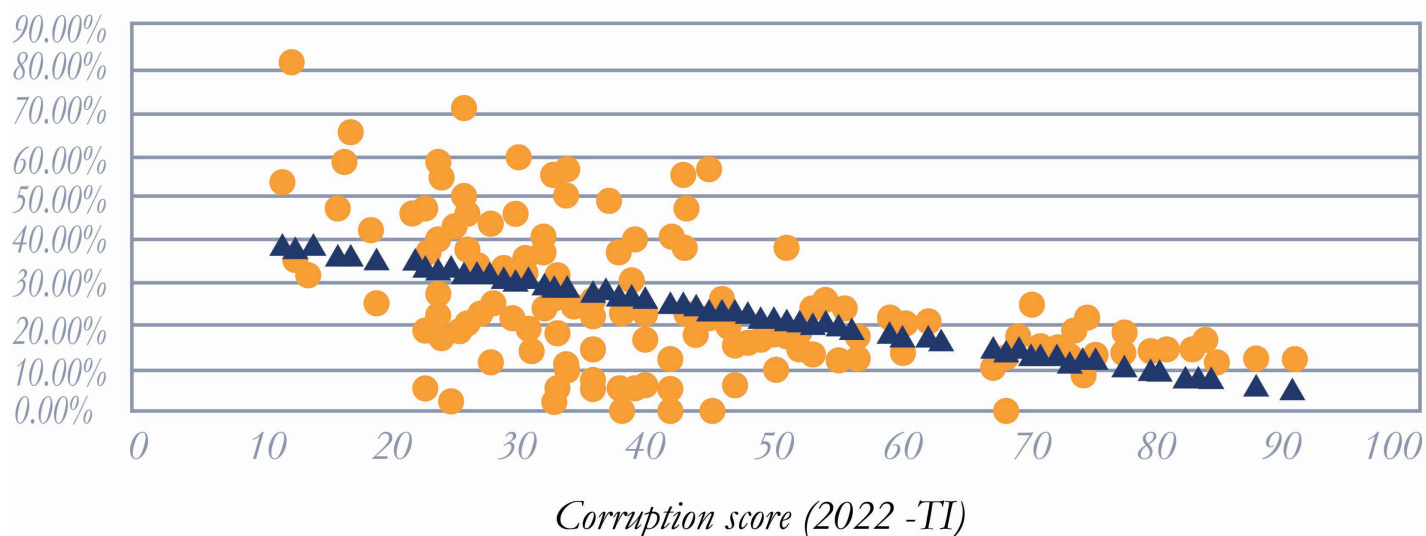


Table. 6 Poverty vs Corruption 142 countries (2006–2022). Author's elaboration based on data from World Population Review (2022) and Transparency International (2022).

If it is desired to elevate the income per capita of Mexico, corruption must be attacked!

Having a higher income per capita, once corruption is reduced and with it the demise of monopolies and oligopolies, in an indirect fashion the possibility of capture of a substantial portion of GDP by the owners of such monopolies and oligopolies fades away, giving way to the possibility for larger per capita wages for the general population, thus contributing to the attack of poverty and inequality at the same time.



Additionally, with greater GDP per capita figures, a reduction in the pressure upon the public budget occurs, since greater resources would become available, potentially usable for welfare payments by the state to the benefit of the poorest of Mexicans.

On the basis of the above, it may be concluded that:

1. Corruption is very harmful for every society
2. Mexico has a very high level of corruption
3. Corruption damages Mexico greatly
4. Corruption has a solution
5. Its solution must be concrete, must consist of concrete and proven public policies, adapted to the cultural and historic context of Mexico, today
6. The people of Mexico are the ideal constituent to generate momentum to ensure that corruption stops
7. Political and private sector leaders, along with the most highly educated groups of the country, are the right promoters, with a moral obligation to do so, to disseminate the message about what is corruption, how it arises, what its social, political and economic effects are, and how it can be resolved
8. Corruption always includes two parties, one hidden within the public sector, another one hidden within the private sector; both are guilty
9. Political leaders, and their personalized push for a solution of corruption with full conviction, are the key success factors to start, sustain and win the concrete fight against corruption
10. The concrete tools to solve corruption, many of them in the normative realm, plus other organizational tools from the public sector, and yet others of a communicational nature, are amenable to implementation in a relatively simple fashion given today's Mexican reality
11. The political and partisan structure offer a panorama of the government of Mexico along with its constitutional powers (executive, legislative, judicial) today, which lend themselves to the implementation of an effective design to eradicate corruption in current times. This juncture should not be wasted
12. In order to complement the welfare state intended to protect the most vulnerable of Mexico, the effective eradication of corruption becomes a key mechanism to enable the general population to improve their human dignity and offers a real opportunity for a tangible material improvement of all Mexicans alike, without disparities
13. Attacking corruption implies granting an incalculable benefit to the greatest majority of Mexicans, while the cost of attacking corruption is negligible in comparison, and that cost would only have an adverse effect upon those who deserve to bear the cost, that is, the very small, very harmful, minority of corrupt individuals hidden within the public and private sector of Mexico today
14. All measures to attack and to eradicate corruption as proposed here are legal and legitimate, are justified since they have been successfully applied in other countries, and none of them damages the human rights of anyone
15. Public servants should return, in the socially axiological scale of Mexico, to their true stature: every politician is equal to every other Mexican, and should be so treated, without ever violating his/her human rights, of course



16. The argument wielded by the corrupt individual about his/her violation of their human rights as a result of the disclosure of his economic-financial situation during a corruption investigation is false. This disclosure represents only a minor disturbance to the individual under investigation, potentially guilty of corruption, and in exchange the social benefit to the greatest proportion of the Mexican population is enormous as a result

17. Every argument about supposed violations to human rights as a result of the preventive imprisonment article of the Mexican Constitution is juridically unjustified today. This issue has already been addressed, and resolved by the legislature years ago, since preventive imprisonment is already a measure in existence and in operation for other potential crimes in Mexico. Thus, the claim that attacking corruption would represent a potential violation of human rights of the people charged with corruption should not be a matter of discussion today

18. The essence of a successful attack on corruption is the existence of a mechanism, to be routinely applied, to easily find out, real time, the wealth and cash flow situation, present and past, of potentially any public servant, so as to detect and follow the track of the corruption crime, how it occurred, who the counterparty in the private sector was or is, so both are punished according to the law. There must be symmetry of information between what the public servant knows, does, and has, and what the Mexican people know about the public servant actions and economics. The public servant is public, the State serves the people, and the public servant cannot abuse his/her position to damage the Common Good, the goods belonging to everyone in the country, when the public servant achieves a personal gain, along with the private gain of the private sector counterparty

19. Confronting corruption and knowing, getting committed to, and applying the anticorruption design on the part of every active politician in public service, or with aspirations to become active in public service, are likely to become essential requirements to observe in order to enter and to remain in public service in the near future, once the Mexican people learn about what has been presented in this text, as it should be, and begins to demand its right to live free of corruption

20. As these concepts and proposed solutions are disseminated around throughout the Mexican society, the people will be able to generate healthy pressure to its governments, parties and candidates to fix the corruption disease. Any politician/public servant who, then, does not embrace these concepts to push for their implementation will do so to their own detriment, at the mercy of those who do embrace them, and implement them

An even more general conclusion is that, if corruption is so prevalent, if there is a solution to corruption, then the prerogative the people of Mexico has is to make sure this nation rids itself of corruption. There is no one to blame, but the people of Mexico itself if the people do not push for this design. This brief text has presented what corruption is, its causes, and possible solutions. Let us extinguish corruption, soon.

Conclusion: Who Are the Victims of Corruption?

Corruption is not an abstract phenomenon. Today, with countless examples from Mexico, we know that it kills; not only within our borders, but around the world. Two cases illustrate this clearly:

- 
- i. The collapse of schools in Sichuan, China (2008), where thousands of children died after an earthquake, revealed that construction companies had cut costs by using substandard materials, made possible through bribes and local collusion (BBC News, 2008)
 - ii. In Beirut, Lebanon (2020), the port explosion that killed more than 200 people was largely attributed to corruption, negligence, and deliberate omissions by authorities who were aware of the unsafe storage of ammonium nitrate (Human Rights Watch, 2020)

These international examples remind us that corruption not only drains public coffers; it takes lives, generates poverty, and deepens inequality. But what happens when anti-corruption efforts actually work? There are also cases proving that corruption can be tackled through strong institutions and active citizenship:

- i. Hong Kong in the 1970s, where the creation of the Independent Commission Against Corruption (ICAC) transformed an administration riddled with bribery into an international model of integrity, based on investigation, prevention, and civic education (Quah, 2011)
- ii. Singapore, perceived in the 1960s as a highly corrupt country, managed to become one of the most transparent nations in the world through strict enforcement of the law, the professionalization of the civil service, and a strong culture of accountability (Transparency International, 2022)
- iii. Georgia, following the Rose Revolution (2003), implemented a radical reform that included the complete dissolution of the traffic police, replaced by a new professional and transparent force. In less than a decade, the country improved 80 positions in the Corruption Perceptions Index (World Bank, 2012)

These cases demonstrate that political will, civic pressure, and proper institutional design can transform entire countries, reduce inequality, and save lives.

This book is an invitation to read with a critical spirit and a sense of urgency. Corruption is not just a statistic—it is lost time, poor services, aggravated poverty, insecurity, and, in many cases, lost lives. Anticorruption Design for Mexico proposes a feasible path forward, one that requires both a determined State and a vigilant, demanding citizenry.

This text is both an encouragement and a powerful reminder that corruption does not define us, and that Mexico can aspire to a fairer, more transparent, and more dignified future for all.

In conclusion, the evidence presented throughout these pages confirms that corruption is a central determinant of social welfare and the development of any nation. Its presence within Mexican institutions has reduced per capita income, increased poverty, deepened inequality, and eroded the State's basic capacities to meet people's needs, especially those of the most vulnerable. In normative and empirical terms, reducing corruption cannot be considered an institutional luxury, but rather a prerequisite for inclusive and sustainable development.



Who Are the Main Victims?

Corruption strikes hardest against people in vulnerable situations, especially in access to justice and the enjoyment of rights. As the book notes, “lower corruption correlates with better criminal justice administration... [where] the most painful and cruel abuses [are] almost always against the poor.” We have “advanced” in recent Mexican history under the illusion that justice no longer concerns us, ignoring the devastation corruption has caused.

The victims have names and faces, and they must be at the center of our attention: those who never returned home because disappearances, driven by the infiltration of criminal groups into public life were tolerated through bribery; the children of women in prisons who receive inadequate food and live far from their mothers because they have not had a fair trial in years, lacking money to bribe judicial officials; the thousands who continue to die because basic services never reach their communities, where budgets disappear into the pockets of those in power at the expense of the poor; the uncounted homicides that never become investigations, much less justice, because prosecutors are instructed not to open cases to make it seem as if nothing is happening.

The evidence therefore shows, as Ricardo points out in this book, that “respect for human rights... is directly proportional to the degree of non-corruption in a country.” In short: the immediate victims are those least able to “buy” justice and services, while the indirect victims are society as a whole, as arbitrariness and state capture become normalized. The following are the five most relevant conclusions, emphasizing who these victims of corruption are, and why they must be at the center if we are to speak of the rule of law.

1. Poverty, Income, and Oligopolistic Capture

The book shows that lower corruption is associated with higher per capita GDP and lower poverty. Hence the author’s conclusion: “If we want to increase per capita income... and reduce poverty... corruption must be tackled!”—including the reduction of monopolistic and oligopolistic dominance that extracts wealth to the detriment of the general population.

This relationship matters because those who suffer first from rising costs, poor services, and regressive capture are, again, citizens with the fewest resources.

2. A Virtuous Circle of Welfare and Public Finances

Without a “concrete, evidence-based” anti-corruption strategy, neither welfare nor growth can be fiscally sustainable. With one, prosperity achieves “greater fiscal capture,” reinforcing the link between social support and inclusive growth. This means that social policies work better when there is systemic integrity: the State can fund rights and public goods with stability, focusing not on clientelism but on welfare and development as a cross-cutting principle.

3.Social Mandate and Civic Coalition

The book insists that transformative power lies with the people: “Let all the people of Mexico know it, and let the people always demand it, civilly and respectfully.”

It’s about building a critical mass that demands and monitors the implementation of the anti-corruption design so that all public servants, not just most, act accordingly. In this coalition, academia, teachers, and students are “very valuable for disseminating these ideas” and accelerating adoption. If the design and implementation of an anti-corruption policy do not emerge from and are not embraced by citizens, especially those most harmed by corruption, its institutionalization will hardly advance or produce results.

4.Costs and Beneficiaries of Reform

Implementation benefits the vast, honest majority of the public and private sectors; only a “very small minority” loses, those who have obtained immoral and illegal gains on a large scale. This political and ethical distinction is crucial: the integrity agenda is pro-majority and pro-rights, and its opposition stems mainly from the concentrated interests of a few.

5.Corruption Increases the Number of Victims

“Corruption is highly damaging to any society,” and Mexico exhibits high levels with “great associated harm.” Therefore, it is essential to spread the idea that “corruption has a solution,” translating it into concrete, evidence-based public policies “adapted to Mexico’s current cultural and historical context.”

“The people of Mexico are the ones best positioned to generate momentum for corruption to stop.” On a larger scale, Mexico’s anti-corruption design is presented as a context-driven response to geopolitical challenges and an opportunity for regional and global impact through a drastic reduction in corruption.

Structurally reducing corruption is a redistributive policy of rights: it frees up income, lowers poverty, improves criminal justice, and strengthens human rights, beginning with those who have the least. The anti-corruption design proposed here offers an empirically informed and contextually grounded roadmap. Its implementation demands sustained civic pressure, responsible political leadership, and institutional alignment. The social gain will reach the vast honest majority; the cost will fall on the small minority that profits from capture. Above all, this is an agenda of victims and collective repair: dismantling corruption circuits means restoring rights, opportunities, and well-being to those who have long been deprived of them.

May these pages not be in vain; may they remind us that corruption costs lives. Failing to take an active role in implementing a comprehensive anti-corruption policy for Mexico will eventually make us not only complicit in the lack of sustainable development, but also victims along with our daughters and sons.

If we begin today, tomorrow there will be one day less to wait.

Vania Pérez Morales

Septiembre 2025.



Fig. 26 The face of hope. Image generated by artificial intelligence for this work. Source: ChatGPT (2025).

BASIC BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

Barrington, R., David-Barret, E., Power, S., & Hough, D., Understanding Corruption – How Corruption Works in Practice (Entendiendo a la Corrupción – Cómo la Corrupción Opera en la Práctica), 2022, Agenda Publishing LTD, United Kingdom

Chayes, S., Thieves of State – Why Corruption Threatens Global Security (Ladrones de Estado – Porqué la Corrupción Amenaza la Seguridad Global), 2015, W.W. Norton & Company, New York

Holmes, L., Corruption – A Very Short Introduction (Corrupción – Una Muy Corta Introducción), 2015, Oxford University Press, United Kingdom

Klitgaard, R., Controlling Corruption (Controlando la Corrupción), 1988, University of California Press, Berkeley (USA)

Klobuchar, A., Antitrust – Taking on Monopoly Power from the Gilded Age to the Digital Age (Antimonopolio – Atacando a los Monopolios, desde la Edad Dorada hasta la Edad Digital), 2021, Alfred A. Knopf, New York

Robinson, J.A., & Acemoglu, D., Why Nations Fail (Porqué las Naciones Fallan), 2012, Crown Currency (Penguin Random House) Canada

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B.J., Corruption and Government – Causes, Consequences, and Reform (Corrupción y Gobierno – Causas, Consecuencias y Reforma), 2016, Cambridge University Press, United Kingdom



SOURCES OF FIGURES AND TABLES

Fig 1. OpenAI. (2025). Mexico Rising. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/> Fig 13. OpenAI. (2025). Concentrated Power. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 2. OpenAI. (2025). Light over Mexico. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 3. OpenAI. (2025). The Awakening of Conscience. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 4. OpenAI. (2025). “The Broken Mirror” (to illustrate the ethical gap between the ideal and the real). [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 5. OpenAI. (2025). The Price of Silence. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 6. OpenAI. (2025). Light between Walls. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 7. OpenAI. (2025). Two Paths. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 8. OpenAI. (2025). The Human Spectrum. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 9. OpenAI. (2025). Social Camouflage. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 10. OpenAI. (2025). The Broken Pattern. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 11. OpenAI. (2025). The Shadow of the Vote. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 12. OpenAI. (2025). After the Vote. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 13. OpenAI. (2025). Concentrated Power. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 14. OpenAI. (2025). The Power Cycle. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 15. OpenAI. (2025). Concentrated Capital. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 16. OpenAI. (2025). Power under Watch. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 17. OpenAI. (2025). Light on the Standard. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 18. OpenAI. (2025). The Emerging Pattern. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>



SOURCES OF FIGURES AND TABLES

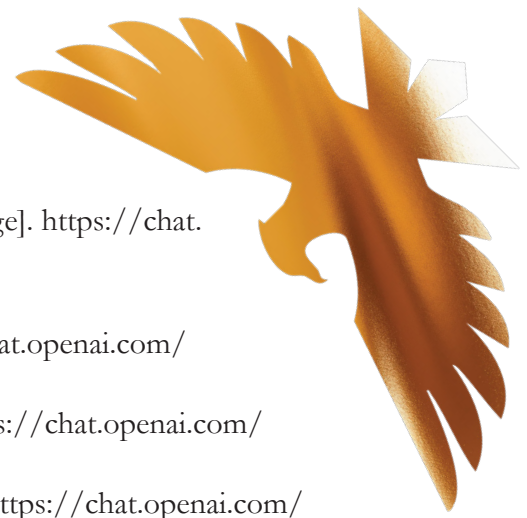


Fig 19. OpenAI. (2025). The Center of Ethical Leadership. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 20. OpenAI. (2025). Transparent Capital. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 21. OpenAI. (2025). The Horizon of Decision. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 22. OpenAI. (2025). The Model of a New System. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 23. OpenAI. (2025). The Transparent State. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 24. OpenAI. (2025). Collective mind. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 25. OpenAI. (2025). Clarity Achieved. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Fig 26. OpenAI. (2025). The Face of Hope. [AI-generated image]. <https://chat.openai.com/>

Table 1. Falk, Ö., Wallinius, M., Lundström, S., Frisell, T., Anckarsäter, H., & Kerekes, N. (2014). The 1% of the population accountable for 63% of all violent crime convictions. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 49(4), 559–571. <https://doi.org/10.1007/s00127-013-0783-y>

Table 2. Monopolies vs Corruption — 115 countries (2019). World Bank Group. (2019). World Economic Forum Market Dominance Dataset (WEF + GCI) [Data set]. World Bank Data 360. <https://prosperitydata360.worldbank.org/en/dataset/WEF+GCI>

Table 3. Criminal Justice vs Corruption — 120 countries (2022). World Justice Project. (2022). Rule of Law Index 2022: Criminal Justice Indicator. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2022/>

Table 4. Human Rights vs Corruption — 168 countries (2022). Our World in Data. (2022). Human Rights Data Explorer [Data set]. Our World in Data. <https://ourworldindata.org/human-rights>

Table 5. GDP per Capita vs Corruption — 159 countries (2015–2023). Central Intelligence Agency (CIA). (2023). The World Factbook: Real GDP per Capita (Country Comparison) [Data set]. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/real-gdp-per-capita/country-comparison/>

Table 6. Poverty vs Corruption — 142 countries (2006–2022). World Population Review. (2022). Poverty Rate by Country [Data set]. World Population Review. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/poverty-rate-by-country>

Endnotes

- 1 *What is Corruption?*, Transparency International, in: <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption> Barrington, Robert, David-Barret, Elizabeth, et al, “Understanding Corruption”, Agenda Publishing, 2022, Great Britain
- 2 Barrington, Robert, David-Barret, Elizabeth, et al, “Understanding Corruption”, Agenda Publishing, 2022, Great Britain
- 3 *Early Detection of Fraud and Corruption in Public Procurement Through Technology*, published by the World Bank Group, oct 06, 2020, at: <https://www.worldbank.org/en/events/2020/10/06/early-detection-of-fraud-and-corruption-in-public-procurement-through-technology>
- 4 “Así se mide la corrupción en México”, Deloitte, 2024, available at: <https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/asi-se-mide-corrupcion-mexico.html>
- 5 Tasa de Prevalencia de Corrupción por cada cien mil habitantes, 2024, INEGI, available at: <https://en.www.inegi.org.mx/temas/transparencia/>
- 6 Cuéntame de México – Economía – PIB, INEGI, 2020 data, available at: <https://cuentame.inegi.org.mx/economia/pib.aspx?tema=e>
- 7 GLACC, Op.Cit.
- 8 During 2022, Jamaica had 53 homicides per each 100,000 inhabitants, the highest crime statistic in the world, while Mexico had 26, the US only 6.4, while in countries with practically zero corruption, like Singapore, the statistic is only 0.12 homicides per 100,000 inhabitants in all of 2022! In Mexico, one person per each 1886 was killed in 2022, while the equivalent rate was 1 per 1,666 in the USA, and in Singapore it was one person in 833,333! Source: World Population Review, Murder Rates by Country 2024, available at: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/murder-rate-by-country>
- 9 Remembering that, according to Transparency International, which tracks a large number of countries and their ranking in terms of perception of corruption, Mexico ranked #126, with a corruption index or score of only 31, on a basis of 100. As a comparison, in 2023 Denmark ranked #1, with a score of 90, and Singapore ranked #5, with a score of 83. Available at: https://www.transparency.org/en/cpi/2023?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuO_-jICHiQMVeTfUAR1diiMNEAAYASAAEgJi2vD_BwE
- 10 Linh Vu and Margarita Leib, “Why some people choose not to know”, Scientific American, December 11th, 2023, available at: <https://www.scientificamerican.com/article/why-some-people-choose-not-to-know/#:~:text=But%20we%20also%20found%20that,increase%20the%20benefits%20to%20others>
- 11 Donate Life America, Organ, Eye and Tissue Donation Statistics, available at: <https://donatelife.net/donation/statistics/>, based on 23,000 donors in 2023, in a country with approximately 335 million inhabitants
- 12 Örjan Falk, Märta Wallinius, Sebastian Lundström, Thomas Frisell, Henrik Anckarsäter and Nóra Kerekes, “The 1% of the population accountable for 63% of all violent crime convictions”, published by the Society of Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, de fecha 2014, volume 49:559-571, available at: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-013-0783-y>
- 13 World Population Review, Happiest Countries in the World, 2024, available at: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/happiest-countries-in-the-world>
- 14 Prison Policy Initiative, available at: <https://www.prisonpolicy.org/profiles/US.html#:~:text=With%20nearly%20two%20million%20people,1%25%20of%20our%20adult%20population.>
- 15 Population of the United States, 2024, available at: https://www.google.com/search?q=total+us+population+2024&sca_esv=7786c63c048a012b&source=hp&ei=KeIaZ8LIEdyrur8PnpHcoAY&iflsig=AL9bb-dgAAAAAZxrwOdIO1ErPpyZGJpmCswQheEwC-15&oeq=total+US+population&gs_lp=Egdnd-

3Mtd2l6IhN0b3RhbCBVUyBwb3B1bGF0aW9uKgILAJIFEAAygaQyBhAAGBYyHjIGEAAyFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYyHjIGEAAyFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYyHjIGEAAyFhgeMgYQABgWGB5IqyNQAFiEEnAAeACQAQGYAc4CoAH5EKoBCDEzLjUuMC4xuAEDyAEA-AEBmAlSoALUDsICChAAGLAEGEMYigXCAGsQABiABBixAxiDAcICDhAA-GLAEGLEDGIMBGIOFwgIREC4YgAQYsQMY0QMYgwEYxwHCAhAQABiABBixAxbDGIM-BGIOFwgIIEAAygaQYsQPCAg4QLhiABBixAxiRAxiHAclCCxAnGLAEGLEDGIMBngIOE-C4YgAQYsQMYgwEYigXCAGgQLhiABBixA8ICBxAAGLAEGAqYAnCSBwQxMy41oAepfQ&sclicent=gws-wiz

- 16 Holmes, Leslie, *“Corruption – A Very Short Introduction”*, Oxford University Press, 2015
- 17 What is the Pareto Principle – aka the Pareto Rule or the 80/20 rule, available at: <https://www.investopedia.com/terms/p/paretoprinciple.asp>
- 18 Psycopathy, *en Psychology Today*, 2024, available at: <https://www.psychologytoday.com/intl/basics/psycopathy#:~:text=It%20has%20been%20estimated%20that,such%20as%20the%20Hare%20checklist>
- 19 Scott, Mathew, J., *Evolutionary Hierarchy of Needs*, *Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science*, 2019, available at: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-16999-6_643-1
- 20 Corporate Finance Institute, 2024, *Moral Hazard*, available at: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/economics/moral-hazard/>
- 21 Dalio, R., *“Principles”*, Simon & Shuster, 2017, p. 513
- 22 Investopedia, *“What is Asymmetric Information?”*, available at: <https://www.investopedia.com/terms/a/asymmetricinformation.asp#:~:text=Asymmetric%20information%20refers%20to%20when,being%20sold%20than%20the%20buyer.>
- 23 Stone, Deborah, *Policy Paradox*, 3rd ed., W.W. Norton & Co., 2012, p. 239
- 24 Federal Reserve Bank of St. Louis, *“What makes a market an oligopoly?”*, May 17, 2023, available at: <https://www.stlouisfed.org/open-vault/2023/may/what-makes-a-market-an-oligopoly>
- 25 Investopedia, Ross, Sean, *“How does a monopoly contribute to market failure?”*, Enero 04, 2024, available at: <https://www.investopedia.com/ask/answers/042215/how-does-monopoly-contribute-market-failure.asp>
- 26 Pinheiro Machado, Arthur, *“Corruption and Monopolies – An Endemic Problem”*, *Forbes*, Jul 20, 2015, available at: <https://www.forbes.com/sites/arthurmachado/2015/07/20/corruption-and-monopolies/>
- 27 Zephyr Teachout, *“The Problem of Monopolies and Public Corporate Corruption”*, *Daedalus Magazine*, Summer 2018, available at: <https://www.amacad.org/publication/daedalus/problem-monopolies-corporate-public-corruption>
- 28 Federal Reserve Bank of St. Louis, May 17, 2023, *What makes a Market an Oligopoly?*, available at: <https://www.stlouisfed.org/open-vault/2023/may/what-makes-a-market-an-oligopoly>
- 29 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), article 28, available at: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- 30 AmosWeb Encyclopedic Web-Pedia, *“Eight-Firm Concentration Ratio”*, accessed Oct 25th, 2024, available at: https://www.amosweb.com/cgi-bin/awb_nav.pl?s=wpd&c=dsp&k=eight-firm+concentration+ratio
- 31 NEC and FIDIC contract models are available at the websites: <https://fidic.org/> and: <https://www.neccontract.com/?srltid=AfmBOoqW6kvbCHjdaaGG9d0X78PjBdLjH1KeyPiRTzrF3OFd681yMQG->

- 
- 32 Dixit, A.K., & Nalebuff, B.J., *The Art of Strategy*, Chapter 12: “Voting”, p. 359, W.W. Norton & Company, UK, 2008, presents several strategic details about how populations vote in two party systems, as well as in systems with more than 2 parties. Various points of this section emanate from these authors
- 33 Mayer, T., & Huber, R., “Vollgeld – Das Geldsystem der Zukunft”, CPI Ebner & Spiegel, Ulm, 2014, quoting Gabor Steingart (p.179) about how Democracy, as direct as possible, improves the well being of the population.
- 34 Brenner, Reuven, *Labyrinths of Prosperity: Economic Follies, Democratic Remedies*”, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1994, p.49, a book highlighting the virtues of direct democracy (initiatives and referenda), the equivalent of citizens’ consultations recently enabled in Mexico.
- 35 Leo Rogers, *Is Democracy the best form of government?* Available at: <https://www.nulondon.ac.uk/wp-content/uploads/2018/04/Is-democracy-the-best-form-of-government-28829.pdf>
- 36 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 41, available at: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- 37 La Silla Rota, *Cuánto costarán las elecciones 2024?*, Febrero 17, 2024, por Juan Ortiz Escamilla, available at: <https://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/febrero24m/INFOM170224/A6.pdf>
- 38 Federal Election Commission, *Contribution Limits*, available at: <https://www.fec.gov/help-candidates-and-committees/candidate-taking-receipts/contribution-limits/>
- 39 2024 a Donald Trump’s contributions appear at a first level of itemization at: <https://www.opensecrets.org/2024-presidential-race/donald-trump/contributors?id=N00023864> , and for Kamala Harris at: <https://www.opensecrets.org/2024-presidential-race/kamala-harris/contributors?id=N00036915>
- 40 The rules for Canada are available at: <https://www.elections.ca/content.aspx?section=pol&dir=lim&document=lim2023&lang=e> (limits), and at: <https://www.elections.ca/content.aspx?section=pol&dir=tra/fin/cont/co9&document=trans&lang=e> (contribuciones anónimas), y en: <https://webapps.qlik.com/np-donations/index.html> (names of campaign donors)
- 41 Sent on 05th February 2024 to Congress by then-president Andrés Manuel López Obrador. This constitutional reform initiative for election matters was addressed to Representative Marcela Guerra Castillo, head of the Direction Board of the Chamber of Representatives at the time, from which the information discussed in this text is derived.
- 42 CPEUM, Mexican Constitution, as of 31-oct-2024, Article 41, Roman Numeral II, available at: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- 43 Political Parties General Law, Ley General de Partidos Políticos, article 10, available at: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP.pdf>
- 44 US Capitol Visitor Centre, *The House of Representatives and Senate: What’s the difference?*, available at: https://www.visitthecapitol.gov/sites/default/files/documents/resources-and-activities/CVC_EED_StudentEssay_HouseSenate.pdf
- 45 Requejo Rodríguez, Paloma, “Democracia Parlamentaria y Principio Minoritario”, *Parliamentary Democracy and Minority Principle*, Ariel Derecho, 2000, Spain
- 46 Le Monde, *Elections Legislatives 2024, Les Résultats des Élections Législatives 2024*, available at: <https://www.lemonde.fr/resultats-elections/> where it can be observed how the election run off operates in France

- 47 BallotPedia, Runoff Election, available at: https://ballotpedia.org/Runoff_election
- 48 Dixity, A. & Nalebuff, B., Op. Cit., p. 360
- 49 Musgrave, R.A., & Musgrave, P.B., *Public Finance in Theory and Practice*, Mc Graw Hill, New York, 1976, p.106
- 50 Constitutional control is to observe and ensure that all public life activity strictly adheres to the constitution. Conventional control is the same idea, but with regard to the international treaties signed by Mexico, especially in regard to the fundamental rights of all individuals. Legality control is the same, but with regard to the laws hierarchically secondary to the Mexican constitution which are specific to a particular area of the Mexican juridical context.
- 51 Investopedia, What is a monopoly? Types, regulations and impact on markets, 2024, available at: <https://www.investopedia.com/terms/m/monopoly.asp>
- 52 decide to lower its prices temporarily, in order to destroy its non-colluding competitor by choking its sales or forcing it to sell without sufficient revenue to cover all its fixed and variable costs, and a profit. The competitor would eventually go bankrupt in a given period of time, leaving the market all to the monopoly/ oligopoly afterwards. For example, there could be a case wherein due to the economic staying power a monopoly or oligopoly has, it could.
- 53 Federal Reserve Bank of St. Louis, What makes a market an oligopoly?, May 17, 2023, available at: <https://www.stlouisfed.org/open-vault/2023/may/what-makes-a-market-an-oligopoly#:~:text=for%20the%20product.,Oligopoly,similar%20but%20not%20identical%20products>.
- 54 World Economic Forum, Market Dominance Scores by Country, available at: <https://prosperitydata360.worldbank.org/en/dataset/WEF+GCI> and: Transparency International (TI) Corruption Perceptions Index (Score), available at: <https://prosperitydata360.worldbank.org/en/indicator/TI+CPI+Rank>
- 55 Ideas expressed by: Klobuchar, Amy, *Antitrust – Taking on Monopoly Power from the Gilded Age to the Digital Age*, Alfred A. Knopf publishing, New York, 2021
- 56 Acemoglu, Daron, and Robinson, James, A., *Why Nations Fail*, Crown Editors, USA, 2013
- 57 Seung Hyung Lee, Mike W. Peng, and Jay B. Barney, *Bankruptcy Law and Entrepreneurship Development: A Real Options Perspective*, published by The Academy of Management, 01 January 2007, available at: <https://journals.aom.org/doi/full/10.5465/amr.2007.23464070>
- 58 Pyndick, Robert, S. y Rubinfeld, Daniel, L., *Microeconomics*, McMillan Publishing, 1989, New York, p. 368, cites a Department of Justice investigation in the USA, for the mere reason that a telephone conversation occurred between the CEO's of American Airlines and Braniff Airlines.
- 59 Tsafack, George, and Guo, Lin, "Foreign Shareholding, corporate governance and firm performance: Evidence from Chinese Companies", *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, Volume 31, September 2021, 100516. Monopolistic or oligopolistic firms generally take advantage of extraordinary gains generated in their captive markets at the expense of lower general profits which accrue to the minority shareholders. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214635021000605?__cf_chl_tk=QJXm27rQ6F-0GYVQbX6ZBrp2gZGaH_eFAk41E0HqHXz0-1734367276-1.0.1.1-xgvkEpq6SR07jO3sqxpY5OM-FKestzfePpPn4s_pNVXQ
- 60 The Herfindahl Index (Hf) estimates via a single figure the dominance found in a given market. The figure ranges from 1.0 for a monopoly in a given country or region, and can become a very small number, but never zero. The limiting figure establishing the difference between an oligopoly and a quasi-competitive situation in a market

is $H_f = 0.15$. H_f equals 1.0 for the monopoly case, since the monopoly holds 100 of the annual market. If, instead, there are seven different enterprises, all about the same size, they will therefore hold on average about 14.29% of the market each. In this case, $H_f = [(0.1429)^2] \times 7 = 0.1429$ which is less than 0.15. A market made up by a single company holding 50% of the market, along with another 7 enterprises, each of them holding about 7.14% of the market imply that $H_f = (0.50)^2 + [7 \times (0.0714)^2] = 0.25 + 0.0051 = 0.2551$, which is still far greater than 0.15. This demonstrates that the case of “Snow White and the Seven Dwarves” does not cease to be an oligopoly, with all its ensuing adverse effects.

61 OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), 2011, *The Role of Institutional Investors in Promoting Good Corporate Governance*, disponible en: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2011/11/the-role-of-institutional-investors-in-promoting-good-corporate-governance_g1g15a8a/9789264128750-en.pdf

62 Singapore is the country with position number 5 in 2024 in terms of the accepted perception of its corruption, with a total score of 83. Available at: <https://www.transparency.org/en/countries/singapore>

63 (Singapore) “This is the happiest country in Asia, according to the World Happiness Report”, by Ernestine Siue, with CNBC, stating on March 19th, 2024, that the city state achieved position 30 amongst the 143 countries surveyed. Available at: <https://www.cnbc.com/2024/03/20/singapore-is-the-happiest-country-in-asia-world-happiness-report-2024.html>

64 Hong Kong 2024, *Corruption Perceptions Index*, disponible en: <https://www.transparency.org/en/countries/hong-kong>

65 Corruption Practices Investigation Bureau, CPIB, disponible en: <https://www.cpi.gov.sg/>

66 Klitgaard, Robert, “Controlling Corruption”, Londres, 1988, principalmente en su capítulo 4 (“Graft Busters”, “Combatientes de la Corrupción”), pero más generalmente con información obtenida de todo su libro.

67 ICAC, *Independent Commission Against Corruption*, Comisión Independiente Contra la Corrupción, de Hong Kong, sitio web disponible en: <https://www.icac.org.hk/en/about/c/msg/index.html>

68 Constitution of Singapore, section 22L-(3)-(c), disponible en: <https://sso.agc.gov.sg/act/cons1963>

69 Klitgaard, Op. Cit., p. 77

70 Section 182 of the Penal Code, conforme lo declara el 02 de marzo de 2021 un abogado penalista singaporeano en un artículo escrito y disponible en: <https://www.singaporecriminaldefencelawyer.com/how-false-accusations-can-get-you-into-trouble/>

71 Ex-CPIB assistant director Edwin Yeo jailed for 10 years for criminal breach of trust, *The Straits Times*, Feb 20, 2014, by Elena Chong, disponible en: <https://www.straitstimes.com/singapore/ex-cpiib-assistant-director-edwin-yeo-jailed-10-years-for-criminal-breach-of-trust> (cuando el código penal dispone máximo 5 años para crímenes de corrupción)

72 Axelrod, Robert, “An Evolutionary Approach to Norms”, *The American Political Science Review*, Vol. 80, No. 4, Dec. 1986, pp. 1095-111, disponible en: [https://websites.umich.edu/~axe/Axelrod%20Norms%20APSR%201986%20\(2\).pdf](https://websites.umich.edu/~axe/Axelrod%20Norms%20APSR%201986%20(2).pdf)

73 Chayes, Sarah, *Thieves of State*, W.W. Norton & Company, New York, 2015, p. 59-,

74 Dammeier, Dieter, C., *Fading Privacy Rights of Public Employees*, *Harvard Law & Policy Review*, Vol. 6, 2012, p. 297-, available at: <https://journals.law.harvard.edu/lpr/wp-content/uploads/sites/89/2013/06/>

Fading-Privacy-Rights-of-Public-Employees.pdf

75 Kotylar, Dmytro, and Pop, Laura, *Asset Declarations: A Threat to Privacy, or a Powerful Anticorruption Tool?*, World Bank Group, September 26, 2016, available at: <https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2016/09/26/asset-declarations-a-threat-to-privacy-or-a-powerful-anti-corruption-tool>

76 CPEUM, *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, always in its most recent version, always freely available from the Mexican Congress at: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

77 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Corruption and Human Rights*, available at: <https://www.ohchr.org/en/good-governance/corruption-and-human-rights>

78 Spalding, Andrew & Murray, Mathew, *Freedom from Official Corruption as a Human Right*, Brookings Institution, January 28, 2015, available at: <https://www.brookings.edu/articles/freedom-from-official-corruption-as-a-human-right/>

79 Available at: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_Penal_Federal.pdf

80 Available courtesy of Cornell University at: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/201>

81 INEGI, Mexico's General Statistical Office, publishes the UMA value daily, now having a value of approximately 110 pesos, as of the end of 2024. May be found at: <https://www.inegi.org.mx/temas/uma/>

82 Feigen, M., Wallach, B., and Warendh, A., *Look to Military History for Lessons in Crisis Leadership*, July 29, 2020, de HBR (Harvard Business Review), available at: <https://www.bizjournals.com/sanjose/news/2020/07/29/hbr-look-to-military-history-for-crisis-leadership.html>

83 Gobierno de México anuncia creación de Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno ("Government of Mexico announces the creation of the Anticorruption and Good Governance Secretariat"), available at: <https://www.gob.mx/sfp/prensa/gobierno-de-mexico-anuncia-creacion-de-secretaria-anticorrupcion-y-de-buen-gobierno-380785>

84 *Diario El País* (El País Spanish Journal), Jorge Zepeda Patterson, *Sheinbaum Contra la Corrupción: Entre la Ambición y el Realismo* ("Sheinbaum against corruption: between ambition and realism"), 03 April 2024, available at: <https://elpais.com/mexico/opinion/2024-04-03/sheinbaum-contra-la-corrupcion-entre-la-ambicion-y-el-realismo.html>

85 BBVA Research, Mexico, *Poverty decreases at its lowest level (36.3%), but access to health deteriorates*. August 16, 2023, disponible en: <https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/mexico-poverty-decreases-at-its-lowest-level-363-but-access-to-health-deteriorates/>

86 World Bank Group, *Corruption is a Global Problem for Development*, June 13, 2023, by Ousmane Diagana and Mouhamadou Diagne, disponible en: <https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2023/06/13/corruption-is-a-global-problem-for-development-to-fight-it-we-all-have-a-role-to-play>

87 AACI American Anticorruption Institute, escrito por el staff, *Corruption and National Security: A call to action for sustainable security*, August 19, 2024, disponible en: <https://blog.theaaci.com/corruption-and-national-security-a-call-to-action-for-sustainable-development/>

88 A personal estimation by the author, based on proportionality with regard to territory size and size of population in developed countries with satisfactory levels of public security and low criminal rates suggest that in order for Mexico to abate violence and crime across its entire territory, 24x365, it would be necessary to have about



500,000 well chosen, well equipped, well trained and well compensated National Guard agents, plus approximately 5,000 public attorney offices (federal and state ones), approximately 2,000 judges at the state and federal level and in all legal fields (criminal, civil, etcetera), plus correctional facilities with capacity to hold about 1.3 million prisoners, without overcrowding. Current actual figures across each dimension are lower than that. As an example there is the National Guard operational troop count, numbering about 250,000 today. It would appear that, applying National Guard and Defense (Navy and Army) forces in aggregate to national security would enable the reaching of the necessary number of security forces in the country. When criminal activity in certain territorial area calls for additional National Guard troops, these are displaced from other regions, leaving other places unattended, in turn giving rise to the possibility of crime springing up in the vacated area. A large number of cases may be not reported, crimes may not be charged, waiting times for victims to get their justice may be too long, or infinite when cases may be dropped, and prisoners guilty of serious crimes may be incarcerated in the midst of their prison sentences. The extinction of corruption would bring along a virtuous cycle of trust-investment-profits-taxes which would yield additional public financial capacity to sustain the urgently needed sequential apparatus for proper control of violence and criminality in Mexico. A highly preliminary personal estimate is that this effort to quash crime in Mexico would require at least a 50% hike in the current budget for this area of government, impossible if other priority budget areas are to be kept intact. Recently published statistics on insecurity/public security in Mexico seem to indicate that there are positive advances in this area currently, something highly desirable and worthy of celebration, always in accordance to future facts and figures on public security reaffirming the recently reported tendency.

89 Holmes, Leslie, *Corruption – A very short introduction*, Oxford University Press, London, 2015, pp. 70-73

90 *Expansión*, *Prima de Riesgo México*, 09 dic 2024, it is 8.34% annualized, today. Available at: <https://datosmacro.expansion.com/prima-riesgo/mexico>. This means that any infrastructure project, say in the US, must offer capitalist funders an expected investment return 8.34% lower than the return those same investors would require if they were to invest their capital in Mexico. Mexican capital holders do not think differently, they look at investment opportunities globally in order to maximize their returns while minimizing the risk of loss for their capital, on a per country and per project type basis

91 If a capital project requires \$100 of capital, runs for 15 years, and yields \$19.64 in total dividends every year, its return on investment represents an 18.00% annualized rate. If a private capital group requires for such type or project risk, in Mexico and thus with Mexico country risk, a capital return on investment equal to a 15% annualized rate, then this capital group could invest all \$100 in the project, get title to 87% of the shares (and thus dividends too, meaning \$17.08/yr) for 15 years, perfectly attaining its desired 15% capital return rate. In this example, the Mexican government did not invest anything, has veto power and the capacity to fully supervise the project, while it realises a minority portion of the project dividends. This way, the government can assure itself that the project will not leave the general population unattended or poorly attended in terms of excessive product/service prices, non availability, bad quality, long waiting times, etcetera. At the same time, this “mixed capital structure” for the project promotes the symmetry of information, since the government is able to include in its team the presence of the General Audit Office of Mexico (*Auditoría Superior de la Federación, ASF*), as well as that of private technical and economic auditors to oversee the project: everybody watches over each other, which is the goal of informational symmetry to greatly diminish the probability of corruption.



92 Sarah Chayes (*“Thieves of State”*, *Op.Cit.*), pp.164-167, states that the human rights lawyer Geoffrey Robertson highlights the favorable relevance that for these rights the trial and sentencing of the English king Charles I had, as Charles I was judged in a common court like any other English citizen, and was eventually sentenced to death for its crimes, as early as in 1649.

93 UNCAC – United Nations Convention Against Corruption, available at: https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xviii-14&chapter=18

94 Transparency International – country: Mexico, available at: <https://www.transparency.org/en/countries/mexico>

95 Musgrave, R.A., & Musgrave, P.B., in *“Public Finance in Theory and Practice”* (2nd edition, McGraw Hill, p. 95).

96 CELAG Data, *“México, a 5 años de la 4T (Mexico, after 5 years of 4T)”*, Auxiliadora Honorato and Anibal García Fernández, 09 january 2025, available at: <https://www.celag.org/mexico-a-5-anos-de-la-4t/>; as well as on the newspaper *El Sol de León* (Leon City, Guanajuato, Mexico), *“Los Logros y los Retos de la 4T (The achievements and the challenges of the 4T of Mexico)”*, Adriana Guzmán Serna, 27 september 2024, available at: <https://oem.com.mx/elsoldeleon/analisis/los-logros-y-los-retos-de-la-4t-13142020>

97 Hongseok, Kim, *Why Does GDP per Capita differ from per capita family income?*, Iowa State University, Nov 6, 2023, available at: <https://www.econ.iastate.edu/ask-an-economist/why-does-gdp-capita-differ-average-family-income>



Ricardo Zamora Mesinas siempre ha trabajado en el sector privado, en los campos de gerencia de proyectos, finanzas y administración de riesgo. Como director de AD Tec Américas (www.adtec.com.mx), firma de servicios profesionales de consultoría en Ciudad de México, Ricardo ha participado en algunos de los más relevantes proyectos en desarrollo inmobiliario en su país, desde proyectos en turismo, hasta las áreas industrial, comercial y en proyectos de energía. Ciertamente, Ricardo ha estado cerca de numerosas situaciones de corrupción en su vida profesional, navegando inmune a ellas a lo largo de los años.

Ricardo imparte cursos relacionados con Finanzas y Gerencia de Proyectos a nivel de posgrado en la Universidad Panamericana. Su entrenamiento es en ingeniería química, con una maestría de RPI, y también cuenta con un MBA/Maestría en Admón. Pública y Privada (MPPM) de Yale, y su doctorado en Derecho Constitucional es de la Universidad Tepantlatto, en Ciudad de México. rzamora@adtec.com.mx

Ricardo Zamora Mesinas has always worked in the private sector, in the fields of project management, finance and risk management. As the managing partner of AD Tec Americas (www.adtec.com.mx), a professional consulting services firm based out of Mexico City, Ricardo has participated in some of the most relevant capital/construction projects in Mexican development and industry, from tourism, through industrial, commercial and energy developments. Certainly, Ricardo has witnessed a variety of corruption situations throughout his professional life, and has successfully navigated them over the years.

Ricardo also teaches Finance and Project Management related courses at Universidad Panamericana in Mexico. His education is in chemical engineering with a Master's from RPI, along with an MBA-MPPM from Yale, and a doctorate in Juridical Science (Constitutional Law) from Tepantlatto University in Mexico City. rzamora@adtec.com.mx

ISBN: 978-607-69957-4-7



